

DIARIO DE SESIONES

Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

19 de Febrero de 2003

5ª Reunión - 4º Sesión Ordinaria

<i>Presidente Provisorio:</i>	Herman OLivero
<i>Vicepresidente:</i>	Francisco Fortuna
<i>Vicepresidente 1º:</i>	Abelardo Karl
<i>Vicepresidente 2º:</i>	Carmen Acuña
<i>Secretario Legislativo:</i>	José Luis Farre
<i>Secretario Técnico Parlamentario:</i>	
<i>Secretario Administrativo:</i>	Graciela Avellaneda
<i>Secretario de Coordinación</i>	
<i>Operativa y de Comisiones:</i>	
<i>Prosecretario de Coordinación</i>	
<i>Operativa y de Comisiones:</i>	Guillermo Arias
<i>Prosecretaria Legislativa:</i>	Mabel Deppeler
<i>Prosecretaria Administrativa:</i>	

Legisladores presentes:

ACUÑA, Carmen.
 ALE, Sara.
 ALVAREZ, Pablo.
 ANNOVASSI, Amanda.
 ARCHILLA, Carlos.
 BEDANO DE ACCASTELLO, Nora.
 BLANCO, Alfredo.
 BOCCO, Juan Carlos.
 BONETTO, Daniel.
 CARBONETTI, Carmen.
 CARRANZA, Ramón.
 CASTRO, Gustavo.
 CEBALLOS, Perla.
 CHIOFALO, María Amelia.
 CIOCATTO, Alider.
 CITTADINI DE MONTES, Stella.
 CORNAGLIA, Carlos.
 CUELLO, Hugo.
 DANDACH, Kasem.
 DE LA PEÑA, Juan
 DOMÍNGUEZ, Adriana.
 DULLA, Héctor.
 ECHEPARE, Juan.

ESLAVA, Marcelo.
 FERNÁNDEZ, María.
 FONT, Jorge.
 FORTUNA, Francisco.
 GIUSTINA, Jorge Alejandro.
 GOMEZ, Luis.
 GONZALEZ, Guillermo.
 GONZALO, Gladis.
 GOÑI, Ruperto.
 JUNCOS, Liliana.
 KARL, Abelardo.
 KEEGAN, Alfredo.
 LEYBA DE MARTI, Beatriz.
 LIZIO, Beatriz.
 LLANOS, Osvaldo.
 LOPEZ, Isaac.
 LOPEZ, Martín.
 LUQUE, Martín.
 MANCILLA, Irma.
 MASSEI, Juan Carlos.
 MOLINA, Victor.
 MOSCOSO, Carlos.
 NICOLAS, Asis.

NOVILLO CORVALAN, Sofanor.
 OBREGÓN CANO, Horacio.
 OLIVERO, Herman.
 OLIVERO, Liliana.
 PEREYRA, Mauricio.
 PIZZORNO, Carlos.
 REMEDI, Luz.
 ROMERO, Juana.
 RUFEIL, José.
 RUIZ, Graciela.
 SAIEG, Walter.
 SINTORA, Esther.
 SUELDO, René.
 TAIS, Noris.
 TARANZANO, Fanny.
 TEJEDA, Julio

UEZ, Mario.
 VIGO, Alejandra.
 ZALAZAR DE FINO, Elcira.
 ZANOTTI, Braulio.

Legisladores ausentes justificados:

CONTRERAS, Jorge.
 FLORES DURAN, Amado.
 URQUIA, Roberto. *(Licencia s/goce R-1399/03)*
 VAQUERO, José.

Legisladores ausentes no justificados:

SUMARIO

- 1.- Izamiento de la Bandera Nacional ... 128
 2.- Versión taquigráfica. Aprobación 128
 3.- Asuntos entrados:

I.- Comunicaciones oficiales 128

De los señores legisladores

II.- Ciudad de San Francisco, B° José Hernández. Transformadores eléctricos que estarían causando patologías cancerígenas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02645/L/03) de la legisladora Taranzano 129

III.- Ley N° 8435 (Orgánica del Poder Judicial). Artículo 51. Agregado del inciso 7). Proyecto de ley (02646/L/03) de la legisladora Taranzano 129

IV.- Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. Balance general, estados contables y cuadros de evolución mensual. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02647/L/03) de los legisladores Nicolás y P. Ceballos ... 129

V.- Banco de la Provincia de Córdoba. Balance general y estados contables. Empresas controladas. Estados contables. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (02648/L/03) de los legisladores Nicolás y P. Ceballos 130

VI.- Corte Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. Postulación del abogado cordobés Juan C. Vega. Satisfacción y beneplácito. Proyecto de declaración (02649/L/03) de los legisladores Nicolás y P. Ceballos 130

VII.- Jornadas de Capacitación sobre Salud Reproductiva y Procreación Responsable. Interés legislativo. Declaración. Proyecto de declaración (02650/L/03) de los legisladores Ruiz, Castro, Taranzano, Mancilla, Cittadini de Montes, P. Ceballos, Acuña, Bedano de Accastello, Juncos y Domínguez Reyna 130

VIII.- Exposición Dalí "El Surrealismo". Interés legislativo. Declaración. Proyecto de declaración (02651/L/03) de la legisladora Remedi 130

IX.- Periodista e investigador argentino Fernando L. Parra. Deportación por parte de las autoridades cubanas. Repudio y preocupación. Proyecto de declaración (02652/L/03) de los legisladores Remedi y Novillo Corvalán 130

X.- Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Limitada de la ciudad de Córdoba. Actitud solidaria asumida. Beneplácito. Proyecto de declaración (02653/L/03) de la legisladora P. Ceballos ... 130

XI.- Establecimientos educativos públicos. Medidas de contención psicológica y sanitaria. Implementación. Solicitud. Proyecto de declaración (02654/L/03) de la legisladora P. Ceballos ... 130

XII.- Empresa Lockheed Martin. Riesgo de continuidad de fuente laboral de ex Area Material Córdoba. Preocupación. Proyecto de declaración (02655/L/03) de la legisladora P. Ceballos ... 130

XIII.- República de Bolivia. Hechos violentos acaecidos. Consternación. Proyecto de declaración (02656/L/03) de la legisladora P. Ceballos ... 131

XIV.- Rosa Eugenia Novillo Corvalán. Recuerdo y homenaje, en su figura, a los desaparecidos de la década del '70. Proyecto de declaración (02657/L/03) de la legisladora P. Ceballos ... 131

XV.- EPEC. Cobro de intereses por mora y reclamos de usuarios. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02658/L/03) de la legisladora P. Ceballos ... 131

XVI.- Río Cosquín, Dpto. Punilla. Vertido de líquidos cloacales. Preocupación. Proyecto de declaración (02659/L/03) de los legisladores Gonzalo, Cornaglia, Dulla y Bocco ... 131

XVII.- Institutos privados de enseñanza. Diversos aspectos referidos a su funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02660/L/03) de los legisladores Gonzalo, Cornaglia, Dulla y Bocco ... 131

XVIII.- Ministerio de Salud. Contrato de adjudicación entre la empresa Angiocor S.R.L. y el IPAM. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02661/L/03) de

los legisladores Cornaglia, Leyba de Martí y Gonzalo ... 131

XIX.- Empresa Renault. Despido y suspensión de operarios. Intervención del Poder Ejecutivo provincial. Solicitud. Proyecto de declaración (02662/L/03) de la legisladora P. Ceballos ... 131

XX.- E.P.E.C. Derogación de decretos para evitar la incorporación de capital privado o modificación del Estatuto Orgánico. Solicitud. Proyecto de declaración (02663/L/03) de los legisladores L. Olivero y Alvarez ... 131

XXI.- República de Bolivia. Solidaridad con su pueblo ante hechos de violencia acaecidos. Proyecto de declaración (02664/L/03) de la legisladora Annovassi ... 132

XXII.- Día de la Antártida Argentina. Adhesión y homenaje. Proyecto de declaración (02665/L/03) de la legisladora Annovassi ... 132

XXIII.- Profesionales argentinos. Promoción de acciones para evitar su migración. Solicitud al P.E.N. Proyecto de declaración (02667/L/03) de los legisladores Dandach y Lizio ... 132

XXIV.- Sangre humana. Donación. Programa de difusión. Implementación. Solicitud. Proyecto de declaración (02668/L/03) de los legisladores Dandach y Lizio ... 132

XXV.- Ley N° 6875. Artículo 29, inciso 2). Modificación. Proyecto de ley (02669/L/03) de los legisladores Dandach y Lizio ... 132

XXVI.- Complejo minero El Desquite, Provincia de Chubut. Intervención de la Legislatura en el conflicto suscitado por la adjudicación de su explotación. Solicitud. Proyecto de declaración (02670/L/03) de los legisladores Dandach y Lizio ... 132

XXVII.- Complejo minero El Desquite, Provincia de Chubut. Intervención del P.E.N. en el conflicto suscitado por la adjudicación de su explotación. Solicitudo. Proyecto de declaración (02671/L/03) de los legisladores Dandach y Lizio ... 132

XXVIII.- Fabrica Dale Más. Labor desarrollada. Beneplácito. Proyecto de declaración (02672/L/03) de los legisladores Dandach y Lizio ... 132

XXIX.- Fiesta Nacional del Trigo, de Leones. Celebración. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (02673/L/03) de los legisladores Dandach y Lizio ... 132

XXX.- Hospitales públicos de la Provincia. Seguro de sangre. Implementación. Disposición. Proyecto de ley (02674/L/03) de los legisladores Dandach y Lizio ... 132

XXXI.- Legislatura provincial. Conformación de comisión de trabajo para estrechar vínculos con los países árabes e islámicos. Declaración de su interés. Proyecto de declaración (02675/L/03) de los legisladores Dandach y Lizio 133

XXXII.- Ley N° 8123 (Código Procesal Penal). Artículo 73. Modificación. Proyecto de ley (02676/L/03) del legislador Karl ... 133

XXXIII.- Entidades de Medicina Prepagada. Actividades. Regulación. Proyecto de ley (02677/L/03) del legislador Karl ... 133

XXXIV.- Ley N° 8431 (Código de Faltas de la Provincia de Cba.) y sus modificatorias. Capítulo Segundo del Título III, del Libro II. Modificación. Proyecto de ley (02679/L/03) de los legisladores Novillo Corvalán, Goñi, Giustina, Vaquero y Chiofalo ... 133

XXXV.- Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (02680/L/03) del legislador Font ... 133

XXXVI.- Despachos de comisión ... 133

4.- A) Comedores escolares PAICOR. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02382/L/02) de la legisladora Taranzano, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión para su archivo. Se aprueba 135

B) Programa de Familias Solidarias. Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02155/L/02) de los legisladores Cornaglia, Gonzalo y Zalazar de Fino, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión para su archivo. Se aprueba ... 135

C) Instituto Privado de Neonatología (Clínica Halac). Actos de represión. Comparecencia de autoridades provinciales para informar. Proyecto de resolución (02497/L/02) de la legisladora P. Ceballos. Moción de vuelta a comisión para su archivo. Se aprueba 135

5.- A) IPAM. Deuda que mantendría con la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud de la Provincia. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02254/L/02) de la legisladora P. Ceballos, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 136

B) Ruta N° 19, tramo que atraviesa la ciudad de La Francia. Lomos de burro construidos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02195/L/02) de los legisladores Acuña, Luque, Nicolás y P. Ceballos, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 136

C) IPAM. Provisión medicamentos a afiliados. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02307/L/02) de los legisladores P. Ceballos y Nicolás, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 136

D) Banco de Equipamiento Auditivo. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02349/L/02) de la legisladora Taranzano, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba136

E) Pobreza extrema. Casos en la Provincia. Relevamiento. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02350/L/02) de la legisladora Taranzano, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 136

F) Programa de Formación para Jefas y Jefes de Hogar. Adjudicación proyectos de capacitación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02406/L/02) del legislador Pereyra, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 136

G) Banco de la Pcia. de Córdoba. Créditos tomados y canon por servicio de cobranza. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02429/L/02) de la legisladora P. Ceballos, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 136

H) Camino de las Sierras, Ruta Pcial. E-55, Ruta Padre Luchessi y San Nicolás. Situación de diversos tramos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02462/L/02) de los legisladores P. Ceballos, Nicolás y Pereyra. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 137

I) Viviendas sociales. Construcción en el gran Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02491/L/02) de los legisladores Gonzalo, Cornaglia, Bocco, Dulla y Leyba de Martí. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 137

6.- A) Plan "100 Escuelas Nuevas". Diversos aspectos sobre los edificios educa-

tivos afectados. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02261/L/02) de los legisladores L. Olivero, Alvarez, P. Ceballos y Acuña, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 137

B) Mortalidad infantil. Índices generales. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02361/L/02) de los legisladores Nicolás, Acuña, Luque y P. Ceballos, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 137

C) Ministerio de Salud. Atención en hospitales públicos y coparticipación recibida. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02373/L/02) de la legisladora P. Ceballos, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 137

D) Empresas o servicios de medicina prepaga. Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02378/L/02) de los legisladores Nicolás y Luque, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba138

E) Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia. Situación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02381/L/02) de los legisladores L. Olivero y Álvarez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba138

F) Convenio entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Capilla del Monte (ocupación de inmuebles en Perilago del Dique El Cajón). Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02461/L/02) de los legisladores P. Ceballos y Nicolás. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 138

- G) IPAM. Situación actual. Comparecencia del Presidente del Directorio para informar. Proyecto de resolución (02477/L/02) de los legisladores Gonzalo y Cornaglia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 138
- 7.- Banco de la Pcia. de Córdoba. Relevamiento de funcionarios de carrera. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02492/L/02) de los legisladores Nicolás y P. Ceballos. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba 138
- 8.- Ministerio del Interior. Causa judicial y antecedentes de los sucesos de los días 19 y 20 de diciembre de 2001. Estado procesal. Pedido de informes. Proyecto de declaración (02642/L/02) de las legisladoras Cittadini de Montes y Romero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba 138
- 9.- A) Industrias. Uso de hornos de combustión en procesos de fabricación. Control. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02335/L/02) de los legisladores Gonzalo, Cornaglia, Bocco, Dulla y Leyba de Martí, con moción de preferencia y despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba 139
- B) Constitución Provincial. Artículo 37 (Colegios Profesionales). Controles para su cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02369/L/02) de los legisladores P. Ceballos, Acuña y Nicolás, con moción de preferencia y despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba 140
- C) Locales de diversión nocturna. Guardias de seguridad. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02198/L/02) de los legisladores Gonzalo, Bocco, Font, Dulla y Leyba de Martí, con moción de preferencia y despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba 141
- D) Ente Intermunicipal Ruta 6. Donación de medicamentos a dispensarios y hospitales de diversas localidades. Beneplácito. Proyecto de declaración (02472/L/02) de la legisladora P. Ceballos, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba 142
- 10.- Administración General del Estado Provincial. Régimen integral para la administración y control interno. Aprobación. Proyectos de ley (01794/L/02, 02235/E/02 y 00167/L/02), compatibilizados, de los legisladores Urquía y Pizzorno, del Poder Ejecutivo Provincial y de los legisladores Luque, Nicolás, Acuña y Domínguez Reyna, respectivamente, con moción de preferencia y despacho de comisión. Se considera y aprueba, en general y particular 143
- 11.- Asuntos entrados fuera de hora:
- De los señores legisladores**
- XXXVII.- Contrato de Provisión de Medicamentos IPAM – Droguería DRONOR S.A. Prórroga y cesión. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02681/L/03) del legislador Font 199
- XXXVIII.- Localidades de El Tío, Saturnino María Laspiur y Devoto. Sistemas de constatación de faltas por medios electrónicos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (02682/L/03) de los legisladores Acuña y Luque 199
- XXXIX.- Instituto Privado de Neonatología. Represión. Secretaría de Seguridad Ciudadana y Asuntos Institucionales. Comparecencia de autoridades para informar. Proyecto de resolución (02683/L/03) de la legisladora P. Ceballos y el bloque de legisladores de la Izquierda Unida 200
- XL.- Impuesto a las Ganancias. Ajuste por inflación en los balances impositivos. Apoyo a la iniciativa. Solicitud a los legisladores nacionales por Córdoba.

Proyecto de declaración (02684/L/03)
de los legisladores Blanco y Pizzorno ...200

DEL PODER EJECUTIVO

XLI.- Estatuto Orgánico de la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba. Es-
tablecimiento. Proyecto de ley
(02685/E/03) del Poder Ejecutivo 200

12.- A) Fiesta Nacional del Trigo, de Leo-
nes. Celebración. Adhesión y beneplá-
cito. Proyecto de declaración
(02673/L/03) de los legisladores Dan-
dach y Lizio. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma. Se considera y
aprueba 200

B) Impuesto a las Ganancias. Ajuste por
inflación en los balances impositivos.
Apoyo a la iniciativa. Solicitud a los le-
gisladores nacionales por Córdoba.
Proyecto de declaración (02684/L/03)
de los legisladores Blanco y Pizzorno.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba 200

C) Jornadas de Capacitación sobre Sa-
lud Reproductiva y Procreación Res-
ponsable. Interés legislativo. Declara-
ción. Proyecto de declaración
(02650/L/03) de los legisladores Ruiz,
Castro, Taranzano, Mancilla, Cittadini
de Montes, P. Ceballos, Acuña, Bedano
de Accastello, Juncos y Domínguez
Reyna. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y des-
pacho de la misma. Se considera y
aprueba 200

13.- E.P.E.C. Derogación de decretos para
evitar la incorporación de capital privado
o modificación del Estatuto Orgánico.
Solicitud. Proyecto de declaración
(02663/L/03) de los legisladores L. Oli-
vero y Alvarez. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza 202

14.- Jueces de Primera Instancia, Vocales
de Cámara en lo Criminal y Vocal de
Cámara Unica de Trabajo. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Notas oficiales
(02521, 02523, 02524, 02525 y
02526/N/03) del Poder Ejecutivo. Vocal
de Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de Cuarta Nominación. Tras-
lado como Vocal de Cámara de Apela-
ciones en lo Civil y Comercial de Prime-
ra Nominación. Acuerdo. Solicitud. Nota
oficial (02548/N/03) del Poder Ejecutivo.
Se consideran y aprueban 203

15.- Instituto Privado de Neonatología. Re-
presión. Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana y Asuntos Institucionales. Com-
parecencia de autoridades para infor-
mar. Proyecto de resolución
(02683/L/03) de la legisladora P. Ceba-
llos y el bloque de legisladores de la Iz-
quierda Unida. Moción de preferencia.
Se rechaza 211

16.- Estatuto Orgánico de la Empresa Pro-
vincial de Energía de Córdoba. Estable-
cimiento. Proyecto de ley (02685/E/03)
del Poder Ejecutivo. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en co-
misión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba, en general y parti-
cular 211

- En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes de febrero de 2003, siendo la hora 18 y 02:

- 1 -

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Olivero).- Con la presencia de 65 señores legisladores, declaro abierta la 4ª sesión ordinaria del 125º Período Legislativo.

Invito al señor legislador Pereyra a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

- Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Pereyra procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

- 2 -

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (Olivero).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de la sesión anterior.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobada.

- 3 -

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Olivero).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados, por contar, los legisladores, en sus bancas, con una edición de los mismos, pudiendo solicitar los que así lo deseen, la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizio.

Sra. Lizio.- Señor presidente, en el proyecto de declaración 2675 es necesario un cambio de hoja porque existió un error de transcripción por parte nuestra y necesitamos que se vuelva a hacer el cambio.

Por otra parte necesitamos ampliar la coautoría a los legisladores Saieg, Massei, Zanotti, Gonzalo y Archilla.

Sr. Presidente (Olivero).- Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra la señora legisladora Chiofalo.

Sra. Chiofalo.- Señor presidente, solicito que en el proyecto 2679/L/03, referido a la modificación del Código de Faltas, en el capítulo referido a faenamiento clandestino, se amplíe la coautoría a todos los miembros del bloque de Unión por Córdoba.

Sr. Presidente (Olivero).- Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra la señora legisladora Perla Ceballos.

Sra. Ceballos.- Señor presidente, solicito la extensión de coautorías, de los proyectos 2683, al bloque de Izquierda Unida; 2653, a los legisladores Luque y Acuña; 2657 al legislador Acuña y 2654, 2655, 2656 y 2662, al legislador Asís Nicolás.

Sr. Presidente (Olivero).- Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra la señora legisladora Lizio.

Sra. Lizio.- Señor presidente, quiero ampliar la autoría en el 2675, a la legisladora Ruiz.

Sr. Presidente (Olivero).- Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra el legislador Karl.

Sr. Karl.- Señor presidente, solicito que en el proyecto del 2676/L/03, se modifique el orden de las comisiones a la cual ha sido girado. El mismo ha sido girado a las comisiones de Legislación General y a la de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo. Por ser un proyecto directamente relacionado con la justicia, solicito que se invierta el orden de las comisiones a las cuales ha sido girado.

Sr. Presidente (Olivero).- Así se hará, señor legislador.

Tiene la palabra la legisladora Perla Ceballos.

Sra. Ceballos.- Señor presidente, quiero extender la autoría del proyecto 2657 al bloque de Izquierda Unida.

Sr. Presidente (Olivero).- Así se hará, señora legisladora.

I

COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

02666/N/03

De los Legisladores Dandach y Lizio: Solicitando la rehabilitación de los siguientes Expedientes:

1)00007/L/02

Proyecto de Ley : Por el que dispone que el Poder Ejecutivo, instrumente los mecanismos necesarios para la traducción al sistema Braille de las Leyes sancionadas por la Legislatura, Reglamentación, Decretos y Resoluciones Ministeriales.

A las Comisiones de Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

2) 00034/L/02

Proyecto de Ley: Por el que dispone que el Poder Ejecutivo incluya en el Consejo Consultivo establecido en el Convenio firmado con el Gobierno Nacional denominado Programa de Emergencia Alimentario Nacional una Comisión integrada por Legisladores o representantes que éstos designen.

A las Comisiones de Solidaridad y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

3) 00037/L/02

Proyecto de Ley: Por el que modifica el Artículo 56 de la Ley Nº 6403, Escalafón del Personal de la Administración Pública Provincial.

A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

02678/N/03

De la Legisladora Leyba de Martí: Solicitando la rehabilitación del Expediente Nº:

00102/L/02

Proyecto de Ley: Por el que modifica la Ley Nº 8067, inembargabilidad de inmuebles destinados a vivienda única.

A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN

OPERATIVA Y COMISIONES

02644/N/03

De la Pro-Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Elevando para el archivo, en virtud del Artículo 111 del Reglamento Interno, el Proyecto de Ley Nº 00001/L/02.

Al Archivo

PROYECTOS DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

II

02645/L/03

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taranzano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los transformadores eléctricos y elementos que estarían alterando el medio ambiente y causando patologías cancerígenas a vecinos del Barrio José Hernández de la Ciudad de San Francisco.

A las Comisiones de Salud Humana y de Asuntos Ecológicos

III

02646/L/03

Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Taranzano, por el que agrega el inciso 7) al Artículo 51 de la Ley Nº 8435, Orgánica del Poder Judicial, referido a las atribuciones de los Jueces de Paz de Campaña.

A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

IV

02647/L/03

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Perla Ceballos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Balance General, Estados Contables y Cuadros de Evolución Mensual de la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E., correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de Noviembre de 2002.

A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda

V

02648/L/03

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Perla Ceballos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Balance General y Estados Contables del Banco de la Provincia de Córdoba y Estados Contables de las empresas controladas por el Banco de Córdoba, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda

VI

02649/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Perla Ceballos, por el cual expresa satisfacción y beneplácito por la postulación, por parte de la Cancillería, del Abogado cordobés Juan Carlos Vega, para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

VII

02650/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ruíz, Castro, Taranzano, Mancilla, Citadini de Montes, Perla Ceballos, Acuña, Bedano de Accastello, Juncos y Domínguez Reyna, por el cual declara de Interés Legislativo las Jornadas de Capacitación sobre Salud Reproductiva y Procreación Responsable, a llevarse a cabo en la Localidad de Valle Hermoso los días 21 y 22 de Febrero del corriente año.

A la Comisión de Salud Humana

VIII

02651/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Remedi, por el cual declara de Interés Legislativo la exposición Dalí "EL Surrealismo", a llevarse a cabo en los meses de marzo y abril del corriente año en la Ciudad de Córdoba.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

IX

02652/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Remedi y Novillo Corvalán, por el cual expresa repudio y preocupación por la detención, incomunicación y posterior deportación del periodista e investigador argentino Fernando Luis Parra, por parte de las autoridades cubanas.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

X

02653/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Perla Ceballos, por el cual expresa beneplácito ante la actitud asumida por los integrantes de la Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Limitada de la Ciudad de Córdoba, quienes solidariamente apoyaron a Barrio Cabo Farina con la entrega de alimentos no perecederos para un Comedor Comunitario y prestando servicios de salud a la población infantil.

A la Comisión de Solidaridad

XI

02654/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Perla Ceballos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, Ministerios de Educación y de Salud, implemente medidas de contención psicológica y sanitaria en los establecimientos educativos públicos, para detectar dificultades en los alumnos para concentrarse y disciplinarse.

A la Comisión de Salud Humana

XII

02655/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Perla Ceballos, por el cual expresa preocupación por el futuro de la ex Área Material Córdoba, bajo contrato a favor de la Empresa Lockheed Martín, la cual no ha logrado hacer sustentable este negocio, poniendo en riesgo su continuidad así como la fuente laboral de muchos trabajadores.

A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

XIII

02656/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Perla Ceballos, por el cual expresa consternación por los hechos violentos acaecidos en la República de Bolivia.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

XIV

02657/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Perla Ceballos, por el cual declara su sentido recuerdo y homenaje en la figura de Rosa Eugenia Novillo Corvalán y a los miles de desaparecidos en la década del '70, al cumplirse cinco años de la exhumación y reconocimiento de sus restos.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

XV

02658/L/03

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Perla Ceballos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del E.R.Se.P. (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a los intereses por mora que cobra la E.P.E.C. y reclamos realizados a dicha empresa por parte de los usuarios.

A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

XVI

02659/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gonzalo, Cornaglia, Dulla y Bocco, por el cual manifiesta preocupación por el vertido de lí-

quidos cloacales en el cauce del Río Cosquín, Departamento Punilla, a su paso por la ciudad homónima.

A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

XVII

02660/L/03

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gonzalo, Cornaglia, Dulla y Bocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de institutos privados que dictan cursos con las consignas "título oficial" o "validez oficial".

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

XVIII

02661/L/03

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cornaglia, Leyba de Martí y Gonzalo, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la cesión del contrato de adjudicación entre la empresa Angiocor S.R.L. y el I.P.A.M..

A la Comisión de Salud Humana

XIX

02662/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Perla Ceballos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, interceda ante la empresa Renault para evitar el despido y suspensión de operarios.

A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

XX

02663/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Liliana Olivero y Álvarez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la derogación de diversos Decretos con el objeto de evitar la incorporación de capital privado o modificación del Estatuto Orgánico de la E.P.E.C..

A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXI**02664/L/03**

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Annovassi, por el cual manifiesta solidaridad con el Pueblo Boliviano y expresa pesar por la pérdida de vidas humanas en los hechos de violencia acaecidos en la Ciudad de La Paz.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

XXII**02665/L/03**

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Annovassi, por el cual adhiere y manifiesta homenaje al celebrarse el 22 de febrero el "Día de la Antártida Argentina".

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

XXIII**02667/L/03**

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dandach y Lizio, por el cual solicita al Gobierno Nacional, promueva acciones que eviten que profesionales argentinos emigren de nuestro país.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

XXIV**02668/L/03**

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dandach y Lizio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, implemente un programa de difusión para concientizar a la población sobre la necesidad de donar sangre.

A la Comisión de Salud Humana

XXV**02669/L/03**

Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Dandach y Lizio, por el que modifica el Inciso 2) del Artículo 29 de la Ley Nº 6875, referido a la doble afiliación a partidos políticos.

A las Comisiones de Asuntos Constitu-

cionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXVI**02670/L/03**

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dandach y Lizio, por el cual solicita a la Legislatura de la Provincia de Chubut, intervenga en el conflicto suscitado por la adjudicación de la explotación del complejo minero El Desquite, en la Localidad de Esquel, de esa Provincia.

A las Comisiones de Industria y Minería y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

XXVII**02671/L/03**

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dandach y Lizio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional, intervenga en el conflicto suscitado por la adjudicación de la explotación del complejo minero El Desquite, en la Localidad de Esquel, Provincia de Chubut.

A las Comisiones de Industria y Minería y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

XXVIII**02672/L/03**

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dandach y Lizio, por el cual manifiesta beneplácito por la labor desarrollada por la fábrica Dale Más, desde el año 1931 en la Provincia de Córdoba.

A la Comisión de Industria y Minería

XXIX**02673/L/03**

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dandach y Lizio, por el cual adhiere y manifiesta beneplácito por la realización de la 47ª Fiesta Nacional del Trigo, celebrada en la Ciudad de Leones, entre el 13 y el 16 de febrero de 2003.

A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables

XXX**02674/L/03**

Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Dandach y Lizio, por el que dispone la implementación de un seguro de sangre en los Hospitales Públicos de la Provincia.

A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXXI

02675/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dandach y Lizio, por el cual declara su interés en que los Legisladores de la Provincia de Córdoba conformen una comisión de trabajo a fin de estrechar vínculos con los países árabes e islámicos.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

XXXII

02676/L/03

Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Karl, por el que modifica el Artículo 73 de la Ley N° 8123, Código Procesal Penal, relativo al Fiscal de Cámara del Crimen y Correccional.

A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

XXXIII

02677/L/03

Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Karl, por el que regula las actividades de las Entidades de Medicina Prepaga en el ámbito de la Provincia de Córdoba.

A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXXIV

02679/L/03

Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Novillo Corvalán, Goñi, Giustina, Vaquero y Chiofalo, por el que modifica el Capítulo Segundo, del Título III, del Libro II de la Ley N° 8431, Código de Faltas de la Provincia de Córdoba y sus modificatorias, referido a "Faenamiento Clandestino".

A las Comisiones de Agricultura, Ganade-

ría y Recursos Renovables y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXXV

02680/L/03

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Font, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba.

A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Economía, Presupuesto y Hacienda

XXXVI

DESPACHOS DE LAS COMISIONES

Despachos de la Comisión de Solidaridad

1)02593/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Perla Ceballos, por el cual vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, sume esfuerzos con la Municipalidad de Santa María de Punilla, para prestar ayuda a la familia damnificada por el tornado del 6 de Febrero, registrado en esa Localidad.

Al Orden del Día

2)02627/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Acuña, por el cual expresa beneplácito y adhesión a la "Feria de la Casa", realizada en San Francisco desde el mes de Diciembre de 2002, donde se comercializan productos artesanales elaborados por personas desocupadas comprendidas en el Programa Social para el Desamparado.

Al Orden del Día

Despacho de la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

02198/L/02

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gonzalo, Bocco, Font, Dulla y Leyba de Martí, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana-

na y Asuntos Institucionales (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a guardias de seguridad que operan en locales nocturnos, comúnmente llamados "patovicas".

Al Orden del Día N° 49

Despacho de la Comisión de Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción

02587/L/03 – 02588/L/03

Compatibilizados

Proyectos de Declaración: Iniciados por el Legislador Nicolás y Legislador Martín López, respectivamente, por los cuales declaran su homenaje y profundo pesar por el fallecimiento de Héctor Luis Gradassi, referente del deporte automovilístico cordobés y nacional; y expresa solidaridad y condolencias a sus familiares.

Al Orden del Día

Despachos, en Mayoría y en Minoría, de las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

01139/E/02 – 01311/L/02 – 11519

Compatibilizados

Proyectos de Ley: Iniciados por el Poder Ejecutivo Provincial; por el Bloque de Legisladores de la Unión Cívica Radical y por los Senadores Brouwer de Koning y Lovera, respectivamente, por los que establecen la Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los RSU.

Al Orden del Día

Despachos de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

1)02562/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sueldo, Remedi, Dulla, Uez, Eslava, Bedano de Accastello, Castro, Tejeda, Cornaglia, Echepare, Urquía y Giustina, por el cual declara de Interés Legislativo el opúsculo titulado ¿Quién es el Señor del Retrato?, escrito y publicado por la Lic. Graciela A. Menichetti, con el propósito de revalorizar la figura del Dr. Manuel Lucero.

Al Orden del Día

2)02579/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Tais, por el cual expresa adhesión a la recordación del Cuadragésimo Tercer Aniversario del fallecimiento del ex Gobernador de Córdoba Dr. Amadeo Tomás Sabattini.

Al Orden del Día

3)02580/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Tais, por el cual expresa beneplácito por la iniciativa de los alumnos de 6º año, Especialidad Ciencias Sociales del Instituto Secundario Bernardino Rivadavia de la Ciudad de Villa María, de plasmar en el Libro Malvinas un capítulo destacado de la historia argentina contemporánea.

Al Orden del Día

4)02596/L/03 – 2617/L/03

Compatibilizados

Proyectos de Declaración: Iniciados por la Legisladora Perla Ceballos y las Legisladoras Domínguez Reyna, Acuña, Tais y Chiofalo, respectivamente, por los cuales expresan reconocimiento al docente, periodista, escritor y revolucionario cubano José Martí, al haberse conmemorado 150 años de su nacimiento.

Al Orden del Día

5)02613/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Flores Durán, por el cual vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación, creara un C.B.U. Rural en la Localidad de Cañada de Río Quinto, Departamento Ischilín, en el presente año escolar.

Al Orden del Día

- 4 -

- A) COMEDORES PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
- B) PROGRAMA DE FAMILIAS SOLIDARIAS. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
- C) CLINICA HALAC. ACTOS DE REPRESIÓN. COMPARECENCIA AUTORIDADES PARA INFORMAR.

Moción de vuelta a comisión, para su archivo

Sr. Presidente (Olivero).- A continuación vamos a pasar a tratar el orden del día

previsto para el día de la fecha.

Tiene la palabra el señor legislador Saieg.

Sr. Saieg.- Señor presidente, con relación al tratamiento del orden del día, solicito el archivo para los puntos 13, 16 y 25 del orden del día.

Sr. Presidente (Olivero).- En consideración la moción efectuada por el legislador Saieg.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobada.

PUNTO 13

Moción de Preferencia

– Artículo 122 y Concordantes –

02382/L/02

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taranzano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relativos a los Comedores Escolares P.A.I.Cor..

Comisión: Solidaridad

PUNTO 16

Moción de Preferencia

– Artículo 122 y Concordantes –

02155/L/02

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cornaglia, Gonzalo y Zalazar de Fino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, que a través de la Agencia Córdoba Solidaria S.E. (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Programa de Familias Solidarias.

Comisión: Solidaridad

PUNTO 25

Pedido de Informes – Artículo 195

02497/L/02

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Perla Ceballos, por el cual requiere al Poder Ejecutivo Provincial, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Asuntos Institucionales, Policía de la Provincia, la comparecencia de las autoridades máximas pertinentes (Art. 101 C.P.), a efectos de informar sobre la represión llevada a cabo el 14 de Di-

ciembre en el Instituto Privado de Neonatología (Clínica Halac).

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

- 5 -

- A) IPAM. DEUDA CON CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
- B) RUTA N° 19, TRAMO QUE PASA POR LA FRANCIA. LOMOS DE BURRO. PEDIDO DE INFORMES.
- C) IPAM. PROVISIÓN MEDICAMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
- D) BCO. DE EQUIPAMIENTO AUDITIVO. PEDIDO DE INFORMES.
- E) POBREZA EXTREMA. RELEVAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
- F) PROGRAMA FORMACIÓN JEFAS Y JEFES DE HOGAR. ADJUDICACIÓN PROYECTOS CAPACITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
- G) BCO. DE LA PCIA. DE CBA. CRÉDITOS Y CANON POR SERVICIO. PEDIDO DE INFORMES.
- H) CAMINO DE LAS SIERRAS, RUTA PCIAL. E-55, RUTA PADRE LUCHESSI Y SAN NICOLÁS. SITUACIÓN DIVERSOS TRAMOS. PEDIDO DE INFORMES.
- I) VIVIENDAS SOCIALES. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el legislador Saieg.

Sr. Saieg.- Señor presidente, solicito una preferencia para la próxima sesión, para los puntos 1, 2, 4, 6, 7, 14, 17, 21 y 23 del orden del día.

Sr. Presidente (Olivero).- En consideración la moción efectuada por el legislador Saieg.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobada.

PUNTO 1**Moción de Preferencia****- Artículo 122 y Concordantes -****02254/L/02**

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Perla Ceballos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 C.P.), informe sobre posibles deudas que mantendría el I.P.A.M. con la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud de la Provincia.

Comisiones: Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

PUNTO 2**Moción de Preferencia****- Artículo 122 y Concordantes -****02195/L/02**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Acuña, Luque, Nicolás y Perla Ceballos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección de Accidentología de la Provincia (Art. 102 C.P.), informe sobre los lomos de burro colocados sobre la Ruta 19 en el tramo que atraviesa la Ciudad de La Francia, Departamento San Justo.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 4**Moción de Preferencia****- Artículo 122 y Concordantes -****02307/L/02**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Perla Ceballos y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la provisión de medicamentos por parte del I.P.A.M. a sus afiliados.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 6**Moción de Preferencia****- Artículo 122 y Concordantes -****02349/L/02**

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taranzano, por el cual solicita al Poder

Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relativos al Banco de Equipamiento Auditivo, instituido por la Ley Nº 8815.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 7**Moción de Preferencia****- Artículo 122 y Concordantes -****02350/L/02**

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taranzano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relativos a relevamientos de casos de extrema pobreza en la Provincia.

Comisiones: Solidaridad y de Salud Humana

PUNTO 14**Moción de Preferencia****- Artículo 122 y Concordantes -****02406/L/02**

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pereyra, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Producción y Finanzas (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a la adjudicación de los proyectos de capacitación para el Programa de Formación para Jefes y Jefes de Hogar.

Comisión: Solidaridad

PUNTO 17**Moción de Preferencia****- Artículo 122 y Concordantes -****02429/L/02**

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Perla Ceballos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Banco de la Provincia de Córdoba (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relativos a créditos tomados por este Banco con otras entidades que son descontados de la coparticipación de la Provincia y canon por el servicio de cobranza de tasas municipales.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 21**Pedido de Informes - Artículo 195**

02462/L/02

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Perla Ceballos, Nicolás y Pereyra, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la comparecencia de las autoridades correspondientes del E.R.Se.P. (Art. 101 C.P.), para informar sobre la situación de diversos tramos del Camino de las Sierras, Ruta Provincial E-55, Ruta Padre Luchessi y San Nicolás.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 23**Pedido de Informes – Artículo 195****02491/L/02**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gonzalo, Cornaglia, Bocco, Dulla y Leyba de Martí, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a las viviendas sociales a construirse en el Gran Córdoba.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

- 6 -

- A) PLAN “100 ESCUELAS NUEVAS”. EDIFICIOS AFECTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
- B) MORTALIDAD INFANTIL. INDICES. PEDIDO DE INFORMES.
- C) MINISTERIO DE SALUD. ATENCIÓN EN HOSPITALES Y COPARTICIPACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
- D) MEDICINA PREPAGA. FUNCIONAMIENTO EMPRESAS. PEDIDO DE INFORMES.
- E) CAJA DE JUBILACIONES DE LA PCIA. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
- F) CONVENIO PCIA. DE CÓRDOBA – MUNIC. DE CAPILLA DEL MONTE. PEDIDO DE INFORMES.
- G) IPAM. SITUACIÓN ACTUAL. COMPARECENCIA PRESIDENTE DIRECTORIO PARA INFORMAR.

Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el señor legislador Saieg.

Sr. Saieg.- Señor presidente, solicito una preferencia para la sesión subsiguiente par los puntos números 3, 8, 10, 11, 12, 20 y 22 del orden del día.

Sr. Presidente (Olivero).- En consideración la moción efectuada por el legislador Saieg.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobada.

PUNTO 3**Moción de Preferencia****– Artículo 122 y Concordantes –****02261/L/02**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Liliana Olivero, Álvarez, Perla Ceballos y Acuña, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección Provincial de Arquitectura (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos de los edificios educativos pertenecientes al denominado “Plan 100 Escuelas Nuevas”.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 8**Moción de Preferencia****– Artículo 122 y Concordantes –****02361/L/02**

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Acuña, Luque y Perla Ceballos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe los índices generales de mortalidad infantil.

Comisiones: Salud Humana y de Solidaridad

PUNTO 10**Moción de Preferencia****– Artículo 122 y Concordantes –****02373/L/02**

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Perla Ceballos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud

(Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relativos a la atención en hospitales públicos y sobre la coparticipación que se recibe para la atención de la salud.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 11

Moción de Preferencia

- Artículo 122 y Concordantes -

02378/L/02

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Luque, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento de empresas o servicios de medicina prepaga.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 12

Moción de Preferencia

- Artículo 122 y Concordantes -

02381/L/02

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Liliana Olivero y Álvarez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relativos a la situación de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia.

Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 20

Pedido de Informes - Artículo 195

02461/L/02

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Perla Ceballos y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al convenio celebrado entre la Provincia y la Municipalidad de Capilla del Monte, para ocupar inmuebles ubicados dentro del Perilago del Dique El Cajón de Capilla del Monte, Departamento Punilla.

Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes

PUNTO 22

Pedido de Informes - Artículo 195

02477/L/02

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cornaglia y Gonzalo, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la comparecencia del Presidente del Directorio del I.P.A.M. (Art. 101 C.P.), a efectos de informar sobre diversos aspectos referidos a la situación actual del Instituto.

Comisión: Salud Humana

- 7 -

**BCO. DE LA PCIA. DE CBA.
RELEVAMIENTO FUNCIONARIOS DE
CARRERA. PEDIDO DE INFORMES.**

**Moción de vuelta a comisión, con
preferencia**

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el señor legislador Saieg.

Sr. Saieg.- Señor presidente, solicito una preferencia para la séptima sesión ordinaria, para el punto número 24 del orden del día.

Sr. Presidente (Olivero).- En consideración la moción efectuada por el legislador Saieg.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobada.

PUNTO 24

Pedido de Informes - Artículo 195

02492/L/02

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Perla Ceballos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al relevamiento de sus puestos de funcionarios de carrera del Banco de la Provincia de Córdoba.

Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Economía, Presupuesto y Hacienda

- 8 -

**MINISTERIO DEL INTERIOR. CAUSA
JUDICIAL Y ANTECEDENTES DE SUCESOS
DE DICIEMBRE DE 2001. ESTADO
PROCESAL. PEDIDO DE INFORMES.**

Moción de vuelta a comisión

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el señor legislador Saieg.

Sr. Saieg.- Solicito la vuelta a comisión para el punto número 19 del orden del día.

Sr. Presidente (Olivero).- En consideración la moción efectuada por el legislador Saieg.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobada.

PUNTO 19**Moción de Preferencia****- Artículo 122 y Concordantes -****02642/L/03**

Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Cittadini de Montes y Romero, por el cual solicita al Ministerio del Interior de la Nación, informe a este Cuerpo el estado procesal de la causa judicial y antecedentes de los sucesos ocurridos los días 19 y 20 de Diciembre del 2001, que involucran al Dr. Ramón Bautista Mestre.

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

- 9 -

- A) INDUSTRIAS. USO HORNOS DE COMBUSTIÓN EN PROCESOS FABRICACIÓN. CONTROL. PEDIDO DE INFORMES.
- B) CONSTITUCIÓN PCIAL. ART. 37. CONTROLES CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
- C) LOCALES DIVERSION NOCTURNA. GUARDIAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
- D) ENTE INTERMUNICIPAL RUTA 6. DONACIÓN MEDICAMENTOS. BENEPLÁCITO.

Tratamiento conjunto

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el señor legislador Saieg.

Sr. Saieg.- Señor presidente, por contar con despacho de comisión, solicito la aprobación por el artículo 146 del reglamento para los

puntos números 5, 9, 15 y 26.

Sr. Presidente (Olivero).- En consideración la moción efectuada por el legislador Saieg.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobada.

PUNTO 5**PROYECTO DE RESOLUCIÓN - 02335/L/02****LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA****RESUELVE:**

Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, concretamente a la Agencia Córdoba Ambiente, para que cumplimentando lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, en el término de quince (15) días, informe respecto a los siguientes puntos, a saber:

1.- Si existe control en industrias que utilizan hornos de combustión en sus procesos de fabricación.

2.- Si la industria cementera en particular, usa habitualmente productos que son nocivos para la salud y el medio ambiente.

3.- Que controles e inspecciones, se han efectuado en los establecimientos fabriles descritos en el punto 1, indicando el resultado de los procedimientos efectuados.

Elsa Gonzalo, Carlos Cornaglia, Juan Bocco, Héctor Dulla, Beatriz Leyba de Martí.

FUNDAMENTOS

El medio ambiente es nuestra "casa". Si la destruimos, rompemos sus techos, demolemos sus paredes, ensuciamos sus pisos, y llenamos toda su extensión con todo tipo de sustancias tóxicas, arribaremos a un solo resultado: será imposible vivir en ella.

El medio ambiente en que vivimos, no tiene paredes, techos ni pisos artificiales, que asemejen a los que el hombre, por medio del arte de la construcción, edifica para su vivienda. La "Casa" es todo lo que hay sobre la superficie terrestre: bosques, mesetas, llanuras, praderas, montañas, ríos y arroyos; armoniosamente acompañado de lagos, lagunas, mares y océanos. Su extensión, comprende a toda la atmósfera, y sería materia de discusión cuando los adelantos científicos lo permitan, el rol del espacio ultra terrestre.

Lamentablemente, en éstas épocas de capitalismo salvaje y voraz, prima el criterio economicista, la consigna es: "no importa que especie se extin-

ga, que bosque sea talado en su totalidad, cuantos sufran intoxicaciones de diversa índole, si de ello se pueden obtener utilidades derivadas de la producción, que importen los mas bajos costos posibles, solamente irrogando aquellos que sean indispensables para el ciclo productivo".

Tal expresión, que es de mi elaboración personal, refleja la poca importancia que, en Argentina y el Tercer Mundo, tiene la preservación ambiental cuando se contrapone a la rentabilidad empresarial. Esto es grave. No solamente afecta a la flora y a la fauna, sino directa e indirectamente a los seres humanos: es decir, a todos nosotros.

Sin embargo, debe hacerse un paréntesis para indicar que tales cosas suceden por la carencia de posiciones firmes adoptadas desde el Estado, tomado éste en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal. Debo indicar, que la mayoría de las empresas que contaminan indiscriminadamente, muchas de las cuales están integradas por capitales extranjeros, en sus países de origen, sede de sus casas matrices, cumplen a rajatabla con todas las disposiciones vigentes en materia de tratamiento de desechos industriales, emanación de gases, entre otras.

Así ocurre, porque los gobiernos de esos países, con una alta conciencia ecológica, priorizan el cuidado de su ya delicado medio ambiente. Promueven y hacen gestiones para que practiquen esas conductas en África, Asia y Latinoamérica, como si fuese "tierra de nadie".

En el tema puntual que hoy planteo, el de las industrias que poseen hornos de combustión en su proceso de producción, adquiere suma relevancia, dado que, de confirmarse la situación, se estaría afectando seriamente al medio ambiente, ya que la emanación de gases tóxicos agresivos, con alto contenido de metales pesados, al decantar, son arrastrados por el agua de lluvia, terminando su viaje en el cauce de ríos y arroyos.

Es imperiosa la toma de conciencia en ésta cuestión, ya que los mismos afectan a la fauna, la flora, la salud de la población. Trasladando ésta cuestión a términos económicos, influye además en forma negativa en el turismo, industria que se sustenta, entre otros tópicos, en el cuidado y preservación del área que se promueve y ofrece a los potenciales visitantes.

Las razones que me impulsan a elevar la presente iniciativa a consideración del plenario de la Legislatura, y en ello pidiendo el voto de mis pares, son sin tener que abundar en mayores detalles, sobradamente valederas.

Elsa Gonzalo, Carlos Cornaglia, Juan Bocco, Héctor Dulla, Beatriz Leyba de Martí.

DESPACHO DE COMISION

Vuestras Comisiones de **ASUNTOS ECOLÓGICOS y de SALUD HUMANA**, al dictaminar acerca del **Proyecto de Resolución N° 02335**, iniciado por los Legisladores Gonzalo, Cornaglia, Bocco, Dulla y Leyba de Martí, por el cuál solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Agencia Córdoba Deporte, Ambiente, Cultura y Turismo S.E.M., informe (Art. 102 de la C.P.) sobre diversos aspectos referidos al control en industrias que utilizan hornos de combustión en sus procesos de fabricación, **OS ACONSEJAN**, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.

DIOS GUARDE A UDS.

Molina, Annovassi, P. Ceballos, López, Juncos, Romero, Maders, Domínguez, Remedi, Tejeda, Carranza, Cittadini de Montes, Flores Durán, Cornaglia, Gonzalo, Acuña, Lizio.

PUNTO 9

PROYECTO DE RESOLUCIÓN - 02369/L/02

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Requerir al Poder Ejecutivo Provincial y por su intermedio al organismo que corresponda, en virtud del Artículo 102 de la Constitución Provincial, informe en el plazo de siete (7) días:

1.- Colegios Profesionales:

a) Qué controles efectúa el Estado para garantizar el pleno cumplimiento del Artículo 37 de la Constitución Provincial?.

- Asambleas.
- Balance económico-financiero.
- Inversiones.
- Estado de la Caja de Jubilaciones.
- Acceso a la información de los matriculados.

b) Cuál es el Organismo que tiene jurisdicción sobre estas entidades deontológicas?.

c) Qué medidas se adoptan desde el Estado ante el incumplimiento del Artículo 37 de la Constitución Provincial, por parte de alguna de estas entidades?.

Perla Ceballos, Carmen Acuña, Asís Nicolás.

FUNDAMENTOS

En nuestra Constitución Provincial se expresa en el Artículo 37 - De los Colegios Profesionales - La provincia puede conferir el gobierno de las profe-

siones y el control de su ejercicio a las entidades que se organicen con el concurso de todos los profesionales de la actividad, en forma democrática y pluralista conforme a las bases y condiciones que establece la Legislatura. Tienen a su cargo la defensa y promoción de sus intereses específicos y gozan de las atribuciones que la ley estime necesarias para el desempeño de sus funciones, con arreglo a los principios de leal colaboración mutua y subordinación al bien común, sin perjuicio de la jurisdicción de los poderes del Estado. De esto se desprende que toda Colegiación debe respetar los principios fundamentales de la forma democrática y pluralista y que deben intervenir todos los profesionales de la actividad. A su vez el Artículo 67 - Principios Económicos - hace referencia en uno de sus párrafos que "se reconoce y garantiza la libre iniciativa privada con sanción a los monopolios, la usura y la especulación". En consideración a los reiterados reclamos de los matriculados en las distintas profesiones, los que exponen carecer de información veraz, emanada de cada Colegio sobre estado económico-financiero, inversiones realizadas, estado de la Caja a la que aportan y asegurando muchos que en las Asambleas votan incluso quienes cobran honorarios mensuales, por ejemplo, avalando así Balances que ellos mismos realizan, informes, etc., es decir ejecutan, controlan y aprueban, quitando la transparencia que todo acto administrativo debe poseer para resguardo de los Colegios y Colegiados a los cuales representan, se hace necesario conocer cuál es el Organismo que tiene control sobre estas entidades deontológicas, como así saber quién y qué controles se realizan para garantizar el cumplimiento del Artículo 37 de nuestra Constitución Provincial y si ante incumplimiento observado se adopta algún tipo de medida desde el gobierno, para revertir una situación injusta para muchos, causando a su vez un grave perjuicio a las Instituciones en que estos hechos se producen.

Por tal motivo, se solicita la aprobación del presente pedido de informe.

Perla Ceballos, Carmen Acuña, Asís Nicolás.

DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestras Comisiones de **LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, COOPERATIVAS Y MUTUALES; Y COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS** al dictaminar acerca del **Proyecto de Resolución N° 02369L02**, iniciado por los Legisladores Ceballos, Acuña y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, informe

(Art. 102 C.P) respecto de los controles que efectúa el Estado a fin de garantizar el cumplimiento del Art. 37 de la Constitución Provincial, relativo a Colegios Profesionales, **OS ACONSEJAN**, le prestéis aprobación según el procedimiento previsto por el artículo 146 del Reglamento interno, con las siguientes modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia, de acuerdo al artículo 102 de la Constitución Provincial, que en un plazo de 30 (treinta) días informe:

a) Qué controles efectúa el Estado para garantizar el pleno cumplimiento del Artículo 37 de la Constitución Provincial?

- Asambleas.
- Balance económico-financiero.
- Inversiones.
- Estado de la Caja de Jubilaciones.
- Acceso a la información de los matriculados.

b)Cuál es el Organismo que tiene jurisdicción sobre estas entidades deontológicas?

c)Qué medidas se adoptan desde el Estado ante el incumplimiento del Artículo 37 de la Constitución Provincial, por parte de alguna de estas entidades?

DIOS GUARDE A V.H.

Fernández, Obregón Cano, Mancilla, Karl, González Castellanos, Ruiz, Chiofalo, Novillo Corvalán, Sintora, Font, Zalazar de Fino, Domínguez, Luque, Lizio, P. Ceballos.

PUNTO 15 PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 02198/L/02 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, concretamente a la Secretaría de Seguridad, para que cumplimentando lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, en el término de quince (15) días, informe respecto a los siguientes puntos, a saber:

1.- Si existen controles referidos a los guardias de seguridad, que operan en locales de diversión nocturna, específicamente a los comúnmente denominados "patovicas".

2.- Si está reglamentada esta actividad, remita la misma.

3.- Si las exigencias son similares al perso-

nal de las empresas de seguridad privada.

Elsa Gonzalo, Juan Bocco, Jorge Font, Héctor Dulla, Beatriz Leyba de Martí.

FUNDAMENTOS

Motiva este pedido de informes la proliferación de locales bailables en las distintas ciudades de nuestra provincia. La falta de control de la seguridad en dichos locales, origina múltiples problemas, parte de ello es la contratación irregular de personal no idóneo para las tareas señaladas.

La veloz proliferación de las agencias de seguridad privada, es consecuencia directa de la necesidad imperiosa que tienen los comercios y negocios de rever sus costos, ante la agudización de la recesión económica, que a esta altura tiene características de depresión de la actividad. Debe indicarse que es onerosa la contratación de servicios adicionales provistos por la Policía de la Provincia de Córdoba.

En los locales bailables, que funcionan principalmente de noche, es común percibir la presencia de guardias privados de seguridad. Sin embargo, en muchos de estos salones, se advierte que no pertenecen a las tradicionales empresas de seguridad privada, que a diario observamos actuar en múltiples ámbitos.

Mayormente se los rotula como "patovicas", denominación ésta que hace alusión a la condición de físico culturistas que lucen un gran mayoría de los referidos personajes. Todo no pasaría de ser meramente anecdótico, de no ser por los excesos que estos sujetos cometen en el desarrollo de sus tareas.

Generalmente, muchos de los salones en cuestión, haciendo uso del derecho de propiedad y del de admisión y permanencia, llevan a cabo verdaderos actos discriminatorios. De efectuarse un control para evitar el ingreso de personas de temperamento agresivo, o de quienes se conoce antecedentes de alterar el orden y la normal convivencia en un ámbito social, muchas veces se pasan a convertir en un selector estético, donde priman criterios de portación de vestimenta, color de ojos y cabello y forma de semblante, como imperativo categórico para que una persona pueda ingresar a un local bailable.

Estas situaciones, sin perjuicio de las de corte netamente de control de la seguridad, devienen en hechos de abusos de su posición por parte de estos "guardias", si tal denominación les puede caber, en los que muchas veces hubo personas que literalmente sufrieron palizas a manos de los sujetos en cuestión, ocasionándoles lesiones de relevancia.

Todo esto genera la necesidad de conocer a ciencia cierta tres cuestiones fundamentales: la reglamentación que tienen estos guardias; si la tuvieren las similitudes con la que rige a las agencias pri-

vadas de seguridad; y en último lugar, si se hacen controles al respecto, y en dicho caso, el resultado que esto ha arrojado.

Por las razones expuestas, creo procedente requerir a mis pares que acompañen con su voto la sanción del pedido de informes de referencia.

Elsa Gonzalo, Juan Bocco, Jorge Font, Héctor Dulla, Beatriz Leyba de Martí.

DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestra Comisión de **LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN**, al dictaminar acerca del **Proyecto de Resolución N° 02198/L/02**, iniciado por los Legisladores Gonzalo, Bocco, Font, Dulla y Leyba de Martí, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Asuntos Institucionales, informe (Art. 102 de la C.P.), sobre aspectos referidos a los guardias de seguridad nocturnas, comúnmente llamados patovicas, **OS ACONSEJA**, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en los términos del Artículo 102 de la Constitución de la Provincia, para que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Asuntos Institucionales y en un plazo de veintiocho (28) días, informe lo siguiente:

Si existen controles sobre los guardias de seguridad que operan en locales de diversión nocturna, comúnmente denominados "Patovicas".

Si está reglamentada esta actividad, se sirva remitir copia de la pertinente normativa.

Si las exigencias y requisitos que deben cumplir, son similares a las del personal de las empresas de seguridad privadas.

DIOS GUARDE A V. H.

Rufeil, Obregón Cano, Remedi, González Castellanos, Ruiz, Bocco, Cornaglia, Domínguez, L. Olivero.

PUNTO 26

PROYECTO DE DECLARACIÓN - 02472/L/02

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA:

Su beneplácito ante la actitud asumida por el Ente Intermunicipal Ruta 6, quien con ganancias del peaje donarán 35 mil medicamentos a Dispensarios

y Hospitales de las Localidades que conforman el Organismo.

Perla Ceballos.

FUNDAMENTOS

Que la solidaridad, que el gesto de grandeza es posible, lo demuestra el Ente Intermunicipal Ruta 6, quien está integrado entre otras Localidades por los pueblos de Ordóñez, Justiniano Posse, Pasco, Tancacha, Cruz Alta y Los Sargentos. Este Organismo ha destinado de las ganancias, una importante suma para adquirir 35 mil medicamentos; de diferentes comprimidos; entre los que se cuentan antibióticos, antihipertensivos, diuréticos, antidiabéticos y antimicóticos. Lo que es de destacar, es que este Ente está conformado para realizar el cobro de peaje. Si bien este Bloque no adhiere al Sistema de Peajes por considerar que se implementa un Sistema que la propia Constitución Nacional prohíbe en su Artículo Nº 9, el que expresa "en todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las Nacionales ..." y en su Artículo 10: "en el interior de la República es libre de Derechos la circulación ...", lo que constituye a los peajes en verdaderas aduanas, encubiertas con distinto nombre; el hecho de que se haya permitido su instalación, nos coloca ante una realidad que no podemos dejar de reconocer, por lo que cabe aquí demostrar la diferencia que se puede claramente observar entre un Ente privatizado que sólo vuelca sus ganancias en Bancos o inversiones fuera de nuestro país y un Ente que responde a la sociedad con la cual están comprometidos por ser Intendentes o Jefes Comunes quienes han tomado la responsabilidad de gestionar los peajes, y que devuelven a la región en beneficio sus ganancias, lo que los legitima ante la comunidad que representan.

Por ello, el beneplácito de esta Legislatura ante esta actitud que aquí destacamos, solicitando por todo lo expuesto, la aprobación del presente proyecto.

Perla Ceballos.

DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestra Comisión de **SOLIDARIDAD**, al dictaminar a cerca del Proyecto de Declaración Nº 02472/L/02, iniciado por la Legisladora Perla Ceballos, por el cual manifiesta beneplácito ante la actitud asumida por el Ente Intermunicipal Ruta 6, quien con ganancias del peaje donarán medicamentos a dispensarios y hospitales de las localidades que conforman el organismo, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación, con las siguientes modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA:

Su beneplácito ante la actitud asumida por el Ente Intermunicipal Ruta 6, quien con ganancias del peaje donarán medicamentos a dispensarios y hospitales de las localidades que conforman el organismo.

DIOS GUARDE A V.H.

Bedano de Accastello, Vigo, Alé, Taranzano, Zalazar de Fino, Acuña.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra la señora legisladora Ruiz.

Sra. Ruiz.- Señor presidente, dentro de los Asuntos Entrados, solicito que se reserve en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas, el proyecto 2650, referido a la realización de las Jornadas de Capacitación sobre Salud Reproductiva en Valle Hermoso durante este fin de semana.

Sr. Presidente (Olivero).- Así se hará, señora legisladora.

- 10 -

ADMINISTRACIÓN GRAL. DEL ESTADO PROVINCIAL. RÉGIMEN INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL INTERNO. APROBACIÓN.

Sr. Presidente (Olivero).- Continuando con el desarrollo del Orden del Día corresponde el tratamiento del punto dieciocho, cuyo despacho es remitido por las Comisiones de Economía y de Legislación General, que compatibilizan los proyectos números 1794-L-02; 2235-L-02 y 167-L-02, que por Secretaría se enunciará.

Sr. Secretario (Farré).- (Leyendo):

PROYECTO DE LEY - 01794/L/02

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control de la Hacienda Pública Provincial

Título I

Disposiciones generales

Artículo 1.- La presente ley establece y regula la administración financiera y los sistemas de control de la hacienda pública provincial.

Artículo 2.- La administración financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado Provincial.

Artículo 3 .- El sistema de control comprende la estructura de control externo y el régimen de responsabilidad que establece y está asentado en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas de su gestión.

Artículo 4 .- Son objetivos de esta ley, y por lo tanto deben tenerse presentes, principalmente para su interpretación y reglamentación, los siguientes:

a) Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos;

b) Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos de la hacienda pública provincial;

c) Desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero de la administración pública provincial útil para la dirección de las jurisdicciones y entidades y para evaluar la gestión de los responsables de cada una de las áreas administrativas;

d) Establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada ámbito del hacienda pública provincial, la implantación y mantenimiento de:

i) Un sistema contable adecuado a las necesidades del registro e información y acorde con su naturaleza jurídica y características operativas;

ii) Un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo, posterior y de la auditoría interna;

iii) Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de los que es responsable las unidades de organización o entidad.

Esta responsabilidad se extiende al cumplimiento del requisito de contar con un personal calificado y suficiente para desempeñar con eficiencia las tareas que se les asignen en el marco de esta ley.

Reestructurar el sistema de control externo

de la hacienda pública provincial.

Artículo 5.- La administración financiera estará integrada por los siguientes sistemas, que deberán estar interrelacionados entre sí:

- Sistema presupuestario;
- Sistema de crédito público;
- Sistema de tesorería;
- Sistema de contabilidad.

Cada uno de estos sistemas estará a cargo de un órgano rector, que dependerá directamente del órgano que ejerza la coordinación de todos ellos.

Artículo 6.- El Ministerio de Producción y Finanzas provincial establecerá el órgano responsable de la coordinación de los sistemas que integran la administración financiera, el cual dirigirá y supervisará la implantación y mantenimiento de los mismos

Artículo 7. -El Tribunal de Cuentas Provincial será el órgano rector del sistema de control externo.

Artículo. 8 - Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en toda la administración pública provincial, el que a tal efecto está integrado por:

a) Administración Provincial, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social;

b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta, Agencias del Estado y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Provincial tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;

c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Provincial, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado Provincial tenga control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado provincial tenga el control de las decisiones;

e) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Provincial.

Artículo 9. - En el contexto de esta ley se entenderá por entidad a toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio; y unidad de organización a toda repartición u organismo que tiene a su cargo la administración de los créditos asignados.

Artículo 10.- El ejercicio financiero del sector público provincial comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.

Título II Del sistema presupuestario

Capítulo I Disposiciones generales y organización del sistema

Sección I Normas técnicas comunes

Artículo 11.- El presente título establece los principios, órganos, normas y procedimientos que regirán el proceso presupuestario de todas las unidades de organización y entidades que conforman la hacienda pública provincial.

Artículo 12.- Los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese período, en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas.

Artículo 13.- Los presupuestos de recursos contendrán la enumeración de los distintos rubros de ingresos y otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada uno de ellos en el ejercicio, los que estarán disponibles para ajustar a la acción prevista. Las denominaciones de los diferentes rubros de recursos deberán ser lo suficientemente específicas como para identificar las respectivas fuentes.

Artículo 14.- En los presupuestos de gastos se utilizarán las técnicas más adecuadas para demostrar el cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción de bienes y servicios de los organismos de la administración pública provincial, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación de los mismos con sus fuentes de financiamiento. La reglamentación establecerá las técnicas de programación presupuestaria y los clasificadores de gastos y recursos que serán utilizados.

Artículo 15.- Cuando en los presupuestos de las unidades de organización y entidades públicas se incluyan créditos para contratar obras o adquirir bienes y servicios, cuyo plazo de ejecución exceda al ejercicio financiero, se deberá incluir en los mismos información sobre los recursos invertidos en años anteriores, los que se invertirán en el futuro y sobre el monto total del gasto, así como los respectivos cronogramas de ejecución física. La aprobación de los presupuestos que contengan esta información,

por parte de la autoridad competente, implicará la autorización expresa para contratar las obras y/o adquirir los bienes y servicios hasta por su monto total, de acuerdo con las modalidades de contratación vigentes.

Las autorizaciones para comprometer ejercicios futuros a que se refiere el presente artículo caducarán al cierre del ejercicio fiscal en el cual se hayan aprobado, en la medida que antes de esa fecha no se encuentre formalizada, mediante la documentación que corresponda, la contratación de las obras y/o la adquisición de los bienes y servicios autorizados.

Sección II Organización del sistema

Artículo 16.- La Dirección de Presupuesto será el órgano rector del sistema presupuestario de la hacienda pública provincial.

Artículo 17.- La Dirección de Presupuesto tendrá las siguientes competencias:

a) Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera que, para la hacienda pública provincial, elabore el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera:

b) Formular y proponer al órgano coordinador de los sistemas de administración financiera los lineamientos para la elaboración de los presupuestos de la hacienda pública provincial;

b) Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones y evaluación de los presupuestos de la administración provincial:

c) Dictar las normas técnicas para la formulación y evaluación de los presupuestos de las empresas, agencias, sociedades del Estado y Fondos Fiduciarios;

d) Analizar los anteproyectos de presupuesto de los organismos que integran la administración provincial y proponer los ajustes que considere necesarios;

e) Analizar los proyectos de presupuesto de las empresas, agencias y sociedades del Estado y presentar los respectivos informes a consideración del Poder Ejecutivo provincial;

g) Preparar el proyecto de ley de presupuestos general y fundamentar su contenido;

h) Aprobar, juntamente con la Tesorería Provincial, la programación de la ejecución del presupuesto de la administración provincial preparada por las unidades de organización y entidades que la componen;

i) Asesorar, en materia presupuestaria, a todos los organismos de la hacienda pública provincial regidos por esta ley y difundir los criterios básicos para un sistema presupuestario compatible a nivel de municipalidades;

j) Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la administración provincial e intervenir en los ajustes y modificaciones a los presupuestos, de acuerdo a las atribuciones que le fije la reglamentación;

k) Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos por esta ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas;

l) Las demás que le confiera la presente ley y su reglamento.

Artículo 18.- Integrarán el sistema presupuestario y serán responsables de cumplir con esta ley, su reglamentación y las normas técnicas que emita la Dirección de Presupuesto, todas las unidades que cumplan funciones presupuestarias en cada una de las unidades de organización y entidades de la administración pública provincial. Estas unidades serán responsables de cuidar el cumplimiento de las políticas y lineamientos que en materia presupuestaria, establezcan las autoridades competentes.

Capítulo II

Del presupuesto de la administración provincial

Sección I

De la estructura de la ley de presupuesto general

Artículo 19.- La ley de presupuesto general constará de tres títulos cuyo contenido será el siguiente:

Título I- Disposiciones generales;

Título II- Presupuesto de recursos y gastos de la administración central;

Título III- Presupuestos de recursos y gastos de los organismos descentralizados.

Artículo 20.- Las disposiciones generales constituyen las normas complementarias a la presente ley que regirán para cada ejercicio financiero. Contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos.

El título I incluirá, asimismo, los cuadros agregados que permitan una visión global del presupuesto y sus principales resultados.

Artículo 21.- Para la administración central se consideran como recursos del ejercicio todos

aquellos que se prevén recaudar durante el período en cualquier organismo, oficina o agencia autorizadas a percibirlos en nombre de la administración central, el financiamiento proveniente de donaciones y operaciones de crédito público, representen o no entradas de dinero efectivo al Tesoro y los excedentes de ejercicios anteriores que se estime existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta.

Se considerarán como gastos del ejercicio todos aquellos que se devenguen en el período, se traduzcan o no en salidas de dinero efectivo del Tesoro.

Artículo 22.- Para los organismos descentralizados, la reglamentación establecerá los criterios para determinar los recursos que deberán incluirse como tales en cada uno de esos organismos. Los gastos se programarán siguiendo el criterio del devengado.

Artículo 23.- No se podrá destinar el producto de ningún rubro de ingresos con el fin de atender específicamente el pago de determinados gastos, con excepción de:

a) Los provenientes de operaciones de crédito público;

b) Los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado provincial, con destino específico;

c) Los que por leyes especiales tengan afectación específica.

Sección II

De la formulación del presupuesto

Artículo 24.- El Poder Ejecutivo Provincial fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación del proyecto de ley de presupuesto general.

A tal fin, las dependencias especializadas del mismo deberán practicar una evaluación del cumplimiento de los planes y políticas provinciales y del desarrollo general de la Provincia y sobre estas bases y una proyección de las variables macroeconómicas de corto plazo, preparar una propuesta de prioridades presupuestarias en general y de planes o programas de inversiones públicas en particular.

Se considerarán como elementos básicos para iniciar la formulación de los presupuestos, la cuenta de inversiones del último ejercicio ejecutado y el presupuesto consolidado de la administración pública del ejercicio vigente.

Artículo 25.- Sobre la base de los anteproyectos preparados por las unidades de organización y organismos descentralizados, y con los ajustes que resulte necesario introducir, la Dirección de Presupuesto confeccionará el proyecto de ley de presu-

puesto general.

El proyecto de ley deberá contener, como mínimo, las siguientes informaciones:

a) Presupuesto de recursos de la administración central y de cada uno de los organismos descentralizados, clasificados por rubros;

b) Presupuestos de gastos de cada una de las unidades de organización y de cada organismo descentralizado los que identificarán la producción y los créditos presupuestarios;

c) Créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión que se prevén ejecutar

d) Resultados de las cuentas corriente y de capital para la administración central, para cada organismo descentralizado y para el total de la administración provincial.

El reglamento establecerá, en forma detallada, otras informaciones a ser presentadas a la Legislatura Provincial tanto para la administración central como para los organismos descentralizados

Artículo 26.- El Poder Ejecutivo Provincial presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Legislatura, antes del 15 de noviembre de año anterior para el que regirá, acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, de los elementos básicos que señala el art. 24, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportunos.

Artículo 27.- Todo incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Provincial, deber contar con el financiamiento respectivo.

Artículo 28.- Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes:

- 1.- En los presupuestos de recursos:
 - Eliminará los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente;
 - Suprimirá los ingresos provenientes de operaciones de crédito, público autorizadas, en la cuantía en que fueron utilizadas;
 - Excluirá los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso que el presupuesto que se está ejecutando hubiera previsto su utilización;
 - Estimaré cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio;
 - Incluirá los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución, cuya per-

cepción se prevea ocurrirá en el ejercicio;

2.- En los presupuestos de gastos:

- Eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos;

- Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales;

- Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios;

- Adaptará los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y servicios a producir por cada entidad, a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores.

Sección III

De la ejecución del presupuesto

Artículo 29.- Los créditos del presupuesto de gastos, con los niveles de agregación que haya aprobado la Legislatura Provincial, según las pautas establecidas en el art. 25 de esta ley, constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar.

Artículo 30.- Una vez promulgada la ley de presupuesto general, el Poder Ejecutivo Provincial decretará la distribución administrativa del presupuesto de gastos.

La distribución administrativa del presupuesto de gastos consistirá en la presentación desagregada hasta el último nivel previsto en los clasificadores y categorías de programación utilizadas, de los créditos y realizaciones contenidas en la ley de presupuesto general. El dictado de este instrumento normativo implicará el ejercicio de la atribución del Poder Ejecutivo Provincial para decretar el uso de las autorizaciones para gastar y el empleo de los recursos necesarios para su financiamiento.

Artículo 31.- Se considera gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el presupuesto de dicho concepto, cuando queda afectado definitivamente al devengarse un gasto. La reglamentación establecerá los criterios y procedimientos para la aplicación de este artículo y corresponderá al órgano rector del sistema la regulación de los demás aspectos conceptuales y operativos que garanticen su plena vigencia.

Artículo 32.- Las unidades de organización y entidades comprendidas en esta ley están obligadas a llevar los registros de ejecución presupuestaria en las condiciones que les fije la reglamentación. Como mínimo deberán registrarse la liquidación o el mo-

mento en que se devenguen los recursos y su recaudación efectiva y, en materia de presupuesto de gastos, además del momento del devengado, según lo establece el artículo precedente, las etapas de compromiso y del pago. El registro del compromiso se utilizara como mecanismo para afectar preventivamente la disponibilidad de los créditos presupuestarios y, el del pago, para reflejar la cancelación de las obligaciones asumidas.

Artículo 33.- No se podrán adquirir compromisos para los cuales no quedan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de los créditos para una finalidad distinta a la prevista.

Artículo 34.- A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, todas las unidades de organización y entidades deberán programar, para cada ejercicio, la ejecución física y financiera de los presupuestos, siguiendo las normas que fijará la reglamentación y las disposiciones complementarias y procedimientos que dicten los órganos rectores de los sistemas presupuestarios y de tesorería.

Dicha programación será ajustada y las respectivas cuentas aprobadas por los órganos rectores en la forma y para los períodos que se establezca.

El monto total de las cuotas de compromiso fijadas para el ejercicio no podrá ser superior al monto de los recursos recaudados durante éste.

Artículo 35.- Los órganos de los tres poderes del Estado Provincial determinarán, para cada uno de ellos, los límites cuantitativos y cualitativos mediante los cuales podrán contraer compromisos por sí, o por la competencia específica que asignen, al efecto, a los funcionarios de sus dependencias. La competencia así asignada será indelegable. La reglamentación establecerá la competencia para ordenar pagos y efectuar desembolsos y las habilitaciones para pagar que no estén expresamente establecidas en esta ley.

Artículo 36.- Facúltase al órgano coordinador de los sistemas de administración financiera a afectar los créditos presupuestarios de las unidades de organización y organismos descentralizados, destinados al pago de los servicios públicos y de otros conceptos que determine la reglamentación.

Artículo 37.- La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución. Quedarán reservadas a la Legislatura las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, y los que impliquen un cambio en la distribu-

ción de las finalidades.

Artículo 38.- Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento.

Artículo 39.- El Poder Ejecutivo Provincial podrá disponer autorizaciones para gastar no incluidas en la ley de presupuesto general para atender el socorro inmediato por parte del gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor.

Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a la Legislatura en el mismo acto que las disponga, acompañando los elementos de juicio que permitan apreciar la imposibilidad de atender las situaciones que las motivaron dentro de las revisiones ordinarias o con saldos disponibles en rubros presupuestarios imputables.

Las autorizaciones así dispuestas se incorporaran al presupuesto general.

Artículo 40.- Las sumas a recaudar que no pudieren hacerse efectivas por resultar incobrables, podrán ser declaradas tales por el Poder Ejecutivo Provincial o por los funcionarios que determine la reglamentación, una vez agotados los medios para lograr su cobro. La declaración de incobrable no implicará la extinción de los derechos del Estado Provincial, ni de la responsabilidad en que pudiera incurrir el funcionario o empleado recaudador o cobrador, si tal situación le fuera imputable.

Sección IV Del cierre de cuentas

Artículo 41.- Las cuentas del presupuesto de recursos y gastos se cerrarán al 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha los recursos que se recauden se considerarán parte del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en que se hubiere originado la obligación de pago o liquidación de los mismos.

Con posterioridad al 31 de diciembre de cada año no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.

Artículo 42.- Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año se cancelarán, durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en caja y bancos existentes a la fecha señalada.

Artículo 43.- Al cierre del ejercicio se reunirá información de los entes responsables de la liquidación y captación de recursos de la administración provincial y se procederá al cierre del presupuesto de recursos de la misma.

Del mismo modo procederán los organismos

ordenadores de gastos y pagos con el presupuesto de gastos de la administración provincial.

Esta información, junto al análisis de correspondencia entre los gastos y recursos aplicados a bienes y a la prestación de servicios que preparará la Dirección de Presupuesto, será centralizada en la Contaduría General de la Provincia para la elaboración de la cuenta de inversión del ejercicio que debe ser remitida a la Legislatura Provincial.

Sección V

De la evaluación de la ejecución presupuestaria

Artículo 44.- La Dirección de Presupuesto evaluará la ejecución de los presupuestos de la administración provincial tanto en forma periódica, durante el ejercicio, como al cierre del mismo.

Para ello, las unidades de organización y entidades de la administración provincial deberán:

a) Llevar registros de información de la gestión física de la ejecución de sus presupuestos, de acuerdo con las normas técnicas correspondientes;

b) Participar los resultados de la ejecución física del presupuesto a la Dirección de Presupuesto.

Artículo 45.- Con base en la información que señala el artículo anterior, en la que suministre el sistema de contabilidad gubernamental y otras que se consideren pertinentes, la Dirección de Presupuesto realizará un análisis crítico de los resultados físicos y financieros obtenidos y de los efectos producidos por los mismos, interpretará las variaciones operadas con respecto a lo programado, procurará determinar sus causas y preparará informes con recomendaciones para las autoridades superiores y los responsables de los organismos afectados.

La reglamentación establecerá los métodos y procedimientos para la aplicación de las disposiciones contenidas en esta sección, así como el uso que se dará a la información generada

Capítulo III

Del régimen presupuestario de Empresas y Sociedades del Estado Provincial y Fondos Fiduciarios.

Artículo 46.- Los directorios o máxima autoridad ejecutiva de las Empresas Públicas y Sociedades del Estado Provincial y Fondos Fiduciarios aprobarán el proyecto de presupuesto anual de su gestión y lo remitirán a la Dirección de Presupuesto, antes del 30 de octubre del año anterior al que regirá. Los proyectos de presupuesto deberán expresar las políticas generales y los lineamientos específicos que, en materia presupuestaria, establezca el órgano

coordinador de los sistemas de administración financiera y la autoridad de las unidades de organización correspondiente; contendrán los planes de acción, las estimaciones de gastos y su financiamiento, el presupuesto de caja y los recursos humanos a utilizar y permitirán establecer los resultados operativo, económico y financiero previstos para la gestión respectiva.

Artículo 47.- Los proyectos de presupuesto de financiamiento y de gastos deben estar formulados utilizando el momento del devengado de las transacciones como base contable.

Artículo 48.- La Dirección de Presupuesto analizará los proyectos de presupuesto de las Empresas Públicas, Sociedades del Estado Provincial y Fondos Fiduciarios y preparará un informe destacando si los mismos se encuadran en el marco de las políticas, planes y estrategias fijados para este tipo de instituciones y aconsejando los ajustes a practicar en el proyecto de presupuesto si, a su juicio, la aprobación del mismo sin modificaciones puede causar un perjuicio patrimonial al Estado Provincial o atentar contra los resultados de las políticas y planes vigentes.

Artículo 49.- Los proyectos de presupuesto, acompañados del informe mencionado en el artículo anterior, serán sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo Provincial de acuerdo con las modalidades y los plazos que establezca la reglamentación. El Poder Ejecutivo Provincial aprobará, en su caso con los ajustes que considere convenientes, antes del 31 de diciembre de cada año, los presupuestos de las Empresas Públicas, Sociedades del Estado Provincial y Fondos Fiduciarios, elevados en el plazo previsto en el artículo 46 de la presente ley, pudiendo delegar esta atribución en el Ministro de Producción y Finanzas.

Artículo 50.- Los representantes estatales que integran los órganos de las Empresas Públicas, Sociedades del Estado Provincial y Fondos Fiduciarios, estatutariamente facultados para aprobar los respectivos presupuestos, deberán proponer y votar el presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 51.- El Poder Ejecutivo Provincial hará publicar en el Boletín Oficial una síntesis de los presupuestos de las Empresas Públicas, Sociedades del Estado Provincial y Fondos Fiduciarios, con los contenidos básicos que señala el artículo 46.

Artículo 52.- Las modificaciones a realizar a los presupuestos de las Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en Administración Provincial durante su ejecución y que impliquen la disminución de los resultados operativo

o económico previstos, alteración sustancial de la inversión programada, o el incremento del endeudamiento autorizado, deben ser aprobadas por el Poder Legislativo Provincial, previa opinión de la Dirección de Presupuesto. En el marco de esta norma y con opinión favorable de dicha oficina, Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en Administración provincial establecerán su propio sistema de modificaciones presupuestarias.

Artículo 53.- Al cierre de cada ejercicio financiero las Empresas Públicas, Sociedades del Estado Provincial y Fondos Fiduciarios procederán al cierre de cuentas de su presupuesto de financiamiento y de gastos.

Artículo 54.- Se prohíbe a las entidades de la hacienda pública provincial realizar aportes o transferencias a Empresas Públicas, Sociedades del Estado Provincial y Fondos Fiduciarios cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos de esta ley, requisito que también será imprescindible para realizar operaciones de crédito público.

Capítulo IV

Del presupuesto consolidado de la administración pública provincial

Artículo 55.- La Dirección de Presupuesto preparará anualmente el presupuesto consolidado de la administración pública de la provincia, el cual presentará información sobre las transacciones netas que realizará este sector con el resto de la economía y contendrá, como mínimo, la siguiente información:

- a) Una síntesis del presupuesto general de la Administración provincial;
- b) Los aspectos básicos de los presupuestos de cada una de las empresas, sociedades y fondos fiduciarios del Estado Provincial;
- c) La consolidación de los recursos y gastos públicos y su presentación en agregados institucionales útiles para el análisis económico;
- d) Una referencia a los principales proyectos de inversión en ejecución de la administración pública provincial;
- e) Información de uso que se dará a los recursos financieros en aplicación a bienes y la prestación de los servicios y de los recursos humanos que se estiman utilizar;
- f) Un análisis de los efectos económicos de los recursos y gastos consolidados sobre el resto de la economía.

El presupuesto consolidado del sector público provincial será presentado al Poder Ejecutivo Provincial, antes del 31 de marzo del año de su vigencia. Una vez aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial será remitido para conocimiento de la Le-

gislatura Provincial.

Título III

Del sistema de crédito público

Artículo 56.- El crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones específicas.

Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado Provincial de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad provincial, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos.

Artículo 57.- El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y puede originarse en:

- a) La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo, constitutivos de un empréstito.
- b) La emisión y colocación de letras del tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero.
- c) La contratación de préstamos con instituciones financieras;
- d) La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de UN (1) ejercicio financiero posterior al vigente; siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente;
- e) El otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el período del ejercicio financiero;
- f) La consolidación, conversión y renegociación de otras deudas;

A estos fines podrá afectar recursos específicos, crear fideicomisos, otorgar garantías sobre activos o recursos públicos actuales o futuros, incluyendo todo tipo de tributos, tasas o contribuciones, cederlos o darlos en pago, gestionar garantías de terceras partes, contratar avales, fianzas, garantías reales o de cualquier otro modo mejorar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones contraídas o a contraerse.

No se considera deuda pública la deuda del Tesoro ni las operaciones que se realicen en el marco del artículo 82 de esta ley.

Artículo 58.- A los efectos de esta ley, la deuda pública se clasificará en interna y externa y en directa e indirecta.

Se considerará deuda interna, aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago

puede ser exigible dentro del territorio nacional. Por su parte, se entenderá por deuda externa, aquella contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio.

La deuda pública directa de la administración central es aquella asumida por la misma en calidad de deudor principal.

La deuda pública indirecta de la Administración central es constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía.

Artículo 59.- Ninguna entidad de la administración pública provincial podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa del órgano coordinador de los sistemas de administración financiera.

Artículo 60.- Las entidades de la administración provincial no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.

La ley de presupuesto general debe indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas:

- Tipo de deuda, especificando si se trata de interna o externa;
- Monto máximo autorizado para la operación;
- Plazo mínimo de amortización;
- Destino del financiamiento.

Si las operaciones de crédito público de la administración provincial no estuvieran autorizadas en la ley de presupuesto general del año respectivo, requerirán de una ley que las autorice expresamente.

Artículo 61.- En los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente de la administración pública emisor o contratante, el Poder Ejecutivo de la Provincia deberá solicitar opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos.

Artículo 62.- Cumplidos los requisitos fijados en los arts. 59 y 61 de esta ley, las empresas, fondos fiduciarios y sociedades del Estado Provincial podrán realizar operaciones de crédito público dentro de los límites que fije su responsabilidad patrimonial y de acuerdo con los indicadores que al respecto establezca la reglamentación. Cuando estas operaciones requieran de avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza de la administración central, la autorización para su otorgamiento debe estar prevista en la

ley de presupuesto general o en una ley específica.

Artículo 63.- El órgano coordinador de los sistemas de administración financiera fijará las características y condiciones no previstas en esta ley, para las operaciones de crédito público que realicen las entidades de la hacienda pública provincial.

Artículo 64.- Los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza, que cualquier ente público otorgue a personas ajenas a este sector, requerirán de una ley.

Artículo 65.- El Poder Ejecutivo Provincial podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.

Artículo 66.- Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realicen.

Las obligaciones que se derivan de las mismas no serán oponibles ni a la administración central ni a cualquier otra entidad contratante de la administración pública provincial.

Artículo 67.- El órgano coordinador de los sistemas de administración financiera tendrá la facultad de redistribuir o reasignar los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito público, siempre que así lo permitan las condiciones de la operación respectiva y las normas presupuestarias.

Artículo 68.- El Organismo Coordinador, Programador de la Inversión y Financiamiento de Crédito Público será el órgano rector del sistema de Crédito Público, con la misión de asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público.

Artículo 69.- En el marco del artículo anterior la Oficina Provincial de Crédito Público tendrá competencia para:

- a) Participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera que, para la hacienda pública provincial, elabore el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera;
- b) Coordinar las ofertas de financiamiento recibidas por el administración pública provincial;
- c) Tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público;
- d) Normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos, así como los de negociación, contratación y amortización de préstamos, en todo el ámbito de la administración pública

provincial;

e) Organizar un sistema de apoyo y orientación a las negociaciones que se realicen para emitir empréstitos o contratar préstamos e intervenir en las mismas;

f) Fiscalizar que los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito público se apliquen a sus fines específicos;

g) Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público, debidamente integrado al sistema de contabilidad gubernamental;

h) Establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y supervisar su cumplimiento;

i) Todas las demás que le asigne la reglamentación.

Artículo 70.- El servicio de la deuda estará constituido por la amortización del capital y el pago de los intereses, comisiones y otros cargos que eventualmente puedan haberse convenido en las operaciones de crédito público.

Los presupuestos de las entidades de la administración pública provincial deberán formularse previendo los créditos necesarios para atender el servicio de la deuda.

El Poder Ejecutivo Provincial podrá debitar de las cuentas bancarias de las Empresas y Sociedades del Estado Provincial que no cumplan en término el servicio de la deuda pública, el monto de dicho servicio y efectuarlo directamente, en virtud de lo que establece el artículo 52.

Título IV Del sistema de tesorería

Artículo 71.- El sistema de tesorería está compuesto por el conjunto de órganos, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación de los ingresos y en los pagos que configuran el flujo de fondos de la administración pública provincial, así como en la custodia de las disponibilidades que se generen.

Artículo 72.- La Tesorería General de la Provincia será el órgano rector del sistema de tesorería y, como tal coordinará el funcionamiento de todas las unidades o servicios de tesorería que operen en el sector público Provincial, dictando las normas y procedimientos conducentes a ello.

Artículo 73.- La Tesorería General tendrá competencia para:

a) Elaborar juntamente con la Dirección de Presupuesto la programación de la ejecución del presupuesto de la administración Provincial y programar el flujo de fondos de la administración central;

b) Centralizar la recaudación de los recursos

de la administración central y distribuirlos en las tesorerías de las unidades de organización, para que éstas efectúen el pago de las obligaciones que se generen;

c) Conformar el presupuesto de caja de los organismos descentralizados, supervisar su ejecución y asignar las cuotas de las transferencias que éstos recibirán de acuerdo con la ley general de presupuesto;

d) Administrar el sistema de caja única o de fondo unificado de la administración Provincial que establece el art. 80 de esta ley;

d) Emitir letras del Tesoro, en el marco del art. 80 de esta ley;

e) Ejercer la supervisión técnica de todas las tesorerías que operen en el ámbito de la administración pública Provincial;

f) Elaborar anualmente el presupuesto de caja del sector público y realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución;

g) Emitir opinión previa sobre las inversiones temporales de fondos que realicen las entidades de la administración pública Provincial en instituciones financieras del país o del extranjero;

h) Custodiar los títulos y valores de propiedad de la administración central o de terceros. que se pongan a su cargo;

i) Todas las demás funciones que en el marco de esta ley, le adjudique la reglamentación;

Artículo 74.- La Tesorería General estará a cargo de un tesorero general que será asistido por un subtesorero general. Ambos funcionarios serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial.

Para ejercer ambos cargos se requerirá título universitario en alguna de las ramas de las ciencias económicas y una experiencia en el área financiera o de control no inferior a cinco años.

Artículo 75.- El tesorero general dictará el reglamento interno de la Tesorería General de la Provincia y asignará funciones al subtesorero general.

Artículo 76.- Funcionará una Tesorería Central en cada unidad de organización y entidad de la administración Provincial. Estas tesorerías centralizarán la recaudación de las distintas cajas de su jurisdicción, recibirán los fondos puestos a disposición de las mismas y cumplirán los pagos que autorice el respectivo servicio administrativo.

Artículo 77.- Los fondos que administren las unidades de organización y entidades de la administración Provincial se depositarán en cuentas del sistema bancario a la orden conjunta del jefe del servicio administrativo y del tesorero o funcionario que haga sus veces.

Artículo 78.- El órgano central de los sistemas de administración financiera instituirá un siste-

ma de caja única o de fondo unificado, según lo estime conveniente, que le permita disponer de las existencias de caja de todas las jurisdicciones y entidades de la administración Provincial, en el porcentaje que disponga el reglamento de la ley.

Artículo 79.- Los órganos de los tres Poderes del Estado y la máxima autoridad de cada una de las entidades descentralizadas que conformen la administración Provincial, podrán autorizar el funcionamiento de fondos permanentes y/o cajas chicas, con el régimen y los límites que establezcan en sus respectivas reglamentaciones.

A estos efectos, las tesorerías correspondientes podrán entregar los fondos necesarios con carácter de anticipo, formulando el cargo correspondiente a sus receptores.

Artículo 80.- La Tesorería General de la Provincia podrá emitir letras del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije anualmente la ley de presupuesto general. Estas letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se emiten. De superarse ese lapso sin ser reembolsadas se transformarán en deuda pública y deben cumplirse para ello con los requisitos que al respecto se establece en el título III de esta ley.

Artículo 81.- Los organismos descentralizados, dentro de los límites que autorizan los respectivos presupuestos y previa conformidad de la Tesorería General de la Provincia, podrán tomar préstamos temporarios para solucionar sus déficit estacionales de caja, siempre que cancelen las operaciones durante el mismo ejercicio financiero.

Artículo 82.- El órgano coordinador de los sistemas de administración financiera dispondrá la devolución a la Tesorería General de la Provincia de las sumas acreditadas en las cuentas de las unidades de organización y entidades de la administración Provincial, cuando éstas se mantengan sin utilización por un período no justificado. Las instituciones financieras en las que se encuentran depositados los fondos deberán dar cumplimiento a las transferencias que ordene el referido órgano.

Título V

Del sistema de contabilidad gubernamental

Artículo 83.- El sistema de contabilidad gubernamental está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, valorar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de las entidades públicas.

Artículo 84.- Será objeto del sistema de con-

tabilidad gubernamental:

a) Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación económico-financiera de las unidades de organización y entidades;

b) Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera pública y para los terceros interesados en la misma;

c) Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean estas internas o externas;

d) Permitir que la información que se procese y produzca sobre el administración pública Provincial se integre al sistema de cuentas nacionales.

Artículo 85.- El sistema de contabilidad gubernamental tendrá las siguientes características generales:

a) Será común, único, uniforme y aplicable a todas las unidades ejecutoras, entidades de la administración Pública Provincial, acorde con el implementado o siguiendo las pautas del vigente y en marcha en la administración pública provincial aplicado a partir de la promulgación de la presente ley;

b) Permitirá integrar las informaciones presupuestarias, del Tesoro y patrimoniales de cada entidad entre sí y, a su vez, con las cuentas nacionales;

c) Expondrá la ejecución presupuestaria, los movimientos y situación del Tesoro y las variaciones, composición y situación del patrimonio de las entidades públicas;

d) Estará orientado a determinar los costos de las operaciones públicas;

e) Estará basado en principios y normas de contabilidad y aceptación general, aplicables en el estado provincia.

Artículo 86.- La Contaduría General de la Provincia será el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental, y como tal responsable de prescribir, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito de la administración pública Provincial.

Artículo 87.- La Contaduría General de la Nación estará a cargo de un contador general que será asistido por un subcontador general, debiendo ser ambos designados por el Poder Ejecutivo Provincial.

Para ejercer los cargos de contador general y de subcontador general, se requerirá título universitario de contador público con 10 años en el ejercicio profesional y preferentemente una experiencia anterior en materia financiero-contable en la administra-

ción pública provincial.

Artículo 88.- El contador general dictará el reglamento interno de la Contaduría General de la Provincia y asignará funciones al subcontador general.

Artículo 89.- La Contaduría General de la provincia tendrá competencia para:

a) Aplicar las normas contables profesionales de aplicación a la contabilidad de la Hacienda Pública. En ese marco establecerá la metodología contable a aplicar y la periodicidad, estructura y características de los estados contables financieros a producir por las entidades públicas;

b) Cuidar que los sistemas contables que prescriba puedan ser desarrollados e implantados por las entidades, conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de información de su dirección;

c) Asesorar y asistir, técnicamente a todas las entidades de la administración pública Provincial en la implantación de las normas y metodologías que prescriba;

d) Coordinar el funcionamiento que corresponde instituir para que se proceda al registro contable primario de las actividades desarrolladas por las unidades de organización de la administración central y por cada una de las demás entidades que conforman la administración pública Provincial;

e) Llevar la contabilidad general de la administración central, consolidando datos de los servicios de la unidades de organización, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesarias y producir anualmente los estados contable-financieros para su remisión al Tribunal de Cuentas de la Provincia;

f) Administrar un sistema de información financiera que permanentemente permita conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativo, económico y financiero de la administración central, de cada entidad descentralizada y de la administración pública provincial en su conjunto;

g) Elaborar las cuentas económicas de la administración pública provincial, de acuerdo con el sistema de cuentas provinciales;

h) Preparar anualmente la cuenta de inversión;

i) Mantener el archivo general de documentación financiera de la administración provincial;

j) Todas las demás funciones que le asigne el reglamento.

Artículo 90.- Dentro de los dos (2) meses de concluido el ejercicio financiero, las entidades de la administración pública Provincial, excluida la administración central, deberán entregar a la Contaduría General de la Provincia los estados contables financieros de su gestión anterior, con las notas y anexos

que correspondan.

Artículo 91.- La Contaduría General de la Provincia organizará y mantendrá en operación un sistema permanente de compensación de deudas intergubernamentales, que permita reducir al mínimo posible los débitos y créditos existentes entre las entidades de la administración pública provincial.

Artículo 92.- La cuenta de inversión, deberá contener:

a) Los estados de ejecución del presupuesto de la administración Provincial, a la fecha de cierre del ejercicio;

b) Los estados que muestren los movimientos y situación del Tesoro de la administración central;

c) El estado actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta;

d) Los estados contable-financieros de la administración central;

e) Un informe que presente la gestión financiera consolidada de la administración pública de la Provincia durante el ejercicio y muestre los respectivos resultados operativos económicos y financieros;

La cuenta de inversión contendrá además comentarios sobre:

I - El grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto;

II - El comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la producción pública;

III - La gestión financiera de la administración pública de la provincia

Título VI

Del sistema de control externo

Capítulo I

Del Tribunal de Cuentas de la Provincia

Artículo 93.- Asignar al Tribunal de Cuentas de la Provincia la función de órgano de control externo de la hacienda pública provincial.

Artículo 94.- El sistema de control interno estará integrado por unidades de auditoría interna que serán creadas en cada unidad ejecutora o de organización y en las entidades que dependan del Poder ejecutivo provincial. Estas unidades dependerán jerárquicamente de la máxima autoridad de cada organismo y actuarán en coordinación técnica con el Tribunal de Cuentas de la provincia.

Las empresas, sociedades del Estado y los fondos fiduciarios deberán tener dentro de su esquema organizativo unidades de auditoría interna, con las mismas características enunciadas para las unidades ejecutoras y entidades que dependan del Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 95.- La autoridad superior de cada

unidad ejecutora o entidad dependiente del Poder Ejecutivo Provincial, será responsable del mantenimiento de un adecuado sistema de control interno que incluirá los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimiento de cada organismo y la auditoría interna.

Artículo 96.- La auditoría interna es un servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades a que hace referencia esta ley, realizada por los auditores integrantes de las unidades de auditoría interna. Las funciones y actividades de los auditores internos deberán mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen.

Artículo 97.- Es materia del Tribunal de cuentas el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal y de gestión, así como el dictamen sobre los estados contables financieros de la administración central, organismos descentralizados, empresas, sociedades del Estado y fondos fiduciarios, entes reguladores de servicios públicos, y los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos.

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia dispondrá sobre la modalidad y alcances de la puesta en práctica del sistema instituido en esta ley con relación al Poder Judicial Provincial.

A los efectos del control externo posterior acordará la intervención del Tribunal de cuentas de la Provincia, quien deberá prestar su colaboración.

Artículo 98.- Son funciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia:

a) Dictar y aplicar normas de control interno en coordinación con las máximas autoridades de las unidades de organización y entidades comprendidas en esta ley;

b) Emitir y supervisar la aplicación por parte de las unidades correspondientes, de las normas de auditoría interna;

c) Controlar el cumplimiento de las normas contables, emanadas de la contaduría general de la provincia;

d) Supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno;

e) Supervisar, orientar y aprobar los planes de trabajo de las unidades de auditorías internas;

f) Realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las unidades de organización y de las entidades bajo su control, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. Estos trabajos podrán ser rea-

lizados directamente o mediante la contratación de profesionales independientes de auditoría.

g) Fijar los requisitos de idoneidad técnica que deberá reunir el personal de las unidades de auditoría interna y los profesionales independientes de auditoría referidos en este artículo y las normas técnicas a las que deberá ajustarse el trabajo de estos;

h) Comprobar la puesta en práctica, por los organismos controlados, de las observaciones y recomendaciones efectuadas por las unidades de auditoría interna y acordadas con los respectivos responsables;

i) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con la utilización de los recursos del Estado, una vez dictados los actos correspondientes;

j) Formular directamente a los órganos comprendidos en el ámbito de su competencia, recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, la correcta aplicación de las reglas de auditoría interna y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia;

k) Auditar, por sí o mediante profesionales independientes de auditoría, a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito conforme con los acuerdos que, a estos efectos, se llegue entre la provincia y dichos organismos;

l) Examinar y emitir dictámenes sobre los estados contables financieros de los organismos de la administración central, preparados al cierre de cada ejercicio.

m) Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público y efectuar los exámenes especiales que sean necesarios para formarse opinión sobre la situación de este endeudamiento. A tales efectos puede solicitar al Ministerio de Producción y Finanzas la información que estime necesaria en relación a las operaciones de endeudamiento interno y externo.

n) Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica que solicite la Legislatura Provincial y atender los pedidos de asesoría que le formule el Poder Ejecutivo Provincial y las máximas autoridades de las unidades de organización y entidades en materia de control.

o) Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados contables financieros, así como el grado de cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las empresas del Estado.

p) Verificar que los órganos de la Administración mantengan el registro patrimonial de sus funcionarios públicos. A tal efecto, todo funcionario público con rango de ministro; secretario, subsecretario, director provincial, máxima autoridad de orga-

nismos descentralizados o integrante de directorio de empresas y sociedades del Estado, está obligado a presentar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de asumir su cargo o de la sanción de la presente ley una declaración jurada patrimonial, con arreglo a las normas y requisitos que disponga el registro, la que deberá ser actualizada anualmente y al cese de funciones.

q) Poner en conocimiento del Gobernador de la Provincia los actos que hubieren acarreado o estimen puedan acarrear perjuicios para el patrimonio público, el que intervendrá con jurisdicción y competencia administrativa de carácter exclusivo, a los efectos de instaurar juicio de responsabilidad.

Artículo 99.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia queda facultado para contratar estudios de consultoría y auditoría bajo específicos términos de referencia, planificar y controlar la realización de los trabajos, así como cuidar la calidad del informe final.

Artículo 100.- El tribunal de cuentas de la provincia podrá requerir de la contaduría general de la provincia y de los organismos comprendidos en el ámbito de su competencia, la información que le sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Para ellos todos los agentes y/o autoridades de la administración pública provincial prestarán su colaboración considerándose la conducta adversa como falta grave.

Artículo 101.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia deberá informar:

- a) Al Gobernador de la provincia sobre la gestión financiera y operativa de los organismos comprendidos dentro del ámbito de su competencia;
- b) A la opinión pública, en forma anual.

Artículo 102.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia convendrá con las unidades de organización y entidades que en virtud de lo dispuesto en esta ley queden alcanzadas por su ámbito de competencia, la oportunidad y modalidades de la puesta en práctica del sistema incluido en esta Ley.

Artículo 103.- La Legislatura de Córdoba podrá extender su competencia de control externo a las entidades públicas no estatales o a las de derecho privado en cuya dirección y administración tenga responsabilidad el Estado Provincial, o a las que éste se hubiere asociado incluso a aquellas a las que se les hubieren otorgado aportes o subsidios para su instalación o funcionamiento y, en general, a todo ente que perciba, gaste, o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o con una finalidad pública.

Artículo 104.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia estará a cargo de cinco (5) vocales con título en el área de ciencias económicas o derecho, con probada especialización en administración financiera y control.

Es el órgano de representación y de ejecución de las decisiones de los vocales.

Capítulo II

De la responsabilidad

Artículo 105.- Toda persona física que se desempeñe en las unidades de organización o entidades sujetas a la competencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia, responderá de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial.

Artículo 106.- Los actos y hechos violatorios de disposiciones legales reglamentarias, compartirán responsabilidad solidaria para quienes lo dispongan, ejecuten o intervengan:

Quienes reciban ordenes de hacer o no hacer, deberán advertir por escrito a su respectivo superior sobre toda posible infracción que traiga aparejada el cumplimiento de dichas ordenes.

De lo contrario incurrirán en responsabilidad exclusiva si aquel no hubiese podido conocer la causa de la irregularidad sino por su advertencia u observación.

Artículo 107.- La acción tendiente a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de todas las personas físicas que se desempeñen en el ámbito de los organismos y demás entes premencionados en los arts. 97 y 103 de esta ley, prescribe en los plazos fijados por el Código Civil contados desde el momento de la comisión del hecho generador del daño o de producido éste si es posterior, cualquiera sea el régimen jurídico de responsabilidad patrimonial aplicable con estas personas.

Título VII

Disposiciones varias

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 108.- El Tribunal de Cuentas queda facultados para suscribir convenios que posibiliten reasignar los funcionarios de las unidades de organización, entidades, sociedades, fondos fiduciarios y empresas del estado. El personal de los organismos de control reemplazados conservarán el nivel jerárquico alcanzado, manteniéndose los derechos que hagan a la representación y defensa de los intereses colectivos del personal.

Capítulo II

Disposiciones transitorias

Artículo 109.- Las disposiciones contenidas en esta ley deberán tener principio de ejecución a partir del primer ejercicio financiero que se inicie con posterioridad a la sanción de la misma.

El Poder Ejecutivo Provincial deberá establecer los cronogramas y metas temporales que permitan lograr la plena instrumentación de los sistemas de presupuestos, crédito público, tesorería, contabilidad y control internos previstos en esta ley, los cuales constituyen un requisito necesario para la progresiva constitución de la estructura de control interno y externo normada precedentemente.

Artículo 110.- Hasta tanto se opere la efectiva puesta en práctica de los sistemas de administración financiera y control establecidos en esta ley, continuarán aplicándose las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la fecha de entrada en vigor de la misma; las que resultarán de aplicación para los procedimientos en trámite cuya sustanciación se operará por áreas de las entidades creadas por la presente, a las cuales se le deberá asignar ese cometido.

Artículo 111.- El Poder Ejecutivo Provincial, en el plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, presentará a la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y otro que organice la administración de bienes del Estado.

Artículo 112.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley en un plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de su promulgación.

Los artículos 93 a 104 ambos inclusive, no serán objeto de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Provincial.

Capítulo III Disposiciones finales

Artículo 113.- Se derogan expresamente los siguientes ordenamientos legales:

a) Ley 7631, capítulos 1 al 5 (Art. 1 al 95 inclusive) capítulo 6 (artículos 96 al 105 inclusive) capítulo 9 (Art. 136 al 148 inclusive) capítulo 10 (Art. 149 al 155 inclusive) capítulo 11 (Art. 156 al 161 inclusive) capítulo 12 (Art. 162 al 168 inclusive), 19 de noviembre de 1987;

b) Decreto reglamentario 9243 de 23 de marzo de 1988 en lo referente a la ley 7631;

c) El decreto 4688 del 21 de febrero de 1992;

d) El decreto 525 del 2 de mayo de 1995 y su anexo.

e) Todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Artículo 114.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Roberto Urquía, Carlos Pizzorno.

FUNDAMENTOS

La presentación de este proyecto de ley, implica una honda satisfacción para los legisladores firmantes, ya que los autores tenemos la íntima convicción de que humildemente estamos tratando de aportar un instrumento, que ayudará a mejorar, la situación global de la administración financiera del Gobierno y los sistemas de control de la hacienda pública provincial.

En primer lugar, hacemos referencia que este proyecto, ha tenido como punto de orientación, la legislación nacional referida al tema, porque creemos conveniente unificar los criterios legislativos de la provincia en relación a la Nación.

En cuanto a la organización estructural del proyecto, en el primer título se establecen las disposiciones generales, que proponemos regulen la administración financiera resaltando en especial los sistemas que integran la misma.

Posteriormente se establecen normas, para cada uno de los sistemas que componen la administración, empezando por el sistema presupuestario, y su organización, se establecen pautas para la estructura de la Ley de Presupuesto General, y su formulación. Además se normativiza, cómo debe ser la ejecución del presupuesto, el cierre de cuentas del mismo, y la evaluación de la ejecución presupuestaria. Por último dentro de este análisis por sistemas, se incluye el presupuesto consolidado del sector público provincial.

En otro Título, se define el subsiguiente sistema, cual es de crédito público, estableciendo las normas, organismo y operatorias que el estado provincial, deberá adoptar, con el objeto de captar medios de financiamientos.

En el título siguiente se regulan aspectos del sistema de tesorería, estableciendo las normas, órgano y el procedimientos que intervienen en la recaudación de los ingresos y en los pagos que configuran el flujo de fondos de la hacienda pública provincial.

En relación al sistema de contabilidad gubernamental, se deja en claro que se establece el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos, que se van a utilizar para valorar, procesar y exponer los hechos económicos que pueden afectar el patrimonio de las entidades públicas. En particular se procura dejar sentadas bases sólidas y de aplicación obligatoria de un sistema integral

contable de partida doble.

Luego se buscan establecer pautas para los sistemas de control, tanto para el Control interno, que estará integrado por unidades de auditoría interna, que serán creadas en cada unidad ejecutora o de organización, y en las entidades que dependan del Poder Ejecutivo, como para el control externo, donde se rejerarquiza y se le amplían las funciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Por último, dedicamos especial consideración al tema relacionado con la responsabilidad de los funcionarios.

Teniendo, repetimos, la íntima convicción de estar aportando una idea disparadora de una discusión que enriquecerá esta compleja temática, que nos involucra a todos quienes estamos en la función pública, solicitamos por estas razones, y por las que se verterán al momento de su tratamiento en el recinto, la aprobación de esta iniciativa por parte de nuestros pares.

Roberto Urquía, Carlos Pizzorno.

**PROYECTO DE LEY - 02235/E/02
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY**

**LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Y DEL CONTROL INTERNO DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO PROVINCIAL**

**TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO 1
Alcance de la Ley**

La presente ley establece y regula la administración financiera y el control interno de la administración general del Estado Provincial.

**ARTÍCULO 2
Administración Financiera – Definición**

La Administración financiera comprende el conjunto de subsistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos, que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado.

**ARTÍCULO 3
Control – Definición**

El control en el sector público provincial comprende la supervisión integral de las operaciones

de gestión administrativa de las que deriven transformaciones o variaciones en la hacienda pública y el régimen de responsabilidad basado en la obligación de los funcionarios de lograr los resultados previstos y rendir cuentas de su gestión.

**ARTÍCULO 4
Objetivos de la Ley**

A los fines de su interpretación y reglamentación deberán tenerse presentes los siguientes objetivos de esta ley, a saber:

1.- Garantizar la aplicación de los principios de transparencia, regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos;

2.- Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos de la administración pública provincial;

3.- Desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable sobre la evolución financiera de la administración pública provincial, útil para la dirección de las jurisdicciones y entidades y para evaluar la gestión de los responsables de cada una de las áreas administrativas;

4.- Estructurar el sistema de control interno del sector público provincial;

5.- Establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada jurisdicción o entidad de la administración pública provincial, respetar y mantener el subsistema contable y los procedimientos que se establezcan para el control de actividades institucionales y evaluación de sus resultados;

6.- Desarrollar un subsistema de tesorería que permita un aprovechamiento eficiente de las disponibilidades del tesoro provincial;

7.- Desarrollar un subsistema presupuestario que permita una clara identificación de las relaciones insumo producto y permita la evaluación física y financiera del presupuesto.

**ARTÍCULO 5
Estructura del sector público provincial
no financiero**

El sector público provincial no financiero comprende:

I. Administración general centralizada:
Poder Ejecutivo
Ministerios
Secretarías de Estado
Poder Legislativo
Poder Judicial
Tribunal de Cuentas de la Provincia
Defensoría del Pueblo

II. Entidades Descentralizadas
 2. Empresas y Agencias
 Empresas públicas
 Con administración provincial
 Concesionadas
 Sociedades Anónimas (con participación estatal)
 Sociedades Anónimas (del Estado)
 Con participación mayoritaria del capital;
 Con participación mayoritaria de la voluntad societaria
 Sociedades de Economía Mixta
 Sociedades del Estado
 Empresas y Entes residuales
 Entes Autárquicos
 Otros Entes Estatales
 El Poder Ejecutivo aprobará un clasificador presupuestario institucional que podrá tener variaciones en la medida que responda globalmente a la apertura aquí enunciada, siendo de aplicación obligatoria los conceptos incluidos como "administración general" y "empresas" y en tanto permita individualizar cada jurisdicción, entidad descentralizada y empresa a los efectos de aplicar la clasificación antes expuesta.

ARTICULO 6

Entidad y Jurisdicción

En el contexto de esta ley se entenderá por entidad a toda organización pública con personalidad jurídica, patrimonio propio e individualización presupuestaria; y por jurisdicción a cada una de las siguientes unidades institucionales:

Poder Ejecutivo;
 Poder Legislativo;
 Poder Judicial;
 Ministerios y Entidades descentralizadas;
 Tribunal de Cuentas y Defensoría del Pueblo.

Se entenderá por administración central, a los poderes del Estado Provincial enumerados en la Constitución Provincial y a las jurisdicciones que la integran, excepto a las entidades descentralizadas y empresas contempladas en el artículo 5 (Inciso 2°) de la presente ley.

Se entenderá que una entidad posee personalidad jurídica y patrimonio propio aunque dependa funcionalmente de una jurisdicción o un poder.

Se entenderá por ente contable:

A la administración central;

A cada una de los organismos o entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio.

ARTICULO 7

Ambito de aplicación

Esta ley es aplicable a todos los organismos o entidades citados en el artículo anterior componentes del sector público provincial no financiero.

Para las empresas esta ley se aplicará en lo que específicamente a ellas se refiere y en forma supletoria, en tanto sus leyes orgánicas o estatutos no prevean expresamente otras disposiciones.

Sin perjuicio de lo expuesto, las entidades que componen el sector público no financiero están obligadas a someterse al control jerárquico de la administración general de acuerdo a lo que dispongan sus Leyes orgánicas. Como mínimo están obligadas a informar sobre su situación económica, financiera y patrimonial de acuerdo a la reglamentación que disponga el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Producción y Finanzas.

ARTICULO 8

Sistema Integrado de Administración Financiera

La administración financiera estará integrada por los siguientes subsistemas, que deberán estar interrelacionados entre sí:

Subsistema de Presupuesto;

Subsistema de Tesorería;

Subsistema de Contabilidad.

El subsistema de crédito público quedará incluido en todas las formas del uso del crédito, su circulación, rescate, amortización y cancelación que autorice contratar la ley anual de presupuesto. Asimismo quedan incluidas todas las formas de uso del crédito y cancelación que tengan por objetivo financiar los déficit estacionales de caja.

El subsistema de inversiones públicas quedará incluido en todos aquellos aspectos que definan el detalle de proyectos y obras e inversiones previstas.

El control interno de la hacienda pública estará a cargo de la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia y el externo corresponderá al Tribunal de Cuentas de la Provincia. El control externo estará regulado por su ley específica.

Los subsistemas estarán a cargo de unidades rectoras centrales (UreCe) que dependerán directamente del órgano que ejerza la fijación de políticas, la coordinación y supervisión de los mismos.

ARTICULO 9

Organo Coordinador de los Subsistemas

El Ministerio de la Producción y Finanzas será el responsable de la coordinación, supervisión y mantenimiento de los subsistemas contemplados en el artículo 8 de esta ley que integran la administra-

ción financiera de la hacienda pública.

ARTICULO 10

Criterios metodológicos

A los fines de su interpretación y reglamentación deberán tenerse presentes los siguientes criterios metodológicos básicos establecidos en esta ley, a saber:

Interrelación sistémica

Centralización normativa a cargo de las unidades rectoras centrales, mediante la definición de objetivos, elaboración de pautas, metodología y procedimientos generales. Las unidades rectoras centrales (UreCe) actuarán bajo la supervisión de la autoridad mencionada en el artículo 9.

Descentralización operativa, asignando a las unidades operativas periféricas, de cada poder, jurisdicción y entidad, la ejecución de los subsistemas de la presente ley, de acuerdo a la reglamentación que se dicte, la consiguiente responsabilidad para todas ellas de cumplir con esta ley, su reglamentación y las normas técnicas que emitan los respectivos órganos rectores.

ARTICULO 11

Coordinación de los Subsistemas en los Poderes, Jurisdicciones y Entidades

En cada uno de los poderes, jurisdicciones y entidades funcionará –al menos- un servicio administrativo. En cada uno de los servicios administrativos funcionarán las unidades operativas periféricas (UNOPe) que mantendrán relación directa con las unidades rectoras centrales de los respectivos subsistemas, a través de la autoridad del mencionado servicio administrativo, a menos que esta ley disponga lo contrario.

TITULO II

SISTEMAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CAPITULO I

PRESUPUESTO

El presente capítulo establece los principios, órganos, normas y procedimientos que regirán el proceso presupuestario de los poderes, jurisdicciones y entidades que conforman la hacienda pública.

SECCION I

Definición del Subsistema

ARTICULO 12

Concepto

El presupuesto es el instrumento constitucional de órdenes, límites, garantías, competencias y responsabilidades, que prevé los recursos pertinentes, autoriza las inversiones y gastos. Fija el número

de agentes públicos y explicita los objetivos que deben ser cuantificados cuando la naturaleza de los mismos lo permita.

SECCION II

Normas Técnicas Comunes

ARTICULO 13

Duración del ejercicio

El ejercicio económico-financiero del sector público provincial comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.

ARTICULO 14

Integración del Presupuesto

El presupuesto de recursos estará integrado por su correspondiente cálculo, el cual contendrá la enumeración y monto de los diferentes rubros de ingresos corrientes, de capital y otras fuentes de financiamiento representen o no entradas de dinero efectivo al tesoro. Las denominaciones de los diferentes rubros de recursos deberán ser lo suficientemente específicas como para identificar las respectivas fuentes.

Para la administración central y organismos descentralizados, se considerarán como recursos del ejercicio todos aquellos que se prevén recaudar durante el período en cualquier organismo, oficina o agencia autorizadas a percibirlos, en nombre de aquella, con independencia de la fecha en que se origine la obligación de pago o la liquidación.

El sector empresas y otros entes seguirán el criterio establecido en el artículo 41 de la presente ley.

El presupuesto de gastos contendrá todos los gastos corrientes y de capital, a ser financiados mediante impuestos tasas y otras contribuciones obligatorias, establecidas mediante gravámenes específicos, precios y tarifas por producción de bienes y prestación de servicios de la administración general y el endeudamiento público.

Todo gasto que se devengue en el período deberá contar previamente con el registro de su respectivo compromiso, salvo en aquellos casos en donde ambas etapas se registren en forma simultánea.

A los fines de la presente ley se considerarán gastos del ejercicio y por lo tanto ejecutado el presupuesto, del sector público provincial no financiero, todos aquellos créditos que se devenguen en el período, se traduzcan o no en salidas efectivas de dinero.

Las operaciones de financiamiento comprenderán todas las fuentes y aplicaciones financieras que se originen durante el ejercicio financiero.

Se denominan fuentes financieras a todos

aquellos ingresos que se adicionan a los provenientes de recursos propios y de capital. Constituyen fuentes financieras las que provengan de la disminución de activos financieros y de incrementos de pasivos, de la administración general.

Por aplicaciones financieras se entenderá a todos los incrementos de activos financieros, y la disminución de pasivos, de la administración general.

Los aportes de capital y préstamos que realice la administración general al sector público no se considerarán aplicaciones financieras.

Los recuperos de préstamo, la venta de acciones y participaciones de capital que realice la administración general al sector público no se considerarán fuentes financieras.

Los activos no financieros producto de donaciones o de transferencias de empresas residuales que se incorporen a la administración general se registrarán como ingreso de capital y simultáneamente el egreso como erogación de capital.

Cuando en los presupuestos de las jurisdicciones y entidades públicas se incluyan créditos para contratar obras o adquirir bienes y servicios, cuyo plazo de ejecución exceda al ejercicio financiero, se deberá incluir en los mismos información sobre los recursos invertidos en años anteriores, los que se invertirán en el futuro y sobre el monto total del gasto, así como los respectivos cronogramas de ejecución física.

ARTICULO 15

Afectaciones de recursos a gastos específicos

No se podrá destinar el producto de ningún recurso con el fin de atender específicamente el pago de determinados gastos, con excepción de:

Los provenientes de operaciones de crédito público,

Los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado Provincial con destino específico.

Los que por leyes nacionales o convenios interjurisdiccionales tengan afectación específica y de dicha afectación dependa la percepción del recurso,

Los que por leyes especiales de carácter provincial sean extraordinarios u ordinarios y estén destinados a atender gastos de carácter no permanente, o aquellos destinados a dar participación a Municipalidades y Comunas,

Los que constituyan recursos propios de los organismos descentralizados y empresas y otros entes públicos.

Quedarán sin efecto las afectaciones o auto-

rizaciones para afectar recursos a gastos determinados que no sean incluidas de manera explícita en la ley anual de presupuesto.

No podrán afectarse recursos que tenga por objetivo atender específicamente el pago de gastos que se deban erogar aún si los recursos afectados sean insuficientes, excepto que se trate de recursos propios de organismos descentralizados, desde la puesta en vigencia de la presente ley.

Toda afectación de recursos a gastos específicos deberá ser incluida en el presupuesto general, no admitiéndose su funcionamiento extra presupuestario.

Los créditos que prevea gastar en el ejercicio deberán contar con su respectivo financiamiento.

La utilización del crédito sólo se podrá hacer efectiva en la medida que los recursos previstos sean recaudados y sólo se podrán ejecutar gastos hasta el límite de los ingresos disponibles de los recursos específicos destinados a financiarlos.

FACULTASE al Poder Ejecutivo a disponer la apropiación durante el ejercicio al tesoro provincial como rentas de libre disponibilidad de aquellos recursos recaudados que excedan los gastos que se preveía atender con ellos, en el período mencionado, siempre que no exista la necesidad de incrementar tales gastos.

SECCION III Organización

ARTICULO 16

Unidad Rectora Central – Presupuesto e Inversión Pública

La Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas será la unidad rectora central del subsistema "Presupuesto" de la administración pública provincial y del sistema de "Inversión Pública", de acuerdo a los alcances que prevé esta ley para dicho subsistema.

La Dirección de Presupuesto e Inversiones Públicas funcionará bajo la coordinación de un Director General.

El Director es el Jefe de la Repartición, tiene a su cargo el gobierno interno de la misma y ejerce su representación.

El Director General será secundado por un Director, que compartirá con él las tareas diarias de despacho y conducción, será su reemplazante natural en caso de ausencia o impedimento para el ejercicio de sus funciones.

Para acceder a los cargos de Director General y Director se requerirá título universitario en alguna de las carreras de profesional en Ciencias Eco-

nómicas y acreditar por lo menos un total de cuatro (4) años y dos (2) años, respectivamente, de ejercicio de la profesión. Sus remuneraciones serán equivalentes a la del cargo Director General y Director, respectivamente.

ARTICULO 17

Competencias

La Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas tendrá las siguientes competencias:

Participar en la formulación de las pautas presupuestarias basadas en la política financiera que, para el sector público, elabore el Poder Ejecutivo;

Dictar las normas técnicas, formularios e instructivos para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones y evaluación de los presupuestos de la administración general, en forma conjunta con los demás órganos creados por la presente ley cuando corresponda;

Analizar los anteproyectos de presupuesto y proponer los ajustes que considere necesarios;

Formular y proponer los aspectos financieros del plan provincial de inversión pública;

Preparar el proyecto de ley del presupuesto general y fundamentar su contenido;

Formular la programación de la ejecución presupuestaria en forma conjunta con la unidad rectora central del subsistema de tesorería;

Intervenir en las modificaciones al presupuesto, mediante el análisis y evaluación de la ejecución y del avance físico;

Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos por esta ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas;

Asesorar, en materia presupuestaria, a todos los organismos del sector público regidos por esta ley y difundir los criterios básicos tendientes a compatibilizar el subsistema presupuestario de los municipios y comunas;

Determinará el plan de cuentas contable y clasificador presupuestario, que será único y de uso obligatorio para toda la administración; sin perjuicio de las desagregaciones que puedan incorporarse a propuesta de los órganos rectores de los restantes subsistemas;

Realizará un análisis de los resultados físicos y financieros obtenidos de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la presente ley.

Las demás que le confiera la presente ley y su reglamento.

SECCION IV

Formulación y Aprobación

ARTICULO 18

Contenido del Presupuesto

El presupuesto general de gastos y cálculo de recursos comprenderá a los poderes, jurisdicciones, entidades y organismos que integran la administración general y contendrá la totalidad de los ingresos y gastos previstos para el ejercicio, así como las operaciones de financiamiento. Estos conceptos figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí.

El mismo deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

Cálculo de recursos de la administración central y de cada uno de los organismos descentralizados, clasificados por rubros;

Presupuesto de gastos de cada una de las jurisdicciones y de cada organismo descentralizado, los que identificarán la producción de bienes y servicios y los créditos presupuestarios;

Créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión que se prevén ejecutar;

Resultados de las cuentas de ahorro e inversión para la administración central, para cada organismo descentralizado y para el total de la administración general;

Expondrá el déficit o superávit del ejercicio;

Anexo de información adicional;

La reglamentación establecerá las técnicas y clasificaciones presupuestarias que serán utilizadas como así también el alcance y la modalidad de la información de producción de bienes y servicios.

ARTICULO 19

Estructura

El presupuesto adoptará la estructura que demuestre el cumplimiento de las funciones del Estado, políticas, planes, programas de acción y producción de bienes y servicios que integran la administración general, así como la incidencia económica y financiera de los gastos y recursos, la vinculación de los mismos con sus fuentes de financiamiento y la distribución geográfica de los gastos previstos.

La Ley constará de la siguiente estructura:

Capítulo I. Disposiciones Generales;

Capítulo II. Disposiciones Específicas;

Otras Disposiciones.

Adicionalmente el proyecto de ley de presupuesto en planillas anexas según el clasificador de cuentas aprobado, especificará:

Análisis global del gasto;

El número de cargos de la planta de personal y horas cátedras;

El resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese período en sus cuentas corrientes y de capital;

Las metas y objetivos esperados en la producción programada de bienes y servicios;

La distribución del gasto;

El programa de operaciones de crédito público;

Las metas de recaudación y costo fiscal de los sistemas de promoción e incentivo fiscal;

La incidencia y conveniencia de los sistemas de promoción fiscal e incentivo fiscal, detallando la zonificación más adecuada y prever el impacto en las finanzas públicas;

El Plan de inversión pública;

Incorporará los presupuestos de las empresas y otros entes públicos en capítulos anexos. La metodología de elaboración y exposición de la información deberá respetar las disposiciones previstas de la presente ley según Sección VIII.

El Poder Ejecutivo presentará, conjuntamente con el proyecto de presupuesto, proyecciones de recursos y gastos plurianuales sobre los Incisos 6, 7 y 8 del presente artículo.

ARTICULO 20

Disposiciones generales

Las disposiciones generales constituyen las normas complementarias a la presente Ley que regirán para cada ejercicio financiero.

Contendrán normas que se relacionen con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte.

Las planillas anexas contienen los cuadros agregados que permitan una visión global del presupuesto y sus principales resultados.

La ley de presupuesto no podrá contener disposiciones de carácter permanente, reformar o derogar leyes vigentes; crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos, cambiar la organización o estructura de la administración cuyas actividades deben ser fijadas por leyes específicas.

Las normas complementarias que regirán para cada ejercicio financiero, disposiciones contenidas en la presente Ley no serán alteradas por la ley de presupuesto, constituyendo estas últimas, disposiciones de carácter transitorio.

ARTICULO 21

Formulación

El Poder Ejecutivo fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación del proyecto de ley de presupuesto en el marco de los planes y políticas provinciales.

El órgano rector confeccionará el proyecto de presupuesto, previa realización de los ajustes que resulte necesario introducir, sobre la base de:

La proyección del presupuesto en ejecución, más visión, misión, objetivos y cuantificación de metas, preparado por las unidades operativas periféricas presupuestarias, elevados a término, a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas por los titulares de las jurisdicciones y entidades;

Las jurisdicciones y entidades deberán ajustar sus propuestas a la ejecución analizada del presupuesto en ejecución más los nuevos programas o actividades con financiamiento garantizado.

Sobre la base de la proyección del presupuesto en ejecución, preparado por el órgano rector, el Poder Ejecutivo remitirá el proyecto definitivo a la Legislatura.

ARTICULO 22

Presentación a la Legislatura

El Poder Ejecutivo presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Legislatura bajo los términos previstos por el artículo 144 (Inciso 11°) de la Constitución Provincial, acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar, las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y gastos, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportunos.

ARTICULO 23

Modificación al Proyecto de Ley de Presupuesto General

Presentado el proyecto de presupuesto general en los términos del artículo que antecede, cualquier modificación que se conceptúe indispensable introducir desde la fecha de su remisión y antes de su sanción será comunicado a la Legislatura.

Todo incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, deberá contar con el financiamiento respectivo.

ARTICULO 24

Presupuesto prorrogado

Si al comenzar el ejercicio financiero no se hubiera sancionado el presupuesto general, regirá el que estaba en vigencia al cierre del ejercicio anterior, con excepción de los créditos y recursos previstos por una sola vez cuya finalidad hubiera sido satisfecha. El presupuesto prorrogado no podrá incrementar el déficit del presupuesto en vigencia al cierre y en su caso ajustarlo hasta el nivel que se hubiera comprometido por leyes precedentes. Deberán in-

cluirse los créditos indispensables para el servicio de la deuda del nuevo ejercicio y el saldo no utilizado de las autorizaciones de endeudamiento aprobadas en el presupuesto prorrogado.

El Poder Ejecutivo podrá limitar el uso de determinados créditos, sin que se resientan los servicios, hasta la sanción del nuevo presupuesto. Dicha limitación deberá ser realizada sobre la base de la proyección de recursos para el nuevo ejercicio.

Si al sancionarse el nuevo presupuesto general y en virtud de la prórroga del anterior, se hubieran efectuado gastos cuyos créditos no figuran en el nuevo presupuesto o fueran insuficientes, se dispondrán las modificaciones pertinentes para su regularización, con comunicación a la Legislatura Provincial.

Las jurisdicciones y entidades del sector público provincial quedan obligados a ejecutar el gasto desagregado hasta el nivel que contempla el clasificador de cuentas presupuestarias aprobado, aunque la distribución analítica de créditos prevea un nivel más agregado de asignación de crédito.

La metodología para introducir ajustes por parte del Poder Ejecutivo al presupuesto que estuvo en vigencia el año anterior, para la administración central y de los organismos descentralizados, debe prever como mínimo:

En los presupuestos de recursos:

Eliminará los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente y aquellos previstos por una sola vez o cuya finalidad hubiera sido satisfecha;

Suprimirá los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas, en la cuantía en que fueron utilizadas;

Excluirá los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso que el presupuesto que se está ejecutando hubiera previsto su utilización;

Incluirá los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución, cuya percepción se prevea ocurrirá en el ejercicio.

En los presupuestos de gastos:

Eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines y aquellos previstos por una sola vez o cuya finalidad hubiera sido satisfecha.

Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud de compromisos por mutuos preexistentes.

Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios.

La reglamentación podrá determinar una metodología alternativa a la expuesta sin alterar los criterios enunciados.

SECCIÓN V

Plan de Inversiones Públicas

ARTÍCULO 25

Incorporación al presupuesto.

El plan de inversiones públicas formará parte del proyecto de ley de presupuesto general de la administración general.

ARTÍCULO 26

Detalle de Proyectos

El detalle de proyectos de inversión, que se prevea ejecutar en el ejercicio, deberá formar parte del proyecto de presupuesto general que eleve el Poder Ejecutivo a la Legislatura Provincial, debiendo ser clasificadas en obras en ejecución y obras a iniciar. El plan plurianual de inversión pública provincial, se consignará como información indicativa y complementaria de la ley de presupuesto.

ARTÍCULO 27

Estado de Ejecución de los Proyectos

El Poder Ejecutivo elaborará estados de ejecución analíticos, de cada proyecto de inversión, incluido en el respectivo plan de inversiones de detalle de proyectos e inversión prevista, con la periodicidad y modalidades que se establezcan por vía reglamentaria.

Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá disponer por vía reglamentaria que las empresas y sociedades del Estado elaboren estados de ejecución como los aludidos en el párrafo anterior, bajo las modalidades y con la periodicidad que se establezcan.

ARTÍCULO 28

Ajustes al Plan de Inversión Pública

El Poder ejecutivo ajustará el plan de inversión pública, del presupuesto general de la administración general, cuando resulte necesario incorporar proyectos de inversión originados por requerimientos fundados en manifiestas razones de emergencia o seguridad, con intervención previa del Ministerio de Producción y Finanzas y comunicación posterior a la Legislatura Provincial.

SECCIÓN VI

Normas de Modificaciones Presupuestarias

ARTÍCULO 29

Financiamiento de gastos no previstos

Toda ley que autorice gastos no previstos en la ley de presupuesto, deberá señalar sus fuentes específicas de financiamiento o la pertinente autorización para la utilización del crédito. La ejecución del gasto autorizado, por dicha ley, solo procederá des-

de el momento en que se produzca la efectiva recaudación del recurso, según lo prevé el artículo 104 (Inciso 29°) de la Constitución Provincial.

ARTÍCULO 30

Hechos de fuerza mayor.

El Poder Ejecutivo podrá disponer la incorporación al presupuesto de autorizaciones para gastos no previstos o insuficientes, para atender hechos de fuerza mayor o excepcionales que requieran la inmediata atención del Estado.

Estas disposiciones deberán ser comunicadas en el mismo acto a la Legislatura.

ARTÍCULO 31

Facultades del Poder Ejecutivo

FACÚLTASE al Poder Ejecutivo a disponer:

La distribución analítica de los créditos del presupuesto sancionado;

La habilitación de los créditos cuando se correlacionen con la incorporación de recursos que surjan de aplicación de leyes provinciales;

La habilitación de los créditos para la atención de leyes, decretos y convenios que adhiera o formalice el Estado Nacional y hasta los montos que este último disponga;

La habilitación de los créditos para atender servicios requeridos por terceros que se financien con su producido, hasta las sumas que se perciben como retribución de los mismos;

La modificación de los presupuestos de los organismos descentralizados, siempre que no aumente el aporte de la administración central para cubrir su déficit;

La cantidad de cargos previstos para transferirlos a otros o entre sí, sin que ello origine mayores costos.

Cuando la ejecución presupuestaria así lo requiera, el Poder Ejecutivo podrá ejecutar las reestructuraciones y modificaciones presupuestarias que sean necesarias en las previsiones para aplicaciones financieras, ingresos, fuentes financieras, la transferencia de cargos, horas cátedras a cargos docentes y viceversa o supresión o creación de categorías presupuestarias, bajo las siguientes limitaciones:

1.- No podrá modificar el resultado financiero del ejercicio.

2.- No podrá modificar el total autorizado de endeudamiento.

3.- No podrá disminuir los créditos presupuestarios asignados a la finalidad que involucre a los servicios sociales, por un monto superior al que surja de la parte proporcional que corresponda a esta finalidad sobre el total de las economías por no-

inversión.

El Poder Ejecutivo podrá disponer que el órgano coordinador de los subsistemas ejerza total o parcialmente las facultades a que se refiere este artículo.

ARTÍCULO 32

Delegación de facultades para efectuar modificaciones presupuestarias

FACÚLTASE al Poder Ejecutivo a delegar la decisión de efectuar modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados en la clasificación programáticas y en las distintas funciones dentro de la respectiva finalidad.

Esta facultad se hace extensiva al momento en el cual se distribuye el crédito del presupuesto aprobado por ley anual de presupuesto, el cual puede ser distribuido a las Jurisdicciones y entidades a un nivel más agregado al que el clasificador de cuentas presupuestarias contempla para su ejecución.

El presente régimen de modificaciones será aplicable cuando sea necesario modificar créditos al nivel de agregación que define la distribución analítica del presupuesto sancionado, aunque la ejecución deba realizarse respetando el máximo nivel de desagregación que contemple el clasificador de cuentas aprobado.

ARTÍCULO 33

Facultades a la Presidencia de la Legislatura

AUTORÍZASE a la Presidencia de la Legislatura Provincial para reajustar los créditos de su presupuesto jurisdiccional, debiendo comunicar al Poder Ejecutivo las modificaciones que dispusieran. Tales modificaciones sólo se podrán autorizar dentro del respectivo total de créditos autorizados, sin más restricciones que las que determina esta ley en forma expresa y sin originar aumentos automáticos para ejercicios futuros ni incrementos en las remuneraciones individuales, sobre asignaciones u otros conceptos análogos de gastos en personal o compensaciones o reintegros a favor del mismo, excepto cuando el Poder Ejecutivo le otorgue un refuerzo presupuestario para financiar mejoras salariales o para creación de cargos por un período menor a doce (12) meses.

ARTÍCULO 34

Facultades a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia

AUTORÍZASE a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia para reajustar los créditos de su presupuesto jurisdiccional debiendo comunicar al

Poder Ejecutivo las modificaciones que se dispusieren. Tales modificaciones sólo podrán realizarse dentro del respectivo total de créditos autorizados sin más restricciones que las que esta ley les asigne y sin originar aumentos automáticos para ejercicios futuros ni incrementos en las remuneraciones individuales, sobre asignaciones u otros conceptos análogos de gastos en personal o compensaciones o reintegros en favor del mismo, excepto cuando el Poder Ejecutivo le otorgue un refuerzo presupuestario para financiar mejoras salariales o para creación de cargos por un período menor a doce (12) meses.

El Poder Ejecutivo, junto con el proyecto de presupuesto general de la administración general elevará a la Legislatura el anteproyecto preparado por el Tribunal Superior de Justicia, acompañando los antecedentes respectivos cuando las estimaciones efectuadas por dicho Tribunal no coincidan con las del proyecto general.

ARTÍCULO 35

Facultades el Poder Legislativo

Queda reservada a la Legislatura la decisión de modificar el presupuesto de gastos cuando afecte:

El monto total del presupuesto de recursos, salvo las excepciones contempladas en esta ley;

El monto total del endeudamiento previsto, salvo las excepciones contempladas en esta ley;

El monto total de los créditos autorizados a los poderes, jurisdicciones y entidades, salvo cuando se distribuyan créditos globales de refuerzo;

El monto total de las finalidades, salvo las excepciones contempladas en esta ley;

La cantidad máxima de cargos de planta permanente y temporaria y de hora cátedra.

ARTÍCULO 36

Alcance de las facultades

Las facultades conferidas al Poder Ejecutivo en este Capítulo alcanzan a los Poderes Legislativo y Judicial, excluida las excepciones previstas en el artículo precedente y en el artículo 32 de la presente ley.

ARTÍCULO 37

Modificaciones compensadas

Siempre que existan mayores ingresos que los calculados en rubros de recursos autorícese al Poder Ejecutivo a incrementar el presupuesto de gastos vigente en forma compensada con tal nivel de aumento.

En el caso que existan mayores ingresos que los calculados en rubros en los cuales corresponda asignar coparticipación, autorízase a dar por ejecutado importes que excedan los originariamente pre-

vistos en los créditos destinados a atenderlas, siempre que los recursos sean percibidos y figuren registrados en su totalidad.

SECCIÓN VII

Programación y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

ARTÍCULO 38

Límites

El Poder Ejecutivo podrá limitar la ejecución de los créditos presupuestarios disponiendo para todo el sector público provincial la fijación de topes de autorización de los créditos vigentes.

A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, todos los poderes, jurisdicciones y entidades deberán programar, para cada ejercicio, la ejecución financiera y física, cuando así correspondiere, de los presupuestos, siguiendo las normas que fijará la reglamentación, las disposiciones complementarias y procedimientos que dicten las unidades rectoras centrales de los subsistemas presupuestarios y de tesorería.

El monto total de las cuotas de compromiso fijadas para el ejercicio, ajustadas y aprobadas por las unidades rectoras centrales en la forma y para los períodos que se establezcan, no podrá ser superior al nivel de los ingresos previstos durante el ejercicio.

ARTÍCULO 39

Evaluación presupuestaria

La Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas podrá evaluar la ejecución de los presupuestos de la administración general, tanto en forma periódica, como al cierre del ejercicio.

Con base en la información que señala el párrafo anterior, en la que suministre el subsistema de contabilidad y otras que se consideren pertinentes, la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas realizará un análisis de los resultados financieros y físicos, interpretará las variaciones operadas con respecto a lo programado, procurará determinar sus causas y preparará informes con recomendaciones para las autoridades superiores y los responsables de los organismos afectados.

SECCIÓN VIII

Del Presupuesto de Empresas y Agencias

ARTÍCULO 40

Aprobación y contenido

Los directorios o máxima autoridad ejecutiva de las empresas y otros entes públicos, aprobarán el

proyecto de presupuesto anual de su gestión y lo remitirán a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, en la fecha que estipule la reglamentación. Los proyectos de presupuesto deberán expresar:

Las políticas generales y los lineamientos específicos que, en materia presupuestaria, establezca el órgano coordinador de los subsistemas de administración financiera y la autoridad de jurisdicción correspondiente;

Contendrán los planes de acción, programas y principales metas, nivel de gastos clasificados por rubros y su financiamiento a un nivel de detalle que permita identificar las respectivas fuentes, el plan de inversiones, el presupuesto de caja, los recursos humanos a utilizar y que permitan establecer los resultados operativo, económico y financiero a través de la cuenta ahorro-inversión-financiamiento previstos para la gestión respectiva.

ARTICULO 41

Formulación del proyecto de presupuesto

Los proyectos de presupuesto de financiamiento se podrán formular siguiendo el criterio del devengado o recaudado, siempre que la naturaleza jurídica de cada entidad así lo permita.

Los proyectos de presupuesto de gastos deben estar formulados utilizando el momento del devengado de las transacciones como base contable.

ARTICULO 42

Análisis de los proyectos de presupuesto de las empresas y otros entes

El Ministerio de la Producción y Finanzas analizará los proyectos de presupuesto de las empresas y otros entes y preparará un informe destacando si los mismos encuadran en el marco de las políticas, planes y estrategias fijados para este tipo de instituciones, aconsejando los ajustes a practicar en el proyecto de presupuesto si, a su juicio, la aprobación del mismo sin modificaciones puede causar un perjuicio patrimonial al Estado o atentar contra los resultados de las políticas y planes vigentes.

ARTICULO 43

Aprobación de los proyectos de presupuestos por el Poder Ejecutivo

Los proyectos de presupuesto, acompañados del informe mencionado en el artículo anterior, serán sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo, de acuerdo con las modalidades y los plazos que establezca la reglamentación. El Poder Ejecutivo aprobará, en el marco de los artículos 69 y 70 de la Constitución Provincial, en su caso con los ajustes

que considere convenientes, los presupuestos de las empresas.

Si las empresas y otros entes públicos no presentaren sus proyectos de presupuesto en el plazo previsto, el Poder Ejecutivo, por medio del órgano rector del subsistema, elaborará de oficio los respectivos presupuestos, antes de la remisión del anteproyecto de ley a la Cámara.

ARTICULO 44

Representantes estatales

Los representantes estatales que integran los órganos de las empresas y otros entes públicos, estatutariamente facultados para aprobar los respectivos presupuestos, deberán proponer y votar el presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 45

Elevación a la Legislatura

El Poder Ejecutivo elevará a la Legislatura Provincial –conjuntamente con el proyecto de presupuesto general de la administración general- los presupuestos de las empresas y otros entes públicos, con los contenidos básicos que señala el artículo 40.

ARTICULO 46

Publicidad

El Poder Ejecutivo hará publicar en el Boletín Oficial y en la página web oficial de la Provincia una síntesis de los presupuestos de las empresas y entes públicos con los contenidos básicos que señala esta ley.

ARTICULO 47

Modificaciones Presupuestarias

Las modificaciones a realizar a los presupuestos de las empresas y otros entes públicos durante su ejecución y que impliquen el deterioro de los resultados operativo o económico previstos, alteración sustancial de la inversión programada, o el incremento del endeudamiento autorizado, deberán ser aprobadas por la Legislatura Provincial, previa opinión de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas.

En el marco del artículo anterior y con opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, las empresas y otros entes públicos establecerán su propio sistema de modificaciones presupuestarias, con iguales restricciones que las dispuestas para el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 48

Cierre de cuentas

Al finalizar cada ejercicio financiero, las em-

presas y sociedades procederán al cierre de cuentas de su presupuesto de financiamiento y de gastos e informarán al Poder Ejecutivo.

ARTICULO 49

Prohibición

Se prohíbe a las entidades del sector público realizar aportes o transferencias a empresas y otros entes públicos cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos de esta ley, requisito que también será imprescindible para realizar operaciones de crédito público.

CAPITULO II CREDITO PÚBLICO

SECCION I

Definición del Subsistema

ARTICULO 50

Subsistema de Crédito Público – Concepto

Se entiende como subsistema de "Crédito Público" al conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que regulan las acciones y operaciones tendiente a la obtención y cancelación de financiamiento interno y externo, incluido el proceso previo de evaluación y dictamen de factibilidad para la concreción y aplicación de la toma de créditos internos y externos en el marco expresado en la Constitución Provincial y en los términos previstos en el artículo 8.

SECCION II Disposiciones Generales

ARTICULO 51

Autorización y límites

El Poder Ejecutivo está autorizado a realizar todas las gestiones necesarias para obtener financiamiento conforme a los fines y los límites previstos en la ley de presupuesto vigente.

El endeudamiento resultante de las operaciones de créditos público deberá estar destinado exclusivamente para la realización de inversiones reproductivas, para atender casos excepcionales de evidente necesidad o gravedad o emergencia financiera extraordinaria, para programas de transformación de su administración o para refinanciar los pasivos existentes del sector público provincial.

A tal efecto podrá realizar todas las tratativas y acuerdos ante instituciones financieras oficiales y/o privadas del ámbito nacional y/o internacional, instituciones privadas cualquiera sea su forma jurídica con o sin fines de lucro, particulares, así como convenir planes de amortización, intereses y demás

condiciones relacionadas con la obtención de la financiación respectiva, quedando facultado para afectar la coparticipación federal en los montos que correspondan al tesoro provincial, como garantía de las operaciones que se realicen con comunicación posterior a la Legislatura Provincial.

Como consecuencia de lo establecido en el presente artículo, el Poder Ejecutivo efectuará las reestructuraciones presupuestarias pertinentes.

ARTICULO 52

Créditos de Corto Plazo

El Poder Ejecutivo podrá hacer uso del crédito a corto plazo a fin de obtener recursos con destino al pago de gastos de la administración general y por un monto que no exceda la duodécima parte de los recursos proyectados para el ejercicio financiero correspondiente, el que deberá quedar cancelado dentro del ejercicio a que hayan sido afectados los fondos obtenidos.

Las limitaciones contenidas por el presente artículo no serán de aplicación cuando medien a juicio del Poder Ejecutivo necesidades excepcionales o de extrema urgencia, en cuyo caso el único condicionamiento será que el monto del crédito a obtener para la administración general no supere el veinte por ciento (20%) de los recursos proyectados para la misma en el ejercicio financiero correspondiente.

ARTICULO 53

Renovación de operaciones

Las operaciones de uso del crédito que sean renovadas a su vencimiento, o con antelación al mismo, o aquellas que se obtengan para cancelar total o parcialmente obligaciones precedentes, serán consideradas como una única operación, y no darán lugar a registraciones múltiples en concepto de uso del crédito ni por amortizaciones, respectivamente. Serán comunicadas a la Legislatura Provincial, previa intervención de la Contaduría General a los fines de actualizar los registros contables respectivos.

Las amortizaciones que no encuadren en la modalidad establecida en el párrafo precedente comprometerán el uso del crédito presupuestario al momento del efectivo pago o al que establezca la reglamentación, no pudiendo superar dicho momento el límite establecido por el artículo 73 de la Constitución Provincial. A los efectos de la aplicación de este límite, se tendrán en cuenta el ejercicio corriente y los dos anteriores y se computarán los intereses reales.

ARTICULO 54

Deuda pública – Modalidades – Normas Técnicas Comunes

El endeudamiento que resulte de las opera-

ciones de crédito público se denominará deuda pública y puede originarse en:

La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo, constitutivos de un empréstito;

La emisión y colocación de letras de tesorería y la emisión de pagarés u otros medios sucesáneos de pago, cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero.

La contratación de préstamos con instituciones financieras nacionales, extranjeras o internacionales; u otras instituciones u organismos que tengan facultad para realizar estas operaciones;

La contratación de obras, servicios o bienes cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente y documentado a través de los medios de pago que se establecen en los incisos a), b) o c) del presente artículo;

El otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el período del ejercicio financiero, la que no se considerará a los efectos del cómputo del artículo 51.

La consolidación, conversión y renegociación de deudas.

No se considera deuda pública consolidada:

La deuda del tesoro, entendida ésta como las obligaciones devengadas y no pagadas durante el ejercicio.

La emisión de letras, pagarés u otros medios sucesáneos de pago cuando se cancelen dentro del ejercicio.

Las operaciones citadas en el inciso a) serán informadas en la cuenta de inversión de cada ejercicio.

ARTICULO 55

Deuda Pública – Clasificación

A los efectos de esta ley, la deuda pública se clasificará en interna y externa y en directa e indirecta.

Se considerará deuda interna, aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago es exigible dentro del territorio nacional.

Por su parte, se entenderá por deuda externa, aquella contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio.

La deuda pública directa de la administración central es aquella asumida por la misma en calidad

de deudor principal.

La deuda pública indirecta de la administración central es la constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía.

ARTICULO 56

Requisitos para celebrar operaciones

Los poderes, jurisdicciones y entidades de la administración general no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto del año respectivo o en una ley específica.

El Poder Ejecutivo podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello genere un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales y/o no implique un incremento del monto adeudado.

La ley anual de presupuesto o la ley específica debe indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas:

- Tipo de deuda; discriminada en directa o indirecta; interna o externa;
- Monto máximo autorizado para la aprobación;
- Destino del funcionamiento.
- Emisión de letras y todo tipo de instrumento que tenga como destino la cancelación de las obligaciones.

El Poder Ejecutivo podrá efectuar modificaciones a las características detalladas en la Ley de Presupuesto, a los efectos de adecuar las clasificaciones a las condiciones imperantes en los mercados y/o mejorar el perfil de la deuda pública. Dichas modificaciones deberán ser comunicadas a la Legislatura Provincial en el término de cinco (5) días de instrumentadas.

El Ministerio de Producción y Finanzas fijará las características y condiciones no previstas en esta ley, para las operaciones de crédito público que se realicen en la hacienda pública.

ARTICULO 57

Autorización Previa

Ninguna entidad de la administración pública provincial podrá realizar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa del órgano que defina el Poder Ejecutivo.

Los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza, que el Poder Ejecutivo otorgue a personas físicas o jurídicas pertenecientes al sector públi-

co provincial deberán contar con la autorización previa de la Contaduría General de la Provincia y no pueden exceder los límites que fija el artículo 73 de la Constitución.

Iguales requisitos legales regirán para la cesión en garantía de recursos propios o provenientes del régimen de coparticipación federal (Ley 23.548 o el que en el futuro lo reemplace), cuando el Estado se garantice a sí mismo.

Los avales, finanzas o garantías de cualquier naturaleza, que cualquier ente público otorgue a personas físicas o jurídicas ajenas a ese sector requerirán de una ley específica.

ARTICULO 58

Retenciones a la coparticipación

FACULTASE al Poder Ejecutivo realizar las retenciones a la coparticipación de Municipios y Comunas, que surgieran de la aplicación de Ley 8864 (o la que en el futuro la reemplace), de los fondos adeudados o algunos de los organismos recaudadores tanto de atención médica como de carácter previsional, dependiente del Estado Provincial. Asimismo deberá exponer en la ley de presupuesto los importes brutos que prevé transferir en el ejercicio.

ARTICULO 59

Operaciones de crédito de las Empresas y Entidades

Las empresas y entidades del Estado podrán realizar operaciones de crédito público, con la previa intervención del Poder Ejecutivo, y dentro de los límites que fije su responsabilidad patrimonial.

ARTICULO 60

Servicios de la deuda

El servicio de la deuda estará constituido por la amortización del capital y el pago de los intereses, comisiones y otros cargos que eventualmente puedan haberse convenido en las operaciones de crédito público.

Los presupuestos de las entidades del sector público deberán formularse previendo los créditos necesarios para atender el servicio de la deuda.

El Poder Ejecutivo podrá debitar de las cuentas bancarias de las entidades que no cumplan en término el servicio de la deuda pública, el monto de dicho servicio y efectuarlo directamente.

CAPITULO III TESORERIA

SECCIÓN I

Definición del Subsistema

ARTICULO 61

Subsistema de Tesorería - Concepto

Se entiende como subsistema de "Tesorería" al conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos, por medio de los cuales se llevan a cabo los procesos de recaudación, planificación, ejecución de ingresos y efectivización de pagos que conforman el flujo financiero del sector público provincial. Comprende asimismo la tenencia y custodia de las disponibilidades que resulten.

SECCIÓN II

Normas Técnicas Comunes

ARTICULO 62

Emitir letras, pagarés o medios sucedáneos

FACULTASE al Poder Ejecutivo a emitir letras, pagarés o medios sucedáneos de pago cuyo reembolso se produzca dentro del ejercicio, hasta el monto que para operaciones de corto plazo fije anualmente la ley de presupuesto.

Las operaciones que superen el ejercicio financiero, sin ser reembolsadas, se considerarán operaciones de crédito público y deberá cumplirse con los requisitos previstos en el Capítulo II de este Título.

ARTICULO 63

Fondos permanentes y/o cajas chicas

Los poderes, jurisdicciones y entidades que conforman la hacienda pública, podrán autorizar el funcionamiento de fondos permanentes y/o cajas chicas, con el régimen y los límites que establezca la reglamentación, previa intervención de la Dirección General de Tesorería y Crédito Público. A estos efectos, las unidades periféricas operativas de tesorería correspondientes podrán entregar los fondos necesarios con carácter de anticipo, formulando el cargo correspondiente a sus receptores conforme la reglamentación que establezca la unidad rectora central (UreCe) del subsistema.

ARTICULO 64

Cuenta única o fondo unificado

El órgano coordinador de los subsistemas de administración financiera instituirá un sistema de cuenta única o mantendrá el fondo unificado, según lo estime conveniente, que le permita disponer de las existencias de caja de todos los poderes, jurisdicciones y entidades de la hacienda pública hasta el cien por ciento (100%) de su importe.

ARTICULO 65

Padrón de cuentas corrientes oficiales

El órgano coordinador de los subsistemas de administración financiera dispondrá la devolución a

la Dirección General de Tesorería y Crédito Público de las sumas acreditadas en las cuentas de los poderes, jurisdicciones y entidades del sector público no financiero, cuando estas se mantengan sin utilización por un período no justificado. En estos casos se procederá a notificar y posteriormente a disponer el cierre de aquellas cuentas bancarias que no hayan tenido movimiento originado por el titular de la cuenta corriente durante un año y a transferir a las cuentas de la Dirección General de Tesorería y Crédito Público las sumas acreditadas en dichas cuentas oficiales. Las instituciones financieras en las que se encuentren depositados los fondos deberán dar cumplimiento a las transferencias que ordene el referido órgano.

A tal fin se creará el padrón de cuentas corrientes oficiales que abarque a todas las instituciones del sector público provincial.

El mencionado padrón será administrado por el Tesorero General de la Provincia.

Los depósitos existentes en el agente financiero oficial, a la orden de los jueces de jurisdicción penal en concepto de fianzas cumplidas o prescritas y de las fianzas judiciales que se ejecuten de conformidad a la normativa específica que las exija, siempre que en ésta no se haya previsto un destino especial, deberán ser transferidos por el Poder Judicial a rentas generales al finalizar cada ejercicio financiero.

Todo pago o egreso de fondos será cumplido por intermedio de los Bancos Oficiales de la Provincia, instituciones bancarias con participación del Estado Provincial, u otras instituciones bancarias oficiales o privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo con excepción de las cajas chicas integrantes de fondos permanentes.

Todos los importes recaudados, cualquiera sea su origen y que no tengan un destino legal expreso, deberán ser ingresados a Rentas Generales y puestos a disposición del Gobierno Provincial dentro de los cuatros días hábiles de su percepción.

Esta tarea corresponderá a Bancos Oficiales de la Provincia, instituciones bancarias con participación del Estado Provincial y otras instituciones bancarias oficiales o privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 66

Fondos y Cuentas de Terceros

Los importes depositados en las cuentas fondos de terceros serán movilizados sin necesidad de previo libramiento por parte de los servicios administrativos o de la Dirección General de Tesorería y Crédito Público.

No podrán abrirse cuentas al margen del

presupuesto con excepción de las "cuentas de terceros" que registrarán los ingresos y egresos por depósitos, pagos o devoluciones en los que la hacienda pública actúa como agente de retención, intermedio o depositario.

ARTICULO 67

Descuentos, quitas o retenciones

PROHÍBESE a los agentes pagadores a efectuar descuentos, quitas o retenciones que no hubieren sido autorizadas por el Poder Ejecutivo o autoridad competente.

ARTICULO 68

Sentencias judiciales firmes

En los casos de sentencias judiciales firmes en virtud de las cuales el Estado Provincial fuere obligado a pagar, el juez de la causa no dispondrá el embargo de fondos del Tesoro sin requerir previamente el pago a la Fiscalía de Estado. Este órgano deberá responder al juzgado dentro del término de treinta (30) días, informando la forma y plazo en que se precederá a abonar la obligación requerida de acuerdo a las previsiones presupuestarias y a lo que disponga la ley de presupuesto.

ARTICULO 69

Registro Unico de Beneficiarios de Pago

A los fines de garantizar una mayor transparencia en el proceso de pagos provinciales, se constituirá un registro único de beneficiarios de pago.

En dicho registro especial deberán inscribirse todas las personas físicas y jurídicas que el Estado Provincial considere que deben percibir algún pago, el cual se deberá integrar con el registro único de proveedores y contratistas.

El Poder Ejecutivo dictará las normas reglamentarias que sean necesarias para la efectiva aplicación del régimen de preferencia. La Dirección General de Tesorería efectuará las adaptaciones necesarias a fin de compatibilizar e integrar sus registros de beneficiarios al registro único de beneficiarios de pago.

SECCIÓN III

Organización

ARTÍCULO 70

Órgano Rector

La Dirección General de Tesorería y Crédito Público será la unidad rectora central del subsistema "Treasurería" del sector público provincial no financiero.

La Dirección General de Tesorería y Crédito

Público, funcionará bajo la dirección de un Tesorero General. El Tesorero General es el Jefe de la repartición, tiene a su cargo el gobierno interno de la misma y ejerce su representación.

El Tesorero General será secundado por un Sub Tesorero General, que es su reemplazante natural en caso de ausencia o impedimento, y compartirá con aquel las tareas diarias de despacho y conducción.

Para ejercer el cargo de Tesorero y Sub Tesorero General, se requerirá el título universitario de alguna de las carreras de profesional en ciencias económicas, y una antigüedad de cuatro (4) y dos (2) años, respectivamente, en el ejercicio profesional. Sus remuneraciones serán equivalentes a la del cargo de Director General y Director, respectivamente.

No podrán ejercer el cargo de Tesorero General o Sub Tesorero General los inhabilitados por quiebra y los concursados durante el tiempo que dure su inhabilitación, ni los procesados o condenados por delitos que —en razón de su naturaleza— sean éticamente incompatibles con el ejercicio del cargo.

ARTÍCULO 71

Competencias

La Dirección General de Tesorería y Crédito Público tendrá las siguientes competencias:

Normalizar los procedimientos de la administración de fondos, practicar descuentos y retenciones sobre los importes a pagar en los casos y condiciones que establezca la reglamentación;

Elaborar conjuntamente con la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas la programación de la ejecución del presupuesto de la administración general;

Programar el flujo de fondos, elaborar el presupuesto de caja de la administración general, conformar el presupuesto de caja de las entidades, supervisar su ejecución y asignar las cuotas de pago o de transferencias de fondos que éstos perciban dentro de los límites de crédito aprobados por la ley de presupuesto;

Entender en la cancelación de los servicios de la deuda, en los ingresos que por préstamos se deriven, sean en efectivo u otros valores, y en el financiamiento de los déficit estacionales de caja en un todo e acuerdo con las autorizaciones y límites impuestos por la ley de presupuesto;

Disponer los pagos basándose en los cronogramas establecidos;

Administrar el fondo unificado de cuentas oficiales; o el sistema de cuenta única;

Emitir letras acorto plazo, pagarés u otros medios sucedáneos de pago en las condiciones previstas en el artículo 62 de la ley;

Ejercer la supervisión de las unidades operativas periféricas de tesorerías centralizadas y descentralizadas, sus registros y los movimientos bancarios de sus cuentas;

Custodiar los títulos, fondos y valores;

Proponer medios de pago y evaluar alternativas de cancelación de obligaciones;

Disponer inversiones temporarias de fondos inmovilizados y operaciones de canje e intercambio de títulos públicos u otros valores que integran las disponibilidades financieras;

Intervenir, emitiendo opinión técnica previa, en las inversiones temporarias de fondos inmovilizados de las diferentes jurisdicciones y entidades;

Normar sobre las condiciones de titularidad y uso de las cuentas bancarias oficiales, autorizar la apertura de las mismas, revisar la validez y uso de las existentes, y ordenar su cierre cuando corresponda;

Tomar conocimiento de la emisión, distribución e inutilización de los valores fiscales;

Dictar su propio reglamento interno en un todo de acuerdo a los términos de esta Ley;

Todas las demás funciones que en el marco de la presente ley le adjudique la reglamentación.

CAPÍTULO III

CONTABILIDAD

SECCIÓN I

Definición del Subsistema

ARTÍCULO 72

Subsistema de Contabilidad – Concepto

Se entiende como subsistema de “Contabilidad” al conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, valorar, procesar y exponer los hechos y actos económicos y financieros que afecten o puedan afectar patrimonialmente a las entidades públicas, y que permitan medir el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración.

SECCIÓN II

Normas Técnicas Comunes

ARTÍCULO 73

Método de registración contable

Los registros contables estarán fundamentados en los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, adaptados al sector público y basados en el método de registración de la partida doble.

El registro contable de las transacciones económicas y financieras será común, único, uniforme, integrado y aplicable a todos los organismos del

sector público provincial. Expondrá, como mínimo, la ejecución presupuestaria, los movimientos y la situación del tesoro y las variaciones, composición y situación del patrimonio de las entidades públicas. Estará orientado a través de la estricta determinación de los costos a optimizar las operaciones públicas.

Todo acto o hecho económico o financiero deberá estar debidamente registrado y documentado. La reglamentación establecerá los criterios para la conservación y seguridad de los documentos.

Por medios informáticos se podrán generar los comprobantes, procesar y transmitir documentos e informaciones y producir los libros contables correspondientes.

Podrá acreditarse la veracidad de la instrumentación de la transacción pertinente y de la información registrada a través de la presentación de los archivos digitalizados o procesada por medios informáticos. El reglamento establecerá los requisitos de seguridad y control del subsistema, el que deberá ser supervisado por la Contaduría General.

SECCIÓN III Organización

ARTÍCULO 74 Órgano Rector

La Contaduría General de la Provincia será la unidad rectora central del subsistema "Contabilidad" y control interno de la hacienda pública del sector público no financiero.

La Contaduría General de la Provincia estará a cargo de un Contador General y dos (2) Sub Contadores Generales, uno de los cuales será el Sub Contador General Auditor y titular de la Dirección de Auditoría.

El cargo de Contador General será ejercido por un contador público, con diez (10) años de ejercicio profesional, designado y removido por el Poder Ejecutivo, con remuneración equivalente a la de Dirección General.

El Contador General tiene a su cargo el gobierno interno del organismo con las atribuciones que las leyes o reglamentos le confieren y ejerce la representación de la Contaduría General de la Provincia.

Secundará al Contador General un Sub Contador General de Contabilidad con título de contador público y una antigüedad no inferior a diez (10) años de ejercicio profesional. Es el reemplazante natural de aquel en caso de ausencia o impedimento y su remuneración será la equivalente a la de Director.

El Sub Contador General de Auditoría será el titular de la Dirección de Auditoría y reportará direc-

tamente al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Producción y Finanzas.

Para ser Sub Contador General de Auditoría será necesario poseer título universitario en alguna de las carreras de profesional en ciencias económicas y experiencia –en administración financiera u organización o estadísticas y auditorías- no inferior a los diez (10) años, y su remuneración será la equivalente a la de Director.

ARTÍCULO 75 Competencia

La Contaduría General de la Provincia tendrá las siguientes competencias:

Prescribir la metodología contable a aplicar y la periodicidad, estructura y características de los estados contables que deba producir la hacienda pública del sector público no financiero, contemplando la naturaleza jurídica de cada ente;

Cuidar que los sistemas contables que prescriba puedan ser desarrollados e implantados por las entidades, conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de información que deba brindar su dirección.

Entender en la aplicación e interpretación de las normas relativas a la ejecución del presupuesto;

Asesorar y asistir a las entidades de la hacienda pública del sector público no financiero en la aplicación de las normas y metodologías que dicte;

Consolidar e integrar la contabilidad de la administración general.

Coordinar el funcionamiento de las unidades contables operativas periféricas de la administración central y de las entidades que integran el sector público provincial no financiero;

Realizar las operaciones de ajuste y cierre necesarias para producir anualmente los estados contables financieros que integran la cuenta de inversión;

Administrar el sistema de información financiera, que permita conocer permanentemente la gestión presupuestaria, de caja, financiera y patrimonial, así como los resultados operativos, económico y financiero de la administración central, de cada entidad descentralizada y del sector público no financiero en su conjunto;

Permitir que la información que se procese y produzca sobre el sector público se integre al sistema de cuentas nacionales que implemente el gobierno nacional;

Entender en la compilación, análisis y evaluación de la información económica y financiera de la hacienda pública del sector público provincial no financiero;

Fundamentar los registros en principios y

normas de contabilidad y de control interno de aceptación general, aplicables en la administración pública provincial;

Mantener el archivo general de documentación financiera de la administración pública provincial;

Preparar la cuenta de inversión del ejercicio, contemplada en el artículo 144 (inciso 12°) de la Constitución Provincial, más la de ejecución presupuestaria trimestral del Presupuesto (Inciso 13°), de acuerdo a lo establecido en la presente ley.

Todas las demás que le asigne la reglamentación.

ARTÍCULO 76

Compensación de deudas intergubernamentales

La Contaduría General de la Provincia organizará y mantendrá en operación un sistema permanente de compensación de deudas intergubernamentales, que permita reducir al mínimo posible los débitos y créditos existentes entre las entidades de la hacienda pública. Se entenderá por compensación de deudas intergubernamentales la que se efectúe entre los poderes, jurisdicciones y entidades de la administración general.

Las deudas de la hacienda pública del sector público provincial no financiero que tengan diez o más ejercicios financieros concluidos, no podrán reclamarse administrativamente y por lo tanto deberán darse de baja de los registros contables, salvo disposición judicial en contrario.

El Poder Ejecutivo podrá declarar, una vez agotados los medios para lograr su cobro, la incobrabilidad de los créditos a su favor, excepto los de naturaleza tributaria, que se registrarán por las normas del Código Tributario Provincial. La declaración de incobrabilidad no implicará la extinción de los derechos del Estado Provincial, ni de la responsabilidad en que pudiera incurrir el funcionario o empleado recaudador o cobrador, si tal situación le fuera imputable.

SECCIÓN IV

Normas para la ejecución presupuestaria y cierre de cuentas para la administración general.

ARTÍCULO 77

Promulgación de la Ley de Presupuesto

La promulgación de la ley de presupuesto y de las leyes que autoricen gastos y sus modificatorias, implica para el Poder Ejecutivo el ejercicio de las atribuciones y deberes consagrados en el artículo 144 (Inciso 13), primera parte de la Constitución de la Provincia.

Los créditos del presupuesto de gastos, con los niveles de agregación aprobados por la ley de presupuesto pertinente, constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar.

ARTÍCULO 78

Resultado financiero

El resultado financiero de la ejecución presupuestaria de un ejercicio, se determinará al cierre del mismo, por la diferencia entre los recursos efectivamente recaudados y los gastos devengados. En función del signo negativo o positivo de esta ecuación se denominará déficit o superávit financiero respectivamente. Al resultado así obtenido se le sumarán y restarán las fuentes y aplicaciones financieras.

En el artículo 14 de la presente ley se establece el momento en el cual se considera gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el presupuesto de gastos.

El presupuesto de recursos se considerará ejecutado en el momento en el cual se perciben los mismos por cualquier oficina o agencia recaudadora.

ARTÍCULO 79

Estados de la ejecución presupuestaria de gastos

Los estados de ejecución presupuestaria de gastos deberán exponer las transacciones programadas en sus etapas del compromiso devengado, ordenado a pagar y pagado hasta el máximo nivel de desagregación previsto por el clasificador de cuentas presupuestarias, aún cuando el decreto analítico de distribución del crédito, determine competencias de modificaciones presupuestarias y control del crédito más agregados.

La etapa del compromiso podrá distinguir los momentos de la afectación preventiva y definitiva del gasto.

ARTÍCULO 80

Registro del compromiso preventivo y definitivo

El compromiso preventivo de los créditos presupuestarios se produce cuando se proyecta la realización de una determinada erogación la cual tiene su origen en la solicitud de gastos o en la previsión de crédito correspondiente hasta tanto se resuelva el trámite administrativo que autorice o adjuque el acto a un tercero determinado. A tal fin los créditos serán afectados siempre que la autoridad competente disponga el inicio de las gestiones de un trámite, atendiendo que queden claramente delimitados el monto y el tipo de gasto proyectado.

En materia de ejecución del presupuesto de gastos, el compromiso definitivo implica:

El origen de una relación jurídica con terce-

ros, que pueda dar lugar en el futuro, a una eventual salida de fonos.

La aprobación, por parte de un funcionario competente, de la aplicación de recursos por un concepto e importe determinado y de la tramitación administrativa cumplida.

La afectación del crédito presupuestario que corresponda, en razón de un concepto e importe determinado.

La identificación del sujeto con el que se establece la relación jurídica, así como la especie, cantidad de los bienes o servicios a recibir o en su caso, el concepto del gasto sin contraprestación.

No se podrá adquirir compromisos para los cuales no queden saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la prevista.

Como principio general los créditos presupuestarios solo podrán ser comprometidos por un tiempo no mayor a la duración del respectivo ejercicio presupuestario. No obstante podrán contraer compromisos susceptibles de afectar créditos de presupuestos correspondientes a ejercicios futuros que se asuman como consecuencia de la ejecución de planes plurianuales y en los siguientes casos:

Servicios de amortización de la deuda;

Obras y otros gastos;

Contratos de locación de muebles e inmuebles;

Contratos e servicios y suministros, siempre que se verifique ventajas económicas por dicha contratación.

El monto de compromiso que se afecte en todos los casos no podrá superar la proporción correspondiente al gasto anual.

Para el caso de contrato de obras públicas y de locación de cosas que prevean ajustes en sus montos se determinará el compromiso en función del valor contractual más las variaciones razonablemente estimadas que resulten de la metodología de tales ajustes determinados en los respectivos contratos.

La reglamentación establecerá los alcances, la modalidad y la unidad responsable del registro de la ejecución de créditos presupuestarios.

Los poderes del Estado Provincial determinarán, para cada uno de ellos, los límites cualitativos y cuantitativos, dentro de los cuales podrán contraer compromisos por sí, o por la competencia específica que asignen al efecto a los funcionarios de sus respectivas dependencias o entidades.

La competencia así establecida será indelegable.

ARTÍCULO 81

Registro del Devengado y Ordenado Pa-

gar

En materia de ejecución del presupuesto de gastos, el devengado implica:

La afectación definitiva de los créditos presupuestarios producida por una modificación cuantitativa y/o cualitativa en la composición del patrimonio, de la respectiva jurisdicción o entidad.

La certificación en conformidad de la recepción de las provisiones;

La certificación en conformidad de la ejecución de los trabajos de obras públicas y otros;

La certificación en conformidad de la prestación de servicios;

El vencimiento de los servicios de la deuda;

En todo otro caso cuando se ordena pagar por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuesto para los de gastos sin contraprestación.

La liquidación del gasto y la simultánea emisión de la respectiva orden de pago.

En ningún caso se podrá devengar un gasto que no haya sido comprometido salvo los casos en que la naturaleza del procedimiento haga ambas etapas simultáneas o la reglamentación así lo establezca.

No se podrá devengar un gasto cuando no existan saldos de créditos disponibles o no previsto en el presupuesto, los responsables de autorizar dichas operaciones responderán por el reintegro total o parcial por el monto de la suma excedida en su caso.

Se define como ordenado pagar al momento que se dispone la cancelación de los gastos legítimos realizados, en virtud de los créditos autorizados en el presupuesto general y leyes que sancionen gastos, mediante la emisión de la respectiva orden de pago, o el documento que haga a sus veces, y hasta el monto de la obligación, que no podrá superar al devengado.

Toda orden de pago deberá ser emitida dentro de los siete (7) días hábiles de recibida la factura en el servicio administrativo correspondiente, certificado de obra o el documento que haga certifique la recepción conforme del bien o servicio. Luego de ese lapso, el responsable deberá justificar ante el Tribunal de Cuentas las causas que motivaron su falta de emisión.

Se entiende por orden de pago aquella que tiene por objetivo ordenar a la Dirección General de Tesorería o al Servicio Administrativo que corresponda el pago de las obligaciones asumidas con terceros. Las mismas prescriben solo cuando hayan sido canceladas o prescrito la obligación principal.

Los requisitos y formalidades que deberán contener las órdenes de pagos serán establecidos por la Contaduría General de la Provincia.

Se podrán efectuar gastos por anticipos

siempre que se hubiera pactado en las respectivas contrataciones y el contratante constituya garantías por el equivalente al monto recibido, la reglamentación determinará los casos que se exceptúan para la constitución de garantías.

ARTÍCULO 82

Definición de pago

El pago refleja la cancelación de las obligaciones asumidas con terceros y la efectivización – total o parcial- de la orden de pago o el documento que haga sus veces. El momento del pago se materializa con la entrega o puesta a disposición, del cheque, la transferencia, el efectivo u otros valores aceptados por el tercero beneficiario.

ARTÍCULO 83

Pagos comunes de las distintas jurisdicciones

FACÚLTASE al órgano coordinador de los subsistemas de administración financiera a afectar los créditos presupuestarios de las jurisdicciones y organismos descentralizados, destinados al pago de los servicios públicos, pagos comunes de distintas jurisdicciones y de otros conceptos que determine la reglamentación.

ARTÍCULO 84

Concepto que distinguen el registro de recursos

En materia de ejecución del cálculo de recursos, se entiende por devengado cuando –en virtud de una relación jurídica- se establece un derecho de cobro a favor de la administración general y simultáneamente una obligación de pago por parte de personas físicas o jurídicas.

Se produce la recaudación de recursos en el momento en que los fondos se ponen a disposición de una ofician recaudadora, de un agente del tesoro o de cualquier funcionario facultado a recibirlos.

Los estados de ejecución presupuestaria de los recursos deberán exponer las transacciones programadas de acuerdo al total de recursos percibidos por el tesoro.

Se entiende que el tesoro queda integrado por todos aquellos recursos que prevé el artículo 72 de la Constitución Provincial y que a continuación se detallan:

Tributos de percepción directa y/o provenientes de regímenes de coparticipación.

Renta y producido de la venta de sus bienes y actividad económica del Estado.

Derechos, convenios, participaciones, contribuciones o cánones, derivados de la explotación de sus bienes o de recursos naturales.

Donaciones y legados.

Los empréstitos y operaciones de crédito.

ARTÍCULO 85

Transferencias de fondos a las Empresas y Sociedades del Estado

Se prohíbe a las entidades de la administración pública provincial realizar aportes o transferencias a empresas y sociedades del Estado cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos de esta ley, requisito que también será imprescindible para realizar operaciones de crédito público.

ARTÍCULO 86

Intervención de Contaduría General

La Dirección General de Tesorería y Crédito Público no efectivizará ningún libramiento de pago que no haya sido registrado e intervenido previamente por la Contaduría General de la Provincia, directamente o por sus delegados.

ARTÍCULO 87

Estado trimestral de la ejecución del presupuesto

El Poder Ejecutivo deberá presentar ante la Legislatura Provincial –en forma trimestral- los estados demostrativos de la ejecución del presupuesto general de la administración general, siguiendo las clasificaciones y niveles de autorización incluidos en la Ley exponiendo los créditos originales y sus modificaciones. El mismo será publicado en la página WEB oficial.

SECCION V

Del Cierre de las Cuentas

ARTICULO 88

Cierre de las cuentas

Las cuentas del presupuesto de recursos y gastos se cerrarán el día treinta y uno (31) de Diciembre de cada año. Después de esa fecha los recursos que se recauden se consideran del presupuesto vigente, con independencia de la fecha con la cual se origine la obligación de pago o liquidación de los mismos.

Con posterioridad al día treinta y uno (31) de Diciembre no pueden asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.

Al cierre del ejercicio se reunirá información de los entes responsables de la liquidación y captación de recursos de la administración pública provincial y se procederá al cierre del presupuesto de recursos.

Del mismo modo procederán los organismos ordenadores de gastos y pagos con el presupuesto de gastos de la administración pública provincial.

Esta información será centralizada en la Contaduría General de la Provincia para la elaboración de la cuenta de inversión del ejercicio.

Los gastos comprometidos y no devengados al día treinta y uno (31) de Diciembre deberán ser desafectados. Los compromisos no devengados desafectados se podrán afectar al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos disponibles para ese ejercicio, cuando hubiere:

1.- Derechos adquiridos de terceros;

2.- Contratos firmados con trámite administrativo terminado y que deban completarse.

Los órdenes de pago, o el documento del que haga a sus veces, no caducan al finalizar el ejercicio de su emisión, sino cuando extingue la obligación principal. En tal caso la Contaduría General de la Provincia deberá efectuar las respectivas previsiones a fines de exponer en sus registros las obligaciones contraídas, debidamente documentada, y la identificación del deudor. Asimismo la Dirección General de Tesorería y Crédito Público efectuará las adecuaciones necesarias a los fines de asegurar que cuando se proceda a la cancelación de las obligaciones se identifique el documento que se cancela y el deudor.

Todo gasto devengado y no pagado deberá estar documentado al cierre mediante la emisión de la correspondiente orden de pago, o el documento del que haga sus veces.

Las órdenes de pago de fondos permanentes o cajas chicas deberán cerrar al final del ejercicio y caducan por la porción de fondos no provistos.

ARTICULO 89

Remisión de la información a Contaduría General

A los efectos de la preparación de la cuenta de inversión del ejercicio, los servicios administrativos remitirán a la Contaduría General de la Provincia, durante el mes de Enero de cada año y/o en la fecha que ésta indique, los estados que reflejen el movimiento operado en la respectiva jurisdicción.

ARTICULO 90

Presentación ante la Legislatura

La cuenta de inversión deberá elevarse a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas de la Provincia en el segundo mes del período de sesiones ordinarias del año siguiente al del ejercicio fenecido, en los términos del artículo 144 (Inciso 12°) de la Constitución Provincial y contendrá como mínimo:

Informe sobre la evolución financiera, económica, patrimonial y de gestión consolidada de la administración general del ejercicio concluido, su in-

serción con el planeamiento propuesto y su comparación con los períodos anteriores;

Estados financieros y cumplimiento de metas y objetivos;

Ejecución del presupuesto de recursos de la administración general desagregados hasta el nivel previsto en la Ley de presupuesto;

Ejecución del presupuesto de gastos de la administración general, mostrando el compromiso y el devengado, desagregados hasta el nivel previsto en el texto de la ley de presupuesto;

Cuenta ahorro-inversión-financiamiento de la administración general;

Los estados que demuestren los movimientos situación del tesoro de la administración general;

Situación de la deuda pública de la administración general, desagregada por ente, título y préstamo;

Estados de recursos y gastos corrientes de la administración central;

Estado de origen y aplicación de fondos de la administración central;

Balance General de la administración central que integre los patrimonios netos de los organismos descentralizados, empresas y entes públicos;

Estado de resultado, balance general, de las entidades descentralizadas, empresas y entes públicos;

Cumplimiento de metas, costos y objetivos previstos en el presupuesto.

ARTICULO 91

Contenido de la Cuenta ahorro-inversión-financiamiento

La cuenta ahorro-inversión-financiamiento, deberá desagregarse por entidad, de modo tal, que integre a todo el sector público provincial, apuntando a una integración progresiva y paulatina de la presente ley.

La cuenta de inversión del ejercicio cerrado remitida a la Legislatura deberá presentarse con un informe global que contenga la evaluación del cumplimiento del presupuesto del ejercicio anterior, comparando con el presupuesto aprobado por la Legislatura y la ejecución informada en la cuenta de inversión, explicando las diferencias ocurridas en materia de ingresos, gastos y resultados financieros.

ARTICULO 92

Aprobación de la cuenta de inversión

La cuenta de inversión será presentada por el Poder Ejecutivo conforme lo establece la Constitución de la Provincia en el artículo 144 (Inciso 12°) y en la forma que prevé la presente ley.

La cuenta de inversión será aprobada en los términos previstos por el artículo 104 (Inciso 31°) de la Constitución de la Provincia.

TITULO III

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CAPITULO UNICO

ARTICULO 93

Conformación del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno queda conformado por:

Fiscalía de Estado, que tiene a su cargo el control de la legalidad administrativa, la defensa del patrimonio de la Provincia y el control interno y preventivo con relación a todos los actos administrativos que inicie cada ministerio, organismo, empresa y sociedades (sean del Estado o de economía mixta).

La Dirección de Auditoría, creada en el ámbito de la Contaduría General de la Provincia, a cargo del Sub Contador General Auditor, es responsable del control interno de la gestión económica, financiera y patrimonial en la actividad administrativa de los poderes del Estado.

El Sub Contador General Auditor se somete a la responsabilidad jerárquica del titular del Poder Ejecutivo.

Las unidades de control interno que serán creadas en cada jurisdicción y en las entidades que dependan del Poder Ejecutivo, las que estarán integradas por un delegado de Fiscalía de Estado y otro de la Dirección de Auditoría. Estas unidades dependerán, administrativa, jerárquica y funcionalmente de Fiscalía de Estado y Dirección de Auditoría respectivamente.

La Fiscalía de Estado y la Dirección de Auditoría de la Provincia actuarán coordinadamente con la finalidad de la aplicación del control interno, debiendo –para ello- prever el dictado de resoluciones conjuntas a los fines de establecer normas generales de control interno, la elaboración del plan anual de auditoría y la definición de procedimientos internos de las jurisdicciones y entidades. Podrán dar intervención al Poder Ejecutivo cuando no exista pleno acuerdo entre las partes a fin de definir las controversias existentes.

ARTICULO 94

Responsabilidad de las autoridades superiores

La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad dependiente del Poder Ejecutivo será responsable del mantenimiento del sistema de control interno, que deberá incluir los instrumentos de control incorporados en el plan de organización, en los

reglamentos y manuales de procedimiento de cada organismo, conforme a los lineamientos determinados por la Fiscalía de Estado y la Dirección de Auditoría.

ARTICULO 95

Auditoría interna – definición

La auditoría interna es un servicio a toda la organización y consiste en un examen de las actividades financieras y administrativas de las entidades a que hace referencia esta ley, realizada por los auditores integrantes de las unidades de auditoría interna. Las funciones y actividades de los auditores internos deberán mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen.

ARTICULO 96

Modelo de control

El modelo de control que aplique y coordine la Dirección de Auditoría deberá ser integral e integrado, abarcar los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones y estar fundado en criterios de economía, eficiencia y eficacia.

ARTICULO 97

Funciones de la Dirección de Auditoría

La Dirección de Auditoría, dentro del sistema de control interno, tendrá las siguientes funciones específicas, a saber:

Aplicar los principios de auditoría generalmente aceptados, recomendaciones o resoluciones técnicas, que considere adaptables al sector público provincial;

Dictar y aplicar normas de auditoría interna, las que deberán ser coordinadas con el Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado;

Producir informes relacionados con el cumplimiento de objetivos y metas a fin de asesorar para la toma de decisiones;

Inspeccionar y verificar las operaciones económicas, financieras y patrimoniales de los servicios administrativos y organismos del Estado Provincial en el tiempo y forma que lo estime conveniente;

Verificar las entradas y salidas de fondos y valores de la Dirección General de Tesorería y Crédito Público y arquear sus existencias;

Emitir y supervisar la aplicación, por parte de las unidades correspondientes, de las normas de auditoría interna;

Realizar o coordinar la realización por parte de estudios profesionales de auditores independientes, de auditorías financieras, de legalidad y de gestión, investigaciones especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, así como orientar la evalua-

ción de programas, proyectos y operaciones;

Vigilar el cumplimiento de las normas contables, emanadas de la Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado;

Supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de auditoría interna facilitando el desarrollo de las actividades del Tribunal de Cuentas;

Establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las unidades de auditoría interna;

Aprobar los planes anuales de trabajo de las unidades de auditoría interna, orientar y supervisar su ejecución y resultado;

Comprobar la puesta en práctica, por los organismos controlados, de las observaciones y recomendaciones efectuadas por las unidades de auditoría interna y acordadas a los respectivos responsables;

Atender los pedidos de asesoría que le formulen el Poder Ejecutivo y las autoridades de sus jurisdicciones y entidades en materia de auditoría;

Formular directamente a los órganos comprendidos en el ámbito de su competencia, recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, la correcta aplicación de las reglas de auditoría interna y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia;

Poner en conocimiento del titular del Poder Ejecutivo, Ministro de Producción y Finanzas, Fiscalía de Estado y al Ministro de la Jurisdicción de que se trate, los actos que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear perjuicios para el patrimonio público;

Elevar como mínimo un informe confidencial trimestralmente al Poder Ejecutivo, con copia al Contador General de la Provincia, Ministro de Producción y Finanzas y Secretario de Administración Financiera, sobre los aspectos que supervise o actos que estime puedan acarrear un grave perjuicio al patrimonio público. Dicho informe será realizado bajo la responsabilidad del Sub Contador a cargo de la Dirección de Auditoría, sin otra intervención previa o posterior;

Mantener un registro central de auditores y consultores a efectos de la utilización de sus servicios.

ARTÍCULO 98

Estudios de Consultoría

La Dirección de Auditoría queda facultada para contratar estudios de consultoría y auditoría bajo específicos términos de referencia, planificar y controlar la realización de los trabajos, así como cuidar de la calidad del informe final.

ARTÍCULO 99

Obligación de informar a la Dirección de Auditoría

La Dirección de Auditoría podrá requerir de los organismos comprendidos en el ámbito de su competencia, la información que le sea necesaria, para el cumplimiento de sus funciones. Para ello todos los agentes y/o autoridades del sector público provincial prestarán su colaboración, considerándose la conducta adversa como falta grave.

ARTÍCULO 100

Dirección de Auditoría

La Dirección de Auditoría estará a cargo del Sub Contador General Auditor, quien, - para el ejercicio de sus funciones - deberá cumplir los requisitos del artículo 74 (penúltimo y último párrafo). La Dirección de Auditoría deberá contar como mínimo con un especialista en estadística, otro en organización y métodos y otro en administración financiera.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CAPÍTULO I

DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ARTÍCULO 101

Servicios Administrativos

Los servicios administrativos que se constituyan estarán a cargo de una Dirección, Gerencia o un Departamento de Administración, de acuerdo se determine en la ley orgánica de ministerios y su reglamentación.

ARTÍCULO 102

Conducción de los Servicios Administrativos

Los servicios administrativos estarán a cargo de un responsable, sean gerentes, directores o jefes de departamentos, según se determine en la ley orgánica de ministerios y su reglamentación.

Será requisito para ejercer la titularidad del servicios administrativo, ser profesional con título universitario en ciencias económicas con una antigüedad de dos (2) años en el ejercicio profesional.

ARTÍCULO 103

Funciones

Los servicios administrativos tendrán las siguientes funciones:

Coordinar, en la medida que la estructura orgánica lo prevea, las unidades operativas periféricas;

Formular el anteproyecto del presupuesto y cuando corresponda la proyección de recursos de su

respectiva jurisdicción, de acuerdo a las directivas que se impartan;

Llevar la contabilidad de los organismos que conforman la competencia del servicios administrativo;

Ajustar todo el proceso contable y los sistemas de registración a las instrucciones que imparta la Contaduría General de la Provincia;

Suministrar la información necesaria para liquidar los haberes y demás retribuciones del personal, como así también atender los otros gastos de su jurisdicción;

Intervenir y controlar, cuando corresponda, en todos los asuntos que se relacionen con la recepción, recaudación, inversión o depósito de fondos y valores, como así también de los bienes afectados al servicios administrativo. En la gestión de gastos verificará la existencia de crédito presupuestario y en su caso efectuará la afectación preventiva necesaria;

Rendir cuenta de los valores y efectivo recibidos, a los organismos de control que correspondan;

Informar en todos los asuntos de su competencia que le sean sometidos a consideración utilizando, cuando sea pertinente, el criterio de la Contaduría General de la Provincia;

Observar todo acto que llevado a su conocimiento constituya una transgresión a disposiciones legales. En caso de insistencia del Superior dará inmediata intervención a la Contaduría General de la Provincia;

Mantener las normas de control interno en los organismos bajo su jurisdicción;

Serán responsables de imputar a los créditos del nuevo presupuesto los gastos comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio anterior;

Cumplimentar los pagos cuando corresponda, de acuerdo a la reglamentación;

Toda otra función técnica compatible con su función que se le asigne.

ARTÍCULO 104

Potestad Normativa

Cuando las unidades rectoras centrales y el órgano coordinador se expidan haciendo uso de su potestad normativa, dichas normas serán de aplicación obligatoria para toda la hacienda pública. Cuando se hayan definido procedimientos especiales por leyes específicas de administración de la hacienda pública, los mismos deberán interpretarse como derogados tácitamente y resultarán de aplicación los procedimientos que surgen de esta ley y su reglamentación.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

ARTÍCULO 105

Principio de Ejecución de la presente Ley

Las disposiciones contenidas en esta ley deberán tener principio de ejecución a partir del ejercicio financiero en que se sancione la misma.

El Poder Ejecutivo, por medio de la propuesta que eleve el Ministerio de Producción y Finanzas establecerá el cronograma y metas temporales que permitan lograr la plena instrumentación de los sub-sistemas de presupuesto, tesorería, contabilidad y control interno previstos en esta ley.

Asimismo indicará el procedimiento a seguir toda vez que las normas se refieran al concepto del devengado y hasta tanto se ponga en pleno funcionamiento el registro contable de dicha etapa de ejecución presupuestaria, se mantendrá el ordenado pagar como etapa del gasto donde se considera gastado un crédito, por lo tanto ejecutado el presupuesto, y donde procede el cálculo del resultado.

El procedimiento que determine el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Producción y Finanzas, para la realización del control preventivo de las órdenes de pago, o documento que haga sus veces, deberá estar en condiciones de aplicación inmediata, al momento en que dicha función pase a estar bajo las responsabilidades de la Contaduría General.

Se revalidan las órdenes de pago que hubieran caducado con anterioridad a la sanción de la presente ley, las que mantendrán su vigencia mientras la obligación principal no hubiere prescripto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 de la presente.

ARTÍCULO 106

Reglamentación

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de su promulgación.

ARTÍCULO 107

Derogación

DEROGANSE los Capítulos I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII y XIII de la Ley n° 7631 ("Ley Orgánica de Contabilidad, Presupuesto y Administración"), y todas las demás disposiciones que se opongan a los contenidos de la presente.

ARTÍCULO 108

Vigencia

ESTA ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 109

Interpretación

TODO conflicto normativo relativo a su aplicación deberá interpretarse y resolverse en beneficio de la presente ley.

ARTÍCULO 110**Adhesión**

INVÍTASE a las Municipalidades y Comunas de la Provincia de Córdoba adherir a la presente Ley.

ARTÍCULO 111**Comunicación**

COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.

Dr. Domingo Angel Carbonetti (h)
Dr. Herman Pedro Olivero

**Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura Provincial**

Dr. Francisco Fortuna

S / D

Estimado señor presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su intermedio, a los demás miembros de ese Cuerpo – en los términos del artículo 144 (incisos 3° y 11°) de la Constitución de la Provincia- a fin de elevarle proyecto de ley que propone aprobar un régimen integral para la ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL INTERNO de la administración general del Estado Provincial.

La actual ley de contabilidad, como es sabido, regula los sistemas de presupuesto, tesorería, contabilidad y patrimonio y ha cumplido un rol fundamental para regular ciertas situaciones vinculadas al desarrollo de los aspectos financieros del estado.

Sin embargo el paso del tiempo ha exigido su reiterada adaptación a nuevas situaciones o a situaciones no previstas originariamente, siendo la ley de presupuesto anual la receptora de tales modificaciones y adecuaciones.

Así, entonces, y debido que resulta necesario homogeneizar y unificar la dispersa legislación vigente en un cuerpo normativo sistemático que, a la vez, permita modernizar la gestión y control es que se ha concebido el actual proyecto de ley, el cual se adapta a la legislación nacional vigente, incorporando iguales criterios para el cálculo del resultado, método de registración contable y de control interno, reafirmando además normas regulatorias vigentes.

El proyecto que se remite trata, exclusivamente, los sistemas de contabilidad, tesorería, presupuesto, aspectos expositivos de las inversiones públicas y regula el marco conceptual para celebrar

operaciones de crédito público, manteniendo vigente los sistemas de administración patrimonial y contrataciones.

Concibe la administración financiera como un sistema integrado por subsistemas, coordinados por un organismo que tendrá la responsabilidad de elaborar políticas, desarrollar la normativa y supervisar su aplicación.

Tiene por finalidad, en síntesis, aportar racionalidad a la administración financiera del sector público no financiero e instituir una estructura de controles internos sobre la gestión de los entes públicos, que posibilite se tornen mas transparentes los mecanismos de obtención y aplicación de los recursos públicos.

Para mayor abundamiento, hago presente que en la elaboración del presente proyecto se ha tenido en cuenta las siguientes premisas:

El sector público no financiero, no está alcanzado en su totalidad por las normas de administración financiera.

No existe en la actual ley de contabilidad un capítulo específico destinado al sector empresas y agencias;

La Provincia se ha modernizado en materia informática y ello exige un cambio normativo con la finalidad de acompañar el actual desarrollo tecnológico.

En materia de control interno aparece diluída la responsabilidad que la constitución le otorga a la Contaduría General de la Provincia y a la Fiscalía de Estado, y – por lo tanto – se hace necesario crear un marco jurídico adecuado que permita integrar y delimitar al ámbito de acción de los organismos mencionados.

Es necesario precisar con claridad las normas que regularán en el futuro el crédito público y dotar a la administración de normas adecuadas de programación financiera.

El proceso de registro se fundamenta en el método de la partida doble y en los principios y normas de contabilidad generalmente aceptado como adecuados al sector público;

Existe la necesidad de participar al Poder Legislativo con información para su conocimiento y toma de decisiones;

Resulta necesario depurar la ley de presupuesto de normas que han modificado la ley de contabilidad vigente.

Adicionalmente a lo expuesto, es necesario destacar que se explicitan los criterios para interpretar la ley, los cuales constituyen principios fundamentales que imponen las modernas concepciones de gestión y de procesamiento de información, como lo es la centralización normativa, descentralización

operativa e interrelación sistemática.

A continuación se detallan los principales conceptos introducidos.

COBERTURA

Sector Público no Financiero, integrado por los Poderes de la Constitución Provincial. Este último comprende la Administración Central, Organismos Descentralizados y Empresas y Agencias.

SISTEMAS COMPRENDIDOS

Sistema de Administración Financiera

Subsistema de Presupuesto

Subsistema de Contabilidad

Subsistema de Tesorería

El Subsistema de Crédito Público quedará incluido en todas las formas del uso del crédito, su circulación, rescate, amortización y cancelación que autorice contratar la Ley Anual de Presupuesto. Asimismo quedan incluidas todas las formas de uso del crédito y cancelación que tengan por objeto financiar los déficit estacionales de caja.

El Subsistema de Inversiones Públicas quedará incluido en todos aquellos aspectos que definan el detalle de los proyectos y obras e inversiones previstas.

Sistema de Control

El sistema de control quedará conformado con los órganos consagrados por la Constitución Provincial.

El control interno de la hacienda pública estará a cargo de la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia y el externo corresponderá al Tribunal de Cuentas de la Provincia. El control externo estará regulado por su ley específica.

ORGANIZACIÓN BÁSICA

COORDINADOR

Ministerio de la Producción y Finanzas

ORGANOS RECTORES

De acuerdo a la Ley de Ministerio vigente los organismos rectores de los sistemas serán los siguientes:

Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas

Dirección General de Tesorería y Crédito Público

Contaduría General de la Provincia

Fiscalía de Estado, en materia de control interno de Legalidad

UNIDADES INSTITUCIONALES

En cada uno de los poderes, Jurisdicciones y

Entidades funcionará al menos un Servicio Administrativo

En cada uno de los servicios administrativos funcionarán las unidades operativas periféricas que mantendrán relación directa con las unidades rectoras centrales de los respectivos subsistemas, a través de la autoridad del mencionado Servicio Administrativo, a menos que esta Ley disponga lo contrario.

CRITERIOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY

Los criterios metodológicos básicos en esta Ley, que deben tenerse presente para su interpretación y reglamentación son las siguientes:

Interrelación sistémica

Centralización normativa a cargo de las Unidades Rectoras Centrales, mediante la definición de objetivos, elaboración de pautas, metodología y procedimientos generales. Las Unidades Rectoras Centrales actuarán bajo la supervisión de la autoridad mencionada en bajo el título Órganos Rectores.

Centralización operativa, asignando a las unidades operativas periféricas, de cada Poder, Jurisdicción y Entidad, la ejecución de los subsistemas de la presente Ley, de acuerdo a la reglamentación que se dicte, la consiguiente responsabilidad para todas ellas de cumplir con esta Ley, su reglamentación y las normas técnicas que emitan los respectivos órganos rectores.

PRINCIPALES ASPECTOS SOBRE LOS SISTEMAS QUE ABARCA

Presupuesto

Utilización de Técnicas de formulación y exposición que permitan vincular planes, políticas y producción de bienes y servicios con recursos reales y financieros.

Fijación clara de la Estructura de Presupuesto la cual abarca la Administración General, comprendida esta por la Administración Central y Organismos Descentralizados;

Régimen Presupuestario Federal para Empresas y Sociedades del Estado;

Régimen de Programación de la Ejecución con fijación de límites financieros;

Obligación de presentar proyecciones financieras sobre los Proyectos de Inversión y Programas; Financiados por Organismos Internacionales;

Normas básicas para la Formulación del Presupuesto, sus Modificaciones durante el Ejercicio y Evaluación Presupuestaria.

Destina un capítulo especial que establece las normas básicas para exponer los Proyectos de Inversión en el Presupuesto

Tesorería

Atribuciones para:

Participar en la Programación de la Ejecución

Fijación de cuotas de pago;
Regular todo el endeudamiento, inversiones y rescate de deuda de corto plazo.

Organización del Padrón de Cuentas Corriente Oficiales y beneficiarios de Pago

Establecimiento del sistema de Cuenta Única o Fondo Unificado

Crédito Público

Definición del Endeudamiento y las formas que puede asumir, Letras del Tesoro, Títulos, Préstamos y Contratación de Obras, Bienes y Servicios cuando trascienda el ejercicio financiero y el otorgamiento de Aavales.

Prohibiciones de los Organismos de endeudarse sin autorización del Ministerio de La Producción y Finanzas.

Prohibición de otorgar aavales a entidades del sector público o a personas ajenas a este sector, sin que exista ley especial.

Prohibición de contratar Deuda Pública si no está contemplado en la Ley de Presupuesto, se exceptúa de esta condición al Poder Ejecutivo cuando las operaciones tengan por destino la reestructuración de la deuda, siempre que esta no incremente el déficit.

Contabilidad

Definición del sistema contable como integrador del registro de todas las transacciones económico financieras el que estará fundamentado en los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, adaptados al sector público y basados en el método de registración de la partida doble.

Prevé una contabilidad en el futuro sin papeles, sustentadas por medios informáticos al establecer que:

Todo acto o hecho económico o financiero deberá estar debidamente registrado y documentado.

Por medios informáticos se podrán generar comprobantes, procesar y transmitir documentos e informaciones y producir los libros contables correspondientes.

Podrá acreditarse la veracidad de la instrumentación de la transacción pertinente y de la información registrada a través de la presentación de los archivos digitalizados o procesada por medios informáticos.

Define los momentos de registro del gasto y al devengado como el momento en el cual calcula el resultado.

En cuanto al presupuesto de recursos se considerará ejecutado en el momento en el cual se perciben los mismos por cualquier oficina o agencia recaudadora.

Define que el resultado financiero de la ejecución presupuestaria de un ejercicio, se determinará al cierre del mismo, por la deferencia entre los recursos efectivamente recaudados y los gastos devengados. En función del signo negativo o positivo de esta ecuación se denominará déficit o superávit financiero respectivamente. El resultado así obtenido se le sumarán y restarán las fuentes y aplicaciones financieras.

Se define como fecha de cierre del ejercicio el 31 de diciembre y la eliminación de los residuos pasivos.

Define:

1) Procedimientos para imputar al ejercicio siguiendo los compromisos no devengados.

2) La presentación trimestral a la legislatura sobre información de la ejecución presupuestaria.

3) Plazo para que la legislatura se pronuncie sobre la cuenta de inversión.

4) Los estados de ejecución presupuestaria y del tesoro que deben acompañar la cuenta de inversión.

5) La forma en que se presentará la cuenta ahorro inversión financiamiento.

Control Interno**Introducción**

A fin de dar cumplimiento a un principio básico del control que establece que quien registra no puede ejercer el control y visto que la Constitución de la Provincia define que la Contaduría General de la Provincia ejerce el Control Interno, se crea la Dirección de Auditoría dentro de la Contaduría General a cargo del Subcontador General Auditor, quien reportará directamente al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de la Producción y Finanzas.

Conformación del Control Interno

El sistema de control interno queda conformado por:

1) Fiscalía de Estado que tiene a su cargo el control de la legalidad administrativa, la defensa del patrimonio de la Provincia y el control interno y preventivo con relación a todos los actos administrativos que inicie cada Ministerio, Organismos, Empresas, Sociedades del Estado y de Economía Mixta.

2) La Dirección de Auditoría, creada en el ámbito de la Contaduría General de la Provincia, a cargo del Subcontador General Auditor, es responsable del control interno de la gestión económica, financiera y patrimonial en la actividad administrativa de los poderes del Estado.

El Subcontador General Auditor se somete a la responsabilidad jerárquica del Sr. Gobernador a Cargo del Poder Ejecutivo.

Las unidades de control interno que serán creadas en cada Jurisdicción y en las entidades que dependan del Poder Ejecutivo Provincial, las que estarán integradas por un delegado de Fiscalía de Estado y otro de la Dirección de Auditoría. Estas unidades dependerán, administrativa, jerárquica y funcionalmente de Fiscalía de Estado y Dirección de Auditoría respectivamente.

La Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia actuarán, de acuerdo a las facultades que prevé la Constitución de la Provincia, coordinadamente con la finalidad de la aplicación del control interno debiendo para ello prever el dictado de resoluciones conjuntas a los fines del dictado de las normas generales de control interno, la elaboración del plan anual de auditoría y la definición de procedimientos internos de las Jurisdicciones y Entidades. Podrán dar intervención al Poder Ejecutivo cuando no exista pleno acuerdo entre las partes a fin de definir la controversia entre las partes.

Por último, y en cuanto a los antecedentes legislativos que se han tenido en cuenta en la elaboración del presente proyecto, son los que a continuación se detallan de manera genérica y, luego, en forma específica para cada artículo proyectado:

Ley 24.156, abreviatura utilizada en el documento LN

Decreto Reglamentario 2666/92, abreviatura utilizada Dto. 2666/92

CP Constitución Provincial, abreviatura utilizada

El Nacional de Inversiones Públicas
Ley 8836

LP Ley 7631 actualizada, abreviatura utilizada

Por las razones expuestas y en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia de sancionar éste régimen legal, le ruego ponga el presente proyecto ley a consideración de la Legislatura Provincial, para que —en los términos de los dispuesto por los artículos 104 (Inciso 41°) de la Constitución Provincial— preste aprobación al mismo si así considera el alto criterio de sus miembros.

Le saludo con distinguida consideración y estima.

CÓRDOBA, 14 de Noviembre de 2002.

Dr. Herman Pedro Olivero

Lic. Juan Schiaretta

Dr. Domingo Ángel Carbonetti

PROYECTO DE LEY – 00167/L/02

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1.- Todas las Empresas y Organismos que se mencionan en el artículo 4 de la presente Ley, pertenecientes total o parcialmente al Estado Provincial, están obligadas a publicar sus Estados Contables, por lo menos una vez al año, al cierre de cada ejercicio. Dicha publicación deberá realizarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en los dos diarios de mayor circulación en la Provincia y en la página de Internet del Gobierno de Córdoba.

Artículo 2.- Establécese la obligación de remitir a la Legislatura de la Provincia de Córdoba por parte de las Empresas y Organismos, que se mencionan en el artículo 4, los correspondientes Estados Contables debidamente certificados y con dictamen de la Sindicatura, si la tuviere.

Artículo 3.- La presente ley obliga a aquellas Empresas y Organismos que se mencionan en el artículo 4 que solamente tengan ejecución de partidas presupuestarias a presentar el detalle de asignación y cumplimiento de las mismas en forma semestral como también los déficit que se producen en el cumplimiento del presupuesto asignado y sus formas de financiamiento como asimismo las reasignaciones presupuestarias que se realicen.

Artículo 4.- Esta Ley será aplicable a todas las Empresas y Organismos del Estado Provincial, comprendiendo entre otras a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades del Estado (Ley N° 20705), sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación en el capital o en la toma de las decisiones societarias independientemente del grado de su participación; comprendiendo también a las instituciones de seguridad social, obra social y salud pública de la provincia de Córdoba.

Artículo 5.- Serán aplicables las normas de esta Ley, sólo en lo relativo a la aplicación de fondos y rendición de cuentas, a las organizaciones privadas a las que el Estado Provincial les haya acordado subsidios o aportes de fondos y a las instituciones cuya administración, guarda o conservación, estén a cargo del Estado provincial a través de sus jurisdicciones o entidades.

Artículo 6.- La información a que se refiere los artículos anteriores deberá ser remitida a la Legislatura Provincial dentro de los treinta días siguientes

tes a la finalización de cada semestre y en los casos de información del ejercicio anual deberá ser remitida y publicada antes del 31 de mayo de cada año.

Artículo 7.- De forma.

Martín Luque, Asís Nicolás, Carmen Acuña, Adriana Domínguez.

FUNDAMENTOS

Ante la necesidad de que el manejo de los bienes del Estado Provincial tengan la necesaria difusión pública, es imprescindible dejar establecido la obligatoriedad y método de tal manera que toda la ciudadanía, fiscal inapelable de la gestión de gobierno, pueda contar con toda la información relacionada con el funcionamiento de las empresas donde el mismo tenga de una u otra forma un grado de participación o aportes de fondos, además de que el Poder Legislativo cuente rutinariamente con esta documentación basado en el grado de responsabilidad que tenemos para legislar en función del bien común.

De esta manera se torna indispensable, además, de que nuestra Legislatura a través de las comisiones correspondientes analice y evalúe todas las actividades donde el sector público o el bien común este involucrado. Esto no es para introducirse en otros ámbitos encargados específicamente de estas funciones de control y evaluación, sino que para tener una visión general de todo el funcionamiento del Estado provincial es necesario contar con los elementos de información que los mismos van generando, sin necesidad de recurrir a las facultades del Art. 102 de la Constitución Provincial para solicitar informes. De esta manera podremos a través de nuestro Cuerpo advertir sobre posibles problemas, desvíos y/o dificultades al organismo encargado de la gestión y no solamente intervenir cuando el problema toma estado público porque el ciudadano se ve afectado o porque existe una denuncia sobre algo en particular. Esperamos de esta manera aumentar el conocimiento de la gestión pública en general por parte de esta Legislatura para que por intermedio de las Leyes logremos una mayor transparencia y eficiencia en el Estado y un mayor bienestar en el ciudadano.

Martín Luque, Asís Nicolás, Carmen Acuña, Adriana Domínguez.

“Despacho de la Comisión de **Economía, Presupuesto, Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**, dictaminando acerca de los proyec-

tos de ley número 1794-L-02; 2235-L-02 y 167-L-02, compatibilizados, iniciados por los legisladores Urquía, Pizzorno, el Poder Ejecutivo Provincial y los legisladores Asís Nicolás, Domínguez Reyna, Luque y Acuña, respectivamente, por el que se aprueba un régimen integral para la Administración General del Estado Provincial, aconsejando la aprobación de la manera en que ha sido remitido”.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el legislador Pizzorno.

Sr. Pizzorno.- Señor presidente, ante todo solicito la inclusión como coautores, en el expediente número 1794, de los legisladores Novillo Corvalán, Chiofalo, Goñi, Blanco, Fino, Lizio, Dandach y Domínguez.

Sr. Presidente (Olivero).- Así se hará, señor legislador.

Continúa en el uso de la palabra el legislador Pizzorno.

Sr. Pizzorno.- Señor presidente, señores legisladores, la ley que vamos a tratar consta de numerosos artículos, y por eso esta exposición mía que suele ser breve, hoy va a ser más extensa que nunca.

El proyecto número 1794 fue iniciado por el legislador Urquía y por quien habla, tomó estado Parlamentario en la 34ª Sesión Ordinaria del año 2002 y estamos tratándolo en forma conjunta con el proyecto de ley número 2235, enviado por el Ejecutivo, también en el año 2002.

Estos proyectos fueron compatibilizados luego de un intenso trabajo realizado por todos los integrantes de la Comisión de Economía, por lo propios legisladores, por los asesores, por los colaboradores de la misma y también por miembros del Poder Ejecutivo, quienes nos visitaron en estas jornadas de trabajo.

Quiero contar muy sintéticamente los hechos y acontecimientos que nos llevaron a estar aprobando estos proyectos de leyes en la sesión del día de la fecha.

En primer lugar, fueron muchas las oportunidades en las cuales, en el seno de la comisión, coincidíamos en la necesidad de trabajar sobre normas importantes que prestigiaran nuestro accionar ante la ciudadanía. Y en esto se daba una coincidencia total entre los miembros cuando decíamos que debíamos

reformular el sistema contable de la Hacienda Pública Provincial, para tratar de unificar lo que los contadores llaman el "idioma contable del sector público, ya que dentro de él conviven distintas formas de sistemas y normas contables, ya sea que se haga referencia a distintas jurisdicciones: nacional, provincial o municipal.

El otro hecho en el cual se coincidía era en la necesidad de la inclusión del método de la partida doble contable para la registración de las operaciones de la hacienda pública, ya que es una importante herramienta técnica para la instrumentación adecuada de un sistema contable público moderno.

Con relación al sistema de partida doble, ya estaba previsto en el artículo 98, de la Ley 7631, de Contabilidad Provincial, pero consideramos que las posibilidades de informática que hoy brinda la tecnología, hacen factible su pronta instrumentación y ayudan a la integración de los sistemas contables.

Los sistemas informáticos de que disponemos, permiten el manejo informático en línea de todos los datos, por lo que se buscaría suplir falencias o deficiencias en los criterios de registración sistemática de las transacciones y de confección y exposición de la información contable de la hacienda pública, evitando maniobras contables que muestren información incorrecta, se produzcan errores o se oculten irregularidades o deficiencias del sistema.

Fue dentro de ese marco y con estas ideas que se presentó un proyecto de ley bajo el título de "Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control de la Hacienda Pública Provincial". En ese proyecto tomábamos como base la Ley nacional 24.156, que es la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público nacional y su decreto reglamentario, con el objeto de ser congruentes con lo planteado anteriormente, relativo a la dispersión de normas que establecen sistemas contables para la hacienda pública. La meta fue siempre tratar de consensuar principios, normas y sistemas contables de aplicación común, única y uniforme, que integren la ejecución presupuestaria con los movimientos del Tesoro y del patrimonio, que permitan determinar resultados y costos de las operaciones públicas y exponer y presentar es-

tados contables que contengan información pertinente, confiable, clara, sistemática y comparable.

La ley enviada por el Ejecutivo partía de la Ley Orgánica de Contabilidad y Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, N° 7631, de 1987. Este proyecto del Ejecutivo se aproxima conceptualmente a la Ley nacional de Administración Financiera. Esta aproximación y del origen de nuestro proyecto, que había tenido como base la ley nacional, surge la posibilidad de esta compatibilización, clara, precisa y conducente a los mismos objetivos.

Luego de haber hecho un poco de historia, vamos a referirnos ahora a la parte sustancial del proyecto, o por lo menos, en el análisis pormenorizado del proyecto consensuado. En primer lugar, un tema que reclama toda la sociedad a quienes circunstancialmente ocupamos lugares políticos, es la responsabilidad funcional, que está directamente vinculada con lo que quizás ha tomado más trascendencia pública en estos dos últimos días, que es la responsabilidad patrimonial de los funcionarios. Cuando hablamos de responsabilidad patrimonial, nos referimos a la calidad y regularidad de la información contable que brindan los encargados de producirla. Este es quizás uno de los aportes más importantes de esta ley. Sabemos que no será fácil la implementación de la normativa en sus comienzos, ya que la antigua Ley de Contabilidad provincial que - como decíamos- data de 1987, debemos resaltar en ella que hay aspectos positivos que fueron volcados en esta redacción, pero queremos que ello no sea excusa para que se escuden quienes tienen pavor a los cambios.

Queremos dejar en claro que se debe avanzar en la modificación de la regulación del Tribunal de Cuentas de la Provincia, hecho que está contemplado en esta ley, dentro del sistema global a esta institución. La estructura de la ley es la siguiente: comienza con una serie de definiciones generales, se refiere al sistema global de la administración y de sus subsistemas, de los objetivos, de la estructuración de estos sistemas y de la competencia de esta ley. Esto es, el sistema público provincial no financiero, que comprende a la administración general y a las empresas, agencias y entes es-

tatales.

El sistema integrado de la administración financiera estará compuesto por los siguientes subsistemas, que deberán estar relacionados entre sí: el Subsistema de Presupuesto, el Subsistema de Tesorería, el Subsistema de Contabilidad, el Subsistema de Crédito Público y el Subsistema de Inversiones Públicas.

El control interno de la hacienda pública estará a cargo de la Fiscalía de Estado; la Contaduría General de la Provincia y el externo corresponderán al Tribunal de Cuentas. Los subsistemas estarán a cargo de unidades rectoras centrales, denominadas "UCERES", que dependerán directamente del órgano que ejerza la fijación de políticas, la coordinación y supervisión de los mismos.

Vamos a hacer un repaso muy sintético, que puede resultar aclarativo de lo expresado por la ley en cada uno de estos subsistemas. El primer subsistema contemplado, que ya mencionamos, es el de Presupuesto; dentro de él, hay aspectos interesantes, como por ejemplo que la Ley de Presupuesto no podrá contener disposiciones de carácter permanente, reformar o derogar leyes vigentes; crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos; cambiar la organización o estructura de la administración, cuyas actividades deben ser fijadas por leyes específicas. Este es un cambio sustantivo en lo que hasta ahora ha sido de costumbre respecto de los alcances de la Ley de Presupuesto. Se tiende a la unificación de cuentas entre contabilidad presupuestaria y de registro, de modo de mejorar esa articulación.

El Poder Ejecutivo presentará el proyecto de Ley de Presupuesto General a la Legislatura, bajo los términos previstos en el artículo 144 de la Constitución provincial, acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar, la explicación de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y gastos, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportuno. Se faculta al Poder Ejecutivo a disponer la distribución analítica de los créditos del Presupuesto sancionado, la habilitación de los créditos, cuando se correlacionan

con la incorporación de recursos que surjan de aplicación de leyes provinciales; la habilitación de los créditos para la atención de leyes, decretos y convenios a los que adhiera o formalice con el Estado nacional y hasta los montos que éste último disponga; la habilitación de los créditos para atender servicios requeridos por terceros, que se financien con su producido, hasta la suma que se percibe como retribución de los mismos; la modificación de los presupuestos de los organismos descentralizados, siempre que no aumente el aporte de la administración central para cubrir su déficit; la cantidad de cargos previstos para transferirlos a otros o entre sí, sin que ello origine mayores costos.

Cuando la ejecución presupuestaria lo requiera, el Poder Ejecutivo podrá efectuar las reestructuraciones y modificaciones presupuestarias que sean necesarias en las previsiones para aplicaciones financieras, gastos, ingresos, fuentes financieras, la transferencia de cargos, horas cátedra de cargos docentes y viceversa, o supresión o creación de categorías presupuestarias, siempre con las siguientes limitaciones: no podrá modificar el resultado financiero del ejercicio, no podrá modificar el total autorizado de endeudamiento, ni tampoco podrá disminuir los créditos presupuestarios asignados a la finalidad que involucre a los servicios sociales por un monto superior al que surja de la parte proporcional que corresponda a esta finalidad sobre el total de las economías por no inversión.

El Poder Ejecutivo podrá disponer que el órgano coordinador de los subsistemas ejerza total o parcialmente las facultades a que refiere este artículo.

Con respecto a lo que decíamos a la imposibilidad de disminuir las partidas de servicios sociales, se agrega específicamente que no podrá ser alterada en menos la partida, que dentro de lo que son servicios sociales, figura como destinada a ciencia y técnica.

Esta es una señal y la puesta en práctica de que la inversión a largo plazo en la investigación y desarrollo se prioriza en nuestra provincia, siempre vinculada a los avances científicos, atendiendo a que estas actividades

son las que más contribuyen al crecimiento de nuestra calidad de vida y que son siempre una apuesta a largo plazo para mantener a la Provincia de Córdoba en su ya ameritada tradición de provincia vanguardista en lo que significan desarrollos tecnológicos.

Facultamos también al Poder Ejecutivo a delegar la decisión de efectuar modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados en la clasificación programática y en las distintas funciones dentro de la respectiva finalidad.

Esta facultad se hace extensiva al momento en el cual se distribuye el crédito del presupuesto aprobado por Ley Anual de Presupuesto, el cual puede ser distribuido a las jurisdicciones y entidades a un nivel más agregado al que el clasificador de cuentas presupuestarias contempla para su ejecución.

El presente régimen de modificaciones será aplicable cuando sea necesario modificar créditos al nivel de agregación que define la distribución analítica del presupuesto sancionado, aunque la ejecución deba realizarse respetando el máximo nivel de desagregación que contemple el clasificador de cuentas aprobado.

Las facultades que se brindan al Poder Ejecutivo apuntan a hacer más ágiles ciertas prácticas habituales de la administración. De todas maneras se ha agregado una obligación doble, y es la que indica que el Poder Ejecutivo debe comunicar estas modificaciones al Presupuesto y la que indica que la Legislatura, por medio de la Comisión de Presupuesto, Economía y Hacienda deba emitir un dictamen trimestral sobre estas modificaciones, de modo de poner en el tapete las mismas de modo de discutir las todas los representantes de los distintos bloques.

Por último es importante señalar que esta ley obliga a presentar presupuestos a todos los entes que integran el Estado provincial.

Los directorios o máxima autoridad ejecutiva de las empresas y otros entes públicos aprobarán el proyecto de presupuesto anual de su gestión y lo remitirán a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas en la fecha que estipule la reglamentación. Los presupuestos deberán expresar las políticas generales y los lineamientos específicos que en materia presupuestaria establezca el órgano

coordinador de los subsistemas de administración financiera y la autoridad de la jurisdicción correspondiente. Contendrán los planes de acción, programas y principales metas, nivel de gastos e ingresos clasificados por rubros y su financiamiento a un nivel de detalle que permita identificar las respectivas fuentes. El plan de inversiones, el presupuesto de caja y los recursos humanos a utilizar que permitan establecer el resultado operativo económico y financiero, a través de la cuenta ahorro, inversión y financiamiento previstos para la gestión respectiva.

El poder Ejecutivo elevará a la Legislatura Provincial, conjuntamente con el Presupuesto General de la Administración Pública, los presupuestos de las empresas y otros entes públicos, con los contenidos básicos que señalábamos.

El Poder Ejecutivo hará publicar en el Boletín Oficial, en la página web oficial de la provincia, junto con el presupuesto de la administración general, una síntesis de los presupuestos de las empresas y entes públicos con los contenidos básicos que se señalan en esta ley.

Se prohíbe a las entidades del sector público, realizar aportes o transferencias a las empresas y otros entes públicos, cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos que aquí se establecen, requisito que también será imprescindible para realizar operaciones de crédito público.

Se clasifica en esta ley a la deuda pública como interna, externa y a su vez, en directa e indirecta. Será considerada deuda interna aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina, cuyo pago es exigible dentro del territorio nacional. Se entenderá por externa, aquella contraída o constituida con otro estado u organismo internacional o con cualquiera otra persona física o jurídica con residencia en Argentina o en el exterior, cuyo pago puede ser exigible fuera del territorio.

La deuda directa de la administración central es aquella asumida por la misma en calidad de deudor principal. La deuda pública indirecta de la administración central, es aquella constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la adminis-

tración central pero que cuenta con su aval, fianza o garantía.

Hasta aquí hemos hecho una breve síntesis de lo que es el subsistema de presupuestos; van a ser más sintéticos los análisis de los siguientes subsistemas. El subsistema de Tesorería es el conjunto de principios, órganos o procedimientos por medio de los cuales se llevan a cabo los procesos de recaudación, planificación, ejecución de ingresos y efectivización de pagos que conforman el flujo financiero del sector público provincial. Comprende así mismo la tenencia y custodia de las disponibilidades que resulten.

Se entiende como subsistema de contabilidad el conjunto de principios, órganos o procedimientos técnicos utilizados para recopilar, valuar y procesar, como así también exponer los hechos y actos económicos y financieros que afecten o puedan afectar patrimonialmente las entidades públicas, que permitan medir el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración.

El sistema de Registración se basa en normas generalmente aceptadas y en la partida doble. Los Registros Contables estarán fundamentados en los principios de normas de contabilidad, generalmente aceptados y adaptados al sector público, tal como decíamos basados fundamentalmente, en el método de la registración de la partida doble.

Los estados de ejecución presupuestaria de gastos, deberán exponer las transacciones programadas en sus etapas de compromiso del devengado y el ordenado a pagar, y del efectivamente pagado, hasta el máximo nivel de desagregación previsto por el clasificador de cuentas presupuestarias, aún en aquellos casos en que el decreto analítico de distribución del crédito determine competencias de modificaciones presupuestarias y control del crédito más agregados.

La etapa del compromiso podrá distinguir los momentos de la afectación preventiva del crédito y definitiva del gasto.

Se definen en la ley los momentos evolutivos de las transacciones; el primero de ellos es el registro del compromiso preventivo y definitivo. El compromiso preventivo de los crédi-

tos presupuestarios se produce cuando se proyecta la realización de una determinada erogación, la cual tiene su origen en la solicitud de gastos o en la previsión del crédito correspondiente, hasta tanto se resuelva el trámite administrativo que autoriza o adjudica el acto a un tercero determinado. A tal fin, los créditos serán afectados siempre que la autoridad competente disponga el inicio de las gestiones de un trámite, atendiendo a que queden claramente delimitados el monto y el tipo del gasto proyectado.

En materia de ejecución del Presupuesto de Gastos, el compromiso definitivo implica el origen de una relación jurídica con terceros que pueda dar lugar en el futuro a una eventual salida de fondos.

En segunda instancia, la aprobación por parte de un funcionario competente, de la aplicación de recursos por un concepto e importe determinado de la tramitación administrativa cumplida.

En tercer lugar estaría la afectación del crédito presupuestario que corresponda, en razón de un concepto e importe predeterminado.

En cuarto lugar, tendríamos la identificación del sujeto con el que se establece la relación jurídica, así como la especie y cantidad de los bienes o servicios a recibir. No se podrán adquirir compromisos para los cuales no queden saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la prevista. Como principio general, los créditos presupuestarios sólo podrán ser comprometidos por un tiempo no mayor a la duración del respectivo ejercicio presupuestario. No obstante se podrán contraer compromisos susceptibles de afectar créditos de presupuestos correspondientes a ejercicios futuros, siempre que se asuman como consecuencia de la ejecución de planes plurianuales, y exclusivamente en los siguientes casos perfectamente determinados, cuales son: servicios y amortización de las deudas, obras que tengan un desarrollo plurianual en otros gastos correspondientes, contratos de locación de muebles e inmuebles que, por sus características, desde su inicio tienen una duración plurianual y contratos de servicios de suministros,

siempre que se verifiquen ventajas económicas significativas por una contratación en estos términos. El monto de compromiso que se afecte en todos los casos, no podrá superar la proporción correspondiente al gasto anual.

Para el caso de contratos de obras públicas y de locación de cosas que prevean ajustes en sus montos, se determinará el compromiso en función del valor contractual, más las variaciones razonables que resulten de la metodología de ajustes determinados en los respectivos contratos. La reglamentación establecerá los alcances, la modalidad y la unidad responsable del registro de la ejecución de créditos presupuestarios.

Los poderes del Estado Provincial determinarán, para cada uno de ellos, los límites cualitativos y cuantitativos, dentro de los cuales se podrán contraer compromisos por sí o por la competencia específica que al efecto asignen los funcionarios de sus respectivas dependencias o entidades. La competencia así establecida, será indelegable.

En materia de Ejecución de Presupuesto de Gastos, el devengado implica el cumplimiento de una obligación de pago por haberse dado alguno de los siguientes supuestos: afectación definitiva de los créditos presupuestarios, producidos por una modificación cuantitativa o cualitativa en la composición del patrimonio de la respectiva jurisdicción o entidad; puede darse, también, la certificación en conformidad de la recepción de las provisiones, o por la certificación en conformidad de la ejecución de los trabajos de obras públicas; por la certificación en conformidad de la prestación de servicios, por vencimiento de los servicios de la deuda. Puede darse también, en todo caso, cuando se ordena pagar por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para los órganos sin contraprestación.

En cuanto a la liquidación del gasto y la simultánea emisión de la respectiva orden de pago, en ningún caso se podrá devengar un gasto que no haya sido comprometido, salvo en los casos en que la naturaleza de los procedimientos hagan a ambas etapas simultáneas, o la reglamentación así lo establezca. No se podrá autorizar ningún gasto cuando no existan saldos de crédito disponibles, o no estén previstos en el presupuesto para devengar-

los. Los responsables de autorizar dichas operaciones responderán por el reintegro total o parcial del monto de la suma excedida en su caso.

Se define como "ordenado a pagar" al momento en que se dispone la cancelación de los gastos legítimos realizados, en virtud de los créditos autorizados en el presupuesto general y leyes que sancionen gastos, mediante la emisión de la respectiva orden de pago, o documento que haga sus veces, hasta el monto de la obligación, que no podrá superar lógicamente, al monto devengado.

Toda orden de pago deberá ser emitida dentro de los siete días hábiles de recibir, en el servicio administrativo correspondiente, la facturación, certificado de obra o documento que certifique la recepción conforme del bien o servicio. Fuera de ese lapso, el responsable deberá justificar ante el Tribunal de Cuentas las causas que motivaron la falta de emisión.

Se entiende por orden de pago a aquella que tiene por objetivo ordenar a la Dirección General de Tesorería o servicio administrativo que corresponda el pago de las obligaciones asumidas con terceros. Las mismas sólo prescriben cuando hayan sido canceladas, o haya prescripto la obligación principal. Los requisitos y formalidades que deberán contener las órdenes de pago serán establecidas por la Contaduría General de la Provincia.

Se podrán efectuar gastos por anticipos, siempre que se hubiese pactado en las respectivas contrataciones y el contratante constituya garantías equivalentes al monto percibido. La reglamentación determinará los casos en que se exceptúa para la constitución de las garantías. El pago refleja -como es sabido- la cancelación de las obligaciones asumidas con terceros y la efectivización total o parcial de la orden de pago o del documento que haga sus veces. El monto de pago se materializa con la entrega o puesta a disposición del cheque, la transferencia, el efectivo u otros valores aceptados por el tercero beneficiario.

En materia de ejecución del cálculo de recursos, se entiende por devengado, cuando en virtud de una relación jurídica, se establece un derecho de cobro a la Administración General y, simultáneamente, una obligación de pago por parte de personas físicas o jurídicas. Se

produce la recaudación de recursos, en el momento en que los fondos se perciben por una oficina recaudadora de un agente del Tesoro, o de cualquier funcionario facultado a recibirla. Esta ley prevé que se impidan las transferencias de fondos a los entes que no presenten sus presupuestos.

Ocurre lo mismo -ya lo habíamos dicho- con la posibilidad de obtener créditos. Se prohíbe a las entidades de la Administración Pública provincial realizar aportes o transferencias a empresas y sociedades del Estado, cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos de esta ley.

La Cuenta de Inversión deberá ser elevada a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas de la Provincia, en el segundo mes del período de sesiones ordinarias del año siguiente al del ejercicio fenecido, en los términos del artículo 144 de la Constitución provincial, y la ley establece que deberá contener, como mínimo, un informe sobre la evolución financiera, económica, patrimonial y de gestión consolidada de la administración general del ejercicio concluido, su inserción con el planeamiento propuesto, y su comparación con los ejercicios o períodos anteriores. Deberá contener los estados financieros y cumplimiento de metas y objetivos, así como el detalle de la Administración General, desagregando hasta el nivel previsto en la Ley de Presupuesto, a la ejecución del Presupuesto de recursos de la Administración General, desagregando hasta el nivel previsto en el texto de la Ley de Presupuesto, mostrando el compromiso y el devengado desagregados, hasta el nivel previsto en dicha ley; la Cuenta de Ahorro, de Inversión y Financiamiento de la Administración General, los estados que demuestren los movimientos de la situación del Tesoro de la Administración General; la situación de la deuda pública de la Administración General, desagregada por entes, préstamos y títulos; estado de recursos y gastos corrientes de la Administración Central; estado de origen y aplicación de fondos; balance general de la Administración Central, que informe los patrimonios netos de los organismos descentralizados, empresas y entes públicos; estado de resultado, balance general de las

entidades descentralizadas, empresas y entes; cumplimientos de metas, costos y objetivos, previstos en el Presupuesto.

El sistema de control se divide en interno y externo, y está integrado al sistema global de administración. El sistema de control interno queda conformado por la Fiscalía de Estado, que tiene a su cargo el control de la legalidad administrativa, la defensa del patrimonio de la Provincia y el control interno y preventivo con relación a todos los actos administrativos que inicie cada ministerio, organismo, empresas o sociedades, sean del Estado o de economía mixta.

La Dirección de Auditoría, creada en el ámbito de la Contaduría General de la Provincia, a cargo del subcontador general auditor, es responsable del control interno de la gestión económica, financiera y patrimonial de la actividad administrativa de los poderes del Estado. El subcontador general auditor se somete a la responsabilidad jerárquica del titular del Poder Ejecutivo. La Fiscalía de Estado y la Auditoría de la Provincia actuarán coordinadamente con la finalidad de la aplicación del control interno, debiendo para ello prever el estado de resoluciones conjuntas, a los fines de establecer normas generales de control interno, la elaboración del plan anual de auditoría y la definición de procedimientos internos de las jurisdicciones y entidades. Podrán dar intervención también al Poder Ejecutivo, cuando no exista pleno acuerdo entre las partes, a fin de definir las controversias existentes. Podrán ser creadas unidades de control interno en cada jurisdicción y en las entidades que dependan del Poder Ejecutivo, las que estarán integradas por un delegado de Fiscalía de Estado y otro de la Dirección de Auditoría, es decir de los dos entes encargados de la fiscalía interna.

La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad dependiente del Poder Ejecutivo será responsable del mantenimiento del sistema de control interno, que deberá incluir los elementos de control incorporados en el plan de organización, en los reglamentos y manuales de procedimientos de cada organismo, conforme a los lineamientos determinados por la Fiscalía de Estado y la Dirección de Audito-

ría.

Esto tiene que ver con lo que decíamos inicialmente sobre la responsabilidad funcional. Es un servicio a toda la organización y consiste en un examen de todas las actividades financieras y administrativas de las entidades a que hace referencia esta Ley, realizada por los auditores integrantes de las unidades de Auditoría Interna. Las funciones y actividades de los auditores deberán mantenerse desligadas de las operaciones, obviamente sujetas a su examen.

Este es un tema árido, sumamente pesado para quienes no están inmersos en temas financieros o administrativos, pero es la única manera de interpretar cabalmente el texto de esta Ley, que consta de tantos artículos.

La Dirección de Auditoría podrá requerir de los organismos comprendidos en el ámbito de su competencia, la información que le sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Para ello, los agentes y/o autoridades del sector público provincial, prestarán su colaboración, considerándose la conducta adversa como falta grave.

La Dirección de Auditoría está a cargo del sub-contador general auditor, quien para el ejercicio de sus funciones deberá cumplir los requisitos del artículo 74 de esta Ley.

El sistema de control externo, en el Tribunal de Cuentas, está regulado por la Constitución Provincial y por una ley específica. Este Tribunal de Cuentas deberá compatibilizar normas y procedimientos con el resto de los órganos de control.

Algo novedoso en esta ley -y es lo que tomó más trascendencia pública, pese a que mi entender, no es lo más significativo de la ley- son los artículos que hablan de la responsabilidad civil de los funcionarios públicos. Aquí establecemos que todo funcionario y/o agente público que se desempeñe en el sector provincial, deberá responder por los daños económicos, que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones, sufran los entes mencionados, siempre que no se encontraren comprendidas en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial.

Los hechos y actos violatorios de disposiciones legales reglamentarias, compartirán responsabilidad solidaria para quienes lo dis-

pongan, ejecuten o intervengan, quienes reciban órdenes de hacer o no hacer, y esto es sumamente importante porque limita la necesidad de delegar responsabilidades por simplemente haberlo advertido verbalmente, y decimos que quienes reciban órdenes de hacer o no hacer, deberán advertir por escrito a su respectivo superior, de toda posible infracción que traiga aparejada el cumplimiento de dichas órdenes. De lo contrario, incurrirán en responsabilidad exclusiva, si aquel no hubiere podido conocer la causa de la irregularidad, sino por su advertencia u observación por escrito.

Creo que con esto finalizamos los puntos originales o los razonamientos originales, sobre los que se basa el articulado de la ley.

Por último, quiero destacar las sugerencias y aportes, como así también críticas constructivas y la participación de todos los bloques políticos que componen esta Legislatura Unicameral. Todos, sin excepción, hicieron posible el enriquecimiento de este proyecto de ley. Deseo también mencionar que se ha utilizado en el tratamiento de estos expedientes, una posibilidad que permite nuestro reglamento interno, que fue propuesta por el legislador Novillo Corvalán, que es delegar el estudio y la redacción definitiva a una subcomisión creada dentro del marco de la comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda.

Esta comisión estuvo integrada por los legisladores Alfredo Blanco, Pablo Alvarez y Sofanor Novillo Corvalán. Ella estuvo también representada por el Poder Ejecutivo y enriquecida con contribuciones realizadas por el contador Miguel Ciballero; trabajaron el asesor Contador Sergio Senn del bloque de la U.C.R.; el Contador Carlos García, en representación de los bloques del ARI y el Partido Intransigente; el ingeniero Guillermo Guilles, del Movimiento Vecinalista; el contador Jorge Bocetti, del bloque Unipersonal; el ex Contador General de la Provincia, señor Ongaracena; la contadora Teresa Britos, el licenciado Pablo Durán por el bloque de Unión por Córdoba; la invaluable participación y contribución del relator de comisiones Mariano Almada, y de quienes colaboran ad-honorem en forma permanente con nuestra comisión, doctor Aldo Casti y el licenciado Aldo Michelli. A todos ellos, les agradecemos sinceramente.

Por último, quiero decir que esta ley permite que Córdoba adapte sus normas a la legislación nacional en lo atinente a la administración financiera y gubernamental, buscando lograr el objetivo de dotar a esta provincia de un instrumento legal regulatorio de un sistema contable integral e integrado que conjugue lo atinente al presupuesto con lo relacionado al patrimonio, los resultados y movimientos de fondos que originan las operaciones con incidencia económico y financiero.

A su vez, también invitamos a municipios y comunas a adherir al texto de esta ley, siguiendo los criterios de unificación legislativa antes mencionados. Creemos que este es un aporte importante para la transparencia en la planificación y la gestión y control del gasto público.

Ha sido este el deseo de los integrantes de la comisión y en especial el de su presidente, hoy ausente, contador Roberto Urquía, a quien le debemos una buena cuota de la iniciativa que hoy estamos discutiendo y seguramente aprobando.

Gracias a todos, y disculpen el exceso de mi exposición.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el señor legislador Blanco.

Sr. Blanco.- Señor presidente, brevemente voy a plantear la posición del bloque de la Unión Cívica Radical. Tal como lo adelantara el miembro informante; vamos a acompañar en general y en particular esta ley de Administración Financiera y Control de la Administración.

No me voy a detener en los aspectos puntuales, habida cuenta que ha sido detallada la exposición que realizara el ingeniero Pizzorno. Pero sí quizás corresponda hacer una breve reflexión de las razones por las cuales acompañamos este proyecto, que será la Ley de Administración, seguramente por muchos años, de la Provincia de Córdoba.

¿Cuáles son esas razones? Nosotros consideramos que la Ley de Administración Financiera, la Ley de Contabilidad –podríamos llamarle–, utilizando el léxico actualmente vigente, es una de las leyes importantes que estructura el accionar del sector público. Uno se

podría imaginar que el sector público funciona sobre la base de la Ley de Contabilidad, el Régimen de Compras, que en la actualidad lo tenemos incluido en esa Ley, y que en el futuro va a estar en forma independiente y la ley que regula el control externo, es decir la Ley del Tribunal de Cuentas.

En ese sentido, nos sentimos en la obligación de hacer un esfuerzo para tratar de enriquecer lo que fue el proyecto que envió el Ejecutivo, habida cuenta que ya había proyectos que tenían estado Parlamentario, y que habían sido presentados por distintos legisladores en esta Cámara.

En relación al proyecto del Ejecutivo, la primera cuestión que quisiéramos puntualizar, es que el aspecto que menos nos satisfacía era el hecho de que la Ley era una Ley de Administración Financiera y Control Interno, es decir que no se hacían preferencias explícitas a la intervención del Tribunal de Cuentas y se lo dejaba para una futura ley, lo cual parecía bastante poco probable que se pudiera sancionar y que en ésta no se hubiera hecho ninguna mención.

Quiero señalar que en muchas oportunidades, nosotros hemos criticado una cierta tendencia del Poder Ejecutivo a tomar decisiones que disminuían controles acerca del funcionamiento del sector público provincial, y que dificultaban el acceso de la información.

¿Por qué acompañamos esta ley? Porque en las modificaciones que se han realizado en esta Cámara, se ha incluido explícitamente el rol del Tribunal de Cuentas. Y muchos de los que en algún momento sostenían que la existencia de las sindicaturas en las Agencias era suficiente y no hacía falta otro tipo de control –salvo una eventual auditoría del Tribunal de Cuentas–, me parece que con buen criterio, hoy vamos a tener una Ley de Administración Financiera que incluye a todo el sector público no financiero de la provincia, que va a permitir que el Tribunal de Cuentas tenga la posibilidad de efectuar el control que tiene previsto en la Constitución y los controles preventivos sobre los actos de gobierno que tiene establecidos en la Constitución.

Quiero decir que desde el bloque de la

Unión Cívica Radical, nosotros reconocemos la actitud de los legisladores del oficialismo, en el sentido de que se incluyera lo del Tribunal de Cuentas. Y creo que así como muchas veces les decimos y los criticamos porque son demasiados pasivos a la hora de juzgar los actos del Ejecutivo, creo que hay que decir que en esta oportunidad nos sentimos complacidos de que hayan dispuesto que en el despacho pudiéramos incluir el rol del Tribunal de cuentas.

Igualmente –y se extendió sobre eso el ingeniero Pizzorno–, el Capítulo ligado a la Responsabilidad de los Funcionarios, que todos sabemos que es algo que existe en la legislación, es algo que aparece como muy saludable en estos momentos, en el sentido de ser incluida en esta ley.

Por supuesto que quedan deudas, que seguramente estaremos todavía debiendo una revisión integral de la Ley de Tribunal de Cuentas, que aspiramos pronto tener el proyecto que regule la actividad del órgano de control externo del sector público.

Hace falta una Ley de Contrataciones nueva, porque esta ley deroga la anterior Ley de Contabilidad, menos en lo que se refiere al Régimen de Contrataciones, y sería saludable tener una ley específica.

Creemos que con eso estaríamos avanzando en mejorar el marco normativo de la Provincia.

Como bien decía Pizzorno, se insiste en la necesidad de inclusión de los principios de partida doble, como principios de contabilidad en el sector público, no van a caducar las órdenes de pago y se avanza en una serie de definiciones que creemos son muy adecuadas, como es el hecho de definir específicamente, cuando se define que el gasto se va a considerar ejecutado en la instancia del devengado y cuáles son las formas de calcular el resultado del ejercicio, porque entonces cuando discutamos los déficit que generan los gobiernos, o las deudas, no vamos previamente a tener que ponernos de acuerdo con el método de cálculos, sino que va a estar definido. Todo esto lleva a la Unión Cívica Radical a acompañar el proyecto que ha surgido desde el Ejecutivo, además de los que existían en la Legislatura, en la más absoluta convicción de que forma parte de nuestra responsabilidad acompañar

las cosas que están bien así como criticar las que están mal.

Siempre nos queda la remota esperanza de que el Gobernador advierta alguna vez que no nos ocupamos sólo de poner palos en la rueda sino que, a veces, mejoramos sus proyectos y acompañamos a sus legisladores cuando actúan de conformidad con lo que creemos son sus responsabilidades.

Esperamos que la reglamentación y la puesta en funcionamiento de esta ley, que va a requerir un tiempo, sea un eslabón más en la cadena que tienda a mejorar la racionalidad de la toma de decisiones del sector público y, volviendo a la seguridad en el sentido de que cuando se trate de medidas que mejoran la administración de la Provincia, el radicalismo, seguramente, las va a acompañar.

Gracias.

Sr. Presidente (Olivero).– Tiene la palabra la legisladora Lizio.

Sra. Lizio.– Gracias, señor presidente.

El presente proyecto de ley regula y establece la administración financiera y el control que se debe ejercer sobre la administración provincial. La definición que el presente proyecto realiza sobre el sistema comprende el conjunto de subsistemas, órganos y procedimientos administrativos, los cuales son necesarios para la obtención de los recursos públicos, y la aplicación que debemos hacer para cumplir con los objetivos del Estado.

Con el presente proyecto creemos que se contempla en forma integral las operaciones de gestión administrativa, transformación de la hacienda pública y la responsabilidad que le cabe a todo funcionario público de lograr los resultados previstos.

La fijación de los objetivos de acuerdo al artículo 4º del presente proyecto contribuye a dejar bien definida la aplicación de principios de transparencia financiera: legalidad, eficiencia y eficacia. Asimismo, esto conlleva a sistematizar las operaciones que se programen la gestión y evaluación de los recursos de la administración pública provincial, todo lo cual lleva a tener una información oportuna y confiable sobre cómo evoluciona la administración financiera. La inclusión de la administración general centralizada y de las empresas y entes estatales y agencias, constituyen un avance

respecto a la legislación vigente.

Es importante destacar la definición que este proyecto hace en el artículo 8º de los subsistemas de presupuesto contabilidad y tesorería. Dentro de este esquema, en el artículo 9º también nos parecen importante la coordinación de subsistemas y cuál es el órgano coordinador, lo cual da certeza de la responsabilidad de quién coordina.

El artículo 13 hace una clara definición del subsistema de presupuesto con la consiguiente autorización de las inversiones y gastos que se ejecutarán en el año presupuestado.

Otro artículo importante es el que se refiere a la afectación de los recursos o gastos específicos establecidos, así la excepción es la regla. Cada erogación que esté financiada con recursos afectados deberá sin lugar a dudas estar incluido de manera explícita en la Ley anual de Presupuesto. La importancia de la organización con la determinación de la unidad rectora central, presupuesto e inversión públicos, queda establecida como unidad rectora del subsistema presupuestado.

Dentro de este marco, el artículo 17 deja claramente establecido cuáles son las competencias de la Dirección de Presupuesto. Las contenidas en el presupuesto son otro artículo que define claramente qué contenidos en cuanto a cálculos de recursos de la administración central y organismos centralizados, los créditos presupuestarios y el estado de las cuentas de ahorro e inversión. Además, el legislar sobre la estructura del presupuesto aparece como importante, tanto es así para determinar las funciones del Estado.

Es importante, asimismo, la presentación en la Legislatura no sólo del Presupuesto en sí, sino también de las modificaciones, de acuerdo con el artículo 23. En cuanto al plan de inversiones públicas, dentro del artículo 25, es de suma importancia, ya que a partir de la sanción de este proyecto quedarán incluidos dentro del proyecto de ley.

En virtud del artículo 28, es necesaria la comunicación a la Legislatura provincial de las modificaciones del Presupuesto, que tengan su origen en razones de emergencia y seguri-

dad.

Resulta importante lo establecido por el artículo 44, en el sentido que el Poder Ejecutivo deberá elevar a la Legislatura provincial no solamente el proyecto de presupuesto de la Administración General, sino también los presupuestos de las empresas y otros entes públicos. Asimismo, he de destacar el Registro Unico de beneficios de pago, para dejar perfectamente establecido el mecanismo de transferencia de los pagos provinciales.

La inclusión en el artículo 73 del principio de la partida doble representa, sin lugar a dudas, un avance importante respecto de la actual legislación, puesto que configura un reclamo y una adaptación de este régimen al nacional en vigencia.

En cuanto al sistema de control interno, con la participación de la Fiscalía de Estado, y de la Dirección de Auditoría, creada en el ámbito de la Contaduría General de la Provincia, con las responsabilidades que ello implica, contribuirá a un mejor control de la gestión económica, financiera y patrimonial.

Por lo expresado, nuestro bloque apoya el presente proyecto de ley.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el señor legislador Alvarez.

Sr. Alvarez.- Señor presidente: en el marco del tratamiento del Presupuesto 2002, en nuestra intervención fundamentamos nuestro rechazo al referido Presupuesto, y ya señalábamos deficiencias técnicas en su confección, y decíamos que se persistía en la técnica del presupuesto incremental, desacreditado ampliamente por la práctica y la teoría, ya que no permite el objetivo principal del presupuesto, cual es el de maximizar el uso de los recursos de los contribuyentes, y obstaculiza el control de la gestión. También decíamos que los programas no son tales, sino objetivos estratégicos, no estableciendo metas, es decir, objetivos cuantificados.

Señalábamos, asimismo, que la Ley de Presupuesto en sí no podía modificar la de Ministerios, la de Contabilidad o cualquier otra ley. Entre las deficiencias técnicas, incluíamos la ausencia de la aplicación de la contabilidad de la partida doble; señalábamos también ma-

las prácticas, como por ejemplo los gastos a clasificar y economía de gestión, el problema de la deuda flotante y de órdenes de pago, entre otros.

Señor presidente: tuve plena participación en la Subcomisión de Economía, que en un tiempo demasiado limitado –diez horas reales- trató los 111 artículos de esta Ley, que se supone esencial para la administración del Estado provincial, sea cual fuere el partido político que gobierne, sea para el presente como para el futuro.

Se incorporaron en general, técnicas positivas que significaron un avance en el diseño, gestión y control presupuestario, pero no resolvió el problema estructural de fondo. Desde el punto de vista técnico, que en la práctica se traduce en política, podemos señalar como crítica, que se le da demasiada facultad al Poder Ejecutivo provincial para modificar el Presupuesto, disponer libremente de eventuales excedentes de ingresos y para negociar la obtención de créditos con organismos financieros locales, nacionales e internacionales. Las limitaciones que observamos son muy flexibles y no complementan las prescripciones de la Constitución provincial que son –por otro lado- de carácter general.

El rol que cumplirán la Legislatura y los órganos de control en estos casos, son meramente testimonial o decorativo como lo indica por ejemplo el artículo 51 del proyecto, que en los últimos párrafos dice que: “luego de haber concretado el Ejecutivo operaciones de endeudamiento se le comunicará posteriormente a la Legislatura”. Solamente se le comunicará a la Legislatura.

Si vemos el aspecto de las privatizaciones, creemos que es un proyecto coherente con la Ley Bodega, ya que perfecciona el marco jurídico de ésta, consagrando en la estructura del sector público provincial –artículo 5 y otros- a las empresas públicas ya concesionadas o sociedades anónimas donde ya se prevé participación minoritaria y mayoritaria del Estado provincial.

Esto demuestra que De la Sota cacarea en público que no privatizará la EPEC por ejemplo, pero avanza en la perfección del andamiaje jurídico para que esto ocurra en su gobierno, u otro que obedezca los mandatos

de los dueños de la globalización neoliberal.

Con respecto a la confección o formulación del Presupuesto, en los artículos del 17 al 21, se habla sobre la formulación o confección del Presupuesto como una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo y sus técnicos. Bajo ningún punto de vista le da participación a la población, trabajadores y usuarios, ni siquiera a sus instituciones representativas y esto, señor presidente, para Izquierda Unida es una cuestión esencial y de fondo. Sostenemos –como ya lo hemos expresado en esta Legislatura- que el Presupuesto debe ser participativo, que los trabajadores, usuarios e instituciones sociales deben decidir las prioridades en las cuales se deben gastar los recursos de la Provincia ya que son sus verdaderos dueños. Los técnicos y el Ejecutivo deben ser instrumentos al servicio de la gente y no al revés como está establecido. El Ejecutivo confecciona el Presupuesto a medida de los organismos de créditos internacionales y no de acuerdo a las necesidades de la población.

Tampoco se contempla en los órganos de control, tanto internos como externos, la participación de los trabajadores y usuarios que –como ya lo dijimos- son los verdaderos dueños de los recursos de la provincia.

Por lo tanto el pueblo no puede gobernar, formular presupuestos, ni controlar la administración de sus recursos, si no es a través de sus representantes. Pero como los representantes mienten, se corrompen y traicionan desaparece por cuatro años la posibilidad de un control real y transparente de los recursos públicos, por más técnicas contables e informáticas que se incorporen.

Creemos que se deben incorporar técnicas modernas en lo contable, administrativo e informático, pero en la actualización de las leyes debe contemplarse esencialmente la participación en la formulación del presupuesto y en los órganos de control, de los trabajadores, usuarios e instituciones sociales, caso contrario “hecha la ley, hecha la trampa” como dice el dicho.

Por último, desde el comienzo del tratamiento de estos proyectos en la Comisión de Economía hace aproximadamente 14 días, en Izquierda Unida nos preguntábamos el porqué de las marchas y contramarchas en cuanto a

fijar métodos y tiempos de tratamiento. Y digo esto porque, por ejemplo, en la primera reunión de la comisión de Economía, el legislador Urquía, con buen criterio, dijo que debido a la importancia de estos proyectos para el presente y el futuro de nuestra provincia había que tomar el tiempo necesario y en concordancia el legislador Sofanor Novillo Corvalán propuso la creación de una sub comisión, pero luego vino la orden de la Presidencia de la Legislatura en el sentido de que había que apurar los tiempos, porque en la sesión de hoy debían tratarse los proyectos. Luego de algunas averiguaciones logramos constatar, que como bien lo informara un periódico de nuestro medio, los tiempos no los fija la necesidad de la gente de lograr más transparencia y menos corrupción en el manejo de la administración pública, sino que lo fijó el Banco Mundial que es el que presta plata a la provincia y pone condicionamientos y ajustes, y empobrece cada vez más a la población. Al Banco Mundial no le interesa la población de la provincia de Córdoba, le interesa monitorear directamente las cuentas de la provincia y de los municipios.

Señor presidente, Izquierda Unida no será gerente, administrador ni contralor al servicio de los organismos internacional de crédito. Nosotros estamos y estaremos al servicio de los trabajadores y sectores populares.

Por todo lo expuesto Izquierda Unida vota en contra de la aprobación del proyecto en tratamiento.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra la señora legisladora Perla Ceballos.

Sra. Ceballos.- Señor presidente, este proyecto de ley que estamos tratando habla de por sí del carácter eminentemente técnico que ostenta su andamiaje. Sobre toda construcción que tienda a dar mayor transparencia a los actos administrativos de gobierno, el Partido Intransigente, compromete su apoyo y esfuerzo, pero no podemos dejar de expresar que el contenido que en números se plasma en el sistema contable es producto de una voluntad política que reparte jerarquías y prioridades.

La realidad de nuestra provincia no cambiará por el simple hecho de un cambio a nivel contable. La realidad de la política exclu-

sora no dará la ansiada transparencia. Seguir adelante con un sistema económico neoliberal, que destruye la dignidad, las fuentes de trabajo y las esperanzas, hará insignificante cualquier cambio que se pretenda.

Es necesario que hoy el gobierno impeciosamente acompañe la modificación con una nueva orientación política, atendiendo las verdaderas necesidades del pueblo, cambiar el concepto de gasto con que se rotula a la salud, la educación y la seguridad por el de inversión. Presupuestar teniendo como meta el presupuesto participativo, dejando de lado el presupuesto frío, creado y recreado, sujeto al mero interés del gobierno. Introducir el control externo con la presencia de auditorías sociales, será construir en forma democrática una estructura válida legitimada por su valor como arma de desarrollo y crecimiento. Más allá de otras consideraciones que se podrían hacer, queremos requerir una información de los actos de gobierno de mayor alcance, entendibles y accesibles para el pueblo, como así también continuar los cambios con mecanismos prácticos que permitan la participación activa de la gente, para plasmar la intención democrática que enuncia el gobierno de Córdoba.

Señor presidente, el bloque del Partido Intransigente acompaña este proyecto, más allá de algunas diferencias en la visión de transparencia que tenemos con el oficialismo, y del tiempo escaso con que tratamos cosas realmente de vital importancia para el pueblo, como es el proyecto compatibilizado que aquí se trata.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra la señora legisladora Domínguez.

Sra. Domínguez.- Señor presidente, esta legisladora comprometida con la modernización del estado provincial, ha venido estudiando e impulsando este anteproyecto presentado por los legisladores Urquía y Pizzorno hace varios meses, habiendo aprobado desde el inicio la idea global de una ley de administración y control del estado provincial, abarcativo de la administración centralizada, empresas y agencias, incluyendo en esta definición todas las expresiones adonde participe el Estado Provincial con capital que signifique mayoría del

emprendimiento.

Estoy convencida que la realidad nos llegó a clamar un ordenamiento y sistematización del conjunto de legislación contable y su gestión, para mejorar en todos los aspectos la administración del control.

En eso estábamos cuando tenemos esta ley del Poder Ejecutivo, que aunque no abarca el mencionado proyecto de los legisladores, se aproxima en líneas generales.

Es hora que el Estado Provincial se ajuste a una ley, sin tener que valerse de licencia legislativa de distintos orígenes, forzando en muchos casos interpretaciones para llevar adelante, nada menos que la vida económica, y con ello la vida social de toda nuestra provincia.

Con esta ley debidamente sancionada y posteriormente reglamentada, los otros ajustes que permitan un control efectivo sin duplicación de tareas y esfuerzos que sólo sirvan para aumentar el descontrol de lo que se supone estamos controlando, y con ello transparentando la difícil función pública.

Este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, apoyado seguramente del anteproyecto presentado por los legisladores Pizzorno y Urquía, se han encontrado muchas similitudes que hacen presumible un buen trabajo de equipo. Profesionales que han entregado un anteproyecto conceptualmente bueno, haciéndonos pensar que en breve contaremos con la puesta en marcha de esta poderosa herramienta de gestión y control de prácticamente todo el Estado Provincial.

Esperando que todos los municipios adhieran a esta legislación para lograr en los próximos ejercicios un real Estado consolidado de contabilidad, economía y finanzas de nuestra provincia, que se sumará al sistema implantado en el orden nacional, del cual nuestros técnicos tomaron seguramente como guía en este anteproyecto de ley.

A fuerza de ser sincera, me parece que este anteproyecto es en lo inmediato, inmejorable; sólo le falta la complementación con un mero conjunto de leyes y reglamentos del Tribunal de Cuentas, completando así el control externo, que esperamos se plasme en una segunda ley que interactúe con la que hoy pretendemos aprobar.

Destaco, porque participo con todas mis fuerzas para que este proyecto saliera aprobado, el especialísimo Capítulo sobre la Responsabilidad de todos los agentes que se desempeñan en la Función Pública, que a no dudar, en muy corto plazo, transformará la muy venida a menos "carrera administrativa" de la gestión pública, creando así un círculo virtuoso que propenderá a la excelencia en la administración, jerarquizando a quienes la ejerzan, cortando de cuajo el desprestigio que por estos tiempos invade a quienes llevan adelante la sacrificada tarea del empleo público.

Con todo esto iremos construyendo la administración profesional en permanente perfectibilidad, ajustándose al transcurso de los tiempos que vendrán. En principio, reunir en una herramienta de administración y control al sector público, financiero y no financiero, incorporando empresas y Agencias del Estado con controles internos a través de la Contaduría General y la Fiscalía de Estado, y del control externo del Tribunal de Cuentas, con más las mejoras del sistema de Registración Contable del método de Partida Doble, esto va a producir en el corto plazo un verdadero sistema de administración y control, augurando una nueva y confiable estructura administrativa.

Existe en este instrumento exigencias que, de cumplirse al pie de la letra, la provincia retomará el rumbo económico-financiero desbocado, o abierta a un manejo dictatorial o permisivo, para crear el ambiente de la razonabilidad administrativa y su contrapartida en la penalidad a quienes no cumplan con la ley propuesta.

Esta herramienta tiene nuestro voto para su sanción, en la seguridad de que el Estado cordobés, como en tantas otras ocasiones, exhibirá la vocación de progreso ordenando, y desde su puesta en vigencia efectiva, la Administración General de la Provincia. Facilitará así el buen manejo económico-financiero y un efectivo control en beneficio de toda la sociedad.

Señor presidente, este bloque adhiere a la sanción del proyecto de ley de Administración Financiera y de Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el legislador Asís Nicolás.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: desde el inicio de nuestra gestión en esta Legislatura ha sido nuestra preocupación el tema de la publicidad de los balances de los estados contables de las empresas públicas y organismos del Estado. Por eso plasmamos en el proyecto 167, del año 2002, una ley que fue tomada parcialmente en los artículos 46 y 109 en este proyecto que estamos tratando, con lo cual estoy satisfecho parcialmente.

Dado que en su esencia incorpora la publicidad -aunque no en la extensión que lo hubiésemos deseado- para los medios de comunicación masivos de mayor circulación, el tema de las normas contables profesionales conocido simplemente como "de partida doble" ha sido también de nuestra preocupación y lo plasmamos en un proyecto de ley, el 260, el año pasado. Nuestra propuesta era más limitada en ese caso.

Este proyecto de ley que se compatibiliza, incorpora en el artículo 73 la aplicación de las normas profesionales a toda la administración pública, en este caso, con más amplitud de lo que nosotros habíamos propuesto. Queda, señor presidente, a mi criterio y así lo he expresado en la Comisión de Economía, discutir el tema de las sindicaturas de las empresas públicas, tratando de unificarlas en una sindicatura provincial. Este es un debate que tendríamos que dar y está propuesto en el proyecto 64, del año pasado, y que podría ser muy útil para hacer más eficiente el control de las empresas públicas del estado provincial.

Señor presidente, con estas incorporaciones de nuestra autoría y valorando el trabajo de los autores de este proyecto y de los que participaron en la redacción definitiva, voy a acompañar con mucho agrado la aprobación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Olivero).- Si no se hace uso de la palabra, vamos a poner en consideración en general el despacho que compatibiliza los proyectos de ley 1794/L/02, 2235/L/02 y 167/L/02.

-Se vota y aprueba en general.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobado.

A los efectos de la votación en particu-

lar, si no hay objeciones se hará por Títulos.

- En particular, se votan y aprueban los Títulos I, II, III, IV y V.

Sr. Presidente (Olivero).- El artículo 116 es de forma.

Quedan aprobados en general y en particular los proyectos compatibilizados. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

- 11 -

ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

Sr. Presidente (Olivero).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados Fuera de Hora.

Sr. Secretario Farré.- (Leyendo):

De los señores legisladores

XXXVII

02681/L/03

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Font, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la prórroga y Cesión de Contrato de Provisión de Medicamentos I.P.A.M. - Droguería DRONOR S.A. a favor del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba.

Sr. Presidente (Olivero).- A la Comisión de Salud Humana.

Sr. Secretario (Farré).- (Leyendo):

XXXVIII

02682/L/03

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Acuña y Luque, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección de Accidentología (Art. 102 C.P.), informe sobre el sistema de constatación de faltas por medios electrónicos (fotográfico y cinemómetro) ubicados en las Localidades de El Tío, Saturnino María Laspiur y Devoto.

Sr. Presidente (Olivero).- A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte y Comunicaciones y Energía.

Sr. Secretario (Farré).- (Leyendo):

XXXIX

02683/L/03

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Perla Ceballos y Bloque Izquierda Unida, por el cual requiere al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Asuntos Institucionales, la comparecencia de las autoridades máximas pertinentes (Art. 101 C.P.), a fin de informar ante la Comisión correspondiente de esta Legislatura, sobre la represión realizada el día 14 de diciembre de 2002 contra empleados del Instituto Privado de Neonatología y Legisladores de la oposición, por parte de la Brigada de Infantería de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Sr. Presidente (Olivero).- Queda reservado en Secretaría.

Sr. Secretario (Farré).- (Leyendo):

XL

02684/L/03

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Blanco y Pizzorno, por el cual solicita al Estado Nacional, adecue las normas pertinentes para permitir el ajuste por inflación en los balances impositivos de los contribuyentes y solicita a los Legisladores Nacionales por Córdoba el apoyo a toda iniciativa que permita evitar distorsiones inflacionarias sobre las bases imponibles del impuesto a las ganancias.

Sr. Presidente (Olivero).- Queda reservado en Secretaría.

Sr. Secretario (Farré).- (Leyendo):

XLI

02685/E/03

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece el Estatuto Orgánico de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.). (Ley N° 9087).

Sr. Presidente (Olivero).- Queda reservado en Secretaría.

- 12 -

- A) FIESTA NAC. DEL TRIGO, DE LEONES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
- B) JORNADAS CAPACITACIÓN SOBRE SALUD REPRODUCTIVA Y PROCREACIÓN RESPONSABLE.

INTERÉS LEGISLATIVO.

Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión

Sr. Presidente (Olivero).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes número 2673, 2684 y 2650/L/03, que por Secretaría se enunciarán.

Sr. Secretario (Farré).- (Leyendo):

- "Expediente 2673/L/03. Al Señor presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, doctor Herman Olivero. De nuestra mayor consideración: por la presente nos dirigimos a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas para la próxima sesión legislativa, a realizarse el próximo 19 de febrero del corriente, del proyecto de declaración sobre la Fiesta Nacional del Trigo, celebrada en la ciudad de Leones, entre el 13 y 16 de febrero pasado. Considerando la pertinencia y necesidad de su tratamiento, es que solicitamos sea incluida en la siguiente sesión de esta Legislatura. Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente. **Beatriz Lizio, Kassem Dandach**".

- "Nota del día de la fecha. Al señor Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, doctor Herman Olivero. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, a los efectos de solicitarle el tratamiento sobre tablas en el día de la fecha, del proyecto de declaración por el cual se expresa la conveniencia de permitir ajustes por inflación en los balances impositivos de los contribuyentes. Diversos actores económicos enfrentan hoy la problemática de determinación de bases imponibles para la liquidación de los impuestos a las ganancias. Asimismo, han tomado estado público acciones judiciales emprendidas por los contribuyentes. Por tales motivos, entendemos la necesidad de expedirnos con urgencia. Sin otro particular, le saludan atentamente. **Carlos Pizzorno. Alfredo Félix Blanco**".

- "Córdoba, 18 de febrero de 2003. Al señor presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, doctor Herman Olivero. De mi consideración: Me dirijo a usted a los efectos de solicitar se ponga en consideración del Cuerpo que usted

preside el tratamiento sobre tablas, en la cuarta sesión ordinaria, del proyecto 2650/L/03. El tratamiento de dicha iniciativa en esta sesión es necesario, ya que se trata de la declaración de interés legislativo de las Jornadas de Capacitación sobre Salud Reproductiva, que se llevarán a cabo el próximo fin de semana, por lo que se tornaría abstracto el proyecto, de no ser aprobado en la sesión del miércoles 19 del corriente mes. Por lo expuesto y por su digno intermedio, solicito a mis pares se apruebe la presente moción de tratamiento sobre tablas del proyecto 2650/L/03. **Graciela Raquel Ruiz**".

Sr. Presidente (Olivero).- En consideración los pedidos de tratamiento sobre tablas de los mencionados proyectos.

- Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobados.

Tiene la palabra el señor legislador Karl.

Sr. Karl.- Señor presidente, quería hacer una aclaración antes de la votación, pero ya se aprobó, respecto al proyecto 2650. Era que íbamos a acompañar su tratamiento, a pesar de no haber sido acordado en Labor Parlamentaria.

Sr. Presidente (Olivero).- Por no contar con despacho, corresponde constituir esta Cámara en estado de comisión.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobado.

Si no hay objeciones, vamos a adoptar como despacho de Cámara de comisión, el texto de los proyectos, tal como obran en Secretaría.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobado.

Corresponde levantar a la Cámara de su estado de comisión.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobado.

En consideración, los proyectos 2673/L/03, 2684/L/03 y 2650/L/03.

- Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobados.

Tal como lo despachó la Cámara en comisión, se incorporan los fundamentos correspondientes.

**PROYECTO DE DECLARACION - 02673/L/03
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la realización de la 47 Fiesta Nacional del Trigo, celebrada en la Ciudad de Leones, Provincia de Córdoba, entre los días 13 al 16 de Febrero del año 2003.

Kasem Dandach, Beatriz Lizio.

FUNDAMENTOS

El tradicional encuentro de todos los productores de trigo del país en la ciudad de Leones, se constituye en un acontecimiento de real importancia, por lo que significa el aporte de este sector agrícola a la economía nacional.

Sin lugar a dudas, el campo representa un motor del desarrollo de nuestro país, y en especial de la Provincia de Córdoba.

Las particulares condiciones por las que atraviesa este sector productivo merece del apoyo de los gobiernos, y en especial del Gobierno de la Provincia de Córdoba, para coordinar políticas agropecuarias, en especial la dedicada a la producción triguera.

Esta exposición agrícola, industrial y comercial, se constituye por lo tanto en un acontecimiento importante para nuestra provincia.

Creemos, que debemos expresar nuestro beneplácito por la realización del evento, apoyando desde esta Legislatura, toda aquella actividad que redunde en beneficio de nuestra Provincia.

Kasem Dandach, Beatriz Lizio.

**PROYECTO DE DECLARACION - 02684/L/03
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:**

La conveniencia de que el Estado Nacional adecue las normas pertinentes para permitir el ajuste por inflación en los balances impositivos de los contribuyentes, con la finalidad de determinar bases imponibles que se ajusten a la realidad económica.

Solicitar a los Legisladores Nacionales de Córdoba el apoyo a toda iniciativa que permita evitar distorsiones inflacionarias sobre las bases imponibles del impuesto a las Ganancias.

Alfredo Blanco, Carlos Pizzorno.

FUNDAMENTOS

Por estos días asistimos a un debate, que

genera una profunda preocupación en los diversos actores económicos de nuestra Nación, y que ha llegado inclusive a los estrados judiciales. Hacemos referencia a la manera de determinación de las bases imponibles del impuesto a las Ganancias de los contribuyentes.

La reaparición en nuestra economía del fenómeno inflacionario ha puesto en debate la necesidad o no, de aplicar ajustes por exposición a la inflación de los balances.

Las Normas Contables Profesionales disponen que los Estados Contables deben expresarse en "Moneda Homogénea", es decir en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden. Esto obedece a que dichos estados deben reflejar la situación de la empresa a un momento determinado (el cierre del ejercicio) y la evolución durante el período. Por tales razones no pueden omitir la exposición, de los hechos económicos de los entes, a la inflación dado que se estarían distorsionando el principio de realidad económica.

De la misma manera los balances impositivos, que se deben desprender de la actividad de los entes en el ejercicio, y en consecuencia de los balances contables, deberían considerar el efecto inflacionario. La omisión de este aspecto torna irreales las bases imponibles.

Asimismo se ha sostenido públicamente, por diversos especialistas y organizaciones profesionales, que esta manera de determinación del impuesto tendría un carácter confiscatorio, quebrantando derechos constitucionales de los contribuyentes, lo que puede devenir además, en importantes perjuicios futuros para el fisco en virtud de medidas judiciales resarcitorias para los perjudicados.

Alfredo Blanco, Carlos Pizzorno.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN – 02650/L/03
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:**

De Interés Legislativo las Jornadas de Capacitación sobre Salud Reproductiva y Procreación Responsable, organizadas por los Consejos Municipales de la Mujer de Valle Hermoso y Capilla del Monte, a llevarse a cabo en la Localidad de Valle Hermoso los días 21 y 22 de febrero del corriente año.

Graciela Ruiz, Gustavo Castro, Fanny Tarrazano, Irma Mancilla, Stella Cittadini de Montes, Perla Ceballos, Carmen Acuña, Nora Bedano de Accastello, Liliana Juncos, Adriana Domínguez Reyna.

FUNDAMENTOS

Consideramos que es de suma importancia apoyar todo emprendimiento que tenga por finalidad capacitar adecuadamente a las mujeres, brindándoles información y herramientas que aseguren una procreación responsable, garantizando una niñez sana y saludable.

Es una obligación ineludible del Estado garantizar la libertad de los ciudadanos, y es parte de esa libertad el derecho a una Procreación Responsable por ello es mentor de campañas de Prevención, Educación y Control, posibilitando el derecho a acceder a métodos anticonceptivos no abortivos, siendo este un acto voluntario que hace al fuero íntimo de la persona y que de ningún modo afecta derechos de terceros y constituye una garantía amparada por nuestra Constitución.

En la articulación de acciones en este sentido, es sumamente positivo apoyar toda actividad que promueva a la información, capacitación y concientización de las mujeres, razón por la que solicitamos se apruebe la presente.

Graciela Ruiz, Gustavo Castro, Fanny Tarrazano, Irma Mancilla, Stella Cittadini de Montes, Perla Ceballos, Carmen Acuña, Nora Bedano de Accastello, Liliana Juncos, Adriana Domínguez Reyna.

- 13 -

**E.P.E.C. DEROGACIÓN DECRETOS PARA
EVITAR INCORPORACIÓN CAPITAL
PRIVADO O MODIFICACIÓN ESTATUTO.
SOLICITUD.**

Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Olivero).- Por Secretaría se dará lectura al expediente reservado número 2663/L/03, con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas, que se leerá.

Sr. Secretario (Farré).- (Leyendo):

- "Córdoba, 17 de febrero 2003. Al señor presidente del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba. Su despacho. De mi consideración. En el convencimiento que el Gobierno provincial está dando pasos decisivos para el desdoblamiento y la privatización de los servicios de generación, distribución y comercialización de la energía, por parte de la EPEC, es que venimos a plantear contundentemente nuestro frontal rechazo a dicha política. Hoy como siempre, levantamos la consigna que EPEC no se divide ni se vende, y tanto los habitantes de Córdo-

ba, como los trabajadores de la misma, deben saber que el Gobierno de De la Sota ha estado avanzando decididamente en esta materia. Durante el mes de enero del presente año, con la publicación de los decretos 941 y 942 de julio de 2002, donde designa a los directores de Hidroeléctrica de Córdoba, Sociedad Anónima y Eléctrica, Sociedad Anónima, Electricidad de Córdoba, creada por los decretos 198/01 y 2011/01, a quienes se les da la facultad de modificar o actualizar, concluir o ajustar la redacción del proyecto del estatuto social de dichas empresas y a proceder a su inscripción en la inspección de personas jurídicas. Por otro lado, es importante destacar que el cambio de figura jurídica de la EPEC, tarde o temprano, implicará modificar el convenio colectivo, haciendo caer las conquistas laborales que se obtuvieron a lo largo de muchos años. Creemos imperioso que el Poder Ejecutivo Provincial abandone inmediatamente la senda de la división de la Empresa y de la incorporación de capital privado, por entender que la EPEC es patrimonio estratégico de todos los cordobeses y debe permanecer al margen de las políticas privatizadoras que inundaron a la Argentina en la última década. Medidas que contribuyen al derrumbe de las condiciones de vida de millones de argentinos y cordobeses, por lo que está visto que nada le ha servido a los trabajadores y al conjunto del pueblo, sino por el contrario, derivó en tarifas cada vez más inaccesibles, salarios de hambre, incremento de la desocupación y demás forma de descomposición social, junto al incumplimiento de promesas de inversión que jamás se llevan adelante, mientras se llevan fabulosas ganancias a expensas de los bolsillos de la gente. De todos modos, es importante destacar que en la medida que el Gobierno persista en este tipo de medidas, encontrará la lucha, la movilización y la resistencia de los trabajadores de la población cordobesa en general, que en repetidas oportunidades fue contundente en su rechazo a la división, venta o privatización de la EPEC. Todo lo que se ubique fuera de esta expresión popular, será entrega o traición. Por todas estas razones, solicito por su

intermedio, que se constituya inmediatamente el Cuerpo en comisión, para tratar sobre tablas, el proyecto de declaración número 2663/L/03. Sin más. Saluda atentamente. **Legisladores Alvarez y Olivero”.**

Sr. Presidente (Olivero).- En consideración el pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto número 2663/L/03, efectuado por los legisladores del bloque de Izquierda Unida.

- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Olivero).- Rechazado.

- 14 -

**JUECES DE PRIMERA INSTANCIA,
VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y
VOCAL DE CÁMARA ÚNICA DEL TRABAJO.
DESIGNACIÓN. VOCAL DE CÁMARA DE
APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
DE CUARTA NOMINACIÓN. TRASLADO.
ACUERDO. SOLICITUD.**

Sr. Presidente (Olivero).- Por Secretaría se leerá la moción de tratamiento sobre tablas de los despachos emitidos por la comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que de resultar aprobada dicha moción, serán tratadas en conjunto y votados por separado según lo acordado y costumbre que en este sentido se ha adoptado en esta Legislatura.

Sr. Secretario (Farré).- (Leyendo):

- “Córdoba, 19 de febrero de 2003. Al señor presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, doctor Herman Olivero. Su despacho. Me dirijo a Usted A fin de solicitarle tenga a bien tratar sobre tablas, conforme lo establece el artículo 126 del reglamento interno de esta Legislatura, a las siguientes Notas Oficiales: 2521/N/03, 2523/N/03, 2524/N/03, 2525/N/03, 2526/N/2003, iniciadas por el Poder Ejecutivo Provincial, en donde solicitan se preste acuerdo para designar como Jueces de Primera Instancia, Vocales de Cámara en lo Criminal, y Vocal de Cámara Única de Trabajo, respectivamente. Motiva mi solicitud que dicho expediente merece un oportuno tratamiento dado el tenor de los mismos. Sin otro particular, me complazco en salu-

darlo atentamente. Firma: doctor Horacio Obregón Cano en su carácter de Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Y acompaña a su vez, otra nota referida al proyecto 2548 del mismo tenor, también iniciada por el Ejecutivo Provincial, donde solicita se preste acuerdo para efectuar el traslado del doctor Ricardo Jesús Saad, actual Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Cuarta Nominación, como Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación, ambos de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en nuestra ciudad. También por los mismos motivos se solicita el tratamiento sobre tablas".

Sr. Presidente (Olivero).- En consideración el tratamiento sobre tablas de los despachos que dictaminan acerca de las notas 2521, 2523, 2524, 2525, 2526 y 2548, todas N/03.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobado.

Tiene la palabra el señor legislador Obregón Cano.

Sr. Obregón Cano.- Señor presidente, brevemente quiero decir que al contar con despacho voy a solicitar que por Secretaría, tal como se viene haciendo en cada oportunidad de prestar acuerdo, se mencione el nombre de la circunscripción para no leer la parte resolutive, y todo lo que es el despacho completo.

En ese sentido, y por el orden presentado en Secretaría, solicito a través suyo al señor Secretario, que vayamos haciendo votar uno por uno los que son los postulantes, y la aprobación de nuestra comisión a esos pliegos.

Sr. Presidente (Olivero).- tiene la palabra el señor legislador Karl.

Sr. Karl.- Señor presidente, este despacho al que hace alusión el señor presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, no está acompañado por el bloque de la Unión Cívica Radical, o sea que no está firmado por los integrantes del bloque de Unión Cívica Radical, por lo que vamos a rechazar estas notas enviadas por el Poder Ejecutivo Provincia, que son las 2521, 2523, 2524, 2525, 2526 y 2548, a través de las cuales el Ejecutivo solicita acuerdo para designar diversos Magistrados

para la Justicia Provincial.

En primer lugar, señor presidente, remarco que nuestra posición no se funda en razones que tengan que ver con las personas que postulan dichos acuerdos, sino que, en una toma de posición acerca del procedimiento, que en este caso se le ha dado a los nombramientos. En segundo lugar, resaltamos que es la primera vez que en esta etapa que vamos a tomar esta posición de rechazo, señor presidente, ya que entendemos que las reglas claras a las que nos había acostumbrado el Consejo de la Magistratura, han cambiado de manera rotunda, y si bien somos conscientes o sabemos que esta lista de postulantes proviene de los exámenes que este instituto aprobó, lamentablemente se mezclan normativas, acuerdos, amparos y resoluciones de diversos tipos, dejando como producto la ausencia, en esta oportunidad, de las lineales garantías existentes en otros momentos, cuando aprobábamos y acompañábamos los pliegos enviados.

Tal vez cabría un asombroso relato de cómo el oficialismo, en un tiempo corto, muy corto, fue modificando su posición, y ésta a través de distintas leyes, en relación al nombramiento de la Magistratura cordobesa; tal vez cabría un sólido racconto de la situación que puso a la Justicia en vilo, enfrentamientos entre el Ministerio Público y el Tribunal Superior, entre el Ejecutivo y el Judicial, y que siempre tuvo a esta Legislatura como comodín de la virtud; tal vez cabría una descripción precisa de cómo fue modificándose legislativa, administrativa y judicialmente la metodología y el procedimiento y nombramiento de los jueces, que no sería otra cosa que la crónica de un lamentable bochorno.

En medio de todas estas discusiones, de estas modificaciones fundadas en conveniencia de dudosa legitimidad, hay personas a las que debemos considerar y respetar en su buena fe; profesionales que quedaron en medio de esta disputa, sufriendo la inseguridad jurídica que generó todo este proceso.

En la misma Comisión de Asuntos Constitucionales hemos tenido dudas sobre la legalidad de algunos pliegos, pero no por alguna mala intención de nadie, que quede claro. Creemos que estas dudas provienen de la

complejidad de la entelequia jurídica generada por el mismo Ejecutivo, que hoy pide aprobar estos pliegos.

Entonces, en medio de esta situación, hay profesionales que aprobaron los exámenes del Consejo de la Magistratura y no podrán asumir nunca. Hay otros a los que se los convocó, que tienen hecho la mitad de los exámenes en el Consejo de la Magistratura y que nunca podrán terminarlos. Ahora, en esta nueva metodología, hay quienes se han presentado en la Comisión Asesora para rendir y las vacantes se están cubriendo con acuerdo del Consejo de la Magistratura, pero no con sus normas, porque ahora hay otros de requisitos y así una serie de interrogantes que tienen respuesta para cada parte involucrada.

Entendemos que no es otra cosa que una flagrante situación de inseguridad jurídica, que lamentablemente la sufren los postulantes, pero que indirectamente la sufren los cordobeses, los justiciables.

Creemos que deberíamos rechazar todo nombramiento, hasta tanto no se clarifiquen las reglas y demos igualdad jurídica. Esta posición de igualdad le daría seriedad a un asunto que lo merece y reclama.

Por las razones que acabo de expresar, el bloque de la Unión Cívica Radical rechaza las notas y solicita al Pleno que no se presten los acuerdos en esta oportunidad.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el legislador Obregón Cano.

Sr. Obregón Cano.- Señor presidente, es por todos conocida mi exposición con respecto al debate que mencionaba recién el legislador preopinante.

Estamos hablando de una nueva ley, pero quisiera dejar bien en claro que en este caso, en particular, me sorprende que no hayan firmado el despacho, porque casualmente todos los postulantes que se acaban de mencionar, y que ha despachado mi comisión, son todos venidos del Consejo de la Magistratura, y todos calificados antes del debate, con lo cual lo único que ha hecho el Ejecutivo, es cumplir lo mismo que hacía antes cuando estaba el Consejo de la Magistratura. Todos los postulantes que estamos por aprobar, vienen

del Consejo de la Magistratura, algunos con un puntaje de ocho cuarenta y otros con el mínimo de siete, pero todos del Consejo de la Magistratura. No hay ninguno que haya entrado de ningún procedimiento dudoso en el caso que estamos mencionando. Así que me sorprende que en este caso no hayan acompañado la firma del despacho.

Quería aclarar eso para que sepan los señores legisladores que, en el caso de los postulantes, han reunido el examen antes que se diera la discusión y todos han salido calificados para ocupar las vacantes, como se venía haciendo.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el legislador Abelardo Karl.

Sr. Karl.- Señor presidente: no es con el ánimo de polemizar con el presidente de la Comisión, legislador y amigo Obregón Cano. Pero ésta es la posición que ha adoptado la Unión Cívica Radical, debido a que todos los nombramientos se encuentran bajo el régimen de la Comisión creada a los efectos, y a la emergencia judicial tampoco la hemos acompañado. Por ello, mientras dure este período, no vamos a acompañar los pliegos ni prestar acuerdo.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra la legisladora Perla Ceballos.

Sra. Ceballos.- Señor presidente: en nombre del bloque del Partido Intransigente, quiero avalar lo que acaba de expresar el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dado que esta mañana hemos contado con los pliegos y como todas las veces, se ha entrevistado a quienes se postulaban para estos cargos.

No hemos efectuado ninguna objeción, a pesar de que estamos en contra de la Comisión Asesora, y usted sabe perfectamente que hemos defendido el Consejo de la Magistratura. Los postulantes vinieron aquí con el voto del Consejo de la Magistratura, con este orden de mérito, y por lo tanto, queremos aclarar esta situación.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra la legisladora Domínguez.

Sra. Domínguez.- Señor presidente:

como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ratifico mi voto positivo a estos pliegos, teniendo en cuenta que en ocasión de votarse la creación de esta Comisión, este bloque votó en desacuerdo, porque consideraba conveniente la continuidad del Consejo de la Magistratura.

Cada uno de los pliegos que fue analizado por la Comisión, son de aquellos que han rendido ante el Consejo de la Magistratura y reunido todos los requisitos y, obviamente, estamos conformes con esa designación.

Sr. Presidente (Olivero).- Si no se hace uso de la palabra, en consideración la nota 2521/N/03, que plantea el legislador Horacio Obregón Cano, en el sentido de prestar acuerdo al pliego que designa a Manuel Esteban Rodríguez Juárez como Juez en Primera Instancia con competencia Civil y Comercial del Centro Judicial Capital.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobada.

Si no se hace uso de la palabra, en consideración la nota 2523/N/03, que plantea el legislador Horacio Obregón Cano, en el sentido de prestar acuerdo al pliego que designa a Guillermo Edmundo Falco, como Juez de Primera Instancia con competencia Civil y Comercial del Centro Judicial Capital.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobada.

Si no se hace uso de la palabra, en consideración la nota 2524/N/03, que plantea el legislador Horacio Obregón Cano, en el sentido de prestar acuerdo al pliego que designa a Carlos Arturo Ruiz como Vocal de Cámara en lo Criminal del Centro Judicial Capital.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobada.

Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la nota 2525/N/03, que plantea el legislador Horacio Obregón Cano, en el sentido de prestar acuerdo al pliego que designa a Hernán Buteler Novillo Saravia, como Vocal de Cámara en lo Criminal del Centro Judicial Capital.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobada.

Tiene la palabra el legislador Obregón Cano.

Sr. Obregón Cano.- A lo mejor me he

adelantado, señor presidente, de si va a poner en consideración la nota 2548. Si es así, quería aclararle que en este caso en particular, es simplemente un traspaso de una Cámara a otra que, de prestar el acuerdo, lo voy a leer desde mi banca –si usted me permite- o que lo lea Secretaría, porque es un pedido especial de traspaso para ocupar otro cargo quien lo está ocupando en una de las Cámaras primera, pasa a la quinta. No es un pliego nuevo, sino simplemente un traslado.

Sr. Presidente (Olivero).- Tenemos una nota anterior propuesta por usted, señor legislador, que voy a poner en consideración y luego vamos a proceder a dar lectura a la que usted hizo referencia –nota 2548- con las características que usted preanunciara.

En consideración la nota 2526/N/03, que plantea el legislador Horacio Obregón Cano, en el sentido de prestar acuerdo al pliego que designa a la doctora Silvia Díaz, como Vocal de Cámara Unica del Trabajo del Centro Judicial Capital.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura a la nota 2548/N/03.

Sr. Secretario (Farré).- (Leyendo):

NOTA OFICIAL 02548/N/03

Al Señor Presidente

de la Legislatura

de la Provincia de Córdoba

Dr. Herman Pedro OLIVERO

SU DESPACHO

Estimado Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted y, por su intermedio, a los demás miembros de ese Cuerpo, con el objeto de solicitarle que la Legislatura Unicameral preste acuerdo para designar en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera (1ª.) Nominación, **por traslado**, al Dr. **Ricardo Jesús SAHAB**, actual Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Cuarta (4ª.) Nominación, ambos de la Primera (1ª.) Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad.

Tal traslado ha sido solicitado por el Tribunal Superior de Justicia mediante Acuerdo N° 470 (Serie "A") de fecha 1° de Octubre de 2002, cuya copia acompaño a la presente.

Por lo antes expuesto, le solicito dé curso a

esta solicitud y oportunamente, previo trámite parlamentario —en los términos de lo dispuesto por el artículo 104 (**Inciso 42º**) de la Constitución Provincial— preste **ACUERDO** para designar al Dr. **Ricardo Jesús SAHAB** (M.I. 8.122.159), en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera (1ª.) Nominación de la Primera (1ª.) Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba, si así lo considera el alto criterio de sus miembros.

Le saludo con distinguida consideración.

CÓRDOBA, 22 de Enero de 2003.

José Manuel de la Sota
Domingo Carbonetti (h.)

DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestra Comisión de **Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos**, dictaminando acerca del Expediente Nº 02548/N/03, Nota del Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para el traslado del Dr. Ricardo Jesús Sahab, actual Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 4ª. Nominación, como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 1ª. Nominación, ambas de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad, **OS ACONSEJA**, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente forma:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia y el artículo 24 bis de la Ley Nº 8435 Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba modificada por la Ley Nº 8563 para realizar el traslado como actual Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 4ª Nominación, como Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación, ambas de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad al **Dr. RICARDO JESÚS SAHAB, M.I. 8.122.159.**

DIOS GUARDE A UD.

H. Obregón Cano, P. Ceballos, A. Domínguez, M. Fernández, G. Ruiz, M. Uez, S. Novillo Corvalán, B. Lizio.

Sr. Presidente (Olivero).- En consideración la moción formulada por el señor legislador Obregón Cano, de prestar consentimien-

to al doctor Ricardo Jesús Sahab, Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación, para que sea designada en el mismo cargo, en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación, ambas de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en esta Capital.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobada.

Discúlpeme Abelardo, pero justamente estaba poniendo en consideración la nota.

Sr. Karl.- Gracias, Herman, por distinguirme con su amistad y llamarme por mi nombre.

Señor Herman: como usted hizo la propuesta de tratar estas notas en conjunto -por eso yo formulé una fundamentación de rechazo en su totalidad-, quería aclarar que el bloque de la Unión Cívica Radical iba a acompañar esta última nota, por ser un traslado de Cámara a Cámara.

Sr. Presidente (Olivero).- Para esta Presidencia, el radicalismo, de acuerdo a lo por usted expresado, sólo se opuso al primer acuerdo que planteara el señor legislador Obregón Cano; en los demás, nadie me ha solicitado el uso de la palabra. Entonces, esta Presidencia sometió a votación y dio por aprobado cada uno de esos acuerdos.

Por ende, sólo en el primer acuerdo, salvo que ustedes me hubiesen hecho notar lo contrario en los demás sometimientos a consideración, cosa que no se hizo. Si usted quiere, puede pedir una reconsideración y esta Presidencia la someterá a consideración.

Tiene la palabra el señor legislador Karl.

Sr. Karl.- Señor presidente: cuando inicié mi exposición, dije que el bloque de la Unión Cívica Radical iba a rechazar las notas del Poder Ejecutivo, enviadas a esta Legislatura, y las enumeré a todas; es decir, la 2521, 2523, 2524, 2525 y 2526. Entonces, adelanté el rechazo a todas las notas, cosa que no hice con la 2548, que es el traslado de un camarista de una jurisdicción a otra, porque íbamos a acompañarla.

Sr. Presidente (Olivero).- Sin ánimo de polemizar y a los fines de que pueda dejar plasmada esa voluntad, esta Presidencia va a

aceptar la posición del bloque de la Unión Cívica Radical, conforme lo plantea el legislador Abelardo Karl.

NOTA OFICIAL 02521/N/03

***Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Herman Pedro OLIVERO
SU DESPACHO***

Estimado Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted y, por su intermedio, a los demás miembros de ese Cuerpo, con el objeto de solicitarle que la Legislatura Unicameral preste acuerdo para designar al Señor Abogado **Manuel Esteban RODRÍGUEZ JUAREZ, D.N.I. 14536018, como Juez de Primera Instancia con Competencia Civil y Comercial del Centro Judicial Capital (Acuerdo N° 35/2000), quien resultó en el decimoctavo lugar** en el Orden de Mérito para Juez de Primera Instancia con Competencia en lo Civil y Comercial del Centro Judicial Capital, elevado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia, cuya copia se acompaña.

Hago presente que el citado profesional ha cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba.

Por lo antes expuesto, le solicito dé curso a la presente —en los términos de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley N° 8802 y su reglamentación, artículo 5 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435 y artículo 144 inciso 9 de la Constitución de la Provincia de Córdoba— y, oportunamente, previo trámite parlamentario, preste acuerdo para designar al citado profesional, si así lo considera el criterio de los integrantes de esa Cámara.

A tal fin, se remiten los antecedentes del **Señor Abogado Manuel Esteban RODRÍGUEZ JUAREZ**, informando que el Legado Personal se encuentra a disposición en la sede del Consejo de la Magistratura.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.

**Dr. José Manuel de la Sota
Dr. Héctor Rene David
Domingo A. Carbonetti (h.)**

DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestra Comisión de **Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos**, dictaminando acerca del Expediente N° 02521/N/03, Nota del Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar

al Abogado Manuel Esteban Rodríguez Juárez, como Juez de Primera Instancia con Competencia Civil y Comercial del Centro Judicial Capital, **OS ACONSEJA**, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente forma:

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia para designar como Juez de Primera Instancia con Competencia Civil y Comercial (Acuerdo N° 35/2000), del Centro Judicial Capital al **Dr. MANUEL ESTEBAN RODRÍGUEZ JUÁREZ, D.N.I. 14.536.018.**

DIOS GUARDE A UD.

**P. Ceballos, A. Domínguez, M. Fernández,
G. Ruiz, M. Uez, S. Novillo Corvalán, B. Lizio.**

NOTA OFICIAL 02523/N/03

***Al Señor
Vicepresidente a/c de la Presidencia
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco FORTUNA
SU DESPACHO***

Estimado Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted y, por su intermedio, a los demás miembros de ese Cuerpo, con el objeto de solicitarle que la Legislatura Unicameral preste acuerdo para designar al Señor Abogado **Guillermo Edmundo FALCO, D.N.I. N° 16.903.633, como Juez de Primera Instancia con Competencia Civil y Comercial del Centro Judicial Capital (Acuerdo N° 35/2000), quien resultó en el decimoséptimo lugar** en el Orden de Mérito para Juez de Primera Instancia con Competencia en lo Civil y Comercial del Centro Judicial Capital, elevado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia, cuya copia se acompaña.

Hago presente que el citado profesional ha cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba.

Por lo antes expuesto, le solicito dé curso a la presente —en los términos de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley N° 8802 y su reglamentación, artículo 5 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435 y artículo 144 inciso 9 de la Constitución de la Provincia de Córdoba— y, oportunamente, previo trámite parlamentario, preste acuer-

do para designar **al citado profesional**, si así lo considera el criterio de los integrantes de esa Cámara.

A tal fin, se remiten los antecedentes del **Señor Abogado Guillermo Edmundo FALCO**, informando que el Legado Personal se encuentra a disposición en la sede del Consejo de la Magistratura.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.

Dr. José Manuel de la Sota
Dr. Héctor Rene David
Domingo A. Carbonetti (h.)

DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestra Comisión de **Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos**, dictaminando acerca del Expediente N° 02523/N/03, Nota del Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Abogado Guillermo Edmundo Falco, como Juez de Primera Instancia con Competencia Civil y Comercial del Centro Judicial Capital, **OS ACONSEJA**, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente forma:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia para designar como Juez de Primera Instancia con Competencia Civil y Comercial (Acuerdo N° 35/2000), del Centro Judicial Capital al **Dr. GUILLERMO EDMUNDO FALCO, D.N.I. 16.903.633.**

DIOS GUARDE A UD.

**P. Ceballos, A. Domínguez, M. Fernández,
G. Ruiz, M. Uez, S. Novillo Corvalán, B. Lizio.**

NOTA OFICIAL 02524/N/03

**Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Herman Pedro OLIVERO
SU DESPACHO**

Estimado Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted y, por su intermedio, a los demás miembros de ese Cuerpo, con el objeto de solicitarle que la Legislatura Unicameral preste acuerdo para designar al **Señor**

Abogado Carlos Arturo RUIZ, D.N.I. N° 10.542.304, como Vocal de Cámara en lo Criminal de los Centros Judiciales Capital, Río Cuarto, Villa María y Cruz del Eje (Acuerdo 7/2000), quien resultó en séptimo lugar en el Orden de Mérito para Vocal de Cámara en lo Criminal de los Centros Judiciales Capital, Río Cuarto, Villa María y Cruz del Eje, elevado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia, cuya copia se acompaña.

Hago presente que el citado profesional ha cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba.

Por lo antes expuesto, le solicito dé curso a la presente —en los términos de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley N° 8802 y su reglamentación, artículo 5 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435 y artículo 144 inciso 9 de la Constitución de la Provincia de Córdoba— y, oportunamente, previo trámite parlamentario, preste acuerdo para designar **al citado profesional**, si así lo considera el criterio de los integrantes de esa Cámara.

A tal fin, se remiten los antecedentes del **Señor Abogado Carlos Arturo RUIZ**, informando que el Legado Personal se encuentra a disposición en la sede del Consejo de la Magistratura.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.

Dr. José Manuel de la Sota
Dr. Héctor Rene David
Domingo A. Carbonetti (h.)

DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestra Comisión de **Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos**, dictaminando acerca del Expediente N° 02524/N/03, Nota del Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Abogado Carlos Arturo Ruiz, como Vocal de Cámara en lo Criminal de los Centros Judiciales Capital, Río Cuarto, Villa María y Cruz del Eje, **OS ACONSEJA**, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente forma:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia para designar como Vocal de Cámara en lo Criminal (Acuerdo N° 7/2000), del Centro Judicial Capital al **Dr. CARLOS ARTURO RUIZ, D.N.I. 10.542.304.**

DIOS GUARDE A UD.

P. Ceballos, A. Domínguez, M. Fernández,
G. Ruiz, M. Uez, S. Novillo Corvalán, B. Lizio.

NOTA OFICIAL 02525/N/03

*Al Señor Presidente
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Herman Pedro OLIVERO
SU DESPACHO*

Estimado Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted y, por su intermedio, a los demás miembros de ese Cuerpo, con el objeto de solicitarle que la Legislatura Unicameral preste acuerdo para designar al **Señor Abogado Hernán BUTELER NOVILLO SARA VIA, D.N.I. 7998192, como Vocal de Cámara en lo Criminal de los Centros Judiciales Capital, Río Cuarto, Villa María y Cruz del Eje (Acuerdo N° 7/2000)** en el Orden de Mérito para Vocal de Cámara en lo Criminal de los Centros Judiciales Capital, Río Cuarto, Villa María y Cruz del Eje, elevado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia, cuya copia se acompaña.

Hago presente que el citado profesional ha cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba.

Por lo antes expuesto, le solicito dé curso a la presente —en los términos de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley N° 8802 y su reglamentación, artículo 5 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435 y artículo 144 inciso 9 de la Constitución de la Provincia de Córdoba— y, oportunamente, previo trámite parlamentario, preste acuerdo para designar al **citado profesional**, si así lo considera el criterio de los integrantes de esa Cámara.

A tal fin, se remiten los antecedentes del **Señor Abogado Hernán BUTELER NOVILLO SARA VIA**, informando que el Legado Personal se encuentra a disposición en la sede del Consejo de la Magistratura.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.

**Dr. José Manuel de la Sota
Dr. Héctor Rene David
Domingo A. Carbonetti (h.)**

DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestra Comisión de **Asuntos Constitucio-**

nales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca del Expediente N° 02525/N/03, Nota del Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Abogado Hernán Buteler Novillo Saravia, como Vocal de Cámara en lo Criminal de los Centros Judiciales Capital, Río Cuarto, Villa María y Cruz del Eje, **OS ACONSEJA**, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente forma:

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia para designar como Vocal de Cámara en lo Criminal (Acuerdo N° 7/2000), del Centro Judicial Capital al **Dr. HERNAN BUTELER NOVILLO SARA VIA, D.N.I. 7.998.192.**

DIOS GUARDE A UD.

P. Ceballos, A. Domínguez, M. Fernández,
G. Ruiz, M. Uez, S. Novillo Corvalán, B. Lizio.

NOTA OFICIAL 02526/N/03

*Al Señor Presidente
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Herman Pedro OLIVERO
SU DESPACHO*

Estimado Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted y, por su intermedio, a los demás miembros de ese Cuerpo, con el objeto de solicitarle que la Legislatura Unicameral preste acuerdo para designar a la **Señora Abogada Silvia Liliana DIAZ, D.N.I. N° 13721680, como Vocal de Cámara Única del Trabajo – Centro Judicial Capital (Acuerdo N° 8 del 10-03-2000), quien resultó en noveno lugar** en el Orden de Mérito para Vocal de Cámara Única del Trabajo – Centro Judicial Capital, elevado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia, cuya copia se acompaña.

Hago presente que el citado profesional ha cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba.

Por lo antes expuesto, le solicito dé curso a la presente —en los términos de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley N° 8802 y su reglamentación, artículo 5 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435 y artículo 144 inciso 9 de la Constitución de la Provincia de Córdoba— y, oportunamente, previo trámite parlamentario, preste acuer-

do para designar a la citada profesional, si así lo considera el criterio de los integrantes de esa Cámara.

A tal fin, se remiten los antecedentes de la Señora Abogada Silvia Liliana DIAZ, informando que el Legado Personal se encuentra a disposición en la sede del Consejo de la Magistratura.

Dr. José Manuel de la Sota
Dr. Héctor Rene David
Domingo A. Carbonetti (h.)

DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestra Comisión de **Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos**, dictaminando acerca del Expediente N° 02526/N/03, Nota del Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Dra. Silvia Liliana Díaz, Como Vocal de Cámara Unica del Trabajo del Centro Judicial Capital, **OS ACONSEJA**, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente forma:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia para designar como Vocal de Cámara en lo Criminal (Acuerdo N° 7/2000), del Centro Judicial Capital al **Dra. SILVIA LILIANA DIAZ, D.N.I. 13.721.680.**

DIOS GUARDE A UD.

**P. Ceballos, A. Domínguez, M. Fernández,
G. Ruiz, M. Uez, S. Novillo Corvalán, B. Lizio.**

- 15 -

INSTITUTO PRIVADO DE NEONATOLOGÍA. REPRESIÓN. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ASUNTOS INSTITUCIONALES. COMPARECENCIA AUTORIDADES PARA INFORMAR.

Moción de preferencia

Sr. Presidente (Olivero).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mediante la que se formula una moción de preferencia para el proyecto 2683/L/03, que por Secretaría se enunciará.

Sr. Secretario (Farré).- (Leyendo):
"Córdoba, 19 de febrero de 2003. Señor

Presidente Provisorio del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, Legislador Herman Olivero. Su despacho. De mi consideración, me dirijo a Usted con la finalidad de solicitar tratamiento de preferencia de siete días para el proyecto de resolución 2683/L/03 que requiere la comparencia de las autoridades máximas pertinentes de la Secretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Córdoba para que en ese plazo expongan ante la comisión correspondiente de esta Legislatura de la Provincia de Córdoba, sobre la salvaje represión realizada el día 14 de diciembre de 2002 contra empleados del Instituto Privado de Neonatología conocido como Clínica Halac y legisladores de la oposición, llevada a cabo por la Brigada de Infantería de la Policía de la Provincia de Córdoba. Sin otro particular, agradecida por su deferencia, propicio la oportunidad para saludarle con atenta consideración. Legisladora Perla Mabel Ceballos".

Sr. Presidente (Olivero).- En consideración la moción de preferencia para el proyecto 2683/L/03 sea tratado en la sesión siguiente.

- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Olivero).- Rechazada.

- 16 -

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA E.P.E.C. ESTABLECIMIENTO.

Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión

Sr. Presidente (Olivero).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 2685/E/03, el que previo a hacerse cargo de esta Presidencia el legislador Francisco Fortuna, por Secretaría se enunciará.

- Asume la Presidencia el legislador Francisco Fortuna.

Sr. Secretario (Farré).- (Leyendo):

- "Córdoba, 19 de febrero de 2003. Señor Presidente Provisorio de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, doctor Herman Olivero. Su despacho. De mi mayor consideración, en mi carácter de presidente del bloque de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el

artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a Usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 2685/E/03, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial por el se establece el estatuto orgánico de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Tratándose de un tema, que impulsado por el Gobierno provincial logró el acuerdo y el consenso necesario de sectores directamente vinculados a la empresa estatal como el Sindicato de Luz y Fuerza y siendo el mismo de suma importancia para la provincia, es que se solicita su tratamiento en la sesión ordinaria número 4. Sin otro particular saludo a Usted muy atentamente. **Legislador Walter Saieg**".

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.

Sra. Olivero.- Señor presidente, como se había acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria pasar a un cuarto intermedio, ya que supuestamente estaría deliberando la organización sindical que está comprometida en este acuerdo con el Gobierno, pregunto si hubo alguna modificación en cuanto a ese acuerdo. Si algo ha cambiado, por favor, explíquenoslo.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Saieg.

Sr. Saieg.- Señor presidente, habiendo tomado estado parlamentario el proyecto, solicito que se continúe con la sesión, si es que los demás legisladores no tienen inconveniente.

Sr. Presidente (Fortuna).- Como no hay una moción de cuarto intermedio, voy a continuar con la sesión.

Tiene la palabra el señor legislador Font.

Sr. Font.- Señor presidente, sin haber asistido a la reunión de Labor Parlamentaria, tengo conocimiento que una de las pautas básicas para el tratamiento de este proyecto, es esperar la homologación del convenio que iba a explicar la cúpula de Luz y Fuerza a sus afiliados. Por lo tanto, solicito un breve cuarto in-

termedio en las bancas para analizar este tema.

Sr. Saieg.- Señor presidente, este bloque no tiene inconvenientes en dar un cuarto intermedio. Por lo tanto, solicitamos que el mismo sea en sus bancas.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de cuarto intermedio.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobada.

Esta Cámara pasa a un cuarto intermedio en sus bancas por cinco minutos.

- Es la hora 20 y 11.

- Siendo la hora 20 y 44:

Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa la sesión.

A continuación corresponde tratar el proyecto 2685/E/03, con su pedido de tratamiento sobre tablas, que será leído por Secretaría.

Sr. Secretario (Farré).- (Leyendo):

"Córdoba, 19 de febrero de 2003. Señor Presidente Provisorio de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, doctor Herman Pedro Olivero. Su despacho. De mi mayor consideración: en mi carácter de Presidente del bloque de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley número 2685/E/03, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece el Estatuto Orgánico de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Tratándose de un tema impulsado por el gobierno provincial, logró el acuerdo y el consenso necesario de sectores directamente vinculados a la Empresa Estatal, como el Sindicato de Luz y Fuerza, y siendo el mismo de suma importancia para la Provincia, es que se solicita su tratamiento en la sesión ordinaria número cuatro. Sin otro particular, saludo a usted atentamente. **Legislador Walter Saieg**".

Sr. Presidente (Fortuna).- Voy a poner en consideración la moción de tratamiento so-

bre tablas del mencionado proyecto.

Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.

Por no contar con despacho el citado proyecto, corresponde poner la Cámara en estado de comisión.

Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.

Tiene la palabra la legisladora Ruiz.

Sra. Ruiz.- Señor presidente, el proyecto de ley en tratamiento es de crucial importancia para la vida institucional de tal vez la más importante empresa de los cordobeses, cual es nuestra Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

Antes de comenzar a hablar estrictamente del proyecto en cuestión, considero necesario destacar los aportes que al mismo se hicieron por parte de los representantes de los trabajadores de la EPEC. Esta participación surgió a partir del acuerdo suscripto entre el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba y los representantes del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, Villa María y Río Cuarto el 23 de enero pasado.

Este acuerdo se suscribió con el compromiso de trabajar en el fortalecimiento de nuestra Empresa Provincial de Energía y el producto de esa comunión de ideas es este proyecto, que no dudo pondrá a la EPEC a la vanguardia de las empresas de energía latinoamericanas.

En este contexto, si queremos una empresa creíble, seria y competitiva, un tema de trascendencia es el de la seguridad jurídica, y con el presente proyecto tendremos la posibilidad de contar, a partir de la aprobación que pretendemos, con un texto único y ordenado del Estatuto Orgánico de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, aportando con su sistematización a la existencia en la norma de propósitos enunciados, compaginados en un Cuerpo coherentemente instrumentado, evitando así los problemas de interpretación que suelen producirse al pretender desentrañar el

sentido y alcance de sucesivas modificaciones a una ley madre, como es el caso del actual Estatuto.

Entrando, ahora sí en las innovaciones que se destacan en el proyecto, encontramos una ampliación del objeto de la Empresa, al sumar a la cuestión energética el rubro "Telecomunicaciones". Con esto, la EPEC podrá intervenir en un segmento del mercado que, por su infraestructura básica de postes, líneas y redes, la posiciona inmejorablemente para la prestación de servicios en el rubro citado.

Esta mixtura de oferta de servicios en los que se podrá incursionar, con más la finalidad propia de satisfacer el interés general de la población, hacen que, de convertirse en ley este proyecto, por su espíritu y su esencia, se coloque a la Empresa ante la puerta de acceso hacia un futuro sin precedentes, y la satisfacción para el Gobierno de haber hecho un nuevo aporte en pos de una mejor calidad de vida de su pueblo.

Otro elemento a destacar es la modificación relativa a número de directores; la creación de una Gerencia General y de un Consejo de Empresa, estructuras con las que se pretende realizar un trascendente aporte para la gestión empresarial. Su Directorio, con funciones de organización, dirección y administración tendrán miembros que ejercerán sus atribuciones por un término de cinco años, permitiendo con ello desvincular las políticas de la empresa de los vaivenes electorales y las mezquindades partidarias.

La gerencia general tendrá funciones de ejecución y coordinación de las políticas a implementar por la empresa y su titular integrará el Consejo de Empresas. Este último órgano tendrá carácter consultivo y asesor; actuará en forma colegiada, y como elemento trascendente estará integrado por el gerente general – como ya lo expresara- y por los secretarios generales de cada sindicato de Luz y Fuerza, esto es Córdoba, Villa María y Río Cuarto.

Si bien este no es un tema menor y merecería una más extensa alocución de mi parte, considero que los legisladores sabrán aquilatar acabadamente la importancia de la incorporación de los trabajadores en este Consejo,

ya que significa la aplicación lisa y llana de lo que el artículo 14 bis de lo que nuestra Constitución Nacional impone y que es el control en la producción y colaboración obrera en la dirección de la empresa.

Señor presidente: con este nuevo estatuto se reafirma lo que en otras épocas tan sólo se declamaba: la EPEC es de los cordobeses, y si es así, a partir de hoy, con este estatuto, se reafirman los principios republicanos de gobierno. A partir de ahora, las políticas de la EPEC están definidas como política de estado y, por lo tanto, públicas y conocidas.

Para garantizar este concepto, se establece la obligatoriedad de la confección de un "contrato-programa", el cual debe ser acordado entre el directorio de la empresa y el Poder Ejecutivo provincial. Este instrumento permitirá amalgamar las estrategias comerciales de una empresa, con los intereses de todos los cordobeses.

Para cristalizar el verdadero sentido de lo público que este acto requiere, se impone la obligación de tratamiento y aprobación de este "contrato-programa" por parte de la Legislatura provincial.

Asimismo, este "contrato-programa" será controlado en su cumplimiento por el Consejo de Empresas, el que deberá informar trimestralmente sobre su marcha.

En lo que hace al reglamento del servicio, si bien el mismo no ha sufrido cambios sustanciales, podemos resaltar que se ha contemplado un aspecto que siempre generó inconvenientes entre los usuarios, los municipios y la empresa, cual es la intermediación de esta última, en la percepción de tributos municipales como agente de retención, fijándose ahora un límite que será impuesto por el Poder Ejecutivo provincial o por esta Legislatura, lo que seguramente redundará en beneficio para todos los consumidores.

Además, para evitar la posibilidad de cualquier conflicto que impacte en la calidad del servicio que merecen los usuarios del sistema y en la convicción que razones de estricta justicia así lo imponen, se garantiza la vigencia total y plena del Estatuto del Personal de la EPEC, como así también del convenio colectivo de trabajo.

Señor presidente: por las razones que

he expresado, este bloque de Unión por Córdoba, solicita la aprobación del proyecto que he analizado.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Beatriz Lizio.

Sra. Lizio.- Señor presidente: el Estatuto de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba merece algunas consideraciones en cuanto a sus disposiciones, puesto que el presente proyecto resulta importante en cuanto al precio de la energía eléctrica provista por la misma, ya que establece que será del menor costo posible.

En su artículo 4º, inciso b), apartado 2, autoriza la instalación de parques y plantas industriales, posibilitando lograr el uso racional y el aprovechamiento integral de la energía. Detallar las capacidades que la empresa tiene en el marco del presente estatuto, dispuesto en su artículo 5º, deja delimitadas las competencias para actuar pública y privadamente.

Otro de los aspectos que evidencia el presente proyecto, es el referido a que la empresa deberá poner en consideración del Ersep los precios y tarifas para la energía y demás servicios que preste, lo cual hace al efectivo control por parte del ente regulador.

Otro aspecto importante es la confección de un reglamento de compra y contrataciones, que deberá ser puesto en consideración del Poder Ejecutivo provincial; además, instituir un registro de proveedores contribuirá a licitaciones por parte de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, con las garantías, mantenimiento de oferta, adjudicaciones, contratos, publicidad, pagos, penalidades y demás normas atinentes.

Cabe destacar que el establecimiento del control preventivo y posterior por parte del Tribunal de Cuentas, torna necesario el control externo de todo acto que genere esta empresa. Asimismo, faculta a la Contaduría General de la Provincia a efectuar auditorías, lo que hace al necesario control interno de esta empresa.

Creemos oportuno destacar la necesidad de que el presente proyecto incluya el acta de compromiso, firmada por el Sindicato de Luz y Fuerza, puesto que ello redundará en beneficio de la actividad que se deba realizar.

Por todo ello, apoyamos el presente proyecto de ley.

Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de seguir concediéndole la palabra a los señores legisladores, conforme el orden en que la han solicitado, quiero dar la bienvenida a los compañeros trabajadores que componen los cuerpos orgánicos de los sindicatos de Luz y Fuerza de la provincia de Córdoba.

Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.

Sra. Olivero.- Señor presidente: el bloque de Izquierda Unida ha venido sosteniendo en este recinto, desde que asumimos, la defensa irrestricta de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

Hace un año, hemos presentado el pedido de derogación de las leyes del Nuevo Estado, conocidas como "leyes Bodega", que afectan la posibilidad de que esta empresa de los cordobeses pudiera seguir en manos del Estado provincial.

Pero avanzando este Poder Ejecutivo, redactó distintos decretos que son los decretos realizados en el año 2001, me refiero a los 795, 797 y 798, que en realidad avanzan reglamentando las leyes Bodega y que afectan la vida de esta Empresa.

Luego, el Decreto 798, del año 2001, crea la Eléctrica Sociedad Anónima; el Decreto 1678, también del 2001, ajusta la licitación de las acciones de la sociedad anónima y los pliegos de condiciones; el Decreto 2560, del 2001, ajusta nuevamente la licitación; el Decreto 2911 también del año 2001, elimina la conquista laboral de los trabajadores con respecto al uso de la energía por parte de los trabajadores de la Empresa; el decreto 2011 del mismo año, que nunca ha sido publicado, crea la segunda sociedad anónima, Hidroeléctrica de Córdoba Sociedad Anónima y luego los Decretos 941 y 942, que son creados en el año 2002, lamentablemente fueron publicados en el mes de enero de este año. Estos directamente avanzan, poniendo a los directores de las sociedades anónimas antes mencionadas, el señor Dasencich, Brusco y Fernández. Además en el artículo 4º los autoriza a redactar el Estatuto social de estas sociedades y

proceder a inscribirlas en la Inspección de Personas Jurídicas. Esto lo publican en enero de este año.

Por último, el Decreto 1638/02, que ajusta, para hacernos conocer en esta Legislatura, los presupuestos de la EPEC de los años 2001, 2002 y 2003.

Señor presidente, creemos que en realidad es crucial resolver el Estatuto de una empresa tan importante como la que estamos debatiendo en este momento. Es crucial para las necesidades del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que incluso usted hoy, en un informe brillante en Labor Parlamentaria, ha dejado explicitado y quiero que este recinto lo conozca, ya que el día lunes debe estar la aprobación de este Estatuto en los escritorios de los funcionarios del Banco Mundial, que hasta hace poco tenían intenciones de avanzar -en todo caso- en la entrega del patrimonio de los argentinos y de los cordobeses.

Me quiero referir a que, en todo caso, este proyecto de Estatuto Orgánico que, lamentablemente, estamos debatiendo entre gallos y medianoche, es un Estatuto que prácticamente no hemos podido comparar con el actual, que no estamos hablando de un quiosco o de un carrito que vende "choripán", sino que estamos hablando de las empresas pilares de la Provincia de Córdoba. Es vergonzoso realmente que estemos debatiendo la vida de una empresa de este modo.

Hemos encontrado varias aberraciones, en este corto lapso, donde vemos que no existe ninguna garantía, porque no está planteado en ninguno de sus artículos la derogación de las leyes Bodega, de su Capítulo II, que afecta centralmente a la Empresa ni tampoco de los once decretos que han avanzado en la aplicación de estas leyes que rigen desde hace un tiempo.

Desde el bloque de la Izquierda Unida vamos a ratificar nuestra defensa irrestricta de la Empresa de Energía de Córdoba, porque no se vende y no se divide.

Este nuevo marco legal, que especialmente está especificado en los Decretos 941 y 942 y también en los Decretos 798 y 2011,

realmente van a afectar el futuro de esta empresa en esta Provincia.

Entendemos que este Estatuto debería ser debatido en las comisiones y comparado con el que actualmente rige, donde nos ha llamado la atención, por ejemplo, que en el Estatuto actual el poder de policía sobre la seguridad técnica, sobre todo en las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía, no han sido trasladados a la nueva propuesta del Estatuto orgánico.

Podemos también plantear que cualquier transferencia sobre los bienes de esta empresa podría ser afectada por un informe técnico que este nuevo Estatuto tampoco plantea. Desaparece también el artículo cuarto del actual Estatuto. Estos son algunos de los ejemplos que hemos encontrado en esta rápida y veloz lectura que hemos podido realizar, como así también quiero aclarar que hay un punto sobre las operaciones de personas del exterior donde estaba involucrado un acuerdo de la Legislatura, y que en este momento quedan concentradas las facultades solamente en el Poder Ejecutivo.

A este gobierno no le podemos creer para nada, porque no solamente ha planteado que la Empresa de Energía iba a quedar en manos del Estado sino que, por el contrario, ha avanzado en el vaciamiento y en el desinterés de plantearse que esta gran herramienta tenía que ser de los cordobeses. Pero también lo podemos comparar en cuanto a lo que hizo con el Banco de la Provincia de Córdoba donde, si no se ha entregado hasta hoy, no fue justamente por no tener interés, sino porque la situación financiera del país y la provincia no lo permiten.

En ese sentido, nuestro bloque va a rechazar y votar en contra este proyecto.

Lamentablemente, volvemos a asistir a una sesión donde el Poder Ejecutivo, que gobierna para el Fondo Monetario Internacional y para los intereses del Banco Mundial, se ve reflejado también en que esta Legislatura, como una sucursal del Poder Ejecutivo ya que legisla lamentablemente bajo las órdenes del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Por todo esto, me cabe hacer una pregunta: si el Fondo Monetario Internacional, señor presidente y señores legisladores, hasta hace poco planteaba li-

sa y llanamente la necesidad de la privatización de EPEC ¿por qué ahora rápidamente, para el día lunes, ponen como condición para desembolsar fondos para esta Provincia, votar entre gallos y medianoche, desconociendo un Estatuto, que como decía recién, no es para un kiosco sino para una empresa fundamental para nuestra provincia?

Creo que debemos respetar también al pueblo de Córdoba, a quienes representamos, y este debate no puede darse sobre tablas sino que merece ser tratado en las distintas comisiones y abordándolo con la seriedad que significa poder definir de ahora en adelante un Estatuto que rija la vida de una empresa.

Esa es en principio, y en una primera exposición, la posición de nuestro bloque. Vamos a rechazar no solamente la metodología, sino los contenidos que este Estatuto tiene y que está hoy discutiéndose.

Sr. Presidente (Fortuna).- Les voy a recordar a los señores legisladores, que en oportunidad de la reunión de hoy en Labor Parlamentaria, se acordó por absoluta mayoría que el debate se diera en la fecha y después de un cuarto intermedio, donde pudiéramos, en definitiva respetar también las necesidades que nos habían solicitado los Cuerpos Orgánicos de los sindicatos de la Empresa.

Tiene la palabra el legislador Dulla.

Sr. Dulla.- Señor presidente, parafraseando a Vigni, cualquiera diría: "La nobleza y la servidumbre de la política". A los políticos nos resulta difícil hablar de nobleza, máxime cuando hemos caído en un desprestigio como el que tiene la clase política en general y alguna dirigencia en particular; y sobre todo cuando demostramos con hechos la servidumbre de alguna dirigencia.

Hoy estamos tratando, a pesar de lo que dijo recién el presidente acerca de un acuerdo de Labor Parlamentaria sobre que lo íbamos a tratar hoy, algo que a las 4 menos 10 de la tarde o a las 7 y pico todavía no estaba decidido lo que se iba a tratar. Nada más ni nada menos que el Estatuto de la EPEC, que creo significa mucho para los cordobeses.

No vamos a cuestionar un acuerdo con el gremio, pues me parece legítimo que participe; me parece legítima la lucha que ha tenido el Gremio de Luz y Fuerza reivindicando a la

EPEC para los cordobeses; me parece legítimo que hoy, cuando suponemos plasmada parte de esa lucha, estemos celebrando tal vez la aprobación de esta ley.

Lo que no vamos a hacer, como bloque de la Unión Cívica Radical, es convalidar el acuerdo, porque nos parece de demócratas y de republicanos respetar los poderes; nos parece de parlamentarios discutir las ideas. Nos están poniendo realmente en una encrucijada.

Hace minutos, cuando tuve la posibilidad y oportunidad de dar una lectura al proyecto, decía que De La Sota nos pone –porque seguramente a esto lo manda De La Sota, que es quien firma el acuerdo con el gremio, junto con Caserio– en la encrucijada al incluir cuestiones que han sido históricas defensas del radicalismo. Y en algún momento pensamos desde el bloque que los podíamos acompañar con algunas observaciones, pero analizándolo en estos minutos que hemos tenido, uno encuentra demasiadas observaciones como para acompañar esto, que vuelve a ser otra cachetada para los cordobeses y para la Legislatura. ¡Otra vez esto del trámite de urgencia! ¡Otra vez a los empujones, a los pechones y de prepo! ¡Otra vez a último minuto se nos dice: “Se borró lo que estaba previsto, que era un miembro de la oposición en el Directorio! No quieren el control de la oposición, evidentemente no se deroga la ley Bodega.

Directores de un directorio que van a tener cinco años decía la miembro informante del bloque de la mayoría para evitar los vaivenes partidarios, por las dudas, lo aprobemos y los designemos ya.

La EPEC es de los cordobeses, dijo con énfasis la legisladora Ruiz. ¡Qué cambio desde marzo del 2000, cuando en una calurosa tarde de día sábado se votaba la Ley del Nuevo Estado, y algún personaje celebraba con cañitas voladores en la peatonal!

Decía: “Vamos a privatizar la EPEC, el Banco y el Juego”. Esto es bastardear la política, esto es la servidumbre de la política. Señor presidente: hemos peleado juntos con el gremio desde el radicalismo para una EPEC de los cordobeses, en manos de la Provincia.

Desde estas mismas bancas hemos di-

cho que ese intento de las leyes del Nuevo Estado significaba el “menemismo tardío”, y se enojaron. A algunos no les gustó. Yo digo que no sólo del “menemismo tardío” sino lo peor del menemismo. Y encima les salió mal, porque no pudieron privatizar ni el Banco ni la EPEC.

¿Qué les dicen ahora? “Nos rendimos”. Esta es la rendición de De la Sota. ¡Qué casualidad, justo antes de un período electoral! Seguramente no quiere conflictos sociales, ni quiere gremios en la calle. Seguramente hay que acordar y arreglar. “Me rindo”. Pero se rinde siguiendo sus convicciones.

¿No estaba tan convencido allá por el 2000, de lo que se estaba votando acá? ¿Qué me pueden decir los legisladores que votaron las Leyes del Nuevo Estado? ¿Qué van a votar hoy?

Damos vuelta la página. Escuchamos a los cordobeses, cuando los debimos escuchar en el 2000.

Señor presidente: votar este proyecto hoy es un acto de irresponsabilidad. Es irresponsabilidad legislativa, seguramente no del Poder Ejecutivo o de quienes mandaron a hacer esto. Esta Legislatura no puede aprobar esto hoy. Preguntaría a todos los legisladores, cuántos son los que conocen el tema que estamos tratando.

Desde la Unión Cívica Radical reivindicó a la EPEC en manos de la Provincia. Pero en estas condiciones, no podemos aprobar esto. Estoy planteando que seriamente se debata, se analice y se discuta en las comisiones como corresponde.

Planteamos, señor presidente, la vuelta a comisión y si esta propuesta no es aceptada, nos veremos en la obligación de pedir la abstención.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Asís Nicolás.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: es un tema muy importante y muy poco el tiempo. Pensábamos que se iba a tratar la semana que viene, que el proyecto entraba mañana

Según información que habíamos recogido esta mañana, el gremio me entregó una

copia del proyecto de estatuto acompañado por la legisladora Perla Ceballos. Hace pocos días, también hicimos un pedido de informes sobre los Decretos 798 y 2011, del 2001, por los que se creaban estas empresas, sociedades anónimas, los términos de los acuerdos, de los pedidos de informes, que se creaba, o quiénes integraban la comisión, y el tema nos ha llevado por delante y hoy estamos tratando, con pocas horas de estudio, este proyecto de ley.

Señor presidente, voy a avalar este proyecto de ley, porque reivindica la vigencia de la ley de la empresa del Estado provincial, regida por la Ley 6152. Si quisiera hacer una oposición fácil, podría escudarme y pedir la abstención o votar en contra, pero las empresas del Estado son una cara bandera para el ARI, y su máxima dirigente, que ha intervenido para defender esta empresa, cuando estaba por ser privatizada.

Esta es una oportunidad para ratificar nuestra profunda convicción de que esta empresa tiene que ser mantenida en manos del Estado y manejada con eficiencia y transparencia.

Apoyo este proyecto de ley, porque con el mismo estamos anulando la Ley de Nuevo Estado en lo referido a la Epec, y superando este estigma que se llamó "ley Bodega". Además, he consultado con amigos que trabajan en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, y esta tarde, junto con la legisladora Perla Ceballos, hablamos con los dirigentes del sindicato; entre otros aspectos, ha sido una sorpresa agradable que estemos defendiendo el patrimonio estatal en esta empresa. Quisiera que este modelo se aplicara para el Banco de la Provincia de Córdoba, para el juego, y en su momento, para el agua de Córdoba.

En el artículo 3° es importante destacar —me lo han explicado, lo he entendido y lo manifesté parcialmente en Labor Parlamentaria— que el objeto que se fija se amplía a las telecomunicaciones. Coincido con la legisladora del bloque oficialista que fundamentó este proyecto, respecto de la posibilidad de aprovechar la capacidad instalada y la infraestructura de la empresa. Además, me apuntaban que ya no se habla de energía eléctrica, sino de materia energética, con lo que también se amplían las

funciones de esta empresa. A mi entender, todos estos son puntos positivos.

Luego de la exposición del legislador Dulla, me ha surgido un interrogante, porque según el artículo 9°, un vocal debe ser de la oposición, con lo que a mi criterio, ello no se ha modificado conforme a la copia que me entregó el sindicato y la Presidencia de esta Legislatura...

Sr. Presidente (Fortuna).— Disculpe, señor legislador. El señor legislador le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Nicolás.— Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Fortuna).— Tiene la palabra el señor legislador Blanco.

Sr. Blanco.— Señor presidente: hace un instante solicité la palabra, y ahora lo hago de nuevo para opinar sobre este tema. Sin anticipar la argumentación que posteriormente voy a efectuar, solicito se le aclare al legislador que está haciendo uso de la palabra, que el artículo al que él se refiere, ha sido modificado por el oficialismo. De modo que debiera acercársele el texto más reciente.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Fortuna).— Por Secretaría se dará lectura al texto del artículo 9°.

Sr. Secretario (Farré).— (Leyendo):

- "Artículo 9°.- El directorio estará integrado por un presidente y dos vocales, que serán designados por el Poder Ejecutivo provincial".

Sr. Presidente (Fortuna).— Continúa en uso de la palabra el señor legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.— Señor presidente: tiene razón el señor legislador Dulla. El segundo ejemplar que me entregaron, se refería a un vocal de la oposición, con lo cual entiendo era confundir oficialismo y oposición, y perjudicaría el rol que tiene asignado en el sistema democrático.

Siguiendo con el tema, debo destacar también que por haber pertenecido a una empresa estatal, el rol que se asigna a la gerencia es importante porque, en definitiva, es la que carga con la mayor responsabilidad en la administración de las mismas.

Todos sabemos que los directorios generalmente son para conducción política y no técnica. También se incluye, me lo han explicado y lo he observado, el Consejo de Empre-

sa en donde sí participan los empleados, los obreros de la EPEC, organizados por sus respectivos sindicatos para el manejo de la empresa. Es una forma de involucrarlos en la misma.

Se han incluido otros instrumentos importantes, que son nuevos. Ratifica, por el artículo 28, que las políticas energéticas en la Provincia serán políticas de Estado, con lo que sigo en el convencimiento de que esto ratifica por todos los medios que la Empresa sigue siendo estatal, que se va a defender su permanencia y de perfeccionar su manejo.

Señor presidente, si hay algo oculto que no podemos observar realmente me sentiría defraudado. Por lo que leo y por lo que me han explicado los sectores involucrados, todo hace a ratificar –repito- su permanencia en la esfera estatal, la participación de los empleados en un consejo y esto hace que vote a conciencia afirmativamente este proyecto.

Espero que se tome de modelo para aplicar y mantener la banca estatal en el sector del Estado, así como el juego y se hubiera aplicado también para el agua.

Sr. Presidente (Fortuna).- Estando presente el doctor Herman Olivero, Presidente Provisorio, le voy a solicitar que continúe con el desarrollo de la sesión haciéndose cargo de la Presidencia.

- Asume la Presidencia el doctor Herman Olivero.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el señor legislador Luque.

Sr. Luque.- Señor presidente, he pedido la palabra para expresar, más que un reclamo, la justificación de una desazón profunda ante el hecho y los procedimientos.

Como es de uso y costumbre en el funcionamiento de esta Legislatura, se impone el tratamiento sobre tablas de proyectos que los legisladores no hemos tenido la oportunidad ni tan siquiera de leer, razón por la cual estimo que ninguno de los miembros de este Cuerpo está en condiciones de aprobar hoy esta Ley, que nadie pone en discusión, como se debe hacer en las correspondientes comisiones.

Además creemos que la modificación del Estatuto de la EPEC tiene una fuerte inci-

dencia en la vida de todos los cordobeses y quienes hemos sido elegidos para representarlo, tanto los funcionarios del Poder Ejecutivo como el Legislativo, nos debemos a todos y a cada uno de los cordobeses, nos debemos a la obligación de vigilar la marcha, la administración de los bienes públicos y su patrimonio.

Fracaso tras fracaso hacen pagar al conjunto de la sociedad los errores de esta política errática. En la maratónica lectura que hemos hecho de este proyecto de Estatuto, vemos que en el artículo 28 se declama que las políticas energéticas de la provincia de Córdoba serán políticas de Estado y por ello podrán ser públicas y conocidas. Lejos estamos, señor presidente, de cumplir con este propósito declamativo del Poder Ejecutivo.

A continuación, voy a entrar en consideraciones sobre un aspecto al cual pido especial atención, porque tengo la obligación de decirlo, ya que no puedo arriesgarme a ser mal entendido dado que mi partido, el Socialismo, históricamente ha aportado, en la construcción comunitaria de nuestra Nación, claros principios rectores en la defensa de los trabajadores y su participación en el manejo del destino de las empresas, no solamente las públicas sino también las privadas.

En esta pelea hemos puesto no sólo importantes aportes intelectuales sino también el testimonio de vida de miles de militantes que lucharon en defensa de la organización social, por el bien común, la vida y los intereses de todos y cada uno de los habitantes, los que están siempre por encima de los intereses de cualquier sector. Entonces, a pesar del respeto que me merece el gremio, que ha sabido defender la Empresa Provincial otrora en contra de los poderes privatistas de este mismo Gobierno, ese sindicato que supo mantener en alto las banderas innegociables de Agustín Tosco, no puede hoy monopolizar la representación social y la conducción de la empresa que es de todos. Me estoy refiriendo al Título XI de este mismo artículo, que es el 22, en que la composición del consejo de la empresa queda en manos del Sindicato de Luz y Fuerza, quedando fuera los verdaderos dueños de la empresa, que somos los cordobeses y todos los

consumidores de energía.

Para cerrar, nuestro bloque quiere recalcar que los usuarios, verdaderos destinatarios y por consiguiente dueños últimos del servicio, son convidados de piedra. A ellos nos debemos y en su nombre nos negamos a aprobar estas condiciones para una norma tan trascendental, por lo que mocionamos concretamente se pase a comisión el presente proyecto para su tratamiento. De no ser así, solicito en nombre de todos los integrantes de mi bloque, se nos permita la abstención del voto, de acuerdo al artículo 192 del Reglamento.

Sra. Domínguez.- Señor presidente, este bloque no va a acompañar el presente proyecto.

La importancia de la EPEC ameritaba debatir la ley en cuestión en comisión. Entiendo la urgencia del Ejecutivo, pero bajo ningún concepto la comparto. Considero de vital importancia conservar la EPEC bajo la órbita del Estado provincial, preservando su constitución al servicio de Córdoba y garantizando la fuente de trabajo de sus empleados.

Votar hoy esta ley es dar a futuro los instrumentos para una eventual privatización, que bajo ningún concepto voy a convalidar. Mi voto es negativo.

Gracias, señor presidente.

Sra. Ceballos.- Señor presidente, para el bloque del Partido Intransigente es más que lamentable lo que hoy tenemos que tratar aquí, porque estamos presenciando una vez más el atropello a los más elementales derechos.

Señor presidente, tres son los proyectos que tengo aquí, en mi mano y ninguno dice algo que se haya excluido, como recién se acaba de leer. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué más sacaron de aquí?

Señor presidente, este bloque, sumando esfuerzos con la gente, con la que caminamos luchando para que la EPEC quedara en Córdoba, tratamos de poder leer, en tiempo supersónico; nos trajeron uno primero, nos trajeron otro después y luego tampoco teníamos el convenio que había firmado el Gobierno con el sector de Luz y Fuerza. Volvimos, hablamos y estábamos dispuestos a apoyar la Ley con el pedido de esfuerzo, también de parte del Gobierno, no sólo nuestro, de derogar decretos que considerábamos lesivos y leyes que se

opusieran a este proyecto de preservar en la órbita de la Provincia de Córdoba a la EPEC.

Pero lamentablemente tenemos que cambiar totalmente nuestra postura. ¿Y por qué digo "lamentablemente"? Porque aquí estamos votando algo que realmente no sabemos si se condice con la realidad, o es totalmente veraz, o si se han cambiado cosas, por lo que parece ser que se nos ha engañado. Creo que se nos ha estafado.

Señor presidente, iba a pedir un cuarto intermedio para que se nos explicaran qué cosas más se habían cambiado, pero creo que no sería lo correcto.

Solicita este bloque que vuelva a comisión el proyecto, por respeto a los demás partidos políticos, que no son solamente el oficialismo, y también por respeto al pueblo, para que se pueda tratar con profundidad. De otra manera este bloque solicita permiso para abstenerse y realmente quiere expresar su total disconformidad por esta forma de tratamiento, que rechaza de plano.

Sr. Presidente (Olivero).- Señora legisladora, oportunamente pondremos en consideración su solicitud.

Tiene la palabra el legislador Blanco.

Sr. Blanco.- Señor presidente, la posición de nuestro bloque ha sido planteada por el legislador Dulla, y diría que casi no habría que agregar nada a su exposición. Pero quizás por la propia temática de lo que discutimos; quizás porque muchas veces me tocó hablar de la EPEC en este recinto, quisiera formular algunas reflexiones, y le pido al bloque oficialista que las interprete en un sentido de profundo respeto, en la convicción de que ustedes creen que están actuando bien, o que al menos están acompañando al Poder Ejecutivo en algo bueno. Mi primer experiencia como legislador de la provincia fue hablar en este recinto acerca de que la visión del Gobernador De La Sota tenía un componente ideológico que nos alejaba y que nos impedía llegar, a lo mejor, a los consensos necesarios para que las cosas funcionaran bien.

Y dije aquello de "menemismo tardío", no para agraviar sino porque me pareció una forma sintética de expresar lo que creo es una visión grotesca que el neoliberalismo adaptada para los países periféricos. Y de aquel enton-

ces a hoy pasaron muchas cosas.

Quiero decirles que hoy, hace unas horas, cuando nos enteramos que el oficialismo iba a promover alguna ley que significaba un avance, y en última instancia una conquista de quienes habían luchado desde el frente gremial, político o del que fuera, contra las intenciones de esa visión ideológica, para los que creíamos que era cierto y que no era una especulación política decir que "La EPEC no se divide ni se vende", era una buena noticia.

Por eso a mí, preocupado porque el Gobernador De La Sota hace una práctica constante, de violentar al Poder Legislativo, hasta estaría dispuesto a tolerar alguna cosa y, si aquello que lleva muchos meses de discusión, significara llegar definitivamente al puerto con el que la mayoría de los cordobeses soñó, que era claro que no quería que ni se vendiera como empezó la EPEC, ni que se concesionara como siguió, ni que se buscaran acuerdos en los cuales seguramente desde mi fuerza política habría que criticar muchas cosas.

Pero si se llegara, producto de la gente que estuvo en la calle, de la gente que discutió en el recinto, de los que fueron a discutir para decir que se violaba la ley de la competencia, producto de lo que cada uno legítimamente, a través de sus visiones políticas e ideológicas, creía que era su responsabilidad del momento, si se llegara a aquello, hasta uno estaría dispuesto a decir que si se ha priorizado una forma de llegar a un acuerdo, tendríamos al menos que compensar con esa otra alegría, la frustración de que una vez más, el Gobernador De la Sota creía que la Legislatura era una escribanía donde simplemente se certifican las firmas de los miembros del Poder Ejecutivo.

Este no es un tema menor. Lo hemos discutido muchas veces. La sociedad cordobesa estuvo convulsionada con esto, quizás más que con cualquier otro tema, tal vez más que con la discusión del Banco, del Juego o de las tragamonedas.

Este es un proceso muy difícil para los cordobeses y para los dirigentes de Luz y Fuerza. No voy a hacer demagogia ni populismo porque esté presente la conducción del gremio, sino que quiero decir que fue el gremio

que más se plantó en contra del Gobierno; tuvo que tolerar represiones; invasión a las oficinas; sacaron a los trabajadores; tuvo su secretario general con captura y todo lo que saben que ocurrió. Tuvieron mil problemas y el gremio siguió adelante.

Hoy les puedo decir a los miembros del gremio y a sus afiliados que está triunfando en esta reivindicación del gremio. Entiendo las urgencias del Gobierno, como lo hicimos en la ley anterior que fue tratada en comisión rápidamente, pero acompañamos en la aprobación, teniendo en cuenta la necesidad del Gobierno de contar con el instrumento.

Pero cuando decimos que nuestro bloque quiere que vuelva a comisión es porque tenemos muchas dudas, producto de este mismo procedimiento. Porque recién decía mi amigo Asís Nicolás de su esfuerzo por votar a conciencia, esfuerzo que hacemos todos.

¡Qué difícil es votar a conciencia, cuando uno tiene un texto que no es el que se va a votar! ¡Qué complejo es votar a conciencia, cuando uno tiene, en definitiva, alguna duda sobre la redacción final!

Pensaba, sin alterar lo que ha sido la posición del bloque, porque no hacer un esfuerzo para ver si logramos construir esos consensos que hacen falta. ¿Cómo hacer para compatibilizar la urgencia del Gobierno, la alegría de quienes quieren ver concretada objetivamente la posibilidad de que no venga ningún desvariado con ideas compradas, en algún lugar en el extranjero, a decir que es una gran idea vender la EPEC?

Me acuerdo cuando vino Caserio, le dije: "Ministro, con todo respeto, le quiero decir que lo que voy a decir es de alguien que tiene un profundo afecto por la EPEC, no sólo por la EPEC, sino porque no se puede entender la historia industrial de Córdoba, sino se entiende a la EPEC".

Recuerdo que Caserio me dijo ese día, señor presidente, "está hablando con otro que va a defender a la EPEC". Pero no se tradujo eso después en algunas acciones del ministro Caserio.

Entonces, entre tener la llegada definitiva a despejar esa posibilidad y la legítima ur-

gencia del Gobierno, y olvidándonos un poco de esto, decimos que vuelva a comisión, que la citemos para mañana y que sesionemos el sábado; o algo más fácil: a riesgo de violentar lo que ha sido nuestra decisión colectiva en el bloque, porque sentimos la necesidad de defender a la Empresa de Energía, que si le agregáramos un articulito -que si hacemos un breve cuarto intermedio lo redactamos, y de seguro los compañeros de Luz y Fuerza lo aprueban-, que exprese que la Empresa de Energía integra el sector público no financiero de Córdoba y se deroga toda norma que se oponga al presente artículo, hasta estoy dispuesto a olvidar, por un momento, que el Gobernador cree que somos la escribanía que certifica la firma del Poder Ejecutivo; hasta estoy dispuesto a decir -ustedes saben de la importancia que yo le asigno a la división de poderes y a prestigiar esta Legislatura- que llegaron diversas fotocopias del proyecto, y que nos dieron una distinta a cada bloque.

Señor presidente: la Epec no se divide ni se vende, y forma parte del sector público no financiero de la provincia de Córdoba. En el contexto macroeconómico que tenemos, no le cuesta nada incluir esto.

Todos saben que la idea de las privatizaciones, mezcla de moda ideológica y negocios perversos se la llevó el huracán de la crisis de los países periféricos. Tal vez algunos piensen que se trata de un acto de picardía; pero se trata del Estado de los cordobeses, y en este caso en particular, de una de las empresas más ligadas a la generación de riquezas de los cordobeses y, en consecuencia, de su calidad de vida.

Tantas veces, señor presidente, pedimos que suspendieran el proceso, y podría recitar las respuestas que desde estas mismas bancas, en la Legislatura bicameral, obtuvimos con el diputado Vicente. Pero eso ya no importa, porque no se trata de quién gane o pierda en el debate; deberíamos tratar de ponernos de acuerdo, y si el Gobierno está convencido, aunque no sea por razones ideológicas, sino por pragmatismo político, de que se terminó el ciclo de inventar que iban a venir empresas internacionales -por suerte no la Enron, si no tendríamos problemas con los presupuestos y los balances que nos han enviado-, lo que es-

timo que muchos de ustedes han creído desde siempre. Tenemos dos opciones: una, la de máxima, volverlo a comisión, respetando el Poder Legislativo, debatirlo, y la semana que viene lo aprobamos; la otra, seguir siendo una escribanía, pero con una posibilidad, ya que el ministro viaja el lunes: redactemos el artículo; yo me he tomado la libertad de hacerlo, pero seguramente que gente con más experiencia legislativa, y por razones de técnica parlamentaria, podrá hacerlo mejor. Son tres líneas, que escritas a máquina suman poco más de una: "La Empresa Provincial de Energía de Córdoba integra el sector público no financiero de la provincia de Córdoba y se deroga toda norma que se oponga al presente artículo".

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el señor legislador Bonetto.

Sr. Bonetto.- Señor presidente, mi intervención en el debate de este proyecto iba a tener dos aspectos fundamentales referidos a esta Empresa del Estado Provincial, pero como siempre pasa en este tipo de debates tan importantes que tenemos que darnos los cordobeses, el bloque de la Unión Cívica Radical ha vuelto a refrescarnos la memoria, hecho que ha producido en mí una revisión de todo lo que veníamos debatiendo.

Lamentablemente ellos toman la historia a partir de nuestra asunción, en el año 1999, para adelante, con la intención de ponerse en ultra defensores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y se olvidan de cosas fundamentales que han pasado y discutido en la Provincia de Córdoba en otros años, desde 1983, cuando logramos recuperar la democracia y debatir todas estas cuestiones. Pero gracias a Dios la gente de buena memoria, el periodismo, la historia y, fundamentalmente, los compañeros que están hoy aquí arriba, del Gremio de Luz y Fuerza, tienen buena memoria y han tenido que pelarse las rodillas peleando también, cuando aquel intento hecho realidad de la Ley 7850, en un período de gobierno democrático en que no gobernábamos nosotros, cuando teníamos a nuestros legisladores en contra de ese proyecto privatista, no solamente de la EPEC sino de muchos de los patrimonios provinciales, se llevó adelante y los gremios tuvieron que salir a de-

fender.

Y nos hablan que nosotros quisimos vender la Empresa. No, nosotros en ningún momento quisimos vender la Empresa. PlanTEAMOS la concesión por 35 años de la Empresa, pero también parece que los radicales se olvidan que el ex interventor de la Provincia de Corrientes de aquella época, que era el presidente del Partido Radical en Córdoba, el doctor Ramón Mestre, viajó exclusivamente desde Corrientes a acá, una noche, a la Casa de las Tejas, a darse la mano, sacarse la foto y firmar un acuerdo en el que el radicalismo apoyaba la concesión de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

Nosotros, como representantes del Partido gobernante, no estamos arrepentidos de lo que en aquel momento pensamos que iba a ser el futuro de nuestra Provincia, de nuestro país y de la economía nacional, pero tampoco nos avergonzamos en esta oportunidad, de reconocer si hemos cometido en aquel momento algún error y hoy cerrar definitivamente un largo debate entre la clase política y la clase dirigente gremial.

Espero que los muchachos de los gremios recuerden todas las promesas del Director obrero, que nunca se dio en la realidad, para que el gremio participe en las decisiones de la Empresa.

Quiero decirle, señor presidente, que como legislador de la coalición gobernante, me siento muy contento hoy, porque estamos poniendo una bisagra con respecto a lo que es la transformación definitiva de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica en manos del Estado provincial, dándole una mayor autonomía y autarquía y una mayor participación a la Legislatura, como bien lo explicó nuestro miembro informante, la compañera legisladora Ruiz.

También va a haber un control de precios y tarifas de la Empresa y con parte del ente de control, que es el ERSEP, despolitizaremos, dándole mandato al Directorio por cinco años, para que esto no se compatibilice con los períodos de gobiernos provinciales; flexibilizamos a través de este proyecto de ley para que los directores no tengan la exigencia que tenían en otra oportunidad, y sólo el presidente

del directorio va a necesitar tener un título universitario de ingeniero, y los demás -es decir el resto del directorio o vocales- no van a tener la exigencia, como lo hacía el Estatuto anterior, de ser uno contador y otro abogado. Pero sí le exigimos una cierta idoneidad y antecedentes con respecto a empresas de servicios, especialmente empresas energéticas.

En el consejo de la empresa se va a hacer realidad una vieja promesa. Allí van a tener la posibilidad de participar los gremios a través de sus secretarios generales, junto al coordinador, que va a ser el gerente general de la empresa, un verdadero órgano colegiado, que va a ser consultivo y asesor del directorio, o sea que van a estar en la mesa de decisiones representados los gremios a través de sus secretarios generales, para definir las políticas a mediano y largo plazo.

Otro de los temas fundamentales, que quizás no sea de gran importancia para la mayoría de los cordobeses y que tal vez a muchos se les ha pasado, es que el Ejecutivo Provincial va a poder poner límites a los tributos municipales que gravan el consumo de la energía eléctrica en los distintos distritos de la provincia de Córdoba. Vamos a seguir teniendo a la EPEC como agente de percepción, pero se va a unificar y poner límites al tema de los tributos, que seguramente en muchos de los casos contribuyen a un alza importante en el tema de las tarifas.

Otro de los temas fundamentales que se reconocen a través de un artículo en este proyecto de ley, es que si bien por casos excepcionales el Poder Ejecutivo va a poder intervenir la empresa, no lo va a poder hacer por más de un año; esto es lo que va a decir la ley, porque también reconocemos que la EPEC en los últimos tiempos estuvo más años intervenida que normalizada.

Pero este es sólo uno de los aspectos, señor presidente. Quizás ya no como legislador de la coalición gobernante, sino como trabajador de la EPEC, quiero reconocer este acuerdo que se ha firmado con los tres gremios y que se ha plasmado hoy en este proyecto de ley que seguramente va a ser aprobado por mayoría. Es un fuerte reconocimiento

to, a través de esta ley, de una de las luchas más grandes que han tenido nuestros dirigentes gremiales, que fueron casi una utopía en su momento para Agustín Tosco y para el compañero Aldo Serrano, de Villa María, que es el haber logrado aquel famoso Convenio Colectivo de Trabajo 165/75. Y no sólo como empleado de la EPEC sino como peronista, estoy orgulloso de que en este proyecto de ley que vamos a aprobar hoy, se reconozca tácitamente el Convenio Colectivo de Trabajo del año 1975, algo por lo cual nuestros dirigentes han luchado mucho.

De esta manera, quiero despejar toda duda con respecto a lo que son los artículos fundamentales de este proyecto de ley. Esta no es una cuestión que apareció de la noche a la mañana, sino que es una cosa que es pública desde hace mucho tiempo atrás. Sabíamos que los gremios de Luz y Fuerza estaban sentados en una mesa tratando de negociar con el Ministerio de Obras Públicas, con la participación del Ersep y del Poder Ejecutivo provincial, una normativa, que como bien dijo la legisladora Ruiz, trate de aclarar y fundamentalmente, de cubrir todos aquellos baches que hoy tenemos con respecto a la legislación.

Pero lo fundamental de este proyecto de ley que hoy va a quedar aprobado, es que por largo tiempo no vamos a tener que discutir ni transferir a los cordobeses más discusiones con respecto a esta Empresa que va a ser del Estado, y que todos los sectores van a tener participación, de una u otra manera, a través de la Legislatura, del Consejo de la Empresa y de todos los estamentos que plantean poder participar en las decisiones de la misma y tener un control con respecto a lo que debe ser su funcionamiento.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el legislador Asís Nicolás.

Sr. Nicolás.- Señor presidente, en los dos ejemplares que me entregó la Presidencia, el artículo nueve nombra como uno de los vocales a la oposición. Según el doctor Farré, esto no corresponde. ¿Habrá alguna otra modificación que no tengamos?

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el legislador Bonetto.

Sr. Bonetto.- Señor presidente, este proyecto va a quedar despachado con la única

reforma que le vamos a hacer aquí, con la Cámara en comisión, y si usted me permite voy a dar lectura exacta a lo que plantea el artículo nueve, que dice: "El Directorio estará integrado por un presidente y dos vocales, que serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial". Ése es el texto definitivo del despacho de comisión.

Sr. Presidente (Olivero).- No ejerciendo esta Presidencia pero sí escuchando el debate, creo que fue una aclaración que por Secretaría ya se había leído. De todas maneras, espero que esté satisfecha su inquietud, señor legislador.

Continúa en el uso de la palabra.

Sr. Nicolás.- Señor presidente, por eso pregunté si había alguna otra modificación.

La otra moción que quiero hacer es adherir al planteo del licenciado Blanco, aunque sobreentendiendo que esta nueva ley deja anulada la Ley del Nuevo Estado y los dos decretos que crean estas dos sociedades anónimas.

El último artículo que propone el licenciado Blanco, realmente nos dejaría muy tranquilos a todos.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra la legisladora Olivero.

Sra. Olivero.- Señor presidente, necesitaba fundamentalmente aclarar que quisiera que en esto se dejara de lado la hipocresía, porque estoy cada vez más convencida de que este proyecto para nada intenta defender a la EPEC como empresa estatal, como empresa integrada, impidiendo su división de cualquier forma de incorporación de capital privado y modificación de los estatutos, cuando hoy en este mismo recinto se votó en contra del tratamiento sobre tablas de un proyecto, no de ley, sino de declaración, donde planteamos al Poder Ejecutivo la necesidad de derogar esos once decretos que ya han estado avanzando en la EPEC.

Entonces, si en este proyecto recibido a última hora que, como decía el legislador Nicolás, no sabemos si es el real, o el definitivo y el último, se acaba de modificar un artículo y no figura en ningún artículo la derogación de estos decretos, no le podemos creer al Poder Ejecutivo y tampoco vemos la voluntad del bloque de la mayoría como para poder debatir esto realmente, en el sentido de defender a la

Empresa estatal, eficiente y monopólica como patrimonio de los cordobeses.

Entonces, el bloque de Izquierda Unida quiere denunciar que a través de la aprobación de este estatuto, no hay ninguna voluntad política de querer defender a la empresa. El proyecto de estatuto contiene algunos artículos que aparecen sospechosos. Por ejemplo, en este proyecto no se contempla el sumario previo; se puede remover al personal sin sumario previo. También hay otros aspectos que tienen que ver con la ausencia de los trabajadores y usuarios en el manejo de la empresa; no nos engañan con este consejo consultivo, denominado "Consejo de Empresas", integrado por dirigentes sindicales que tengan realmente poder de decisión. Tiene meramente una facultad de asesoría y, en todo caso, es un adorno más que se pone para que sea una zanahoria y luego venga el garrote.

Vamos a ratificar que ante la ausencia explícita y expresa de la derogación de los once decretos y de la "Ley Bodega", no vamos a aceptar ni aprobar este proyecto nefasto de reglamento de estatuto para la vida de una empresa central, no sólo para los trabajadores de Luz y Fuerza y la EPEC, sino para el pueblo de la provincia de Córdoba.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra la legisladora Perla Ceballos.

Sra. Ceballos.- Señor presidente: el bloque del Partido Intransigente quiere aclarar que está de acuerdo con la moción del legislador Blanco. Estamos dispuestos a aprobar el proyecto, siempre que se pueda explicitar lo que él ha expresado respecto a la derogación y la conclusión de que se trata de una empresa del Estado.

Si se plasma en el proyecto esta expresión, nosotros lo vamos a apoyar.

Sr. Presidente (Olivero).- Legisladora Ceballos, le pido una aclaración. ¿Usted está cambiando su moción anterior? Tengo un requerimiento suyo de someter a la Cámara un pedido de abstención de su parte en la votación. ¿Cómo quedaría finalmente su posición?

Sra. Ceballos.- Señor presidente: aclaro que cuando pedí la abstención hice hincapié en la necesidad de derogar por lo menos dos

decretos que estaban en pie, y la propuesta del legislador Blanco dejaría transparentada que realmente la EPEC queda dentro de la esfera del Estado, y en ese caso, cambiaríamos nuestra postura de abstención, siempre y cuando se efectuara ese cambio.

Sr. Presidente (Olivero).- Para usted y los legisladores que plantearon la vuelta a comisión, les recuerdo que la Cámara se encuentra sesionando en estado de comisión y en proceso de producción de despacho.

Tiene la palabra el legislador González.

Sr. González.- Señor presidente: no quiero atribuirme el derecho de sugerir posturas a las minorías, pero sí puedo decirles que se apruebe el proyecto tal cual ha quedado redactado según la última lectura, no impide que las otras inquietudes que las minorías tienen, en el futuro se conviertan en proyectos nuevos. No tienen la necesidad de montar, en este proyecto, estas otras ideas.

No veo por qué esas ideas adicionales deban impedir necesariamente la aprobación de ese otro proyecto, se los puede separar.

En cuanto al otro discurso, y de acuerdo a todo lo que acá se ha dicho, quiero decir que no se puede debatir, porque se trata de lo que pudo haber sido y no fue, y lo que pudo haber sido no es, y no existe. Entonces, no me parece que haya respuesta: no es y no existe. Lo que pudo haber sido el cuco, el fantasma, está fuera de todo debate posible.

¿Cómo puedo graficar esta idea? Si mi abuela tuviera rueditas, sería un carrito; pero por suerte tiene un batón azul y es la nona. El carrito no existe. ¿Cómo vamos a debatir una hipótesis de lo que pudo haber sido y no fue? Todas las ideas concretas con las que se quiere enriquecer supuestamente este proyecto, plásmenlas en nuevos proyectos.

Se quejan de que estamos obligándolos a improvisar y proponen, con letra de carta, en tres renglones, eso sí, improvisados, que seguramente si los escribiéramos a máquina, ocuparían poco más un renglón. Elaboren un proyecto, porque el año legislativo no termina hoy; hay sesiones sucesivas.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la pa-

labra el señor legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: estoy convencido de que la propuesta del señor legislador Blanco es muy importante para lograr un consenso casi absoluto. Lamentablemente, la exposición del legislador González Castellano no nos ayuda a sacar el proyecto por amplia mayoría.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el señor legislador Blanco.

Sr. Blanco.- Señor presidente: seré breve, porque he sido implícitamente aludido.

Admito que mi propuesta ha sido escrita en papel carta; no pude hacerlo en el proyecto, porque no lo tengo. Sé que es una improvisación, producto de convicciones que tengo desde hace algún tiempo. Y esto obedece a que es, precisamente, una improvisación lo que se ha hecho; y lo digo respetuosamente, porque tal vez ha sido necesaria, debido a las urgencias del Gobierno. ¿Cómo no va a ser una improvisación, si hay dudas de lo que el proyecto expresa, lo que lleva a leer las aclaraciones por Secretaría?

Creo que lo que el legislador preopinante ha dicho, ha sido de buena fe; pero no quiero que quede la sensación que soy un legislador improvisador, porque trato de no serlo y estudiar los temas.

En segundo lugar, con prescindencia de la referencia familiar que hacía en el grafismo para su idea el señor legislador, las cuestiones ideológicas son algo más que hojarasca, y posiblemente muchas veces sean cosas que uno sueña que serán y no son. Pero todos tenemos derecho a soñar que las cosas van a ser como creemos que serían mejores, y ello no debe dar lugar a descalificaciones.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el señor legislador Pizzorno.

Sr. Pizzorno.- Señor presidente: quiero adelantar mi voto afirmativo al proyecto en términos generales, y pedir autorización al pleno para abstenerme de votar el Título 14.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el señor legislador Font.

Sr. Font.- Señor presidente: haciendo referencia a lo que manifestaba el señor legis-

lador González Castellano, me parece muy bien dar consejos a la oposición, bajar líneas, y lo aceptamos. Pero choca con algunos inconvenientes.

Cuando desde la Presidencia usted nos decía recién, con la sabiduría que le confiere su conocimiento sobre el Reglamento, que estábamos en estado de comisión, me parecía advertir que usted nos quería decir: "Señores legisladores, estamos elaborando entre todos el despacho, no hace falta que lo hagamos otro día, sino que es el momento que nos escuchemos, haciendo propuestas, respondiéndonos, fundamentando en un sentido u otro, y entre todos saquemos un despacho".

Lo que dijo el legislador González Castellano se contradice con lo que usted nos está sugiriendo. Él nos dice: "dejen que aprobemos la ley o dejen que saquemos esta ley y después metan los proyectitos, toda esa pavada que ustedes están proponiendo por otra vía a ver qué pasa". Veo esta contradicción, esta dualidad y aparte quiero decir...

Sr. Presidente (Olivero).- ¿Me disculpa una interrupción?. Tal vez usted no me ha interpretado, señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical.

Hice la aclaración ante la sugerencia que este proyecto vuelva a comisión. Entonces planteé que encontrándose esta Legislatura sesionando en estado de comisión, y en proceso de producción de despacho para la aprobación o rechazo de esta ley, es imposible plantear esta situación.

Esto es lo que planteé, y como usted se está refiriendo a eso, no quería que tuviera una mala interpretación.

Continúa en el uso de la palabra legislador Font.

Sr. Font.- Lo entendí perfectamente, señor presidente. No sé si de aquel lado se le entendió a usted, porque se nos sugiere cerrar esto y después que presentemos los proyectitos.

Señor presidente, nos hace recurrir a las estadísticas: salvo algún proyecto donde desde la oposición se esté intentando celebrar o conmemorar algún aniversario o alguna fiesta que tenga lugar en alguna localidad a la que pertenecen los legisladores, no hemos encontrado eco jamás ni siquiera para el tratamiento

de los proyectos que se plantean desde la oposición. Por lo tanto no podemos creer que se van a aventurar a tratar proyectos de la oposición porque esto no es así. La estadística y la historia reciente de esta Unicameral demuestra que de ninguna manera es así. Por lo tanto no nos vengan a sugerir que presentemos proyectos que van a ser discutidos, porque sabemos que no lo van a ser.

Tenemos desconfianza. Nosotros decimos que este Convenio entre el Gremio y el Gobierno de la provincia tiene dos caras o dos facetas completamente distintas. Una, que es la representa al gremio, que entendemos como coherente, seria, invariable, inmutable, que ha sido siempre la misma, que le costó -lo mencionó bien el legislador Blanco- allanamientos, apaleadas, jefes de policía bravos que los encarcelaban, que se recuerdan seguramente mucho mejor que alguna referencia que hacía el legislador Bonetto de los gobiernos radicales. Esto representa una cara convencida, honesta, de un perfil de empresa que intentan a través de los medios que le son posibles, en este caso la concertación...

Sr. Presidente (Olivero).- Perdón, señor legislador ¿desea utilizar otro micrófono porque el suyo no está funcionando bien?.

Sr. Font.- Vamos a ver si podemos seguir con el mismo.

Decía que intentaban plasmar en una ley lo que son sus convicciones, invariables al cabo del tiempo.

En la que no creemos es en la otra cara del Convenio, la que representa el Gobierno, porque ni el gobierno ni sus asesores han intentado por lo menos de convencer o acercar alguna explicación de cuáles son las motivaciones que lo llevan a plasmar esta ley, cuál es la mutación que ha ocurrido para pasar de un perfil ideológico expresado en el año 2000 a través de la Ley del Estado Nuevo a lo que hoy están plasmando en esta Ley. No ha habido el menor esfuerzo para hacerlo y esto me parece que es una estafa y tiene que ver con lo ideológico, porque es fácil estar mutando ideológicamente; es fácil decir "no privatizo" y después intento privatizar; después, cuando estamos cerca de una elección, firmo un convenio con

el gremio que seguramente me dará tranquilidad gremial y después veré cómo vuelvo a la carga a través de algún ardid porque no derogo los decretos, no derogo la Ley Bodega. No les creemos señor presidente. Esto es lo que nos está provocando las dudas, las sospechas. Esto es lo que nos coloca en situación de tener que expresar nuestra abstención en una ley que colma nuestros anhelos en cuanto a la expresión ideológica de una EPEC en la esfera estatal.

Es la actitud no aclarada del gobierno la que nos está provocando las dudas y la que nos está impidiendo acompañar esta ley, que bien se ha dicho, es un capítulo más que se inscribe en esta Legislatura sobre el desprecio por los legisladores, el desprecio por todos nosotros, incluidos ustedes, señores legisladores del oficialismo, en esto de tener varios borradores, varios despachos, en esto de tener siempre tratamiento de urgencia y nunca poder seriamente saber de qué se trata. A esta altura estamos convencidos de que no solamente el apuro o la premura son el desorden y la imprevisión, sino que también es la intencionalidad de no tener nunca articulados claros y despachos precisos. Porque siempre hay algo que ocultar o sacar, siempre hay algo que testar o algo con lo cual sorprender.

Entonces, como bien dijeron los representantes del bloque de la Unión Cívica Radical, estas son las sospechas que nos obligan, en este momento, a pedir responsabilidad y un tratamiento serio y consensuado en comisión. Pero sabemos que no se va a dar, porque esta es una costumbre que estamos viviendo durante todo el año, ya que desde el año pasado en la Unicameral estamos ratificando la abstención de este bloque.

Nada más.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el señor legislador González.

Sr. González.- Señor presidente, no haría falta que aclare nada porque en el Diario de Sesiones está el suficientemente testimoniado lo que he dicho. No hablé de proyectitos. Dije que elaboren sus propios proyectos. Tampoco hablé de "pavadas", porque no me parece que ninguna de las ideas de la oposición sean pa-

vadas. Sólo dije que las conviertan en proyectos. El agregado que sugerían los legisladores de la Unión Cívica Radical, y que escribieron en letra de carta, puede ser un proyecto, pero no un proyectito. Habrá que estudiarlo con cierto detenimiento, porque es probable que tampoco sea necesario jurídicamente, ya que rigen las leyes específicas sobre las genéricas y las posteriores sobre las anteriores. Aprobando esto, es probable que no sea necesario el agregado. Esto lo podríamos ver en comisión, como consecuencia de la presentación de un nuevo proyecto que no califico diminutivamente.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el señor legislador Blanco.

Sr. Blanco.- Señor presidente, una precisión para el legislador preopinante: a lo que hice referencia, como improvisación en letra de carta, tiene espíritu de algo que ya es proyecto, tiene estado parlamentario en lo que era la Cámara de Diputados y fue pedida su rehabilitación en esta Cámara, que es la solicitud de derogación de los capítulos que hacían referencia a la incorporación de capital privado en las eufemísticamente denominadas "Leyes del Nuevo Estado". O sea que eso ya es proyecto y tiene número, por lo que se lo voy a alcanzar. Pero ahorraríamos tiempo -e insisto- porque tenemos estas tres líneas en letra de carta, que nos llevarían al consenso.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el señor legislador Novillo Corvalán.

Sr. Novillo Corvalán.- Señor presidente, he escuchado las exposiciones de los integrantes que hablaron en nombre de la principal bancada de la oposición. No me voy a referir a lo expresado por su titular, porque está plagado de excesos verbales, pero sí voy a hacer algunas puntualizaciones cortas vinculadas con las afirmaciones del legislador Blanco y antes por el legislador Dulla.

Respecto al legislador Dulla, muy cortito ya que el tiempo no da para análisis largos y profundos como me hubieran gustado, el legislador hizo una fundamentación de relojería, preocupado por el tiempo escaso o extenso. Fíjese, señor presidente, que esto hace 2400 años ya lo empezaron a analizar los griegos, al tema del tiempo político. ¿Y saben como lo llamaron? El "kairos". El "kairos", señor presi-

dente, era el tiempo político oportuno para tomar una decisión política adecuada. ¿Cuándo es, para el radicalismo, el tiempo político oportuno para tomar una decisión política adecuada? Siempre se opusieron a los proyectos de Unión por Córdoba, de tal manera que el "kairos" para ellos pareciera que no va a llegar nunca, por lo que esta profunda argumentación del legislador Dulla se circunscribe a una cuestión de tiempo y para nosotros hoy, el tiempo político oportuno es este.

Respecto a lo expresado por el legislador Blanco, la ideología no es hojarasca y por supuesto que no lo es. Y acá, señores legisladores, a esta altura del debate, tenemos que preguntarnos sencilla y claramente ¿qué es la política? ¿Es el arte de defender ideologías? ¿O es el arte de resolver problemas sociales?

En la universidad, siendo jóvenes, llenos de pasiones, de anhelos, aspiraciones y sueños, se puede entender a la política como el arte de defender ideologías. Cada uno de los que aquí están tiene ideologías, tiene su norte y sus estrellas guías, en función de las cuales sujeta sus comportamientos, actitudes y conductas, pero todos sabemos que al gobernar el problema cambia: hay que resolver problemas sociales.

Entonces, modernamente, se introduce el concepto del pragmatismo, que implica en base a una meta, a un objetivo, adecuando, ajustando, corrigiendo y adaptando todo lo que sea necesario en función de un objetivo superior, cual es el de resolver problemas sociales. A todos nos gustaría actuar en función de una ideología a la que querríamos defender a rajatabla en el arte del gobierno, ejerciendo el poder. En el arte de la política, querría recordar una vez más aquella famosa distinción del sociólogo Max Clever, que mucho estudió sobre esto, y él nos distinguió entre la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. Los gobernantes, los que tenemos la función y la obligación de legislar con responsabilidad y con seriedad para resolver los problemas de la gente, tenemos que -como nos pedía Weber y como nos pide el pueblo, sin haber leído tantos libros- actuar en función de una ética de la responsabilidad y no de la convicción. No vamos a entrar en el detalle de estas diferencias, que no son pequeñas, sino que son importan-

tes a la hora de las grandes decisiones públicas.

Por eso ni siquiera quiero contestar los excesos verbales del presidente de la bancada de la oposición, pero sí quería detenerme respecto a lo expresado por el legislador Blanco y Dulla. A ellos, con todo respeto, quiero decirles que entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, por lo menos a este bloque se le impone la obligación de actuar con responsabilidad. Y al legislador Dulla también querría decirle que para nosotros, la política, como para los pueblos modernos, debe ser el arte para resolver los problemas sociales.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el legislador Dulla.

Sr. Dulla.- Señor presidente, lamento las expresiones, pero he sido eludido.

En esta costumbre que tiene el legislador Novillo Corvalán de dirigirse a los legisladores radicales en este resentimiento genético hacia el radicalismo, no puedo dejar pasar algunas consideraciones.

Según la apreciación del legislador, mi alocución de limitó a una cuestión de tiempos. Creo que ha escuchado mal. Primero, no escuchó a la bancada oficialista, no ha escuchado a las otras bancadas, y lo que escuchó de mí lo escuchó mal o abreviado. Fue cuestión de tiempos de tratamiento, no sólo de oportunidad política. La oportunidad política, seguramente la maneja el Gobernador. Los cordobeses evaluarán después qué es esto de haber tratado este proyecto ahora.

Hablaba de responsabilidad en el tratamiento de las cuestiones, y no sabemos qué vamos a votar. Yendo no sólo a la forma del tratamiento, sino al fondo de la cuestión, decía que no hay control de la oposición en este directorio que acaban de conformar nuevamente –habría que avisarles y darles la copia correspondiente a algunos legisladores- porque no deroga algunas legislaciones que he puntualizado concretamente, como la tristemente célebre “Ley Bodega”.

También cuestionábamos la duración de los miembros del directorio, ya que constituía un maquillaje; era falso e hipócrita decir que a los directores se los va a sustraer de las

designaciones políticas, cuando en realidad los nombra el Poder Ejecutivo y los interviene cuando quiere. No seamos hipócritas.

Finalmente, en esta reflexión, en el sentido de que prima la ética de las convicciones sobre la ética de la responsabilidad, me pregunto con qué responsabilidad estamos tratando este proyecto, si estamos debatiendo algo que ni siquiera los legisladores han leído.

Sr. Presidente (Olivero).- Tiene la palabra el legislador Blanco.

Sr. Blanco.- Señor presidente: muy brevemente.

No nos vayamos en discusiones, aunque uno se tiene de discutir de la política en Grecia y esas cuestiones.

Volviendo a lo concreto, creo que en una cosa Novillo tiene razón –debe tener razón en varias, pero comparto especialmente una- se trata de resolver los problemas. Si mi exposición anterior motivó la consideración histórica del legislador Bonetto, borremos esto y miremos hacia delante.

¿He escuchado mal o realmente estamos convencidos de que la EPEC no se va a privatizar? Me parece que estamos de acuerdo en eso.

Aunque suene improvisado e ingenuo, tal vez los persuado. Pero estoy contento, porque en rigor de verdad, la honestidad intelectual del legislador Nicolás hizo que adhiera a este agregado, posición que no tenía él prevista. Me parece un hecho digno de ser destacado. Por lo demás, pienso que tiene sentido seguir discutiendo, porque existe la posibilidad de persuadir. Aunque a veces los radicales nos tentamos de decir cosas de De la Sota y los peronistas de decir algo sobre el radicalismo, en realidad, en este país en donde la sociedad está tan mal y tiene tantos problemas, aunque me enoje, porque se trata de proyectos que llegan a última hora, sinceramente les digo que reflexionemos y, a lo mejor, hasta podríamos hacer un cuarto intermedio en este debate, para que el oficialismo pueda evaluar el proyecto político, legislativa y técnicamente con el Poder Ejecutivo. Y tal vez, hasta podemos llegar a un consenso para resolver los problemas sociales –como dice Novillo. Estoy seguro que si ma-

ñana surgiera que la Legislatura acordó que uno de los artículos del acuerdo que además ha sido convenido con el gremio, dice que la EPEC forma parte del sector público, ni siquiera requiero que se ponga expresamente la derogación de determinadas leyes, si ello supone en términos políticos un costo, implícitamente expresemos que de deroga lo que se oponga al mismo.

Concretamente, formulo esta petición, y no me molesta que algunos sonrían, pensando que esta es una estratagema, o que soy un ingenuo, a veces es preferible serlo –y lo digo con respeto.

Tenemos experiencia de haber logrado consensos, como ha ocurrido hoy con la ley que anteriormente hemos votado y que fue enriquecida respecto del proyecto enviado por el Ejecutivo.

Si esta posibilidad no existe, no tiene sentido seguir con un debate que a lo mejor nos lleva a una suerte de esgrima verbal, inconducente para la sociedad.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Olivero).- En consideración las solicitudes formuladas por los señores legisladores Dulla, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, y Luque, en nombre del Partido Socialista, en el sentido de abstenerse de votar.

- Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobadas.

En consideración la solicitud formulada por el señor legislador Pizzorno, que ha requerido al pleno la autorización de abstenerse de votar el Título 14 del presente proyecto.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobada.

En consideración el despacho de la mayoría, que propone adoptar como despacho el emitido por la Cámara constituida en comisión.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobado.

Corresponde extraer a la Cámara del estado de comisión.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Olivero).- Aprobado.

Sr. Alvarez.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Olivero).- Cuando termine con el proceso de votación, voy a conce-

derle el uso de la palabra.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto, tal como fuera despachado por la Cámara constituida en comisión.

- Se vota y aprueba en general.

Sr. Presidente (Olivero).- Si no hay objeciones, la votación en particular se realizará por Títulos.

- En particular, se vota y aprueban los Títulos 1 a 22 inclusive.

Sr. Presidente (Olivero).- Siendo el artículo 62 "de forma", queda aprobado en general y en particular. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.

Sr. Fortuna.- Señor presidente, quiero hacer una moción concreta: que se agregue el acta firmada oportunamente entre el Ejecutivo Provincial, el Gobernador, el Ministro de Obras Públicas y los representantes gremiales, como un anexo integrante de la Ley que hemos estado sancionando.

Sr. Presidente (Olivero).- ¿Usted me está refiriendo que leamos el anexo?, porque está planteado de que el anexo forma parte de la presente Ley.

Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.

Sr. Fortuna.- Señor presidente, esa era la intención precisamente, no la moción, para que quedara incorporado en el cuerpo de la Ley.

Sr. Presidente (Olivero).- En el artículo 61 se incluye como anexo el Acta Acuerdo suscrita por el Gobierno de Córdoba y los sindicatos de Luz y Fuerza de la Provincia de Córdoba, que forma parte de la presente Ley.

Tiene la palabra el señor legislador Álvarez.

Sr. Alvarez.- Señor presidente, considero que es tarde, pero tengo entendido que el legislador Blanco hizo una moción concreta de un pedido de cuarto intermedio para considerar la incorporación.

Sr. Presidente (Olivero).- Creo haber entendido desde esta Presidencia algunas consideraciones del legislador. No entendí que hubiese hecho ninguna moción de orden, sí que estaba fundamentando el despacho de

minoría, lo que le corresponde, y sometí a consideración de esta Legislatura, como corresponde también, el despacho de la mayoría. Por ende, el despacho que planteaba la minoría es innecesario someterlo a consideración. De todas maneras, ha tenido usted la posibilidad de hacer la sugerencia.

Tiene la palabra el señor legislador Blanco.

Sr. Blanco.- Señor presidente, simplemente una cuestión que no tiene relevancia, la ley ya es ley y creo que es un paso para evitar que se venda EPEC y siga para adelante. Quería decirle que cuando plantee lo del artículo, la Cámara estaba en comisión. No sé si corresponde reglamentariamente, de manera tal que este no es un cuestionamiento, pero pensé que como había mocionado lo de ese artículo escrito, que a lo mejor íbamos a votarlo.

Entiendo que si se votó el otro despacho, no querían poner ese artículo, pero me pareció que no hubiera sido mala idea votar ese proyecto con ese artículo -en comisión me refiero- que es la preocupación que le quedó al legislador Alvarez.

Sr. Presidente (Olivero).- De todas maneras, legislador Blanco, el despacho de la mayoría no lo incluía, lamentablemente. Como presidente podría haber acordado con usted, pero mi obligación es someter a consideración los despachos conforme vienen planteados.

Tiene la palabra el señor legislador Blanco.

Sr. Blanco.- Señor presidente, le agradezco que coincidiera y que usted hubiera votado conmigo ese artículo, porque sé de sus convicciones por defender EPEC, pero sé que reglamentariamente no actuó mal. Quizás no fui lo suficientemente claro cuando lo planteé. No es un cuestionamiento, porque aunque me duela perder, hay un mecanismo parlamentario que usted ha seguido prolijamente.

Sr. Presidente (Olivero).- Los que no andan bien, me parece que no son los micrófonos, sino los parlantes. Yo dije “a lo mejor”.

PROYECTO DE LEY -02685/E/03

MENSAJE

Tengo el agrado de dirigirme a Ud, y por su intermedio a los demás integrantes de ese Cuerpo – en los términos del Artículo 144 (inciso 3) de la Constitución Provincial – a fin de elevarle proyecto de ley por el que se modifica el Estatuto Orgánico de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.

El presente proyecto ha sido estructurado en función del actual Estatuto, manteniendo aquellas disposiciones de las actuales Leyes Nº 6152, 7066, 7504 y 8111 que, con las modificaciones que más abajo se detallan, permite entre otros objetivos lograr un texto ordenado que no existía a la fecha.

A la vez, el proyecto en cuestión tiene como génesis el detenido estudio que se efectuara en reuniones conjuntas mantenidas entre miembros de la Empresa, el ERSeP y los Sindicatos de Luz y Fuerza con jurisdicción en EPEC.

Es de destacar que no existe en el nuevo Estatuto que se propugna un afán de mero revisionismo, sino el propósito de enlazar el pasado con el futuro, introduciendo las modificaciones que concurren al progreso de la EPEC y en definitiva de todos los cordobeses.

Muchas generaciones aportaron el tributo en su trabajo encuadrado en aquella ley de creación logrando importantes frutos, no obstante hoy, próximos a cumplir 50 años de existencia al servicio de la comunidad se hace necesario este nuevo ordenamiento que vela para que el tributo de generaciones futuras, cuente con pautas que posibiliten su desenvolvimiento orgánico con la dinámica y agilidad que los tiempos actuales imponen.

Este gobierno, que confía en la vocación de innovación del personal de la Empresa, entiende que el estatuto que se propicia, será un instrumento idóneo en la tarea de avance que les espera, pues en él se recoge la experiencia acumulada a través de la vida de la Empresa y, por ello, el Poder Ejecutivo, luego del análisis que le compete lo hace suyo.

Los propósitos enunciado se consagran y compaginan en un cuerpo coherentemente instrumentado. Sus aspectos fundamentales se refieren al mantenimiento de la Empresa como ente autárquico del Estado Provincial, a la gestión de la Empresa que estará enmarcada en el cumplimiento del Estatuto y del Contrato Programa y contempla también la incorporación en su objeto el de las telecomunicaciones. En su estructura, a la vez, incluye una Gerencia General y un Consejo de Empresa.

En lo que a la autarquía se refiere, se mantiene el campo de operatividad de manera que su desenvolvimiento marche acorde a las exigencias de los servicios públicos que debe prestar y asegurar; para de esta forma finiquitar por si todos los actos y

contratos, sobre la base de una estructura empresarial y un régimen de funcionamiento fijado por el Estatuto Orgánico.

En este sentido, se ha innovado con la incorporación de un Contrato Programa, que prevé las pautas que en materia de inversiones y obras debe llevar adelante la Empresa en un lapso no inferior a tres años ni superior a cinco años; con la obligación para quienes conduzcan los destinos de la misma de rendir cuentas de su gestión. Ello así por cuanto se entiende que las políticas energéticas son políticas de estado y por ello deben ser públicas y conocidas, las que no deben estar sometidas a condicionamientos políticos de ninguna naturaleza.

El avance de la tecnología es el común denominador de estos tiempos. Por ello y porque la legislación debe contemplar los cambios y modalidades tecnológicas del futuro, se ha incorporado posibles actividades en el área de las telecomunicaciones, ya que por su infraestructura básica de postes, líneas y redes la posiciona inmejorablemente para la prestación de estos servicios, para beneficio de la Empresa, el Estado Provincial y todos los cordobeses.

Se prevé expresamente la vigencia del Estatuto del Personal de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba CCT N° 165775 "E" aprobado por Decreto Provincial N° 2847/75 y homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación; como así también el Convenio Colectivo de Trabajo EPEC-APSE N° 42/91 "E", aprobado por Resolución N° 61.230 y Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 1754, homologado por la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo.

Entre otros aspectos, se ha considerado primordial para el mejor desenvolvimiento de la Empresa, incorporar la Gerencia General y el Consejo de Empresa. La primera con funciones de ejecución y coordinación de las políticas a implementar por la Empresa. La segunda, es un órgano colegiado, consultivo y asesor de la EPEC, que realizara el seguimiento del cumplimiento del Contrato Programa y de las distintas actividades de la Empresa y estará integrado por el Gerente General y los Secretarios Generales de los Sindicatos de Luz y Fuerza de Córdoba, Regional de Villa María y Río Cuarto.

Por las razones expuestas y en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia de sancionar este régimen legal, le ruego ponga el presente proyecto de ley a consideración de la Legislatura Provincial, para que en los términos de lo dispuesto por el artículo 104 (inciso 41 y concordantes) de la Constitución Provincial – preste aprobación al mismo si así lo considera el alto criterio de sus miembros.

José Manuel de la Sota, Huber Alberti.

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

**ESTATUTO ORGANICO DE LA
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE
CORDOBA**

TITULO I - DENOMINACION Y REGIMEN LEGAL

Artículo 1.- Bajo la denominación de Empresa Provincial de Energía de Córdoba, en adelante La Empresa, seguirá funcionando la persona jurídica de igual nombre creada por la Ley Provincial N° 4358/52, continuada por la Ley Provincial N° 6152/78 y sus modificatorias, la que podrá usar indistintamente dicha denominación o la sigla EPEC.

Se regirá en forma especial por las disposiciones del presente Estatuto y supletoriamente por las normas legales y reglamentarias que le fueran de aplicación.

TITULO II - DOMICILIO

Artículo 2.- El domicilio de la Empresa es el de la sede de su administración central en la Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre, República Argentina, sin perjuicio de los domicilios especiales que podrá establecer en otros lugares del país y del exterior.

TITULO III - FINALIDAD Y OBJETO

Artículo 3.- La gestión de la Empresa estará dirigida dentro de sus factibilidades y de acuerdo a las políticas que determine el presente Estatuto y el Contrato Programa, a satisfacer el interés general de la población en materia energética y de telecomunicaciones, coadyuvando al equilibrado y armónico desarrollo económico y demográfico de la Provincia. En función de ello, regulará sus inversiones y proveerá a la racional expansión, a través de la utilización de sus instalaciones, preparando el adecuado abastecimiento de energía al menor costo posible.

Artículo 4.- La Empresa tiene a su cargo las siguientes actividades;

a) - Estudiar, proyectar, construir, comprar, explotar y administrar los medios de generación, transformación, transporte y distribución de energía y de telecomunicaciones y, toda obra y actividad complementaria, conexas y auxiliar relacionada con la prestación de dichos Servicios Públicos.

b) - Aprovechar con fines de producción de energía eléctrica y en acuerdo con los demás organismos competentes las fuentes hidráulicas y otras fuentes ubicadas en el territorio de la Provincia.

c) - Generar, transportar, distribuir, comprar y vender energía y servicios de telecomunicaciones y

realizar la prestación del servicio público de las mismas.

d) - Prestar asesoramiento para la constitución y desenvolvimiento de Cooperativas o entes prestatarios públicos con miras a la prestación del servicio público de energía cuando razones técnicas, políticas o económicas así lo justifiquen y que no lesionen las atribuciones del ERSeP o del Poder Ejecutivo.

e) - Asesorar al Poder Ejecutivo en relación al planeamiento energético y su coordinación con la Nación, con los demás Estados Provinciales y con los Municipios.

f) - Promover la actividad cultural, científica, deportiva y social del personal de la Empresa, su familia y a toda la comunidad, tendiente a la formación integral del hombre en la sociedad.

g) - Celebrar convenios con Entidades Educativas, científicas, de estudio o investigación, promover, instituir y participar en Fundaciones, a fin de realizar estudios e investigaciones afines con la actividad de la Empresa.

h) - Acordar con Instituciones Educativas u Organismos Oficiales, la contratación temporaria de pasantes laborales, para alumnos que cursan carreras afines a la necesidad de la Empresa y relacionadas con la investigación, estudio y desarrollo de tenor científico, estadístico o de fuentes no convencionales de energía y cuyo desempeño en ningún caso implicará tareas habituales y permanentes, propias del personal de la Empresa.

i) Promover y desarrollar las actividades necesarias para el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, en materia de su objeto específico.

j) - Desarrollar toda actividad relacionada con su finalidad, objeto y cometido.

TITULO IV - CAPACIDAD JURIDICA

Artículo 5.- La Empresa tiene capacidad para actuar pública y privadamente en el marco del presente Estatuto y normas supletorias que fueren de aplicación, con autarquía en el ejercicio de su gobierno administrativo, industrial, comercial y financiero. Para el cumplimiento de su finalidad podrá realizar por si todos los actos, contratos y operaciones que fueren necesarios, en el país o en el extranjero, salvo los que requieran autorización especial. A ese efecto podrá:

a) Adquirir por cualquier título toda clase de bienes muebles, inmuebles, instalaciones, títulos, créditos, derechos y acciones; así como realizar todas las operaciones comerciales e industriales, actos y contratos, relacionados con su objeto. Constituir servidumbres y usufructos sobre bienes de terceros.

b) Transferir con o sin cargo, a título gratuito

u oneroso, a título precario o definitivo, bienes muebles o inmuebles a favor de entidades oficiales nacionales, provinciales, municipales e Instituciones ligadas a la vida de la Empresa, cuando los mismos sean destinados inequívocamente a actividades de los propios Organismos beneficiados, relacionadas con la salud, la educación, la cultura, el deporte y la recreación. En todos los casos, deberá acreditarse que la cesión de dichos bienes, no afecta el normal desenvolvimiento de la Empresa, deberán encontrarse en desuso o bien que su utilización o tenencia resulte antieconómica.

También podrá transferir bienes muebles en las condiciones señaladas precedentemente a Instituciones de bien público sin fines de lucro; para lo cual se deberá acreditar fehacientemente el carácter de persona jurídica de la entidad beneficiaria. Cuando la transferencia de estos bienes, lo sea a título gratuito el Directorio podrá disponer de los mismos siempre que no supere en el año, el cero coma uno por mil (0,1 0/00) del presupuesto anual.

La transferencia a personas privadas de bienes muebles e inmuebles, deberá efectuarse a título oneroso y mediante procedimientos de licitación pública, privada, concurso de precios o en remate público que podrá practicar EPEC por su cuenta ó a través de la Institución bancaria oficial de la Provincia, por su cuenta y orden.

c) Arrendar bienes, prestar servicios en locación, hacer novaciones y transacciones, conceder créditos, esperas y quitas de intereses.

d) Cobrar y percibir todo lo que se deba a la Empresa, contraer compromisos y realizar erogaciones para el cumplimiento de su objeto, fijando los intereses que correspondan.

e) Tomar dinero en préstamo a interés y realizar toda clase de operaciones financieras y bancarias, en moneda nacional o extranjera, con entes de derecho público, sociedades de economía mixta o personas privadas del país o del exterior, como asimismo con organismos internacionales y prioritariamente con el Banco de la Provincia de Córdoba, Banco de la Nación Argentina, y demás bancos del Estado Nacional, de la Provincia y Municipios, creados o a crearse, con arreglo a sus estatutos, cartas orgánicas y reglamentos. En todos los casos de préstamos con personas privadas, se propenderá a que los costos del crédito no sean superiores a los que tuviere fijados el Banco de la Provincia de Córdoba, para operaciones de igual naturaleza.

Para operaciones con personas del exterior será necesario la autorización previa del Poder Ejecutivo en los términos del artículo 33 y concordantes de la ley 8897 o la ley que en el futuro la sustituya.

f) Contratar provisiones y prestaciones por el

régimen de entregas y pagos diferidos, cualquiera sea el lapso de ejecución, entrega o prestación, como así también comprometer los servicios financieros, gastos y diferencias de cambio que motiven las respectivas operaciones.

g) Solicitar y aceptar avales, garantías o fianzas de instituciones bancarias, públicas o privadas, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la obtención de préstamos y realizaciones de sus operaciones financieras.

h) Emitir, girar, aceptar y endosar letras de cambio; aceptar y efectuar todo tipo de operaciones con bonos provinciales o nacionales, bonos de cancelación, pagarés y demás títulos de créditos y recibirlos de terceros, abrir en el Banco de la Provincia de Córdoba u otros Bancos, cuentas corrientes, de caja de ahorro y plazo fijo, emitir y girar cheques sobre fondos de la Empresa o en descubierto autorizado, descontar y redescantar letras, pagarés y toda clase de títulos de crédito y obligaciones, otorgar cartas de crédito y operar con la mayor amplitud de facultades con cualquier género de títulos públicos y documentos comerciales, civiles o bancarios.

i) Comparecer en juicios ante las distintas jurisdicciones como parte actora, demandada o tercero interesado, con facultades para denunciar criminalmente o querellar, aceptar o rechazar propuestas de acuerdo o adjudicaciones de bienes, pedir o votar quiebras, comprometer en árbitros juris, arbitradores o amigables componedores, someterse a procesos de mediación, renunciar a apelaciones o recursos, prorrogar jurisdicciones, aceptar legados o donaciones con o sin cargo, aceptar garantías reales y transar con las facultades necesarias, en cuestiones judiciales o extrajudiciales.

j) Realizar inversiones de capital o ejecutar por administración o contratación todas las obras que se consideren menester para el objeto de la Empresa, para lo cual en el presupuesto general anual, se deberá proveer las partidas que se destinarán a tal finalidad.

k) Construir y realizar a su cargo, obras destinadas a proveer de servicio a sectores carenciados o de fomento en el interior provincial, para lo cual en el presupuesto general anual, se deberá proveer las partidas que se destinarán a tal finalidad.

l) En general, realizar todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto en la forma y modo que establece el presente Estatuto, el Código Civil, el Código de Comercio, las leyes y reglamentos de aplicación.

Artículo 6.- A los fines previstos en los incisos e y f del artículo precedente, la Empresa queda facultada para contraer compromisos con afectación a presupuestos a dictarse en el futuro. La capacidad de endeudamiento que consagra el presente Estatuto, podrá ser ejercida siempre que la totalidad de los

servicios financieros de la Empresa para cada ejercicio, no excedan los márgenes que se admiten en el presente Estatuto como costos de capital para los respectivos periodos anuales.

TITULO V - ORGANIZACION Y ADMINISTRACION

Artículo 7.- La Empresa será funcionalmente estructurada en la órbita del Ministerio de Obras Públicas. La gestión de la Empresa se desarrollará descentralizadamente, con el objeto de asegurar el máximo de eficiencia.

Artículo 8.- La Empresa será dirigida y administrada por su Directorio. Cuenta además con:

Una Gerencia General.

b) Un Consejo de Empresa.

Los Gerentes, Subgerentes, Jefes de Áreas y demás funcionarios que ejerzan facultades delegadas.

TITULO VI - DEL DIRECTORIO

Artículo 9.- El Directorio estará integrado por un Presidente y dos (2) Vocales, que serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 10.- Los miembros del Directorio ejercerán sus funciones por un término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de sus respectivos nombramientos; no pudiendo ser removidos de su cargo de no mediar la expresa voluntad de parte de los funcionarios designados o las causales descriptas en el artículo 11°. Podrán ser redesignados por el Poder Ejecutivo Provincial.

Transitoriamente y por el período que media entre la promulgación de la Ley y el nombramiento del nuevo Directorio, se mantendrán en sus cargos las Autoridades que rigen al momento de aprobarse la presente ley, con todas las facultades, obligaciones y retribuciones previstas en la presente Ley.

Artículo 11.- Podrán ser removidos de sus cargos por falta grave de gestión, comprobada a través de sumario dispuesto por el Poder Ejecutivo y labrado con intervención de Fiscalía de Estado, o cuando sobreviniera alguna de las inhabilitaciones establecidas para sus nombramientos. Cuando se produzca la expiración del término para el que fueron designados, sus mandatos se entenderán prorrogados hasta que tomen posesión del cargo sus sucesores, no pudiendo exceder dicha prórroga del plazo de treinta (30) días calendarios.

Cuando se produjeran vacantes durante el período para el que fueron designados los miembros del Directorio, sus reemplazantes serán nombrados por el tiempo que falte para completar el periodo.

Artículo 12.- Para ser miembro del Directorio se requiere ser ciudadano argentino y tener no menos de treinta años de edad. Estos miembros deberán acreditar reconocida experiencia y probada ca-

pacidad en la conducción de Organismos o Empresas, preferentemente de servicios públicos o bien en materia administrativa, comercial, industrial o financiera.

El Presidente será un profesional de la Ingeniería con especialidad o ejercicio afín a la Empresa.

Artículo 13.- No podrán ser designados miembros del Directorio:

a.- Los que ejerzan cualquier otra función o empleo en el orden nacional, provincial o municipal, con excepción de la docencia.

b.- Los inhabilitados por quiebra casual o los concursados, durante el tiempo que dure su inhabilitación.

c.- Los condenados por delitos que en razón de su naturaleza, sean éticamente incompatibles con el ejercicio del cargo.

d.- Los que se desarrollen laboralmente en la actividad privada, en Empresas relacionadas comercialmente o técnicamente a la EPEC.

Los miembros del Directorio que con posterioridad a su designación fueren alcanzados por alguna de las inhabilitaciones enumeradas en este artículo, cesarán de inmediato en el ejercicio de su cargo y así lo decretará el Poder Ejecutivo.

TITULO VII - FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO

Artículo 14.- En la primera reunión que celebre el Directorio, inmediatamente después de constituirse, nombrará de su seno un Vice-Presidente, quién ejercerá esas funciones por el término que establezca dicho Cuerpo.

Artículo 15.- El quórum del Directorio se constituye con la presencia del Presidente o quién ejerza sus funciones y un vocal. En la primera reunión de cada año se fijarán los días y horas de sesión que regirán en ese periodo. Ordinariamente el Directorio se reunirá con la frecuencia que exige la administración de la Empresa, como mínimo una vez por semana y extraordinariamente cada vez que el Presidente por sí o al pedido de un (1) vocal, resuelva convocarlo. De lo actuado en cada sesión se dejará constancia en Acta.

Artículo 16.- El Directorio adoptará sus resoluciones por mayoría de votos de los miembros presentes. Corresponderá al Presidente el voto decisivo en caso de empate. Los miembros podrán hacer constar en acta su voto en pro o en contra y las razones que lo motivan.

Para revocar, modificar y reconsiderar resoluciones del Directorio, será necesario un quórum por lo menos igual al de la sesión en que fueron dictadas. Las resoluciones del Directorio serán comuni-

cadas al Ministerio de Obras Públicas.

TITULO VIII - DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO

Artículo 17.- El Directorio tiene plenas facultades para organizar, dirigir y administrar la Empresa y para realizar todos los actos, obras, operaciones y contratos civiles, comerciales, financieros, administrativos y de cualquier otra índole que encuadre dentro del objeto de la misma, que se relacione con éste o tienda a su cumplimiento.

En especial son deberes y atribuciones del Directorio los siguientes:

a) Ejercer la representación legal de la Empresa por intermedio de su Presidente.

b) Administrar los recursos financieros que el presente Estatuto asigna a la Empresa y los bienes que integran su patrimonio y/o se utilizan para el cumplimiento de su objeto.

c) Realizar y resolver todos los actos mencionados en el Art. 5° del presente Estatuto.

d) Conceder poderes especiales o generales, amplios o restringidos y revocarlos cuando lo creyere necesario.

e) Aprobar el reglamento interno y el Régimen de Viáticos del personal en comisión.

f) Designar y remover al Gerente General, Gerentes, Subgerentes y Jefes de Áreas. Designar y remover al personal, de conformidad con la legislación vigente.

g) Aprobar los pliegos particulares relativos a la contratación para el aprovisionamiento de bienes, ejecución de obras y locación de servicios.

h) Realizar por administración o contratación las obras, trabajos y servicios, que por razones de urgencia, servicio ó necesidad social y satisfaciéndose criterios de economía, seguridad y eficiencia, sean necesarios para las prestaciones que están a cargo de la Empresa.

i) Establecer las remuneraciones y el régimen laboral del personal de convenio y fuera de convenio, de conformidad con las previsiones del Convenio Colectivo de Trabajo vigente.

j) someter a aprobación del Poder Ejecutivo Provincial, lo siguiente;

1°) El Reglamento de Comercialización, el Reglamento de Compras y Contrataciones y todas las normas reglamentarias para su aplicación por la Empresa y por otros entes autorizados a ese fin.

2°) El Presupuesto General Anual que se integrará con el plan plurianual de inversión y con el cálculo de recursos financieros. El decreto de autorización contendrá las normas de ejecución, las que deberán contemplar la naturaleza particular de la

Empresa. De igual forma se procederá para los reajustes y rectificaciones presupuestarias.

3°) Los convenios de compraventa de energía con otras Provincias y con el Estado Nacional.

4°) El Balance General Anual, Estados de Resultados, Notas y Cuadros Anexos.

5°) Todo otro asunto que por su naturaleza deba ser resuelto por dicha autoridad.

k) Disponer la adquisición y venta de energía; este último acto con sujeción a los regímenes y cuadros de precios y tarifas vigentes.

l) Aprobar los estudios y proyectos y disponer la ejecución de las obras y trabajos, de acuerdo al Plan de Inversiones y el Contrato Programa que conforme el Presupuesto General Anual y en el marco de las políticas que a tal efecto se fijen para la Empresa.

m) Rectificar el Presupuesto General Anual y el Cálculo de Recursos cuando se produjesen variaciones en los factores de costos de los precios y tarifas que determinen el ajuste automático previsto en el presente estatuto.

n) Producir reajustes entre los conceptos que integran el Presupuesto, sin alterar la estructura y cantidad de cargos del personal, sus retribuciones y las asignaciones para inversiones de capital y trabajos públicos.

o) Aprobar los planteles de distribución del personal, según la estructura de cargos que integran el Presupuesto Anual.

p) Nombrar y promover personal, reconvertir categorías, trasladar, acordar licencias y permisos, aplicar medidas disciplinarias, aceptar renunciaciones y remover al personal, disponiendo con respecto al mismo todas las medidas derivadas de la relación laboral, a cuyo fin deberá ajustarse a los pertinentes preceptos legales, reglamentarios y convencionales. Las designaciones del personal deberán hacerse según los planteles y Presupuesto General Anual, pudiendo asimismo nombrar personal transitorio fuera del plantel para la realización de trabajos determinados y temporarios, conforme a la autorización global contenida en el presupuesto.

q) Contratar directamente técnicos profesionales de reconocida y acreditada capacidad para tareas transitorias, fijándoles los honorarios o retribuciones que correspondan a la tarea encomendada.

r) Promover la capacitación del personal de la Empresa, instituir y otorgar becas de perfeccionamiento al mismo. Enviar al exterior en misión oficial a funcionarios y empleados, previa autorización del Poder Ejecutivo.

s) Atribuir competencia y delegar facultades y responsabilidades al Gerente General, Gerentes, Subgerentes y Personal de niveles jerárquicos subordinados, determinando en cada caso el alcance y modo de ejercerlos.

t) Aplicar multas y todo otra penalidad de carácter contractual y reglamentaria.

u) Fijar domicilios especiales de la Empresa.

v) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Estatuto, las leyes y reglamentos de aplicación.

w) Controlar el desenvolvimiento administrativo, técnico y económico-financiero de la Empresa.

x) Establecer plazos y tasas de interés para las financiaciones, recargos, moratorias y actualización de valor sobre saldos deudores, de acuerdo a los valores de mercado y la estrategia comercial de la Empresa.

y) Confeccionar el Contrato Programa y elevarlo al Poder Ejecutivo para su consideración y posterior suscripción

TITULO IX - DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE

Artículo 18.- El Presidente es la autoridad superior y responsable inmediato del gobierno de la Empresa.

Son deberes y atribuciones del Presidente:

a) Ejercer la representación administrativa y legal de la Empresa.

b) Convocar y presidir las reuniones del Directorio y emitir voto decisivo en caso de empate.

c) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y hacer ejecutar las resoluciones del Directorio.

d) Firmar el Balance General, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Anexos, el Estado de Ejecución del Presupuesto Gral. Anual que integran la Rendición de Cuentas y la Memoria, conjuntamente con el Gerente General, el Gerente de Finanzas y Contabilidad y/o funcionario equivalente.

Artículo 19.- Son deberes y atribuciones del Vice-Presidente, reemplazar al Presidente en caso de renuncia, fallecimiento o impedimento de éste y hasta tanto sea designado su sucesor, como así también cuando el Presidente le delegue el cargo por ausencia. En estos supuestos de reemplazo el Vice-Presidente tendrá las atribuciones y deberes que el Estatuto confiere al Presidente.

TITULO X - DEL GERENTE GENERAL

Artículo 20.- El Directorio designará un Gerente General, el que contará con amplias funciones de ejecución y coordinación de las políticas a implementar por la Empresa, de acuerdo a las Reglamentaciones y actos que a tal efecto dicte el Directorio.

Artículo 21.- Corresponde al Gerente General:

a) Supervisar y coordinar el funcionamiento de la institución, e instrumentar la ejecución de las resoluciones establecidas por el Directorio;

b) Estudiar, proyectar y asesorar al Directo-

rio, en la adopción de objetivos, políticas y procedimientos de ejecución;

c) Elevar al Directorio el proyecto de presupuesto anual y las modificaciones al mismo, si resultaran necesarias, y mantenerlo informado sobre la evolución de su cumplimiento;

d) Intervenir en la formulación de planes de inversión, revisarlos anualmente y someterlos al Directorio para su consideración y aprobación; como así también los cálculos tarifarios de acuerdo con las normas legales vigentes.

e) La delegación cuando sea del caso de las tareas asignadas, serán resueltas por el Directorio.

f) Toda otra función que el Directorio le delegue y/o que por su naturaleza corresponda a la Gerencia General

TITULO XI - CONSEJO DE EMPRESA

Artículo 22.- Es un órgano colegiado, consultivo y asesor de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, que realizará el seguimiento del cumplimiento del Contrato Programa, para lo cual elaborará informes trimestrales, los que serán puestos a consideración del Directorio y del Ejecutivo Provincial.

Estará integrado por el Gerente General y los Secretarios Generales de cada Sindicato de Luz y Fuerza. (Córdoba, Regional Villa María y Río Cuarto). A las reuniones concurrirá, cuando sea requerido, un miembro del Directorio de la Empresa.

El Consejo de Empresa funcionará con la coordinación del Gerente General.

Las conclusiones a las que arribe el Consejo darán lugar a informes. En caso de disidencia, cada miembro confeccionará informes por separado, los que serán girados al Directorio y al Ejecutivo Provincial, según corresponda.

Artículo 23.- El Consejo de Empresa tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) Asesorar y proponer al Directorio sobre aspectos, cuestiones o acciones relacionadas con el Contrato Programa y en otros asuntos que considere menester;

b) Realizar el seguimiento de las políticas desarrolladas por la EPEC, así como la evolución de las mismas, con el objeto de mejorar y ampliar su marco referencial;

c) Informar trimestralmente al Directorio y al Poder Ejecutivo, sobre la marcha del Contrato Programa. La Gerencia General proveerá toda la información necesaria para el cumplimiento de su cometido;

d) Proponer la creación y el desarrollo de herramientas de gestión que permitan superar las limi-

taciones y aumentar la eficiencia de la Empresa;

e) Proponer al Directorio la realización de auditorías externas, técnicas o financieras, generales o específicas, en materias que hagan al correcto funcionamiento de la Empresa;

f) Asesorar e informar sobre la formulación y seguimiento del programa sectorial en materia de energía y telecomunicaciones, sobre las necesidades de crecimiento o sustitución de capacidad de generación del sistema eléctrico y, en su caso, sobre los términos y condiciones de las convocatorias y bases de licitación correspondientes;

g) Procurar y proponer que en la prestación del servicio, se adquiriera aquella que resulte de menor costo para la Empresa y ofrezca además, óptima calidad y seguridad.

h) Solicitar al Directorio la aplicación de medidas de seguridad, cuando tenga noticia de un hecho que pueda poner en peligro la salud y seguridad de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente.

Artículo 24.- El Consejo de Empresa funcionará a partir de la entrada en vigor de la presente ley. La convocatoria para la sesión constitutiva la realizará el Gerente General, oportunidad en la que se fijarán los días de reunión, los que no podrán ser inferiores a una vez por mes, salvo que su coordinador o el 50% de los miembros convoque a reunión. De cada reunión se deberá labrar un acta que contenga los temas tratados.

Para el cumplimiento de su cometido el Consejo de Empresa podrá constituir comisiones de trabajo, a cuyas reuniones podrán ser convocados representantes de los sectores implicados

TITULO XII - REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Artículo 25.- El Presidente gozará por el ejercicio de su cargo, una retribución mensual igual a la suma que resulte de aplicar el uno coma dos (1,2) sobre el haber sujeto al pago de aportes jubilatorios que por todo concepto corresponda al cargo mejor remunerado de la Empresa.

Los Vocales del Directorio gozarán de una asignación mensual que resulte de aplicar igual el coeficiente uno coma quince (1,15) sobre la misma base mencionada en el párrafo precedente de este artículo.

TITULO XIII - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 26.- Contra las resoluciones definitivas del Directorio procederán los recursos que tuviere establecidos la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Córdoba. Contra las decisio-

nes del Gerente General, Gerentes y funcionarios superiores con facultades de administración, procederá el recurso jerárquico por ante el Directorio, que deberá interponerse con sujeción a los términos establecidos por dicha Ley.

TITULO XIV - DEL PERSONAL

Artículo 27.- Se considera personal de la Empresa el que hubiere sido designado en tal carácter en la forma y con los requisitos establecidos en el Art. 17° inciso "p" del presente Estatuto y el que adquiriera esa condición por normas legales o convenciones colectivas de trabajo.

Para el personal de la Empresa, rige el Estatuto del Personal de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba CCT 165/75 "E", aprobado por Decreto Provincial N° 2847/75 y homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Convenio Colectivo de Trabajo EPEC - APSE N° 42/91 "E" aprobado por Resolución N° 61230 y Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 1754, homologado por la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo.

Dentro del término que confiere la ley para la jubilación ordinaria, el personal de la Empresa gozará de estabilidad en su empleo mientras dure su buena conducta y demuestre capacidad e idoneidad en el desempeño del cargo.-

TITULO XV - CONTRATO PROGRAMA

Artículo 28.- Las políticas energéticas de la Provincia de Córdoba, serán políticas de Estado y por ello deberán ser públicas y conocidas. A tal fin, la Empresa fijará su estrategia empresarial, objetivos e inversiones, en un Contrato Programa suscripto entre las Autoridades de la Empresa y el Poder Ejecutivo Provincial y cuyo cumplimiento y duración deberá contemplar períodos no inferiores a tres (3) años y no superar los cinco (5) años. El cumplimiento del mismo por parte de la Empresa es obligatorio y será remitido por el Poder Ejecutivo Provincial a la Legislatura de Córdoba, para su tratamiento y aprobación.

Artículo 29.- El Directorio de la Empresa podrá, ante situaciones extraordinarias que afecten su normal funcionamiento y sean externas a la Empresa, solicitar al Ejecutivo Provincial la modificación de los objetivos descriptos en el Contrato Programa. El Poder Ejecutivo, en caso de aprobar las modificaciones propuestas, remitirá las mismas a tratamiento de la Legislatura de Córdoba.

El Ejecutivo Provincial elevará dentro de los treinta (30) días corridos de aprobada la presente Ley, el primer Contrato Programa confeccionado por la Empresa, que regirá durante los próximos dos (2) años.

TITULO XVI - REGLAMENTO DE SERVICIO

Artículo 30.- No podrá negarse a la Empresa la ocupación de la vía pública cuando así lo requieran las necesidades del servicio. Dicha ocupación se hará a título gratuito y no podrá gravarse por Autoridad alguna.

Así mismo, la Empresa podrá por Resolución fundada en razones técnicas y económicas, permitir el uso de sus instalaciones para todo otro destino compatible con el uso principal que le haya asignado la Empresa.

Artículo 31.- No podrá obligarse a la Empresa a remover o trasladar sus instalaciones, sino cuando fuere necesario para la ejecución de obras por la Nación, la Provincia o los municipios. En tales casos la autoridad competente que disponga la remoción o traslado, deberá comunicarlo a la Empresa con la antelación e indicación de plazos suficientes para la ejecución de los trabajos.

Los costos y gastos que se originen por la remoción o traslado, deberán ser abonados a la Empresa por los Organismos que hubieren dispuesto la realización de los trabajos, salvo que en el otorgamiento de la autorización original para su instalación, estuviese expresamente estipulado que dichos trabajos son a costa de la Empresa.

Artículo 32.- La Empresa deberá solicitar al Poder Ejecutivo la declaración de Utilidad Pública a los fines de la Expropiación de los bienes que sean necesarios para el cumplimiento de la presente Ley, especialmente los que deban utilizarse para el estudio, construcción, instalación, funcionamiento y seguridad de obras destinadas a la generación, transformación, transporte y distribución de energía y telecomunicaciones e inclusive para la construcción de vías de acceso necesarias para la ejecución de aquellas obras y su funcionamiento, vigilancia y seguridad.

Artículo 33.- El Poder Ejecutivo podrá transferir a la Empresa, libre de cargo, los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de las actividades que constituyen su objeto, los que en tal caso pasarán a integrar el patrimonio de la misma.

Artículo 34.- Para la financiación de las obras de ampliación, refuerzo o extensión de redes y subestaciones, la Empresa podrá solicitar contribuciones financieras a los peticionantes del servicio de energía, como requisito previo para su otorgamiento, conforme se establece en el Reglamento de Comercialización de la Energía Eléctrica.

Artículo 35.- La Empresa suministrará sus servicios, según sus posibilidades técnico-económicas, a los interesados que lo soliciten y hayan cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comercialización del servicio mencionado en el artículo que antecede y en dispositivos

legales establecidos por la Empresa.

Artículo 36.- La Empresa podrá negar, interrumpir o privar de suministro de energía a los solicitantes del servicio, a los usuarios y a las personas que la adquieren para la reventa autorizada, cuyas instalaciones internas no se hallaren en las condiciones técnicas exigidas por las reglamentaciones en vigor, como así también aquellas que infrinjan las estipulaciones contractuales o las normas de aplicación. Todo ello sin menoscabo de las acciones legales que pudieren corresponderle.

Artículo 37.- La Empresa establecerá el sistema de facturación y la forma en que deban ser pagadas las cuentas por suministro de energía y el servicio de telecomunicaciones, pudiendo recurrir para este último acto al concurso de entidades bancarias oficiales o privadas.

Los usuarios deberán pagar las facturas por los suministros dentro de los plazos que se establezcan por resolución del Directorio, el que no deberá exceder de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes a:

La fecha de la última lectura del medidor, o la finalización del correspondiente periodo de consumo el que será establecido para cada categoría de usuarios. Extinguido el plazo que fijare el Directorio por resolución sin que la cuenta fuere satisfecha, se producirá la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, pudiendo la Empresa interrumpir el suministro y adicionar desde ese vencimiento los recargos moratorios y la actualización de valor sobre saldos deudores, según las tasas, plazos, montos y demás condiciones que a ese fin establezca el Directorio de la Empresa.

La factura o constancia de deuda por consumo de energía o impuesto que lo graven será suficiente título ejecutivo a los fines de cobro por vía judicial. El cobro del servicio podrá perseguirse contra el titular del mismo, el ocupante, poseedor o propietario titular del dominio en forma indistinta. Las deudas originadas por facturas impagas o ilícitos de todo tipo que no pudieran ser cobradas a los titulares del servicio, serán afrontadas por el inmueble donde se registró el servicio.

Artículo 38.- La Empresa actuará como agente de percepción de los tributos establecidos por los Municipios sobre el consumo de energía hasta el límite que establezca el Poder Ejecutivo o la Legislatura de Córdoba.

TITULO XVII – CAPITAL, PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

Artículo 39.- El Capital de la Empresa es el que arroja su Balance General al 31 de Diciembre

del año inmediato anterior a la fecha de sanción de la Ley que aprueba el presente Estatuto, con las modificaciones operadas en ese lapso.

Artículo 40.- La Empresa someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo con una antelación de treinta días a la fecha de iniciación del Ejercicio Económico Financiero, el Presupuesto General Anual para su posterior tratamiento por la Honorable Legislatura, que comprenderá a todas las erogaciones que presuma deba hacerse en el ejercicio financiero del año de que se trate y cálculo de recursos que el presente Estatuto destina para su cobertura.

El Presupuesto General Anual se integrará con el Plan Plurianual de Inversiones en bienes para la expansión y mejoramiento de los servicios.

El ejercicio económico-financiero comienza el 1 de Enero y termina el 31 de Diciembre de cada año, pudiendo la Empresa, modificar estas fechas cuando medien razones justificadas.

Artículo 41.- Si al iniciarse el ejercicio, el Poder Legislativo no hubiese aprobado el Presupuesto General Anual, regirá el que estuvo en vigencia en el anterior, a los fines de la continuidad de los servicios. Esta disposición no alcanza a los créditos sancionados por una sola vez, cuya finalidad hubiese sido satisfecha.

Artículo 42.- La Empresa financiará las operaciones inherentes al cumplimiento de su objeto, con los siguientes recursos destinados a la cobertura de su Presupuesto General Anual.

a) Los originados por la venta de energía, los resultantes de la aplicación del régimen de suministros energéticos y por otros servicios prestados por la Empresa.

b) Los ingresos por el arrendamiento y la venta de bienes, derechos y acciones.

c) Los derivados del uso del crédito.

d) Los importes de las contribuciones, donaciones legales, subsidios y subvenciones.

e) Los aportes, préstamos o participaciones que correspondan a la Provincia de Córdoba o a la Empresa en la distribución de los recursos afectados en concepto del Fondo Nacional de Energía Eléctrica, el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, el Fondo de Compensación Tarifaria o de los que en adelante se constituyeren para el desarrollo de los servicios energéticos o de telecomunicaciones.

f) Las asignaciones de la Ley de Presupuestos de la Provincia y de otras leyes.

g) Los ingresos por intereses, actualización y recargos.

h) Las asignaciones directas por vía impositiva que se sancionaron con destino a la Empresa.

i) Todo otro recurso que se derive de la actividad de la Empresa o se le asigne para cumplir su objeto.

Artículo 43.- Los fondos que provengan de los recursos enumerados en el artículo anterior serán depositados en cuenta bancaria única a la orden y disposición de la Empresa, salvo que por Ley o por obligación contractual originada en una operación crediticia se le imponga la apertura de cuenta bancaria especial.

TITULO XVIII - PRECIOS Y TARIFAS

Artículo 44.- La empresa pondrá a consideración del ERSeP, los precios y tarifas para la energía y demás servicios que suministre o efectúe la Empresa, acompañando los estudios técnicos que reflejan los resultados del Cuadro.

Artículo 45.- Los precios y tarifas serán estructurados con sujeción a un criterio técnico-económico que garantice el desarrollo del sistema eléctrico provincial, asegure las mejores tarifas para los usuarios y se procure la mejor calidad de servicio.

Artículo 46.- La empresa, podrá proponer al ERSeP conjuntamente con los precios y tarifas, una cláusula de ajuste automático de los mismos, en base a los factores determinantes de los costos. Si no se fijare dicha cláusula de ajuste, podrán reajustarse los cuadros tarifarios durante el transcurso del Ejercicio Anual. La referida cláusula de ajuste queda supeditada a las disposiciones de la ley de fondo en la materia

Artículo 47.- Si el Poder Ejecutivo decidiere la aplicación de tarifas determinantes de precios medios inferiores a los que resultaron de aplicar las tarifas establecidas en el artículo 44° del presente Estatuto o la aplicación de subsidios a algún sector en particular, deberá compensar financieramente a la Empresa de los quebrantos producidos por dicha intervención.

TITULO XIX - DE LAS CONTRATACIONES

Artículo 48.- La Empresa efectuará la adquisición de insumos y bienes, la venta de aquellos en desuso, la contratación de obras, trabajos y servicios, siguiendo los principios que consulten la publicidad de los actos, la competencia de precios y uniformidad de condiciones para quienes han de contratar con la misma. Se cumplirán para ello las disposiciones del presente Estatuto, el Reglamento de Compras y Contrataciones y supletoriamente de las leyes y reglamentaciones en vigor.

Artículo 49.- La Empresa confeccionará un Reglamento de Compras y Contrataciones, el que será puesto a consideración del Ejecutivo Provincial. El mismo, establecerá todo lo concerniente a los

procedimientos a seguir y contendrá disposiciones instituyendo, un Registro de Proveedores para la Empresa, los requisitos para concurrir a las licitaciones, publicidad, garantías, mantenimiento de ofertas, adjudicaciones y contratos, entregas y recepciones, pagos, penalidades y demás normas atinentes a las contrataciones y a las relaciones de la Empresa y los oferentes, adjudicatarios y contratistas.

TITULO XX - CONTABILIDAD y BALANCES

Artículo 50.- La Empresa llevará un sistema de contabilidad que registre las operaciones financiero-patrimoniales, los ingresos y egresos y el control preventivo de su Presupuesto General Anual.

Artículo 51.- Al cierre de cada ejercicio económico se confeccionará el Balance General Anual, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Anexos. A ese fin se actualizará el valor de los bienes de uso y se formularán las previsiones, y depreciaciones que correspondan, de acuerdo a las normas previstas en el presente Estatuto.

Artículo 52.- El capital de la Empresa se modificará anualmente con el resultado económico de explotación y con la incorporación de los aportes provenientes de recursos no reintegrables, de las donaciones, subsidios y otros de naturaleza análoga.

TITULO XXI - FISCALIZACION

Artículo 53.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia ejercerá las funciones que como órgano de la Constitución le corresponde en el contralor preventivo y posterior del gasto. Dicha intervención se efectuará en la forma y por el procedimiento especial que a tal efecto el Tribunal acuerde, adecuado a la naturaleza y característica de la Empresa.

La Contaduría General de la Provincia tendrá las más amplias facultades para realizar las auditorías, por sí misma o por profesionales externos, que estime pertinentes, decidiendo por sí, su modalidad, alcance y oportunidad. Las conclusiones de esas tareas serán elevadas a la Empresa y al Poder Ejecutivo.

Artículo 54.- La Empresa rendirá cuenta anualmente de su gestión económica-financiera, a cuyo efecto remitirá al Tribunal de Cuentas de la Provincia dentro de los noventa (90) días calendario de cerrado el ejercicio, la siguiente documentación:

- a) El Balance General, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Anexos.
- b) Estado de Ejecución del Presupuesto General Anual.

Cuando medien razones que los justifique, la Empresa podrá solicitar la ampliación del plazo mencionado precedentemente.

Artículo 55.- Dentro de los treinta (30) días calendarios de recibida la documentación exigida en

el artículo anterior, el Tribunal de Cuentas remitirá a la Empresa y al Poder Ejecutivo su pronunciamiento con los antecedentes pertinentes.

Artículo 56.- El Poder Ejecutivo resolverá con respecto a la rendición de cuentas presentadas por la Empresa, dentro de un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios de recibidos los documentos y el pronunciamiento a que se refiere el Art. 55° del presente Estatuto.

Vencido este término sin que exista decisión del Poder Ejecutivo, se considerarán automáticamente aprobados el Balance General, Estado de Resultados, Notas, Cuadros Anexos y el Estado de Ejecución del Presupuesto General Anual.

Artículo 57.- El Balance General, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Anexos serán publicados por un día en el Boletín Oficial de la Provincia.

TITULO XXII - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 58.- Los proyectos, cuando los realice personal profesional de la Empresa, serán de propiedad de la EPEC y como tal deberán ser registrados.

Artículo 59.- La Empresa estará exenta de todo impuesto provincial creado o a crearse.

Artículo 60.- Cuando se comprobaran irregularidades graves en la Administración de su patrimonio y recursos financieros o, cuando el servicio se encuentre seriamente afectado por razones imputables a una defectuosa gestión, la Empresa podrá ser intervenida por el Poder Ejecutivo, por disposi-

ción tomada en acuerdo de Ministros, la que durará un plazo máximo de un (1) año.

Las funciones y atribuciones de la Intervención dispuesta, serán las mismas del Directorio y señaladas precedentemente. La Intervención deberá disponer todos los recaudos necesarios para la reorganización de los servicios y procedimientos internos de la Empresa.

Artículo 61.- Se incluye como anexo, el Acta Acuerdo suscripta por el Gobierno de Córdoba y los sindicatos de Luz y Fuerza de la Provincia de Córdoba, que forma parte de la presente Ley.

Artículo 62. - De Forma.

José Manuel de la Sota, Huber Alberti.

Sr. Presidente (Olivero).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Remedi a arriar la Bandera del mástil del recinto.

- Así se hace.

Sr. Presidente (Olivero).- Queda levantada la sesión.

- Es la hora 22 y 44.

Silvana Sabatini

Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Herman Olivero
Presidente Provisorio

Guillermo Arias
Prosecretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

José Luis Farre
Secretario Legislativo